

PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA

LEY 1768 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se establece el procedimiento disciplinario que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

CAPÍTULO I

Principios

Artículo 1°. *Prevalencia de los principios rectores y aplicación residual normativa.* En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario establecido prevalecerán, en su orden, los principios rectores que determinan la Constitución Política y esta ley. Así mismo, en lo no previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto en los códigos Disciplinario Único, de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de Procedimiento Penal y en el Código General del Proceso.

Artículo 2°. *Principios.* Las investigaciones disciplinarias del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y en esta ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

Se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de imparcialidad, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in ídem.

CAPÍTULO II

De la falta disciplinaria

Artículo 3°. *Definición de falta disciplinaria.* Se entiende como falta disciplinaria todo incumplimiento de los deberes o prohibiciones y cualquier violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el Código de Ética para el Ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares o en las normas que lo aclaren, complementen, modifiquen o deroguen.

Artículo 4°. *Formas de realización del hecho o conducta.* Las faltas disciplinarias se realizarán por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes o prohibiciones y cualquier violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagradas por el Código de Ética para el Ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y demás que determine la ley.

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo.

Artículo 5°. *Elementos de la falta disciplinaria.* La configuración de la falta disciplinaria deberá estar enmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:

- La conducta o el hecho debe haber sido cometido por un profesional de la arquitectura y/o sus profesiones auxiliares, debidamente matriculado;
- La conducta o el hecho debe ser doloso o culposos;
- El hecho o la conducta debe haber sido cometida en ejercicio de la profesión;
- La conducta debe ser apreciable objetivamente y procesalmente debe estar probada;
- La sanción disciplinaria debe ser la consecuencia lógica de un debido proceso, que se enmarque dentro de los postulados del artículo 29 de la Constitución Política y específicamente, del régimen disciplinario establecido en la presente ley.

Artículo 6°. *Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.* Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:

- Por fuerza mayor o caso fortuito;
- En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado;
- En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales;
- Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad;
- Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable;
- Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria;

LA IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos estatales no requieren publicación ante la desaparición del Diario Único de Contratación Pública.

DIARIO OFICIAL

Fundado el 30 de abril de 1864
Por el Presidente **Manuel Murillo Toro**
Tarifa postal reducida No. 56

DIRECTORA: **DIOSELINA PARRA DE RINCÓN**

MINISTERIO DEL INTERIOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

DIOSELINA PARRA DE RINCÓN

Gerente General

Carrera 66 N° 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co

g) En situación de inimputabilidad. No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto investigado hubiere preordenado su comportamiento.

Artículo 7°. *Clasificación de las faltas.* Las faltas disciplinarias son:

- a) Gravísimas;
- b) Graves;
- c) Leves.

Artículo 8°. *Sanciones aplicables.* El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares podrá sancionar a los profesionales responsables de la comisión de faltas disciplinarias, con:

- a) Amonestación escrita;
- b) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por cinco (5) años; es decir de la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o Certificado de Inscripción Profesional;
- c) Cancelación de la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o Certificado de Inscripción Profesional.

Artículo 9°. *Escala de sanciones.* Los profesionales de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares, a quienes se les compruebe la violación de normas del Código de Ética para el Ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, estarán sometidos a las siguientes sanciones por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares:

- a) Las faltas calificadas como leves, siempre y cuando el profesional investigado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de amonestación escrita;
- b) Las faltas calificadas como leves, cuando el profesional investigado registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión de la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o Certificado de Inscripción Profesional hasta por el término de seis (6) meses;
- c) Las faltas calificadas como graves, siempre y cuando el profesional investigado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión de la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o Certificado de Inscripción Profesional por un término de seis (6) meses y un (1) día a dos (2) años;
- d) Las faltas calificadas como graves, cuando el profesional investigado registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión de la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o Certificado de Inscripción Profesional por un término de dos (2) años y un (1) día a cinco (5) años;
- e) Las faltas calificadas como gravísimas, siempre darán lugar a la aplicación de la sanción de cancelación de la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o Certificado de Inscripción Profesional.

Artículo 10. *Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria.* Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:

- a) El grado de culpabilidad;
- b) El grado de perturbación a terceros o a la sociedad;

c) La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y, en general, con todas las personas a las que pudiera afectar el profesional disciplinado con su conducta;

d) La reiteración en la conducta;

e) La jerarquía y mando que el profesional investigado tenga dentro de la sociedad y la persona jurídica a la que pertenece o representa;

f) La naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia social de la misma, el mal ejemplo dado, la complicidad con otros profesionales y el perjuicio causado;

g) Las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta el grado de preparación, el grado de participación en la comisión de la misma y el aprovechamiento de la confianza depositada en el profesional investigado;

h) Los motivos determinantes, según se haya procedido por causas innobles o fútiles, o por nobles y altruistas;

i) El haber sido inducido por un superior a cometerla;

j) El confesar la falta antes de la formulación de cargos, haciéndose responsable de los perjuicios causados;

k) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea impuesta la sanción.

Artículo 11. *Faltas calificadas como gravísimas.* Se consideran faltas gravísimas y se constituyen en causal de cancelación de la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o Certificado de Inscripción Profesional las siguientes:

- a) Derivar, de manera directa o por interpuesta persona, indebido o fraudulento provecho patrimonial en ejercicio de la profesión, con consecuencias graves para la parte afectada;
- b) El abandono injustificado de los encargos o compromisos profesionales, cuando con tal conducta causen grave detrimento al patrimonio económico del cliente o se afecte, de la misma forma, el patrimonio público;

c) La utilización fraudulenta de las hojas de vida de sus colegas para participar en concursos, licitaciones públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos contratos.

Artículo 12. *Concurso de faltas disciplinarias.* El profesional de la Arquitectura o sus Profesiones Auxiliares, que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones del Código de Ética para el ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción más grave o, en su defecto, a una de mayor entidad.

Artículo 13. *La rehabilitación.* Al profesional que se le cancele la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o Certificado de Inscripción Profesional podrá ser rehabilitado luego de transcurridos seis (6) años desde la ejecutoria del acto administrativo que impone la sanción.

Así mismo, el profesional de la arquitectura y sus profesiones auxiliares cuenta con la opción de rehabilitarse en los tres (3) años siguientes a la imposición de la sanción, si adelanta y aprueba los cursos de capacitación autorizados por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en instituciones acreditadas, los cuales responden a los fines de la rehabilitación y del Código de Ética establecido en la Ley 435 de 1998.

Artículo 14. *Solicitud de la rehabilitación.* Al profesional que se le cancele la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o el Certificado de Inscripción Profesional podrá solicitar ante el Consejo, la rehabilitación en los términos consagrados en esta ley.

Artículo 15. *Procedimiento de la rehabilitación.*

a) **Admisión de la solicitud y apertura a pruebas.** Cumplido el requisito temporal para solicitar la rehabilitación la petición será admitida, y en el mismo auto se abrirá el proceso a pruebas, para que en el término de cinco (5) días los intervinientes soliciten o aporten las que estimen conducentes;

b) **Rechazo de la solicitud.** La solicitud de rehabilitación solo podrá rechazarse por el no cumplimiento del requisito temporal, mediante auto motivado susceptible del recurso de reposición;

c) **Decreto de pruebas.** Las pruebas conducentes, solicitadas en esta etapa o con la petición de rehabilitación y las que oficiosamente se estimen necesarias, serán decretadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del traslado aludido en el literal a) precedente;

d) **Periodo probatorio y fallo.** Las pruebas serán practicadas en un término no superior a treinta (30) días, vencido el cual la Sala tendrá diez (10) días para decidir, determinación que es susceptible del recurso de reposición;

e) **Comunicación.** En firme el auto que ordena la rehabilitación, se oficiará a las mismas autoridades a quienes se comunicó la cancelación la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o el Certificado de Inscripción Profesional para los efectos legales pertinentes.

CAPÍTULO III

Extinción de la acción disciplinaria

Artículo 16. *Causales de extinción de la acción disciplinaria.* Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

- a) La muerte del investigado;
- b) La prescripción de la acción disciplinaria.

Parágrafo. Cuando quiera que la falta hubiere afectado únicamente el patrimonio económico de particulares, se podrá decretar la extinción de la acción disciplinaria, siempre y cuando el quejoso desista de la acción y manifieste que le ha sido íntegramente indemnizado el daño.

Artículo 17. *Términos de prescripción.* La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

Artículo 18. *Renuncia a la prescripción.* El investigado podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria dentro del término de ejecutoria del auto que la decreta. En este caso la acción solo podrá proseguirse por un término máximo de dos (2) años contados a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado decisión definitiva, no procederá determinación distinta a la declaratoria de prescripción.

CAPÍTULO IV

Extinción de la sanción disciplinaria

Artículo 19. *Causales.* Son causales de extinción de la sanción disciplinaria:

1. La muerte del sancionado.
2. La prescripción.
3. La rehabilitación.

Artículo 20. *Término de prescripción.* La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años, contado a partir de la ejecutoria del fallo.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

Procedimiento disciplinario

Artículo 21. *Dirección de la función disciplinaria.* Corresponde al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, la dirección de la función disciplinaria. La primera instancia será de competencia de uno (1) de los cinco (5) miembros que conforman el Consejo, quien proferirá fallo, previo el agotamiento de la etapa de investigación. La segunda instancia se adelantará por los tres (3) miembros del Consejo que sigan en turno y distintos del miembro que falló en primera instancia.

Parágrafo. Para lograr el cabal desarrollo e impulso de la función disciplinaria, el Consejo podrá apoyarse en la Oficina Jurídica de la entidad o quien haga sus veces.

Artículo 22. *Reparto.* A efectos de integrar la primera y segunda instancia de que trata el artículo 21 de esta ley, se procederá por reparto en forma rotativa y sucesiva teniendo en cuenta el orden establecido por el artículo 9° de la Ley 435 de 1998.

Artículo 23. *Iniciación del proceso disciplinario.* El proceso disciplinario de que trata el presente título se iniciará de oficio, por informe o queja interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, la cual deberá dirigirse ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

Artículo 24. *Sujetos procesales en la actuación disciplinaria.* Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor.

Parágrafo. La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad de juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

Artículo 25. *Calidad de investigado.* La calidad de investigado se adquiere a partir de la notificación del auto mediante el cual se dispone la apertura de la investigación disciplinaria.

Artículo 26. *Derechos del investigado.* Como sujeto procesal, el investigado tiene los siguientes derechos:

- a) Acceder a la investigación;
- b) Designar defensor;
- c) Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia;
- d) Solicitar y aportar pruebas o controvertirlas, e intervenir en su práctica;
- e) Rendir descargos;
- f) Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello;
- g) Obtener copias de la actuación;
- h) Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera instancia.

Artículo 27. *Estudiantes de consultorios jurídicos.* Los estudiantes de los Consultorios Jurídicos podrán actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios cuando el investigado no designe uno de su confianza o si lo solicita. Según los términos previstos en la Ley 583 de 2000 y demás normas que la reglamenten o modifiquen como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado; cuando existan criterios contradictorios prevalecerá el del primero.

Artículo 28. *Acceso al expediente.* El investigado tendrá acceso a la queja o informe y demás partes del expediente disciplinario, desde la etapa de indagación preliminar.

Artículo 29. *Reserva de la actuación disciplinaria.* Las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o se ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales.

El investigado y su defensor estarán obligados a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución y la ley tengan dicha condición.

Artículo 30. *Requisitos formales de la actuación.* La actuación disciplinaria deberá recogerse en medio escrito o magnético, reconocido.

Artículo 31. *Utilización de medios técnicos.* Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías constitucionales.

Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito solo cuando sea estrictamente necesario.

Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes al de la sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, a través de medios como la audiencia, comunicación virtual

o teleconferencia, siempre que otro trabajador del mismo Consejo controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la diligencia.

Artículo 32. *Terminación del proceso disciplinario.* En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, se declararán y ordenarán el archivo definitivo de las diligencias.

CAPÍTULO II

Notificaciones y comunicaciones

Artículo 33. *Formas de notificación.* La notificación de las decisiones disciplinarias, según el caso será: personal, por medios de comunicación electrónicos, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.

Artículo 34. *Notificación personal.* Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.

Artículo 35. *Notificación por medios de comunicación electrónicos.* Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, y del quejoso cuando a ello hubiere lugar, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.

Artículo 36. *Notificación de decisiones interlocutorias.* Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse, si esta no se presenta al Consejo dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado, salvo en el evento del pliego de cargos.

En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada.

Artículo 37. *Notificación por estado.* La notificación por estado se hará conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 38. *Notificación en estrado.* Las decisiones que se profieran en audiencia o en el curso de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a todos los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o no presentes.

Artículo 39. *Notificación por edicto.* Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren notificarse personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.

Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no comparece el citado, en la Secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia.

Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación personal, previo el procedimiento anterior.

Artículo 40. *Notificación por conducta concluyente.* Cuando no se hubiere realizado la notificación personal, o esta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el investigado o su defensor no reclaman y actúan en diligencias posteriores o interponen recursos contra ellos o se refieren a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.

Artículo 41. *Comunicaciones.* Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco (5) días, después de la fecha de envío por correo.

Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán al día siguiente por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente.

CAPÍTULO III

Recursos

Artículo 42. *Clases de recursos y sus formalidades.* Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación, los que se interpondrán por escrito, salvo norma expresa en contrario.

Parágrafo. Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno.

Artículo 43. *Oportunidad para interponer los recursos.* Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los tres (3) días siguientes a la última notificación.

Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia. Si las mismas se realizaren en diferentes sesiones, se interpondrán en las sesiones donde se produzca la decisión a impugnar.

Artículo 44. *Sustentación de los recursos.* Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario, se declararán desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del mismo término que se tiene para impugnar.

Cuando la decisión haya sido proferida en estrado la interposición y sustentación se hará verbalmente en audiencia o diligencia, o en la respectiva sesión, según el caso.

Artículo 45. *Recurso de reposición.* El recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que resuelva la nulidad, la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado.

Artículo 46. *Trámite del recurso de reposición.* Cuando el recurso de reposición se formule por escrito debidamente sustentado, se decidirá en un término de ocho (8) días, contados a partir del último vencimiento del término para impugnar la decisión.

Artículo 47. *Recurso de apelación.* El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia.

En el efecto suspensivo se concederá la apelación de la decisión de archivo, del fallo de primera instancia y de la decisión que niega totalmente la práctica de pruebas, cuando no se han decretado de oficio, caso en el cual se concederá en el efecto diferido; en el devolutivo cuando la negativa es parcial.

Artículo 48. *Prohibición de la reformatio in pejus.* En el recurso de apelación contra el fallo sancionatorio, cuando el investigado sea apelante único, en la providencia que lo resuelva no podrá agravarse la sanción impuesta.

Artículo 49. *Ejecutoria de las decisiones.* Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedarán en firme tres (3) días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar esta o la sesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas.

Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación, así como aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, quedarán en firme el día que sean suscritas por el competente.

Artículo 50. *Corrección, aclaración y adición de los fallos.* En los casos de error aritmético, o en el nombre o identidad del investigado, o de omisión sustancial en la parte resolutive del fallo, este debe ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio o a petición de parte, por el mismo que lo profirió.

El fallo corregido, aclarado, o adicionado, será notificado conforme a lo previsto en esta ley.

CAPÍTULO IV

Pruebas

Artículo 51. *Necesidad.* Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en prueba legal y oportunamente allegada al proceso.

Artículo 52. *Investigación integral.* El funcionario buscará la verdad material. Para ello deberá, investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio.

Artículo 53. *Medios de prueba.* Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección judicial y los documentos, o cualquier otro medio técnico o científico, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes, respetando siempre los derechos fundamentales.

Artículo 54. *Libertad de pruebas.* La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

Artículo 55. *Petición y rechazo de pruebas.* Los intervinientes pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán rechazadas las inconducentes, las impertinentes, las manifiestamente superfluas y las ilícitas.

Artículo 56. *Práctica de pruebas en el exterior.* La práctica de las pruebas o de diligencias en territorio extranjero se regulará por las normas legalmente vigentes.

Artículo 57. *Prueba trasladada.* Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.

Artículo 58. *Apoyo técnico.* El funcionario judicial que conozca de la actuación disciplinaria podrá solicitar, gratuitamente a todos los organismos, del Estado la colaboración técnica que considere necesaria para el éxito de las investigaciones.

Artículo 59. *Oportunidad para controvertir la prueba.* Los Intervinientes podrán controvertir las pruebas a partir del auto de apertura de proceso disciplinario.

Artículo 60. *Testigo renuente.* Cuando el testigo citado sea un particular y se muestre renuente a comparecer, podrá disponerse la conducción del testigo por las fuerzas de policía, siempre que se trate de situaciones de urgencia y que resulte necesario para evitar la pérdida de la prueba. La conducción no puede implicar la privación de la libertad.

Esta norma no se aplicará a quien esté exceptuado constitucional o legalmente del deber de declarar.

Artículo 61. *Inexistencia de la prueba.* La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado, se tendrá como inexistente.

Artículo 62. *Apreciación integral.* Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y valorarse razonadamente.

Artículo 63. *Prueba para sancionar.* Para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

CAPÍTULO V

Nulidades

Artículo 64. *Causales.* Son causales de nulidad:

1. La falta de competencia.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Artículo 65. *Declaratoria oficiosa.* En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto.

Artículo 66. *Solicitud.* El interviniente que alegue una nulidad deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores.

Artículo 67. *Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.*

1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa.

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los intervinientes, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.

3. No puede invocar la nulidad el interviniente que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica.

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.

5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.

6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta de las señaladas en este capítulo.

CAPÍTULO VI

Indagación preliminar

Artículo 68. *Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar.* En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará previamente la indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o con el auto de apertura de investigación disciplinaria; los fines de la indagación preliminar son verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de queja, informe o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

Parágrafo. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o una vez verificado en el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura que el posible investigado no ostenta la calidad de Arquitecto o Profesional Auxiliar, o mediante anónimo, se procederá de plano a inhibirse de iniciar actuación alguna.

CAPÍTULO VII

Investigación disciplinaria

Artículo 69. *Procedencia de la investigación disciplinaria.* Cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, se ordenará la apertura de la investigación disciplinaria mediante providencia motivada.

Artículo 70. *Finalidades de la decisión sobre investigación disciplinaria.* La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y la responsabilidad disciplinaria del investigado.

Artículo 71. *Contenido de la investigación disciplinaria.* La decisión que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:

1. La identidad del posible autor o autores.
2. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.
3. Citar a rendir versión libre y espontánea al investigado.

Artículo 72. *Notificación de la apertura de la investigación.* Dispuesta la apertura de la investigación disciplinaria se notificará al investigado y se dejará constancia en el expediente respectivo. En la notificación se debe informar al investigado que tiene derecho a nombrar defensor, y que en caso de no designarlo se le asignará uno de oficio previo el trámite de que trata el artículo 39 de la presente ley, con quien se surtirá la notificación y continuará representándolo en el trámite de la actuación.

Artículo 73. *Término de la investigación disciplinaria.* El término de la investigación disciplinaria será de máximo seis (6) meses, contados a partir de la decisión de apertura.

El término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más investigados.

Vencido el término de la investigación se evaluará y proferirá el auto de formulación de cargos, si se reunieren los requisitos legales para ello o el archivo de las diligencias. Con todo si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la investigación por una sola vez hasta por la mitad del término, vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita la formulación de cargos, se archivará definitivamente la actuación.

CAPÍTULO VIII

Evaluación de la investigación disciplinaria

Artículo 74. *Decisión de evaluación.* Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, dentro de los treinta (30) días siguientes, mediante decisión motivada, se evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y se formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo de la actuación, según corresponda.

Artículo 75. *Procedencia de la decisión de cargos.* Se formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado.

Artículo 76. *Contenido de la decisión de cargos.* La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.
2. Las normas presuntamente violadas.
3. La identificación del autor o autores de la falta.
4. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.
5. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la presente ley.
6. La forma de culpabilidad.
7. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

Artículo 77. *Archivo definitivo.* En los casos de terminación del proceso disciplinario previstos en el artículo 32 y en el evento consagrado en el inciso 3° del artículo 73 de esta ley, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada.

Artículo 78. *Notificación del pliego de cargos.* El pliego de cargos se notificará personalmente al investigado o a su defensor. Para el efecto, una vez proferido el auto de cargos a más tardar al día siguiente se librárá comunicación a los sujetos procesales y se surtirá con el primero que se presente.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación no se ha presentado el investigado o su defensor, se procederá a designarle uno de oficio con quien se surtirá la notificación personal.

CAPÍTULO IX

Descargos, pruebas y fallo

Artículo 79. *Término para presentar descargos.* Notificado el pliego de cargos, el expediente quedará en la Secretaría del Consejo, por el término

de diez (10) días, a disposición de los sujetos procesales, quienes podrán aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo término, el investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos.

Artículo 80. *Renuencia.* La renuencia del investigado o de su defensor a presentar descargos no interrumpe el trámite de la actuación.

Artículo 81. *Término probatorio.* Vencido el término señalado en el artículo 79 de la presente ley, al miembro del Consejo que le corresponde conocer la Primera Instancia fijará fecha para audiencia pública y ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, las que de oficio considere de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

Las pruebas ordenadas se practicarán en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días, si no pudiesen llevarse a cabo dentro de la audiencia pública.

Las pruebas decretadas oportunamente dentro del término probatorio respectivo que no se hubieren practicado o aportado al proceso, se podrán evacuar en los siguientes casos:

1. Cuando hubieran sido solicitadas por el investigado o su apoderado, sin que los mismos tuvieran culpa alguna en su demora y fuere posible su obtención.
2. Cuando a juicio del miembro del Consejo al que le corresponde conocer de la Primera Instancia, constituya elemento probatorio fundamental para la determinación de la responsabilidad del investigado o el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 82. *Audiencia Pública.* A la audiencia pública deberán asistir el miembro del Consejo al que le corresponde conocer de la Primera Instancia, el investigado y su defensor. Si se considera necesario, una vez culminada la práctica de pruebas y ante la solicitud del investigado o su apoderado, previo a escucharse los argumentos de los sujetos procesales en alegatos de conclusión, se procederá a escucharlo en versión libre o ampliación.

Artículo 83. *Término para fallar.* Celebrada la Audiencia Pública el miembro del Consejo al que le corresponde conocer de la Primera Instancia proferirá el fallo dentro de los treinta (30) días siguientes.

Artículo 84. *Contenido del fallo.* El fallo debe ser motivado y contener:

1. La identidad del investigado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de culpabilidad.
7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutive.

CAPÍTULO X

Segunda instancia

Artículo 85. *Trámite de la segunda instancia.* Los miembros del Consejo que conforman la Sala de Segunda Instancia deberán decidir dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso. Si lo consideran necesario, decretarán pruebas de oficio, en cuyo caso el término para proferir el fallo se ampliará hasta en otro tanto.

Parágrafo. El recurso de apelación otorga competencia a los miembros del Consejo que conforman la Sala de Segunda Instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

Ejecución y registro de las sanciones

Artículo 86. *Ejecución de las sanciones.* La sanción impuesta se hará efectiva por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

De toda sanción disciplinaria impuesta a un profesional de la Arquitectura o sus Profesiones Auxiliares, se dará aviso a la Procuraduría General de la Nación, a todas las entidades que tengan que ver con el ejercicio profesional correspondiente, con el registro de proponentes y contratistas y a las agremiaciones de profesionales, con el fin de ordenar las anotaciones en sus registros y tomar las medidas pertinentes, en aras de hacer efectiva la sanción.

Artículo 87. *Cómputo de la sanción.* Las sanciones impuestas, empezarán a computarse a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia o acto administrativo que la ordenó.

Artículo 88. *Registro de sanciones.* Las sanciones disciplinarias proferidas contra los Arquitectos o sus Profesionales Auxiliares deberán ser registradas en la Dirección Ejecutiva del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, para efectos de la expedición del certificado de vigencia digital y antecedentes, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones que se encuentren vigentes en dicho momento.

Artículo 89. *Transitoriedad.* Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren en la etapa de investigación continuarán su trámite de conformidad al procedimiento sancionatorio aplicable hasta la fecha.

Artículo 90. *Vigencia.* La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial* y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Fernando Velasco Chaves.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Rafael Deluque Zuleta.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2078 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa un representante del Presidente de la República en la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en el Consejo Directivo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 1523 de 2012 y el Decreto número 4147 de 2011, modificado por los Decretos números 244 y 1323 de 2012,

DECRETA:

Artículo 1°. Desígnase a partir de la fecha al Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como representante del señor Presidente de la República en la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Artículo 2°. Desígnase a partir de la fecha al Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como representante del señor Presidente de la República en el Consejo Directivo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en reemplazo de la doctora Carolina Soto Losada, identificada con la cédula de ciudadanía número 52045179.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el Decreto número 1460 de 2013.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
María Lorena Gutiérrez Botero.

DECRETO NÚMERO 2079 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se hace un nombramiento Ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción,

DECRETA:

Artículo 1°. *Nombramiento.* Nómbrase con carácter ordinario a la señora Luz Stella Conde Romero, identificada con cédula de ciudadanía número 45453688, en el cargo de Jefe de Oficina Código 0137, Grado 17, en el Ministerio de Transporte, para que ejerza funciones de Control Interno.

Artículo 2°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Transporte,
Natalia Abello Vives.

DECRETO NÚMERO 2080 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se hace un nombramiento Ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional al Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

DECRETA:

Artículo 1°. *Nombramiento.* Nómbrase con carácter ordinario al señor Juan Fernando Palacio Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía número 70566248, en el cargo de Jefe de Oficina Código 0137, Grado 19, en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para que ejerza funciones de Control Interno.

Artículo 2°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia.

DECRETO NÚMERO 2081 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se hace un nombramiento Ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional al Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción,

DECRETA:

Artículo 1°. *Nombramiento.* Nómbrase con carácter ordinario a la señora Gloria Inés Muñoz Parada, identificada con cédula de ciudadanía número 63317774, en el cargo de Jefe de Oficina Código 0137, Grado 20, en la Unidad Nacional de Protección, para que ejerza funciones de Control Interno.

Artículo 2°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2082 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se hace un nombramiento Ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional al Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción,

DECRETA:

Artículo 1°. *Nombramiento.* Nómbrase con carácter ordinario al señor Humberto Bozzi Ángel, identificado con cédula de ciudadanía número 73080664, en el cargo de Jefe de Oficina Código 0137, Grado 22, en el Ministerio del Interior, para que ejerza funciones de Control Interno.

Artículo 2°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2083 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se hace un nombramiento Ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional al Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción,

DECRETA:

Artículo 1°. *Nombramiento.* Nómbrase con carácter ordinario al señor Raúl Alberto Jurado Velandia, identificado con cédula de ciudadanía número 79537965, en el cargo de Asesor Código 1020, Grado 8, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para que ejerza funciones de Control Interno.

Artículo 2°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada.

DECRETO NÚMERO 2084 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se hace un nombramiento Ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional al Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción,

DECRETA:

Artículo 1°. *Nombramiento.* Nómbrase con carácter ordinario al señor Juan Manuel Bello Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía número 19441604 de Bogotá, en el

cargo de Asesor, Código 1020, Grado 14 en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, para que ejerza funciones de Control Interno.

Artículo 2°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Trabajo,

Luis Eduardo Garzón.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2072 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se modifica el Decreto número 2057 del 21 de octubre de 2015.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, 2 del Decreto número 2241 de 1986, y 21 del Decreto número 2033 del 16 de octubre de 2015,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 2057 de 2015 y para el cumplimiento de los propósitos señalados en el artículo segundo del mismo decreto se designó como delegada del Gobierno Nacional en el Departamento de Arauca, a la doctora Mariana Martínez Cuéllar Viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional para realizar el seguimiento del Proceso Electoral para elegir Autoridades y Corporaciones Públicas Territoriales el 25 de octubre de 2015;

Que mediante Oficio número OFI15-84559 MDN-DM del 21 de octubre de 2015 el Asesor Privado del señor Ministro de Defensa, doctor Sebastián Montoya Mejía, informa que la funcionaria designada se encuentra fuera del país para cumplir con la función asignada en el Decreto número 2057 de 2015, solicitando delegar al General (RA) José Javier Pérez Mejía Viceministro de Defensa para el GSED y Bienestar, quien cuenta con la experiencia y cumple responsabilidades y obligaciones de su cargo para el manejo en el departamento de Arauca;

Que el Decreto número 2057 de 2015 designó como Delegado Presidencial para el Departamento de Vaupés al General (RA) José Javier Pérez Mejía Viceministro de Defensa para el GSED y Bienestar;

Que se hace necesario por razones del servicio reemplazar al Delegado Presidencial en el Departamento de Arauca y designar el reemplazo del Delegado Presidencial en el departamento de Vaupés,

DECRETA:

Artículo 1°. Designase al General (RA) José Javier Pérez Mejía Viceministro de Defensa para el GSED y Bienestar del Ministerio de Defensa Nacional, como Delegado Presidencial, en el departamento de Arauca y al doctor Carlos Alfonso Mayorga Prieto Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada como Delegado Presidencial en el departamento de Vaupés, para el cumplimiento de los propósitos señalados en el artículo 21 del Decreto número 2033 del 16 de octubre de 2015, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

Artículo 2°. Los delegados designados deberán rendir informe de las gestiones realizadas, así mismo los gastos que ocasione el desplazamiento de los anteriores funcionarios se harán con cargo al presupuesto de sus respectivas entidades.

Artículo 3°. *Vigencia.* Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2073 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Calamar-Bolívar.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio del 24 de septiembre de 2015, el Alcalde Municipal de Calamar-Bolívar, señor Alejandro Antonio Arrázola Carrasquilla, se declaró impedido para presidir y desarrollar las labores de clavero en los escrutinios que se adelantarán con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015, en razón a que su sobrino Alejandro Mario de Jesús Arrázola Sagbini está aspirando al concejo de esa municipalidad;

Que mediante auto del 15 de octubre de 2015, con Radicación R.I. 4925 del 30/09/2015, el Procurador Regional de Bolívar aceptó el impedimento impetrado por el señor Alejandro Antonio Arrázola Carrasquilla, en su calidad de Alcalde Municipal de Calamar-Bolívar

para presidir y desarrollar las labores de clavero en los escrutinios que se adelantarán con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015, y remitió las diligencias al Ministerio del Interior, para que por su conducto la Presidencia de la República designe funcionario ad hoc;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°;

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, acorde con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en conceptos de fecha del 6 de marzo de 2014, Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203) y del 19 de octubre de 2015, Radicado número 11001-03-06-000-2015-00181-00(2273);

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el Auto de fecha 15 de octubre de 2015, proferido por el Procurador Regional de Bolívar, se hace necesario designar un Alcalde ad hoc para el municipio de Calamar-Bolívar, para que presida y desarrolle las labores de clavero en los escrutinios que se adelantarán con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015;

Que en fecha 22 de octubre de 2015, el doctor Luis Castillo Alemán, Técnico Operativo de la Dirección de Talento Humano de la Gobernación de Bolívar, certificó la existencia de disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos de viajes y transporte del funcionario que sea designado Alcalde ad hoc en el municipio de Calamar-Bolívar;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Designación.* Désígnase como Alcalde ad hoc del municipio de Calamar-Bolívar, al doctor Wilson Leopoldo Herrera Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía número 9090035, quien se desempeña en el cargo de Secretario de Despacho, Grado 04, Código 020, asignado a la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Bolívar, para que presida las comisiones de coordinación y seguimiento electoral y desarrolle las labores de clavero en los escrutinios que se adelantarán con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre del año en curso.

Artículo 2°. *Viáticos.* La Gobernación de Bolívar sufragará los gastos de viajes y transportes del Alcalde ad hoc designado, con cargo al Rubro Viáticos y Gastos de Transporte y de Viaje, código presupuestal 01.2.2.10.1.2, fuente de financiación ingresos corrientes, de la actual vigencia, según certificación expedida por la Dirección de Talento Humano de esa gobernación.

Artículo 3°. *Posesión.* El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 de 1994.

Artículo 4°. *Comunicación.* Comuníquese el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc, al Alcalde Municipal de Calamar y a la Procuraduría Regional de Bolívar.

Artículo 5°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2074 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa Gobernador ad hoc para el departamento de La Guajira.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito del 20 de octubre de 2015, el Gobernador de La Guajira, señor José María Ballesteros Valdivieso, se declaró impedido para actuar como clavero de las arcas triclaves y presidir la Comisión Departamental para la Coordinación y el Seguimiento del Proceso Electoral, con miras al debate que se producirá el 25 de octubre de 2015, en razón a su parentesco de consanguinidad con el candidato Samuel Santander Lopesierra Mejía, actual aspirante a lograr un escaño en la Asamblea Departamental de La Guajira;

Que mediante Oficio número PRGS-003940 de fecha 21 de octubre de 2015, dirigido al Ministerio del Interior, la señora Ledys María Torres Niz, Oficinista de la Procuraduría Regional de La Guajira, remitió copia del auto del 21 de octubre de 2015, con Radicado número 04082-2015, por el cual el Procurador Regional de La Guajira aceptó el impedimento invocado por el señor José María Ballesteros Valdivieso, en calidad de Gobernador de La

Guajira, para actuar como clavero de las arcas triclaves y presidir la Comisión Departamental para la Coordinación y el Seguimiento del Proceso Electoral del próximo 25 de octubre de 2015, y solicitó se proceda conforme a las competencias del Presidente de la República a designar un gobernador ad hoc para el departamento de La Guajira;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°;

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, entre otras, las gobernaciones, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, acorde con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto de fecha del 6 de marzo de 2014, Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203);

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el auto del 21 de octubre de 2015, proferido por el Procurador Regional de La Guajira, se hace necesario designar un Gobernador ad hoc para el departamento de La Guajira, para que actúe como clavero de las arcas triclaves y presida la Comisión Departamental para la Coordinación y el Seguimiento del Proceso Electoral del próximo 25 de octubre de 2015;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Designación.* Désígnese como Gobernador ad hoc del departamento de La Guajira, al doctor Pedro Santiago Posada Arango, identificado con la cédula de ciudadanía número 70569587 de Envigado, quien se desempeña en el cargo de Director Técnico, Grado 23, Código 0100, dentro de la planta global del Ministerio del Interior, para que actúe como clavero de las arcas triclaves y presida la Comisión Departamental para la Coordinación y el Seguimiento del Proceso Electoral del próximo 25 de octubre de 2015.

Artículo 2°. *Posesión.* El Gobernador ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 92 del Decreto-ley 1222 de 1986.

Artículo 3°. *Comunicación.* Comuníquese el contenido del presente decreto al Gobernador ad hoc, al Gobernador de La Guajira y a la Procuraduría Regional de La Guajira.

Artículo 4°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2075 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa Gobernador ad hoc para el departamento del Magdalena.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito del 21 de octubre de 2015, el Gobernador del Magdalena, señor Luis Miguel Cotes Habeych, se declaró impedido para participar en el proceso electoral del día 25 de octubre de 2015 y para designar delegados como Claveros del Arca Triclave Departamental y en los municipios del Magdalena, teniendo en cuenta la relación de parentesco de consanguinidad que lo une a la candidata a la gobernación del departamento del Magdalena, señora Rosa Cotes de Zúñiga;

Que el Procurador Regional del Magdalena, mediante auto expedido bajo la Radicación IUS-2015 remitido al Ministerio del Interior el día 21 de octubre de 2015, aceptó el impedimento invocado por el señor Luis Miguel Cotes Habeych, en su condición de gobernador del Magdalena, acorde con el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, solicitando al Ministerio del Interior obrar conforme sus competencias;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°;

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, entre otras, las gobernaciones, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, acorde con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto de fecha del 6 de marzo de 2014, Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203);

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el auto con Radicación IUS-2015, proferido por el Procurador Regional del Magdalena, se hace necesario designar un Gobernador ad hoc para el departamento del Magdalena, para que participe en el proceso electoral del día 25 de octubre de 2015, presida las comisiones de coordinación y seguimiento electoral y designe delegados como Claveros del Arca Triclave Departamental y en los municipios del Magdalena;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. *Designación.* Desígnese como Gobernador ad hoc del departamento del Magdalena, al doctor Álvaro Echeverry Londoño, identificado con la cédula de ciudadanía número 10255488 de Manizales, quien se desempeña en el cargo de Director Técnico, Grado 23, Código 0100, dentro de la planta global del Ministerio del Interior, para que participe en el proceso electoral del día 25 de octubre de 2015, presida las comisiones de coordinación y seguimiento electoral y designe delegados como Claveros del Arca Triclave Departamental y en los municipios del Magdalena.

Artículo 2º. *Poseción.* El Gobernador ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 92 del Decreto-ley 1222 de 1986.

Artículo 3º. *Comunicación.* Comuníquese el contenido del presente decreto al Gobernador ad hoc, al Gobernador del Magdalena y a la Procuraduría Regional del Magdalena.

Artículo 4º. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2096 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Sahagún-Córdoba.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio del 19 de octubre de 2015, el Alcalde Municipal de Sahagún, Córdoba, señor Carlos Alberto Elías Hoyos, se declaró impedido para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015, en razón a su parentesco de cuarto grado de consanguinidad, con la candidata Carmina Elías Vidal, actual aspirante a lograr un escaño en la Concejo Municipal de Sahagún, departamento de Córdoba;

Que mediante auto del 22 de octubre de 2015, con Radicación R.C.002448/2015, el Procurador Regional de Córdoba, aceptó el impedimento impetrado por el señor Carlos Alberto Elías Hoyos, en su calidad de Alcalde Municipal de Sahagún-Córdoba, para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015, y remitió las diligencias al Ministerio del Interior, para que por su conducto la Presidencia de la República designe funcionario ad hoc;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3º;

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, acorde con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en conceptos de fecha del 6 de marzo de 2014, Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203) y del 19 de octubre de 2015, Radicado número 11001-03-06-000-2015-00181-00(2273);

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el auto de fecha 22 de octubre de 2015, proferido por el Procurador

Regional de Córdoba, se hace necesario designar un Alcalde ad hoc para el municipio de Sahagún-Córdoba, para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015;

Que en fecha 23 de octubre de 2015, la doctora Elizabeth Calume Burgos, Secretaria de Gestión Administrativa, de la Gobernación de Córdoba, certificó la existencia de disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos de viajes y transporte del funcionario que sea designado Alcalde ad hoc en el municipio de Sahagún-Córdoba;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. *Designación.* Desígnase como Alcalde ad hoc del municipio de Sahagún-Córdoba, al señor Alejandro José Anaya Sedán, identificado con la cédula de ciudadanía número 10966554, quien se desempeña en el cargo Director Administrativo con funciones en el programa de turismo y artesanías, de la Gobernación de Córdoba, para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015.

Artículo 2º. *Viáticos.* La Gobernación de Córdoba sufragará los gastos de viajes y transportes del Alcalde ad hoc designado, según certificación expedida por la Secretaria de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba.

Artículo 3º. *Poseción.* El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 de 1994.

Artículo 4º. *Comunicación.* Comuníquese el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc, al Alcalde Municipal de Sahagún y a la Procuraduría Regional de Córdoba.

Artículo 5º. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2097 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa Gobernador ad hoc para el departamento de Córdoba.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito del 23 de octubre de 2015, el Gobernador de Córdoba, señor Alejandro José Lyons Muskus, se declaró impedido para presidir la Comisión Departamental para la Coordinación y el Seguimiento del Proceso Electoral y actuar como clavero, en el proceso electoral del próximo 25 de octubre de 2015, en razón a su parentesco de segundo grado de afinidad con la candidata Carmina Elías Vidal, actual aspirante a lograr un escaño en el Concejo Municipal de Sahagún, departamento de Córdoba;

Que mediante auto del 23 de octubre de 2015, con Radicación número RC-002471, la Procuradora Regional de Córdoba, doctora Yanneth Rivera Quevedo, aceptó el impedimento invocado por el señor Alejandro José Lyons Muskus, en calidad de Gobernador del departamento de Córdoba, para presidir la Comisión Departamental para la Coordinación y el Seguimiento del Proceso Electoral y actuar como clavero en el proceso electoral del próximo 25 de octubre de 2015 y solicitó se proceda, conforme a las competencias del Presidente de la República, a designar un gobernador ad hoc para ese departamento;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3º;

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, entre otras, las gobernaciones, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, acorde con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto de fecha del 6 de marzo de 2014, Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203);

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el auto del 23 de octubre de 2015, proferido por la Procuradora Regional de Córdoba, se hace necesario designar un Gobernador ad hoc para el departamento de Córdoba, para que presida la Comisión Departamental para la Coordinación y el Seguimiento del Proceso Electoral y actúe como clavero en el proceso electoral del próximo 25 de octubre de 2015;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Designación.* Designase como Gobernador ad hoc del departamento de Córdoba al doctor Gustavo García Figueroa, identificado con la cédula de ciudadanía número 12754837 de Pasto, quien se desempeña en el cargo de Asesor, Código 1020, Grado 17, del Despacho del Ministro, dentro de la planta global del Ministerio del Interior, para que presida la Comisión Departamental para la Coordinación y el Seguimiento del Proceso Electoral y actúe como clavero en el proceso electoral del próximo 25 de octubre de 2015.

Artículo 2°. *Posesión.* El Gobernador ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 92 del Decreto-ley 1222 de 1986.

Artículo 3°. *Comunicación.* Comuníquese el contenido del presente decreto al Gobernador ad hoc, al Gobernador de Córdoba y a la Procuraduría Regional de Córdoba.

Artículo 4°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2098 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Momil-Córdoba.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio sin fecha, el Alcalde Municipal de Momil-Córdoba, señor Jorge Carlos Bittar Díaz, se declaró impedido para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015, en razón a su parentesco en cuarto grado de consanguinidad con uno de los candidatos aspirantes a la alcaldía del municipio de Momil, departamento de Córdoba;

Que mediante auto del 23 de octubre de 2015, el Procurador Regional de Córdoba, aceptó el impedimento impetrado por el señor Jorge Carlos Bittar Díaz, en su calidad de Alcalde Municipal de Momil-Córdoba, para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015, y remitió las diligencias al Ministerio del Interior, para que por su conducto la Presidencia de la República designe funcionario ad hoc;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°;

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, acorde con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en conceptos de fecha del 6 de marzo de 2014, Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203) y del 19 de octubre de 2015, Radicado número 11001-03-06-000-2015-00181-00(2273);

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el auto de fecha 23 de octubre de 2015, proferido por el Procurador Regional de Córdoba, se hace necesario designar un Alcalde ad hoc para el municipio de Momil-Córdoba, para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015;

Que en fecha 23 de octubre de 2015, la doctora Elizabeth Calume Burgos, Secretaria de Gestión Administrativa, de la Gobernación de Córdoba, certificó la existencia de disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos de viajes y transporte del funcionario que sea designado Alcalde ad hoc en el Municipio de Momil-Córdoba;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Designación.* Designase como Alcalde ad hoc del Municipio de Momil-Córdoba, al señor Edwin de Jesús Preciado Lorduy, identificado con la cédula de ciudadanía número 6887128, quien se desempeña como Secretario de Desarrollo de Salud, de la Gobernación de Córdoba, para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015.

Artículo 2°. *Viáticos.* La Gobernación de Córdoba sufragará los gastos de viajes y transportes del Alcalde ad hoc designado, según certificación expedida por la Secretaria de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba.

Artículo 3°. *Posesión.* El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 de 1994.

Artículo 4°. *Comunicación.* Comuníquese el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc, al Alcalde Municipal de Momil y a la Procuraduría Regional de Córdoba.

Artículo 5°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2099 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Moñitos-Córdoba.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio radicado el 23 de octubre de 2015, el Alcalde Municipal de Moñitos-Córdoba, señor Waymar Enrique Petro Espitia, se declaró impedido para presidir y desarrollar las labores de clavero en los escrutinios que se adelantarán con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015, en razón al parentesco en cuarto grado de consanguinidad con el señor Carlos Janio Cantero Petro, aspirante a la Alcaldía de esa municipalidad;

Que mediante auto del 23 de octubre de 2015, el Procurador Regional de Córdoba aceptó el impedimento impetrado por el señor Waymar Enrique Petro Espitia, en su calidad de Alcalde Municipal de Moñitos-Córdoba, para actuar como miembro y presidente de la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento Electoral y clavero, respecto de las elecciones a realizarse el próximo 25 de octubre de 2015, y remitió las diligencias al Ministerio del Interior, para que por su conducto la Presidencia de la República designe funcionario ad hoc;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°;

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, acorde con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en conceptos de fecha del 6 de marzo de 2014, Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203) y del 19 de octubre de 2015, Radicado número 11001-03-06-000-2015-00181-00(2273);

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el auto de fecha 23 de octubre de 2015, proferido por el Procurador Regional de Moñitos-Córdoba, se hace necesario designar un Alcalde ad hoc para el municipio de Moñitos-Córdoba, para que presida y desarrolle las labores de clavero en los escrutinios que se adelantarán con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015;

Que en fecha 23 de octubre de 2015, la doctora Elizabeth Calume Burgos, Secretaria de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba, certificó la existencia de disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos de viajes y transporte del funcionario que sea designado Alcalde ad hoc en el municipio de Moñitos-Córdoba;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Designación.* Designase como Alcalde ad hoc del municipio de Moñitos-Córdoba, a la doctora Ana Luz Bedoya Usta, identificada con la cédula de ciudadanía número 25871529, quien se desempeña en el cargo de Secretario de Despacho, asignado a la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial de la Gobernación de Córdoba, para actuar como miembro y presidente de la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento Electoral y clavero, respecto de las elecciones a realizarse el próximo 25 de octubre de 2015.

Artículo 2°. *Viáticos.* La Gobernación de Córdoba sufragará los gastos de viajes y transportes del Alcalde ad hoc designado con cargo al Rubro Viáticos y Gastos de Transporte y de Viaje, según certificación expedida por la Secretaria de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba.

Artículo 3°. *Poseción*. El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 de 1994.

Artículo 4°. *Comunicación*. Comuníquese el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc, al Alcalde Municipal de Moñitos y a la Procuraduría Regional de Córdoba.

Artículo 5°. *Vigencia*. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2100 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de San Pelayo-Córdoba.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio del 19 de octubre de 2015, el Alcalde Municipal de San Pelayo-Córdoba, señor José Jaime Pareja Alemán, se declaró impedido para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015, en razón a su parentesco de consanguinidad con uno de los candidatos aspirantes a la alcaldía del municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba;

Que mediante auto del 23 de octubre de 2015, el Procurador Regional de Córdoba, aceptó el impedimento impetrado por el señor José Jaime Pareja Alemán, en su calidad de Alcalde Municipal de San Pelayo-Córdoba, para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015, y remitió las diligencias al Ministerio del Interior, para que por su conducto la Presidencia de la República designe funcionario ad hoc;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°;

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, acorde con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en conceptos de fecha del 6 de marzo de 2014, Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203) y del 19 de octubre de 2015, Radicado número 11001-03-06-000-2015-00181-00(2273);

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el auto de fecha 23 de octubre de 2015, proferido por el Procurador Regional de Córdoba, se hace necesario designar un Alcalde ad hoc para el municipio de San Pelayo-Córdoba, para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015;

Que en fecha 23 de octubre de 2015, la doctora Elizabeth Calume Burgos, Secretaria de Gestión Administrativa, de la Gobernación de Córdoba, certificó la existencia de disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos de viajes y transporte del funcionario que sea designado Alcalde Ad hoc en el municipio de San Pelayo-Córdoba;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Designación*. Designase como Alcalde ad hoc del municipio de San Pelayo-Córdoba, a la señora Luz Elena Oviedo Bolaños, identificada con la cédula de ciudadanía número 34973554, quien se desempeña como Jefe de Oficina de Control Interno, de la Gobernación de Córdoba, para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, que se adelantará con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales del próximo 25 de octubre de 2015.

Artículo 2°. *Viáticos*. La Gobernación de Córdoba sufragará los gastos de viajes y transportes del Alcalde ad hoc designado, según certificación expedida por la Secretaría de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba.

Artículo 3°. *Poseción*. El Alcalde Ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 de 1994.

Artículo 4°. *Comunicación*. Comuníquese el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc, al Alcalde Municipal de San Pelayo y a la Procuraduría Regional de Córdoba.

Artículo 5°. *Vigencia*. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 2101 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Lorica-Córdoba.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio del 22 de octubre de 2015, el Alcalde Municipal de Lorica-Córdoba, señor Francisco José Jattin Corrales, se declaró impedido para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, respecto de la jornada electoral a realizarse el 25 de octubre de 2015, en razón a que tiene parentesco, en cuarto grado de consanguinidad, con la señora Nancy Sofia Jattin Martínez, aspirante a la Alcaldía de la referida municipalidad;

Que mediante auto del 23 de octubre de 2015, el Procurador Regional de Córdoba aceptó el impedimento impetrado por el señor Francisco José Jattin Corrales, en su calidad de Alcalde Municipal de Lorica-Córdoba para presidir la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actuar como clavero, respecto de la jornada electoral a realizarse el 25 de octubre de 2015, y remitió las diligencias al Ministerio del Interior, para que por su conducto la Presidencia de la República designe funcionario ad hoc;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°;

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, acorde con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en conceptos de fecha del 6 de marzo de 2014, Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203) y del 19 de octubre de 2015, Radicado número 11001-03-06-000-2015-00181-00(2273);

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el Auto de fecha 23 de octubre de 2015, proferido por el Procurador Regional de Córdoba, se hace necesario designar un Alcalde ad hoc para el municipio de Lorica-Córdoba, para que presida la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actúe como clavero, respecto de la jornada electoral a realizarse el 25 de octubre de 2015;

Que en fecha 23 de octubre de 2015, la doctora Elizabeth Calume Burgos, Secretaria de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba, certificó la existencia de disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos de viajes y transporte del funcionario que sea designado Alcalde ad hoc en el municipio de Lorica-Córdoba;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Designación*. Designase como Alcalde ad hoc del municipio de Lorica-Córdoba, al señor William César Tapia Espitia, identificado con la cédula de ciudadanía número 78697466, quien se desempeña en el cargo de Secretario de Educación de la Gobernación de Córdoba, para que presida la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y actúe como clavero, respecto de la jornada electoral a realizarse el 25 de octubre de 2015.

Artículo 2°. *Viáticos*. La Gobernación de Córdoba sufragará los gastos de viajes y transportes del Alcalde ad hoc designado, según certificación expedida por la Secretaría de Gestión Administrativa de esa gobernación.

Artículo 3°. *Poseción*. El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 de 1994.

Artículo 4°. *Comunicación*. Comuníquese el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc, al Alcalde Municipal de Lorica y a la Procuraduría Regional de Córdoba.

Artículo 5°. *Vigencia*. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2086 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:

Artículo 1°. **Nómbrese** al doctor Julián Jaramillo Escobar, identificado con cédula de ciudadanía número 19365412, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la Confederación Suiza.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2071 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo referente al régimen de protección al consumidor financiero del Sistema General de Pensiones.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 2° de la Ley 1748 de 2014,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el literal c) del artículo 14 del Decreto número 656 de 1994, el inciso 2° del artículo 63 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 49 de la Ley 1328 de 2009, es obligación de las Administradoras del Sistema General de Pensiones la remisión de extractos a sus afiliados y pensionados, la información remitida corresponderá entre otros a sumas depositadas, rendimientos, saldos, así como el monto de comisiones cobradas;

Que el numeral 1 del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que las entidades vigiladas deben suministrar a sus usuarios, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, para que estos puedan escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas;

Que de conformidad con el artículo 9° de la Ley 1328 de 2009 la información suministrada por las entidades vigiladas al consumidor financiero debe ser cierta, suficiente y oportuna, bajo el principio de transparencia;

Que desde la vigencia del Decreto número 2555 de 2010, se preveían algunas disposiciones del Régimen de Protección al Consumidor Financiero del Sistema General de Pensiones, las cuales establecen que las Administradoras de los dos regímenes deben actuar con debida diligencia en la promoción y prestación del servicio, de tal forma que los consumidores financieros, reciban la atención, asesoría e información suficiente que les permita tomar decisiones informadas;

Que el 26 de diciembre de 2014 se expidió la Ley 1748 por medio de la cual se establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones. Para el efecto en su artículo 2° dispuso la información mínima y la periodicidad con la que le deben ser remitidos los extractos a los afiliados al Sistema General de Pensiones;

Que en el mismo artículo se estableció la necesidad de reglamentar los cálculos para que las administradoras de fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad realicen la proyección de la expectativa pensional, con la finalidad de que los afiliados cuenten con información adecuada sobre su futuro pensional y la procedencia de obtener una asesoría personalizada para este fin;

Que el parágrafo 1° del mismo artículo adicionó un inciso al artículo 9° de la Ley 1328 de 2009, el cual determina la obligación de garantizar que los afiliados al sistema general de pensiones reciban una asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para el traslado, con miras a que el afiliado tome una decisión informada;

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el contenido del presente decreto, en el Acta número 008 del 30 de junio de 2015,

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 4 al Título 10 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto número 2555 de 2010, el cual quedará así:

“CAPÍTULO 4. INFORMACIÓN TRANSPARENTE A LOS CONSUMIDORES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Artículo 2.6.10.4.1. Extractos de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Las Administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tendrán la obligación de enviar los extractos a sus afiliados y pensionados trimestralmente por cualquier medio electrónico, sin embargo los afiliados podrán solicitar que el extracto sea enviado mediante correo físico, caso en el cual el documento deberá ser remitido a la dirección de correspondencia que se encuentre reportada en la Administradora. En el caso que la Administradora no pueda enviar el extracto por medio electrónico deberá enviarlo al correo físico, hasta tanto sean actualizados los datos del afiliado.

Los extractos emitidos por Administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán ser expedidos de conformidad con las instrucciones que sobre el particular imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los extractos de los afiliados que trata el presente artículo deberán contener como mínimo la siguiente información, la cual deberá discriminarse por tipo de fondo:

- a) Ingreso base de cotización sobre el cual se realizan los aportes;
- b) Número total de semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, de conformidad con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia;
- c) El capital neto ahorrado o saldo final neto después de efectuar las deducciones, reportado al cierre del período del extracto;
- d) El monto correspondiente al valor de los rendimientos abonados en la cuenta de ahorro individual del afiliado durante el período del extracto;
- e) Las cotizaciones acreditadas durante el período de corte del extracto;
- f) Nombre y NIT del empleador que realiza el aporte;
- g) Para los extractos de los afiliados se debe informar el monto deducido en cada cotización y su equivalente expresado como porcentaje del ingreso base de cotización, por concepto de todas y cada una de las deducciones legales que se deban realizar, tales como: la comisión de administración de cotizaciones obligatorias, las primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y Fondo de Solidaridad Pensional, y las demás deducciones realizadas, de acuerdo con la normatividad vigente, para el período de corte del extracto;
- h) La información adicional que determine la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para los extractos de los pensionados por retiro programado deberá reportarse el valor de la comisión y su porcentaje, expresado como una tasa, aplicada sobre los rendimientos abonados durante el mes en la cuenta de ahorro individual. Así como el valor de los descuentos que se realicen por cotización a salud, embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas y demás que determine la ley.

Artículo 2.6.10.4.2. Extractos de la Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida Colpensiones. La Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, o quien haga sus veces, tendrá la obligación de enviar los extractos a sus afiliados anualmente por cualquier medio electrónico, sin embargo los afiliados podrán solicitar que el extracto sea enviado mediante correo físico, caso en el cual el documento deberá ser remitido a la dirección de correspondencia que se encuentre reportada en la Administradora. En el caso que Colpensiones no pueda enviar el extracto por medio electrónico deberá enviarlo al correo físico, hasta tanto sean actualizados los datos del afiliado.

Los extractos emitidos por Colpensiones deben ser expedidos de conformidad con las instrucciones que sobre el particular imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los extractos de que trata el presente artículo deberán contener como mínimo la siguiente información:

- a) Ingreso base de cotización sobre el cual se realizaron los aportes para cada uno de los ciclos (o meses) del período reportado;
- b) Nombre y NIT del empleador que realiza el aporte;
- c) Valor total de la cotización;
- d) Deducciones efectuadas al valor total de la cotización, tales como: comisión de administración de cotizaciones obligatorias, Fondo de Solidaridad Pensional y las demás deducciones realizadas, de acuerdo con la normatividad vigente, para cada uno de los ciclos (o meses) del período reportado;
- e) Número total de semanas cotizadas en el Sistema General de Pensiones y durante el período de corte del extracto, de conformidad con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia;
- f) La información adicional que determine la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 2.6.10.4.3. Proyección del beneficio pensional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. El afiliado podrá solicitar una proyección del valor del beneficio pensional a la Administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en la que se encuentre afiliado. Para ello suministrará a la Administradora respectiva la información adicional que esta requiera. Para el cumplimiento de esta obligación por parte de la Administradora, el afiliado tiene derecho a contar con una asesoría personalizada por parte de la Administradora, de conformidad con el numeral 5 del artículo 2.6.10.1.3 y el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto número 2555 de 2010, y las normas aplicables que regulen la materia.

Las administradoras deberán indicar de manera expresa al afiliado que la simulación corresponde a la modalidad de pensión de retiro programado, calculada con base en las cotizaciones obligatorias y no incluye aportes voluntarios.

Para el cálculo de la proyección antes mencionada se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros técnicos:

- a) La tasa de interés técnico que se encuentra establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia o la que la modifique o sustituya;
- b) Las tablas de mortalidad de rentistas y de inválidos expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia;
- c) Las tasas de inflación y crecimiento de los beneficios pensionales;
- d) Demás parámetros y supuestos que imparta sobre el particular la Superintendencia Financiera de Colombia.

El afiliado tiene derecho a contar con asesoría personalizada, la cual deberá entenderse como aquella en la que un representante de la Administradora le informa al afiliado de manera personal e individualizada, y por medio de los canales de comunicación que disponga la Administradora, los supuestos con base en las cuales se realiza la proyección del beneficio pensional y cómo debe interpretarse la misma, conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 1°. Las Administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán ofrecer herramientas financieras que propendan por informar a sus afiliados acerca de la proyección mencionada y de los supuestos que se utilicen para tal fin. Para estos efectos las administradoras podrán hacer uso de los canales de comunicación que tengan disponibles.

Las herramientas financieras mencionadas, previo a su utilización con los afiliados, deberán ser presentadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia para establecer la no objeción.

Parágrafo 2°. La proyección de que trata este artículo, proporcionada por la Administradora del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, a través de las herramientas financieras, deberá entenderse como un cálculo estimado de la eventual futura pensión. La Administradora deberá informar al afiliado que la mesada pensional resultante es una mera proyección y no un derecho consolidado, por fundamentarse en una simulación de supuestos futuros probables, pero sin certeza sobre la ocurrencia.

Artículo 2°. Modifícase el numeral 5 del artículo 2.6.10.1.3 del Decreto número 2555 del 2010 el cual quedará así:

“5. Acceder a las herramientas financieras que las administradoras decidan ofrecer con el objeto de permitir al consumidor financiero conocer los cálculos preliminares sobre el posible monto de su pensión, de acuerdo con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. En particular, las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán ofrecer dichas herramientas”.

Artículo 3°. Modifícase el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto número 2555 del 2010 el cual quedará así:

“Artículo 2.6.10.2.3. Asesoría e información al Consumidor Financiero. Las administradoras del Sistema General de Pensiones tienen el deber del buen consejo, por lo que se encuentran obligadas a proporcionar a los consumidores financieros información completa respecto a los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.

Las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, deberán garantizar que los afiliados que quieran trasladarse entre regímenes pensionales, esto es del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media y viceversa, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.

La asesoría de que trata el inciso anterior deberá contemplar como mínimo la siguiente información conforme a la competencia de cada administradora del Sistema General de Pensiones:

1. Probabilidad de pensionarse en cada régimen.
2. Proyección del valor de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, lo anterior frente a la posibilidad de no cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez a la edad prevista en la normatividad vigente.
3. Proyección del valor de la pensión en cada régimen.
4. Requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima en cada régimen.
5. Información sobre otros mecanismos de protección a la vejez vigentes dentro de la legislación.
6. Las demás que la Superintendencia Financiera de Colombia establezca.

En todo caso, el consumidor financiero podrá solicitar en cualquier momento durante la vigencia de su relación con la administradora toda aquella información que requiera para tomar decisiones informadas en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.

En particular, las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado al Régimen de Prima Media, así mismo deben suministrar una información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de: las condiciones de su afiliación al régimen, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras del mismo o de elegir el tipo de fondo dentro del esquema de “Multifondos” o de seleccionar la modalidad de pensión o de escoger la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia. Lo anterior, sin perjuicio de la información que deberá ser remitida a

los consumidores financieros en los extractos de conformidad con la reglamentación existente sobre el particular y las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto.

Para el caso de la proyección del beneficio pensional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la Administradora deberá realizar una asesoría en los términos descritos en el artículo 2.6.10.4.3 del presente decreto.

Parágrafo 1°. La asesoría a que se refiere el presente artículo tendrá el alcance previsto en estas disposiciones y en ningún caso será interpretada conforme a las normas relativas al deber de asesoría contenidas en el artículo 7.3.1.1.3, o las normas que la modifiquen o sustituyan.

La asesoría de que trata el inciso 2° del presente artículo, así como la información que arroje la herramienta financiera deberán entenderse como un cálculo estimado de la futura pensión, de la devolución de saldos y de la indemnización sustitutiva. Dichas proyecciones no corresponden a un derecho consolidado, por fundamentarse en una simulación de supuestos futuros probables, pero sin certeza sobre la ocurrencia.

Parágrafo 2°. Los consumidores financieros deberán manifestar de forma libre y expresa a la administradora su decisión de vincularse al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o al régimen de Prima Media con Prestación Definida o de trasladarse de régimen o de trasladarse entre administradoras del mismo régimen o de elegir el tipo de fondo dentro del esquema de “Multifondos” o de seleccionar la modalidad de pensión o de escoger la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia, a través de medios verificables de conformidad con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. En dicho medio deberá constar que el consumidor financiero recibió la información suficiente y la asesoría requerida y que, en consecuencia, entiende y acepta los efectos legales, así como los potenciales riesgos y beneficios de su decisión.

Parágrafo 3°. Las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones responderán por la actuación de los promotores de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto número 720 de 1994”.

Artículo 4°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona el Capítulo 4 al Título 10 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto número 2555 de 2010 y modifica el numeral 5 del artículo 2.6.10.1.3 del Decreto número 2555 de 2010 y el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto número 2555 de 2010.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

El Ministro de Trabajo,

Luis Eduardo Garzón.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 209 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 1128 del 6 de julio de 2015, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana Magally Chávez Ante, requerida para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 6 de julio de 2015, decretó la captura con fines de extradición de la ciudadana Magally Chávez Ante, identificada con cédula de ciudadanía número 66738665, quien había sido detenida el 30 de junio de 2015, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 1555 del 27 de agosto de 2015, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana Magally Chávez Ante.

En dicha Nota se informa lo siguiente:

“Magally Chávez Ante es requerida para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación Sustitutiva número 12-CR-20638- Williams(s), dictada el 25 de abril de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco kilogramos o más de cocaína, en violación del Título 21, Secciones 952(a), 960(b)(1)(B) y 963 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Dos: Concierto para distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959(a)(2), 960(b)(1)(B) y 963 del Código de los Estados Unidos.

(...)

Un auto de detención contra Magally Chávez Ante por estos cargos fue dictado el 25 de abril de 2014, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado (sic) en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Magally Chávez Ante, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1976 del 27 de agosto de 2015, señaló que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988¹. En ese sentido, el artículo 6º, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

[...]

4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, en los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano ...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana Magally Chávez Ante, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OF115-0022708-0AI-1100 del 2 de septiembre de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 30 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición de la ciudadana Magally Chávez Ante.

Sobre el particular la Honorable Corporación manifestó:

“7. El Concepto.

La Corte es del criterio que el Gobierno colombiano puede extraditar a la ciudadana colombiana Magally Chávez Ante por razón de los **Cargos Uno y Dos** de la acusación a que se contrae la solicitud. Esto es, por los delitos de: “*Concierto para importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco kilogramos o más de cocaína*” y de “*Concierto para distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados*”.

Estos cargos aparecen incluidos en la Acusación número 12-CR-20638-WILLIAMS(s) dictada el 25 de abril de 2014 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, conforme lo solicita el Gobierno de dicho país, pues se satisfacen los requisitos preestablecidos a estos efectos, como viene de demostrarse.

7.1. Aclaración final

En atención a lo manifestado por el Ministerio Público sobre el particular, es de advertir que atañe al Gobierno nacional, si en ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo caso, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometida a desaparición forzada, a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, o a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, y si la legislación del Estado requirente pena con la muerte el injusto que motiva la extradición, la entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, atendiendo lo contemplado en el artículo 494 del C. P. P., de 2004.

De igual modo, la Corte considera pertinente precisar, en orden a resguardar los derechos fundamentales del requerido, que –si el Gobierno nacional lo considera pertinente–, el Estado requirente deberá garantizar la permanencia en el país extranjero y su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante, incluso con posterioridad a su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, por razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición y por los cuales esta hubiere sido concedida.

Así mismo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección, y establece la inviolabilidad de su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.

Además, conforme precisó la Corte en concepto CSJ CP, 15 mayo 2008 Radicado 29024, como el mecanismo de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que la regule, por las normas contenidas en la

¹ Artículo 3º numeral 1 literal a).

Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004), el Gobierno nacional debe hacer las exigencias que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a la persona del solicitado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado Bloque de Constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem².

Asimismo, el Gobierno nacional ha de advertir a su homólogo del Estado requirente, que en el presente evento la persona solicitada en extradición ha permanecido privada de la libertad en detención preventiva por razón de este trámite.

Además, la Sala ha de indicar que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al Gobierno, encabezado por el señor Presidente como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento.

En mérito de lo expuesto y con las precisiones consignadas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, **conceptúa favorablemente** a la extradición de la ciudadana colombiana Magally Chávez Ante solicitada al Gobierno de Colombia por su homólogo de los Estados Unidos de América, por razón de los **Cargos Uno y Dos** contenidos en la Acusación número 12-CR-20638-WILLIAMS(s), dictada el 25 de abril de 2014 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida...”.

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana Magally Chávez Ante, identificada con cédula de ciudadanía número 66738665, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos; y

Cargo Dos: Concierto para distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación Sustitutiva número 12- CR-20638-WILLIAMS(s), dictada el 25 de abril de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que la ciudadana Magally Chávez Ante no se encuentra requerida por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que la ciudadana requerida no sea juzgada por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana Magally Chávez Ante bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso 2º del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que a la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenida por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

² Así, con arreglo al artículo 29 de la Carta; a los artículos 9º y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9-2.3, 101.2.3, 14-1.2.3.5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno nacional debe condicionar la entrega de un compatriota, si concede la extradición, a que se le respeten al extraditado –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a que cuente con un intérprete, a que tenga un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana Magally Chávez Ante, identificada con cédula de ciudadanía número 66738665, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos; y,

Cargo Dos: Concierto para distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación Sustitutiva número 12- CR-20638-WILLIAMS(s), dictada el 25 de abril de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega de la ciudadana Magally Chávez Ante al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que a la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que a la ciudadana extraditada no podrá ser juzgada ni condenada por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión personalmente a la interesada, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese a la ciudadana requerida, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 210 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0399 del 5 de marzo de 2015, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 9 de marzo de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 73125667, quien había sido capturado el 4 de marzo de 2015 por funcionarios de la Dirección Nacional de Articulación de Policías Judiciales Especializadas, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 0689 del 28 de abril de 2015, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez.

En dicha Nota se informa lo siguiente:

“Rafael de Jesús Ricaurte Gómez es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación número 15 CRIM 109, dictada el 26 de febrero de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para:

(i) Fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilogramos o más de cocaína), con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos; y

(ii) Importar una sustancia controlada (cinco kilogramos o más de cocaína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 952(a); 959(a) y (c); 960(a)(1), (a)(3), y (b)(1)(B); y 963 del Código de los Estados Unidos.

(...)

Un auto de detención contra Rafael de Jesús Ricaurte Gómez por este cargo fue dictado el 26 de febrero de 2015, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 0921 del 28 de abril de 2015, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988¹. En ese sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘[...]’

4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’ (Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-0011653-OAI-1100 del 4 de mayo de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 30 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:

“Acotación Final

Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el artículo 494 de la ley 906 de 2004 al Gobierno nacional como supremo director de las relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición, la Corte juzga pertinente poner de presente al Gobierno nacional que, en caso de conceder la extradición de Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, se debe condicionar su entrega de modo tal que no sea juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le impondrá la pena capital o perpetua, conforme al artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Así mismo, le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca al requerido posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que a ella también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.

Además, conforme precisó la Corte en Concepto del 15 de mayo de 2008 (Radicado 29024), como el mecanismo de la extradición en ausencia de un instrumento internacional que la regule, se rige por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004), el Gobierno nacional debe formular las exigencias que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a la persona del solicitado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° ibídem.

De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política, esto a través de sus respectivos agentes diplomáticos.

Igualmente, en caso Rafael de Jesús Ricaurte Gómez sea absuelto, sobreseído, o por cualquier otra vía legal, declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su extradición y, en consecuencia, dejado en libertad, el Estado reclamante –en el evento en que el ciudadano extraditado desee regresar al país– deberá asumir sus gastos de transporte y manutención de acuerdo con su dignidad humana (artículos 1° y 93 de la Constitución Política).

Por último, se pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente, en el evento de que el requerido sea objeto de una decisión condenatoria dentro del proceso por el que es reclamado en extradición, se tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.

¹ Párrafo 1° del artículo 3°.

Concepto

En atención a que la totalidad de los requisitos formales contemplados en los artículos 493, 495 y 502 del Código de Procedimiento Penal se satisfacen a cabalidad, la Corte conceptúa favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América respecto de Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, en cuanto se refiere al cargo formulado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y concierto para delinquir...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 73125667, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el siguiente cargo:

Cargo Uno: Concierto para (i) fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilogramos o más de cocaína), con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos; y (ii) importar una sustancia controlada (cinco kilogramos o más de cocaína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos.

El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación número 15 CRIM 109, dictada el 26 de febrero de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 73125667, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el siguiente cargo:

Cargo Uno: Concierto para (i) fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilogramos o más de cocaína), con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos; y (ii) importar una sustancia controlada (cinco kilogramos o más de cocaína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos.

El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación número 15 CRIM 109, dictada el 26 de febrero de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,

Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 211 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 2528 del 23 de diciembre de 2014, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Cristian Gustavo Pérez Plaza, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 28 de enero de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Cristian Gustavo Pérez Plazas, identificado con cédula de ciudadanía número 74181434, la cual se hizo efectiva el 25 de febrero de 2015, por miembros de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0648 del 21 de abril de 2015, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Cristian Gustavo Pérez Plazas.

En dicha Nota se informa lo siguiente:

“Cristian Gustavo Pérez Plazas es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación número 8:12-CR-307-T-26AEP, dictada el 26 de julio de 2012, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, mediante la cual se acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959, 960(b)(1)(B)(ii) y 963 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 70503(a), 70506(a) y (b) del Código de los Estados Unidos, y del Título 21, Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Código de los Estados Unidos.

(...)

Un auto de detención contra Cristian Gustavo Pérez Plazas por estos cargos fue dictado el 27 de julio de 2012, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Cristian Gustavo Pérez Plazas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 0853 del 21 de abril de 2015, señaló:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988¹. En ese sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

[...]

4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’ (Destacado fuera de texto).

Así mismo, la ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000², que en su artículo 16, numerales 3 y 7, prevé lo siguiente:

‘3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente

¹ Artículo 3° numeral 1 literal a).

² Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).

entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.

[...]

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición'. (Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, en los aspectos no regulados por las Convenciones aludidas, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Cristian Gustavo Pérez Plazas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-0011201-OAI-1100 del 28 de abril de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 30 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Cristian Gustavo Pérez Plazas.

Sobre el particular la Honorable Corporación manifestó:

“7. Decisión

Los anteriores razonamientos acordes con lo señalado por la representante del Ministerio Público, permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano Cristian Gustavo Pérez Plazas por los cargos atribuidos en la Acusación Formal número 8: 12-CR-307-T-26AEP de 26 de julio de 2012, proferida en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, División Tampa.

En este momento, considera la Corte pertinente, en orden a proteger los derechos fundamentales del requerido, prevenir al Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de Pérez Plazas, advierta al Estado solicitante garantizarle a este la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada.

Así mismo, debe condicionar la entrega de Cristian Gustavo Pérez Plazas a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (artículos 29 de la Constitución; 9º y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3.5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, al Gobierno nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.

Concepto favorable

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, **conceptúa favorablemente** a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Cristian Gustavo

Pérez Plazas, cuyas notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la Nota Verbal número 0648 de 21 de abril de 2015, suscrita por la Embajada de los Estados Unidos de América, por los cargos **Uno y Dos** imputados en la Acusación Formal número 8:12-CR-307-T-26AEP de 26 de julio de 2012, proferida en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, División Tampa ...”.

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano Cristian Gustavo Pérez Plazas, identificado con cédula de ciudadanía número 74181434, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos; y,

Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 8:12-CR-307-T-26AEP, dictada el 26 de julio de 2012, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Cristian Gustavo Pérez Plazas no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Cristian Gustavo Pérez Plazas bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso 2º del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Cristian Gustavo Pérez Plazas, identificado con cédula de ciudadanía número 74181434, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos; y,

Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 8:12-CR-307-T-26AEP, dictada el 26 de julio de 2012, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Artículo 2º. Ordenar la entrega del ciudadano Cristian Gustavo Pérez Plazas al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2º del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3º. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4º. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, **notifíquese** al ciudadano requerido, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, **comuníquese** al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 212 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0430 del 16 de marzo de 2015, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano John Holman Obando Gómez, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 25 de marzo de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano John Holman Obando Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 16832607, la cual se hizo efectiva el 4 de mayo de 2015, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1058 del 26 de junio de 2015, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano John Holman Obando Gómez.

En dicha Nota se informa lo siguiente:

“John Holman Obando Gómez es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación número 4: 12CR295, dictada el 12 de diciembre de 2012, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, mediante la cual se acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para:

i) importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 952 y 960 del Código de los Estados Unidos; y

ii) fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959 y 960 del Código de los Estados Unidos; todo en violación del Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Dos: Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Título 21, Sección 959 del Código de los Estados Unidos; y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos.

(...)

Un auto de detención contra John Holman Obando Gómez por estos cargos fue dictado el 12 de diciembre de 2012, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano John Holman Obando Gómez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1485 del 26 de junio de 2015, señaló que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988¹. En ese sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

[...]

4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’ (Destacado fuera de texto).

¹ Artículo 3° numeral 1 literal a).

Así mismo, la ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000², que en su artículo 16, numerales 3 y 7, prevé lo siguiente:

‘3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.

[...]

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’. (Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, en los aspectos no regulados por las Convenciones aludidas, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano John Holman Obando Gómez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-0017286-OAI-1100 del 3 de julio de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 30 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano John Holman Obando Gómez.

Sobre el particular la Honorable Corporación manifestó:

“7. Decisión

Los anteriores razonamientos acordes con lo señalado por el Ministerio Público, permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano John Holman Obando Gómez por los cargos atribuidos en la Acusación de Formal 4: 12CR295 de 12 de diciembre de 2014, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

La Corte considera pertinente, en orden a proteger los derechos fundamentales del requerido, prevenir al Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de Obando Gómez, advierta al Estado solicitante garantizarle a este la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada.

Así mismo, debe condicionar la entrega de John Holman Obando Gómez a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior; a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (artículos 29 de la Constitución; 9° y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3.5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, al Gobierno nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente

² Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).

de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, **conceptúa favorablemente** a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano John Holman Obando Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 16832607, cuyas demás notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, por los cargos atribuidos en la Acusación número 4: 12CR295, dictada el 12 de diciembre de 2014 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas...".

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano John Holman Obando Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 16832607, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para:

- i) importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos; y
- ii) fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos; y,

Cargo Dos: Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 4:12CR295, dictada el 12 de diciembre de 2012, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano John Holman Obando Gómez no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano John Holman Obando Gómez bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano John Holman Obando Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 16832607, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para:

- i) importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos; y
- ii) fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos; y,

Cargo Dos: Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 4:12CR295, dictada el 12 de diciembre de 2012, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano John Holman Obando Gómez al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, **notifíquese** al ciudadano requerido, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, **comuníquese** al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 213 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 202/2015 del 4 de mayo de 2015, el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez, requerido por la Sección número 01 de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro del procedimiento abreviado número 899/2014, por un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, de conformidad con el auto que decretó la prisión provisional, emitido el 10 de marzo de 2015.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 7 de mayo de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79543441, quien había sido capturado el 30 de abril de 2015 por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 281/2015 del 6 de julio de 2015, la Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1583 del 8 de julio de 2015, conceptuó que los tratados aplicables al presente caso son:

“1. La ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 1892.

2. El ‘Protocolo modificadorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999 ...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-0018453-OAI-1100 del 16 de julio de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 30 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:

“En síntesis, tal como lo señala el delegado del Ministerio Público, están satisfechos los requisitos previstos en el Convenio sobre Extradición de Reos y su Protocolo modificadorio para acceder a la solicitud.

Conclusión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, **conceptúa favorablemente** a la extradición del ciudadano Juan Carlos Largo Vacarez, solicitada al Gobierno de Colombia por el de España para ser procesado por delitos contra la salud pública dentro del Procedimiento Abreviado número 899/2014, adelantado en la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

Además, es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega a que el reclamado no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política. Así mismo, que se le ofrezcan las atenciones médicas que su estado de salud demande, acorde con las afecciones médicas referidas por el requerido.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido por un intérprete, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9°, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5°, 7° y 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9°, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, que proceda a imponer al Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones que motivan la extradición.

De otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento ...”.

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79543441, requerido por la Sección número 01 de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro del Procedimiento Abreviado número 899/2014, por un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, de conformidad con el auto que decretó la prisión provisional, emitido el 10 de marzo de 2015.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano requerido no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, con las salvedades allí establecidas.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente como parte cumplida de la condena, el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente, el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79543441, requerido por la Sección número 01 de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro del Procedimiento Abreviado número 899/2014, por un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, de conformidad con el auto que decretó la prisión provisional, emitido el 10 de marzo de 2015.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano Juan Carlos Largo Vacarez al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las salvedades allí establecidas.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 214 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 210/2015 del 13 de mayo de 2015, el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Alexánder Mira Arias, requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de Madrid, de conformidad con el auto de prisión y busca y captura, del 7 de julio de 2014, dentro de las Diligencias Previas número 87/2012, por un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 15 de mayo de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Alexánder Mira Arias, identificado con la cédula de ciudadanía número 94424023, y portador del Pasaporte Mexicano número G01940671, quien había sido detenido el 8 de mayo de 2015, con fundamento en una Circular Roja de Interpol, por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Seccional Medellín, de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 280/2015 del 6 de julio de 2015, la Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Alexánder Mira Arias.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Alexánder Mira Arias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1581 del 8 de julio de 2015, conceptuó que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y el Reino de España.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de precisar que se encuentran vigentes los siguientes tratados bilaterales de extradición entre las Partes:

1. La ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 1892.

2. El ‘Protocolo modificadorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999 ...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Alexánder Mira Arias, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-0017925-OAI-1100 del 10 de julio de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 30 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Alexánder Mira Arias.

Sobre el particular la Honorable Corporación precisó:

“En conclusión, la Sala evidencia que se cumplen los presupuestos constitucionales y legales, así como los reseñados en los instrumentos internacionales que regulan la materia, para que se produzca la entrega en extradición de Alexánder Mira Arias al Gobierno de España, en cuanto tiene que ver con los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por los cuales es solicitado.

La Sala, teniendo en cuenta que las condiciones exigidas en el Convenio de Extradición de Reos suscrito entre los Gobiernos de España y Colombia se encuentran reunidos, emitirá concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano Alexánder Mira Arias.

6. Condicionamientos

Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 al Gobierno nacional y como supremo director de las relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición, la Corte juzga pertinente poner de presente al Gobierno nacional que, en caso de conceder la extradición de Alexánder Mira Arias, se debe condicionar su entrega de modo tal que no sea juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le impondrá la pena capital o perpetua, conforme al artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Así mismo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca al requerido posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que a ella también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.

El Gobierno nacional advertirá también a su homólogo del Estado requirente, que deberá computarse la pena que eventualmente se le imponga, el tiempo que Mira Arias ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición. Se recomienda igualmente al Gobierno nacional, encabezado por el señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarán de su eventual incumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política.

Así mismo, en caso que Alexánder Mira Arias sea absuelto, sobreseído o, por cualquier otra vía legal, declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su extradición y, en consecuencia, dejado en libertad, el Estado reclamante –en el evento en que el ciudadano extraditado desee regresar al país– deberá asumir sus gastos de transporte y manutención de acuerdo con su dignidad humana (artículos 1° y 93 de la Constitución Política).

Concepto

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto favorable a la extradición del ciudadano Alexánder Mira Arias, requerido por el Gobierno de España a través de su embajada en Colombia, para que responda por los hechos a que se concreta la solicitud ...”.

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Alexánder Mira Arias, identificado con la cédula de ciudadanía número 94424023, y portador del Pasaporte Mexicano número G01940671, requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de Madrid, España, de conformidad con el auto de prisión y busca y captura, del 7 de julio de 2014, dentro de las Diligencias Previas número 87/2012, por un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Alexánder Mira Arias no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano requerido no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, con las salvedades allí establecidas.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Alexánder Mira Arias, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente como parte cumplida de la condena, el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente, el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Alexánder Mira Arias, identificado con la cédula de ciudadanía número 94424023, y portador del Pasaporte Mexi-

cano número G01940671, requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de Madrid, España, de conformidad con el auto de prisión y busca y captura, del 7 de julio de 2014, dentro de las Diligencias Previas número 87/2012, por un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Alexánder Mira Arias al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las salvedades allí establecidas.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese al ciudadano requerido, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 215 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 120/2015 del 2 de marzo de 2015, aclarada con la Nota Verbal número 123/2015 del 3 de marzo de 2015, el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia solicitó la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana colombiana Yermin Elena García Cardona, requerida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, para el cumplimiento de la condena de siete (7) años y cuatro (4) meses de prisión, impuesta mediante Sentencia del 15 de marzo de 2010, revisada mediante Auto del 23 de diciembre de 2010, dentro Rollo Sumario 2/2008, por un delito contra la salud pública referido a sustancia que causa grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 4 de marzo de 2015, decretó la captura con fines de extradición de la ciudadana Yermin Elena García Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía número 41954331, quien había sido detenida el 27 de febrero de 2015, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 166/2015 del 6 de abril de 2015, el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana Yermin Elena García Cardona.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Yermin Elena García Cardona, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 0751 del 9 de abril de 2015, conceptuó que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y el Reino de España.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de precisar que se encuentran vigentes los siguientes tratados bilaterales de extradición entre las Partes:

1. La ‘*Convención de Extradición de Reos*’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 1892.

2. El ‘*Protocolo modificador a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España*’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999 ...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana Yermin Elena García Cardona, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Oficio número OFI15-0009522-OAI-1100 del 13 de abril de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 30 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que se exigen en las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición de la ciudadana Yermin Elena García Cardona.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:

“8. Aclaraciones finales.

La Corte considera pertinente, en orden a proteger los derechos fundamentales de la requerida, prevenir al Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de Yermin Elena García Cardona, advierta al Estado solicitante garantizarle a esta la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando la extraditada sea liberada por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón del cargo que motivó la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que la solicitada no sea juzgada por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometida a sanciones distintas de las impuestas en la condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia.

Así mismo, debe condicionar la entrega de García Cardona a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las garantías, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la pena no trascienda de su persona y que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.

Además, que no puede ser condenada dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que la extraditada pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que deberá computarse el tiempo que la requerida ha permanecido privada de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

9. Concepto.

*Conforme a lo anterior, la Corte **conceptúa favorablemente** a la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Yermin Elena García Cardona, de anotaciones conocidas en el curso de esta actuación, formulada por el Gobierno de España a través de su Embajada en Colombia, mediante las Notas Verbales números 120, 123 y 166 del 2 y 3 de marzo y 6 de abril de 2015, para el cumplimiento de la pena impuesta por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, Sumario número 2/08, según los motivos que anteceden.*

Ello, por cuanto encuentra satisfechos los requisitos señalados en el Tratado de Extradición entre Colombia y España de 1892 y su Protocolo Modificatorio adoptado en Madrid el 16 de marzo de 1999, aprobados por las Leyes 35 de 1892 y 876 de 2004, en su orden... ”.

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana colombiana Yermin Elena García Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía número 41954331, requerida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, España, para el cumplimiento de la condena de siete (7) años y cuatro (4) meses de prisión, impuesta mediante Sentencia del 15 de marzo de 2010, revisada mediante auto del 23 de diciembre de 2010, dentro Rollo Sumario 2/2008, por un delito contra la salud pública referido a sustancia que causa grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que la ciudadana Yermin Elena García Cardona no se encuentra requerida por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6º de la Convención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que la ciudadana requerida solo podrá ser juzgada por el delito que motivó la extradición, con las salvedades allí establecidas.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana Yermin Elena García Cardona, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

11. Que la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenida por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente, el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana Yermin Elena García Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía número 41954331, requerida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, España, para el cumplimiento de la condena de siete (7) años y cuatro (4) meses de prisión, impuesta mediante Sentencia del 15 de marzo de 2010, revisada mediante auto del 23 de diciembre de 2010, dentro Rollo Sumario 2/2008, por un delito contra la salud pública referido a sustancia que causa grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia.

Artículo 2º. Ordenar la entrega de la ciudadana Yermin Elena García Cardona al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3º. Advertir al Estado requirente que la ciudadana extraditada solo podrá ser juzgada por el delito que motivó la extradición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Convención de Extradición de Reos, con las salvedades allí establecidas.

Artículo 4º. Notificar la presente decisión personalmente a la interesada, a su representante o apoderado, o a la persona autorizada por la interesada, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5º. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma, a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, **notifíquese** personalmente a la interesada, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, **comuníquese** al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 216 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 002/2015 del 7 de enero de 2015, el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la extradición de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño requerida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid dentro del Procedimiento Abreviado número 93/2013 que se le sigue por un delito contra la Salud Pública, de conformidad con la orden internacional de detención dictada el 4 de noviembre de 2014.

2. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 009 del 8 de enero de 2015, conceptuó que los tratados aplicables al presente caso son:

“1. La ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 1892.

2. El ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999...”.

3. Que mediante Notas Verbales números 028/2015 del 22 de enero de 2015 y 049/2015 del 2 de febrero de 2015, la Embajada del Reino de España en nuestro país remitió información adicional y complementó la documentación que acompaña la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño.

4. Que el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 13 de febrero de 2015, decretó la captura con fines de extradición de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño, identificada con la cédula de ciudadanía número 1113627963.

Funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional notificaron la anterior decisión a la señora García Castaño, el 3 de marzo de 2015, en el establecimiento carcelario donde se encontraba previamente reclusa.

5. Que una vez perfeccionado el expediente de extradición de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-0007713-OAI-1100 del 20 de marzo de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 30 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exige la normatividad convencional aplicable al caso, conceptuó favorablemente a la extradición de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:

“8. Aclaraciones finales.

La Corte considera pertinente precisar, en orden a proteger los derechos fundamentales de la requerida, que el Estado solicitante deberá garantizarle la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando llegare a ser sobreseída, absuelta, declarada no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que la solicitada no sea juzgada por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometida a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante¹.

Así mismo, debe condicionar la entrega de Mayra Alejandra García Castaño a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la sanción privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social².

Además, no puede ser condenada dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que la extraditada pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección³.

De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, deberá efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política.

Finalmente, el Gobierno nacional advertirá al del Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que Mayra Alejandra García Castaño ha permanecido privada de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

9. Concepto.

*Conforme a lo anterior, la Corte **conceptúa favorablemente** a la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño, de anotaciones conocidas en el curso de esta actuación, formulada por el Gobierno de España a través de su Embajada en Colombia, mediante las Notas Verbales números 002, 028 y 049 del 7 y 22 de enero y 2 de febrero de 2015, respectivamente, para que ejecute el ‘mandamiento de detención e ingreso en prisión’ que tiene en su contra y cumpla con el llamado a comparecer en el proceso adelantado por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, en donde se le investiga por un delito contra la salud pública.*

Ello, por cuanto encuentra satisfechos los requisitos señalados en el Tratado de Extradición entre Colombia y España de 1892 y su Protocolo Modificatorio adoptado en Madrid el 16 de marzo de 1999, aprobados por las Leyes 35 de 1892 y 876 de 2004, en su orden ...”.

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño, identificada con la cédula de ciudadanía número 1113627963, requerida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro del Procedimiento Abreviado número 93/2013 que se le sigue por un delito contra la Salud Pública, de conformidad con la orden internacional de detención dictada el 4 de noviembre de 2014 y el mandamiento de detención e ingreso en prisión dictado el 2 de febrero de 2015.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que la ciudadana requerida se encuentra condenada en Colombia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En efecto se advierte que el Juzgado 49 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia anticipada proferida el 28 de mayo de 2015, condenó a la ciudadana Mayra Alejandra García Castaño a la pena de setenta (70) meses de prisión como respon-

sable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2013.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para este caso, precisó que los hechos por los que fue condenada en Colombia la señora García Castaño son diferentes de aquellos por los cuales se pide la extradición, ante lo cual no se evidencia vulneración al principio de la cosa juzgada.

En punto de este tema, la Honorable Corporación señaló:

“7. Causas de improcedencia.

Los artículos 4° y 5° del Convenio de Extradición de Reos consagran como motivos de improcedencia de la extradición: (i) que la persona haya sido juzgada por los mismos hechos en el Estado requerido, (ii) que la acción penal o la pena se hallen prescritas según las leyes de dicho país, y (iii) que la petición se eleve por delitos políticos o conexos con ellos.

En cuanto al primer presupuesto, se tiene que no obra en la actuación ningún elemento de juicio que permita a la Corte inferir que García Castaño esté siendo investigada o haya sido juzgada en Colombia por los sucesos que se le atribuyen en el país reclamante, menos aún que haya sido absuelta por los mismos.

Al respecto, se ofrece necesario precisar que, a instancias de la defensa de la requerida y del Ministerio Público, con el fin de verificar lo pertinente al requisito del non bis in ídem, mediante auto del 10 de junio de 2015 la Corporación, ordenó ‘requerir a los Juzgados Treinta y Nueve (39) Penal Municipal y Cuarenta y Nueve (49) Penal del Circuito con Función de Conocimiento, ambos de la ciudad de Bogotá, y a la Fiscalía General de la Nación - Sistema de Información de Gestión, para que indi[caran] si contra Mayra Alejandra García Castaño cursa proceso penal en nuestro país por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y en caso afirmativo qué hechos abarca. Igualmente, deberán informar el estado actual de los diligenciamientos y expedir copias de las actuaciones relevantes que allí se hayan adelantado’.

En respuesta a dicho pedimento, la Fiscalía General de la Nación, informó que, consultada la base de datos de la institución, se ubicó el Radicado número 110016000017 201314354, en virtud del cual la Fiscalía 117 Seccional de la Unidad de Seguridad Pública, Salud Pública y otros, adelantó investigación contra Mayra Alejandra García Castaño, por la conducta punible de tráfico de estupefacientes, por hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2013. En constancia de lo anterior, remitió copia del acta de audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación, e imposición de medida de aseguramiento llevadas a cabo ante el Juzgado 39 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, y del acta de preacuerdo suscrito por la citada enjuiciada.

Por su parte, respecto del mismo Diligenciamiento número 110016000017 201314354, el Juzgado 49 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá remitió copia de la sentencia adiada 28 de mayo de 2015, por virtud de la cual, previa aprobación del preacuerdo suscrito por Mayra Alejandra García Castaño con la vista fiscal, aquella fue condenada a las penas principales de 70 meses de prisión y multa de 670 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras ser hallada penalmente responsable del injusto de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Lo anterior, por virtud de los siguientes hechos:

(...) el 23 de septiembre de 2013, en torno a las 5:15 de la tarde, el patrullero de servicio en el Muelle Internacional Aeropuerto El Dorado - Sala de Reconciliación, observó una maleta de lona registrada con el Bag Tag 485263 de la aerolínea Airfrance, vuelo AF423, destino París a nombre de Mayra Alejandra García Castaño, la que se perfiló en la BHS, a donde se presentó la mencionada ciudadana y reconoció su equipaje y se le consultó si podía ser revisado manualmente; se encontró ropa íntima femenina y zapatos, de lo (sic) que expelían olor característico, por lo que se hizo la prueba de identificación narcotex, con resultado positivo para cocaína⁴.

*Así las cosas, al confrontar esta sinopsis fáctica, con los sucesos que motivan el pedido de extradición objeto del presente pronunciamiento, **surge inconcuso que los hechos por los cuales García Castaño ya fue juzgada en Colombia y se encuentra privada de la libertad en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá, no guardan relación con los que se le atribuyen ahora por el país reclamante pues, obedecen a conductas punibles con disímiles circunstancias de modo, tiempo y lugar.***

Por tanto, frente a este aspecto, no existe motivo de improcedencia alguno para la extradición solicitada ...”. (Se resalta).

La existencia del mencionado fallo condenatorio proferido en Colombia en contra de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño, por hechos distintos de los que motivan la solicitud de extradición, configura la hipótesis prevista en el artículo 12 de la “Convención de Extradición de Reos”, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 1892, el cual establece:

“Si el individuo reclamado estuviere condenado, acusado o perseguido por crimen o delito cometido en el país donde se refugió, su extradición será diferida hasta que termine la causa criminal o se extinga la pena que se le hubiere impuesto.

No será obstáculo para la extradición la responsabilidad por obligaciones civiles contraídas a favor de particulares, quienes conservarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante la autoridad competente”. (Se resalta).

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno nacional aplazará la entrega de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño, hasta cuando cumpla la pena de setenta (70) meses de prisión que le fue impuesta por el Juzgado 49 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, como responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; o hasta cuando de algún modo cese el motivo de detención en Colombia,

⁴ Cuaderno Corte. Folio 45.

¹ De conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia.

² Como lo disponen los artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (e) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3.5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

³ Postulado que encuentra respaldo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

evento en el cual la autoridad judicial de conocimiento la pondrá a órdenes del Fiscal General de la Nación para hacer efectiva la entrega de esta ciudadana al país requirente, tal como lo establece el artículo 504 de la Ley 906 de 2004.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la “*Convención de Extradición de Reos*”, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 1892, advertirá al Gobierno de España que la ciudadana requerida no podrá ser juzgada por delito distinto del que motivó la extradición, con las salvedades allí establecidas.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

11. Que a la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente como parte cumplida de la eventual condena, el tiempo que permaneció detenida por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente, el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder al Reino de España la extradición de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño, identificada con la cédula de ciudadanía número 1113627963, requerida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro del Procedimiento Abreviado número 93/2013 que se le sigue por un delito contra la Salud Pública, de conformidad con la orden internacional de detención dictada el 4 de noviembre de 2014 y el mandamiento de detención e ingreso en prisión proferido el 2 de febrero de 2015.

Artículo 2°. Diferir o aplazar la entrega de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño, hasta cuando cumpla la pena de setenta (70) meses de prisión que le fue impuesta por el Juzgado 49 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, como responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; o hasta cuando de algún modo cese el motivo de detención en Colombia, evento en el cual la autoridad judicial de conocimiento la pondrá a órdenes del Fiscal General de la Nación para hacer efectiva la entrega de esta ciudadana al país requirente.

Artículo 3°. Ordenar que la entrega de la ciudadana colombiana Mayra Alejandra García Castaño, se lleve a cabo bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que la ciudadana extraditada no podrá ser juzgada por delito distinto del que motivó la extradición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la “*Convención de Extradición de Reos*”, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 1892, con las salvedades allí establecidas.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión a la interesada, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 49 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, **notifíquese** a la ciudadana requerida o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, **comuníquese** al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales mencionadas y a la Fiscalía General de la Nación y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 217 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 004/2015 del 8 de enero de 2015, el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos Arturo Gallego Muñoz, requerido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcoy, de conformidad con el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza, del 20 de noviembre de 2014, dentro del Procedimiento Abreviado número 38/2013, por el delito contra la salud pública en su modalidad de elaboración y tráfico de drogas.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante Resolución del 14 de enero de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Carlos Arturo Gallego Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía número 18616044 y NIE 6694305 de España, la cual se hizo efectiva el 30 de enero de 2015, por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 185/2015 del 27 de abril de 2015, la Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Carlos Arturo Gallego Muñoz.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Carlos Arturo Gallego Muñoz, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0911 del 27 de abril de 2015, conceptuó que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y el Reino de España.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de precisar que se encuentran vigentes los siguientes tratados bilaterales de extradición entre las Partes:

1. La ‘*Convención de Extradición de Reos*’, suscrita en Bogotá D.C., el 23 de julio de 1892.

2. El ‘*Protocolo modificadorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España*’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Carlos Arturo Gallego Muñoz, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio OF115-0011830-OAI-1100 del 5 de mayo de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 30 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Carlos Arturo Gallego Muñoz.

Sobre el particular la honorable Corporación precisó:

“6. Cuestión final.

La Corte considera pertinente, en orden a proteger los derechos fundamentales del requerido, prevenir al Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de Carlos Arturo Gallego Muñoz, advierta al Estado solicitante garantizarle a este la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le llegara a imponer en razón del cargo que motivó la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia.

Así mismo, debe condicionar la entrega de Carlos Arturo Gallego Muñoz a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las garantías, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la pena no trascienda de su persona y que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social. Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que, deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

Por todo lo anterior, conforme lo establecido por el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, al Gobierno nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.

CONCEPTO

*Finalizada la valoración de los presupuestos exigidos en el Convenio de Extradición de 23 de julio de 1892, recogido en la legislación mediante la Ley 35 de 10 de octubre de 1892, y en el Protocolo Modificatorio de 16 de marzo de 1999, aprobado con la Ley 876 de 2004, esta Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia **Conceptúa Favorablemente** la petición de extradición hecha por el Reino de España, respecto del ciudadano colombiano Carlos Arturo Gallego Muñoz identificado con la cédula de ciudadanía número 18616044 expedida en Santa Rosa de Cabal (Rda), para que ejecute la Orden de Prisión Provisional sin fianza, que tiene en su contra y cumpla con el llamado a comparecer en el proceso adelantado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcoy (Alicante España), en donde se le investiga por un delito contra la salud pública, conforme a los cargos por los cuales se le solicita en la Nota Verbal número 185/2015 del 27 de abril de 2015...”*

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Carlos Arturo Gallego Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía número 18616044, y NIE 6694305 de España, requerido por el Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 2 de Alcoy, España, de conformidad con el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza, del 20 de noviembre de 2014, dentro del Procedimiento Abreviado número 38/2013, por el delito contra la salud pública en su modalidad de elaboración y tráfico de drogas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Carlos Arturo Gallego Muñoz no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano requerido no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, con las salvedades allí establecidas.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Carlos Arturo Gallego Muñoz, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que ésta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente como parte cumplida de la condena, el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente, el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Arturo Gallego Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía número 18616044, y NIE 6694305 de España, requerido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 2 de Alcoy, España, de conformidad con el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza, del 20 de noviembre de 2014, dentro del Procedimiento Abreviado número 38/2013, por el delito contra la salud pública en su modalidad de elaboración y tráfico de drogas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Carlos Arturo Gallego Muñoz al Estado requirente, bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las salvedades allí establecidas.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, **notifíquese** al ciudadano requerido, a su representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, **comuníquese** al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 218 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0717 del 28 de abril de 2015, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Eisenhower Galvis Cardona, requerido para comparecer a juicio por delitos de concierto para traficar a los Estados Unidos moneda falsificada de los Estados Unidos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 29 de abril de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Eisenhower Galvis Cardona, identificado con la cédula de ciudadanía número 6104734, quien había sido detenido el 24 de abril de 2015 por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 0945 del 16 de junio de 2015, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Eisenhower Galvis Cardona.

En dicha Nota se informa lo siguiente:

“Eisenhower Galvis Cardona es requerido para comparecer a juicio por delitos de concierto para traficar a los Estados Unidos moneda falsificada de los Estados Unidos. Es el sujeto de la acusación número 14-CR-511, dictada el 20 de enero de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para traficar a los Estados Unidos moneda falsificada de los Estados Unidos, con la intención de estafar, en violación del Título 18, Secciones 371 y 472 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Dos: Causar el envío a los Estados Unidos de moneda falsificada de los Estados Unidos por un total de \$120.000 dólares de los Estados Unidos, con la intención de estafar, y ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Título 18, Secciones 2 y 472 del Código de los Estados Unidos.

(...)

Un auto de detención contra Eisenhower Galvis Cardona por estos cargos fue dictado el 21 de enero de 2015, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Eisenhower Galvis Cardona, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1397 del 17 de junio de 2015, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción al ordenamiento procesal penal colombiano...”

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Eisenhower Galvis Cardona, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI15-0016232-OAI-1100 del 22 de junio de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 30 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Eisenhower Galvis Cardona.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:

“7. Decisión

Los anteriores razonamientos acordes con lo señalado por la representante del Ministerio Público, permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano Eisenhower Galvis Cardona por los cargos atribuidos en la Acusación Formal número 14-CR-511 de 20 de enero de 2015, proferida en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, División del Este.

En este momento, considera la Corte pertinente, en orden a proteger los derechos fundamentales del requerido, prevenir al Gobierno Nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de Galvis Cardona, advierta al Estado solicitante garantizarle a éste la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada.

Así mismo, debe condicionar la entrega de Eisenhower Galvis Cardona a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le concedan el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3, 5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.

CONCEPTO FAVORABLE

*Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, **Conceptúa Favorablemente** a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Eisenhower Galvis Cardona, cuyas notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la Nota Verbal número 0945 de 16 de junio de 2015, suscrita por la Embajada de los Estados Unidos de América, por los cargos Uno y Dos imputados en la Acusación Formal número 14-CR-511 de 20 de enero del presente año, proferida en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, División del Este...”.*

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Eisenhower Galvis Cardona, identificado con la cédula de ciudadanía número 6104734, para que comparezca a juicio por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para traficar a los Estados Unidos moneda falsificada de los Estados Unidos con la intención de estafar; y

Cargo Dos: Causar el envío a los Estados Unidos de moneda falsificada de los Estados Unidos por un total de \$120.000 dólares de los Estados Unidos, con la intención de estafar, y ayuda y facilitación de dicho delito.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 14-CR-511, dictada el 20 de enero de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Eisenhower Galvis Cardona no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano colombiano Eisenhower Galvis Cardona bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que ésta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Eisenhower Galvis Cardona, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.104.734, para que comparezca a juicio por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para traficar a los Estados Unidos moneda falsificada de los Estados Unidos con la intención de estafar; y

Cargo Dos: Causar el envío a los Estados Unidos de moneda falsificada de los Estados Unidos por un total de \$120.000 dólares de los Estados Unidos, con la intención de estafar, y ayuda y facilitación de dicho delito.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 14-CR-511, dictada el 20 de enero de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Eisenhower Galvis Cardona al Estado requirente, bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 219 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 1074 del 30 de septiembre de 2014, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Álvaro Viveros Rendón, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante resolución del 8 de octubre de 2014, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Álvaro Viveros Rendón, identificado con la cédula de ciudadanía número 14890561, la cual

se hizo efectiva el 19 de octubre de 2014 por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2417 del 17 de diciembre de 2014, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Álvaro Viveros Rendón.

En dicha Nota se informa lo siguiente:

“Álvaro Viveros Rendón es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la acusación sustitutiva número 14 CR 153(S-1) (ERK), dictada el 17 de septiembre de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, mediante la cual se le acusa de concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína sería importada a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959(a), 959(c), 960(a)(3), 960(b) (1)(B)(ii) y 963 del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Secciones 3238 y 3551 del Código de los Estados Unidos.

(...)

Un auto de detención contra Álvaro Viveros Rendón por este cargo fue dictado el 17 de septiembre de 2014, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Álvaro Viveros Rendón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2656 del 18 de diciembre de 2014, conceptuó:

“Sobre el particular, es preciso señalar que, se encuentra vigente entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, la ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988¹. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado instrumento internacional disponen lo siguiente:

‘[...]

Artículo 6°
Extradición

4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’ (Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto, ya la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, en los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Álvaro Viveros Rendón, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI14-0029675-0AI-1100 del 18 de diciembre de 2014, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 9 de septiembre de 2015, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Álvaro Viveros Rendón.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:

“6. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.

Ante la eventual determinación positiva del Gobierno nacional, en todo caso respetando la órbita de su competencia como Supremo Director de las relaciones internacionales, la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes condicionamientos al país requirente:

6.1. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la sanción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, pues esas condenas están excluidas del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos de la Constitución Política (artículos 11, 12 y 34).

6.2. Recordar al país solicitante la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano solicitado por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y distintas a las que originaron la solicitud de extradición.

6.3. Para proteger los derechos fundamentales del requerido, el Gobierno nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia en ese país y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en el eventual caso de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o de situaciones similares que conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los delitos por los cuales se autoriza su extradición.

6.4. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos².

¹ Artículo 3° numeral 1 literal a).

² “...es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y

6.5. El Gobierno nacional debe, además, condicionar la entrega de Álvaro Viveros Rendón a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las garantías debidas a su condición de procesado, en particular, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Carta; 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8-1.2(a) (b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

6.6. Finalmente, se recordará al país extranjero, la obligación de sus autoridades de tener como parte cumplida de la pena en caso de condena, el tiempo que Álvaro Viveros Rendón haya permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

EMITE CONCEPTO FAVORABLE

A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Álvaro Viveros Rendón, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal número 2417 del 17 de diciembre de 2014, por los cargos imputados en la Acusación sustitutiva número 14 CR 153 (S-1) (ERK) proferida el 17 de septiembre de 2014 por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York...”.

Mediante pronunciamiento del 30 de septiembre de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró su concepto en el sentido de indicar que la fecha de nacimiento del ciudadano Álvaro Viveros Rendón es 21 de septiembre de 1965 y el número de cédula de ciudadanía es 14890561.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:

“Por tal razón, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10, inciso 5°, y 25 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, la Sala procederá a aclarar el concepto favorable para la extradición de Álvaro Viveros Rendón en el sentido que la fecha de nacimiento del requerido es el 21 de septiembre de 1965 y el número de cédula de ciudadanía es 14890561.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

RESUELVE:

Aclarar el Concepto Favorable de extradición emitido el 9 de septiembre de 2015, respecto de Álvaro Viveros Rendón, que queda en el siguiente sentido:

A folio 10:

‘2. Plena identidad de la persona reclamada en extradición.

El Gobierno de los Estados Unidos informó en su petición que el requerido se llama Álvaro Viveros Rendón, ciudadano colombiano nacido el 21 de septiembre de 1965 en Buga (Valle) identificado con la cédula de ciudadanía número 14890561 de la misma ciudad, datos que corresponden a quien permanece privado de la libertad desde el 19 de octubre de 2014³ con fundamento en Nota Verbal número 2417 del 17 de diciembre de 2014⁴, procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América, información que también se consigna en la orden de captura de fecha 8 de octubre de 2014 proferida por el señor Fiscal General de la Nación⁵. (...)’...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Álvaro Viveros Rendón, identificado con la cédula de ciudadanía número 14890561, para que comparezca a juicio por el cargo de concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína sería importada a los Estados Unidos, mencionado en la acusación sustitutiva número 14 CR 153(S-1) (ERK), dictada el 17 de septiembre de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

en el Código de Procedimiento Penal (artículos 508 a 533 de la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento –si es pasiva–, es imperioso que el Gobierno nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° ibídem.

Los condicionamientos en cuestión tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son ajenos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respeten los derechos y garantías, tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana”.

(Concepto de Extradición del 05/09/2006, rad. núm. 25625).

³ Folios 25 Ibídem.

⁴ Folios 3 a 7 y 11 a 16 (traducción no oficial) carpeta anexa.

⁵ Folios 17 a 19 Carpeta Anexa.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Álvaro Viveros Rendón no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Álvaro Viveros Rendón bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que ésta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Álvaro Viveros Rendón, identificado con la cédula de ciudadanía número 14890561, para que comparezca a juicio por el cargo de concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína sería importada a los Estados Unidos, mencionado en la acusación sustitutiva número 14 CR 153(S-1) (ERK), dictada el 17 de septiembre de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Álvaro Viveros Rendón al Estado requirente, bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2092 DE 2015

(octubre 23)

por medio del cual se reglamenta la Ley 1699 del 27 de diciembre de 2013 sobre beneficios para los Discapacitados, Viudas, Huérfanos o Padres de los miembros de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones y se modifica el Decreto 1070 de 2015.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial, las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1699 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que según el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde al Presidente de la República, ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la eficacia de las leyes.

Que se expidió la Ley 1699 del 27 de diciembre de 2013, “por medio de la cual se establecen unos beneficios para los Discapacitados, Viudas, Huérfanos o Padres de los miembros de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones”.

Que dada la misión constitucional que cumplen los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los artículos 216, 217 y 218 de la Constitución Política, consistente principalmente en defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, así como la vida, creencias y demás derechos y libertades de los ciudadanos para lograr la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, estos soportan cargas públicas inusuales dado el alto riesgo para su integridad física y moral, para su salud y para la propia vida a que están expuestos en el desarrollo de su trabajo.

Que dado este riesgo excepcional, existe un desequilibrio en las cargas públicas y en consecuencia, del Principio a la Igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política para esta población; en este contexto, la Ley 1699 de 2013 adopta una serie de medidas que permiten superar el estado de desigualdad de esta población, con el propósito de avanzar hacia la equidad de todo el conglomerado social como prenda de garantía en un Estado Constitucional y Social de Derecho que materialice las condiciones de equilibrio en un sentido real y efectivo.

Que en razón a lo anterior, el Estado aunaré esfuerzos con diferentes sectores de la sociedad para la consecución del fin último dispuesto en la Ley 1699 de 2013; es decir, equilibrar las cargas y garantizar la real y efectiva igualdad de la población objeto de esta Norma, en fiel y estricto cumplimiento de los valores, principios y postulados constitucionales como son los de un orden social justo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.

Que en la búsqueda de garantizar el cumplimiento del artículo 13 de la Constitución Política, así como del preámbulo y los artículos 1° y 209 de la misma, se hace necesario compensar a la población objeto de la Ley 1699 de 2013 a través de la concesión de beneficios para así garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales, con el fin de hacer efectiva una igualdad material en cumplimiento de los principios del Estado Constitucional y Social de Derecho y de esta forma, lograr mejorar y elevar las condiciones y la calidad de vida de estas personas.

Que conforme a la Constitución Política, la Ley y la Jurisprudencia, se hace clara, expresa y taxativamente necesaria y obligatoria la reglamentación de la Ley 1699 de 2013, para efectos de su adecuada, armoniosa, eficaz y eficiente ejecución.

DECRETA:

Artículo 1°. El libro 2, Parte 2 del Decreto 1070 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, tendrá un nuevo Título 7, con el siguiente texto:

TÍTULO 7

por medio del cual se reglamenta la ley 1699 del 27 de diciembre de 2013 sobre beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 2.2.7.1.1. Acreditación de la calidad de beneficiario. La calidad de beneficiario de la Ley 1699 de 2013 será acreditada por medio de un carnet, el cual será solicitado por los beneficiarios y entregado sin costo alguno por el Ministerio de Defensa Nacional. En fiel y estricto cumplimiento del artículo 3° de la Ley 1699 de 2013, el Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional y el Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional determinaron el carnet como documento para la acreditación de la población beneficiaria.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos de la Ley 1699 de 2013 la presentación del carnet acreditará la calidad de beneficiario.

Parágrafo 2°. Los hijos de los miembros de la Fuerza Pública fallecidos, según el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1699 de 2013, perderán su calidad de beneficiarios al cumplir los veinticinco (25) años de edad; con excepción del beneficio en educación establecido en el artículo 4° de la citada ley; condicionado lo anterior a que se les haya otorgado el crédito educativo previo al cumplimiento de los veinticinco (25) años de edad, y que se encuentren estudiando el programa por el cual les fue otorgado el crédito.

Parágrafo 3°. En caso de cualquier uso o destino indebido del documento de acreditación, o su utilización por cualquier persona diferente a su titular, dará lugar a la cancelación de la acreditación como beneficiario de la Ley 1699 de 2013.

CAPÍTULO II

Beneficios en educación

Artículo 2.2.7.2.1. Fondo en administración. Se creará un Fondo en Administración mediante un convenio, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Icetex, cuyo fin principal será el otorgamiento de créditos educativos para financiar estudios de pregrado o de educación para el trabajo y desarrollo humano, –única y exclusivamente– para las personas establecidas como beneficiarias en el artículo 2° de la Ley 1699 de 2013; y que se encuentren en cualquiera de los estratos socioeconómicos definidos como uno (1), dos (2) y tres (3) conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de la citada ley, el presente Decreto y demás documentos que hagan parte del Fondo.

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional y el Icetex conformarán una Junta Administradora en el convenio y estará conformado por dos (2) representantes designados por el Ministerio y un (1) representante designado por el Icetex con el fin de realizar actividades de toma de decisiones, emisión de directrices y control para garantizar el debido manejo de

la administración y destinación de los recursos por parte del Ministerio al Fondo durante la vigencia del convenio.

El Ministerio de Educación Nacional será invitado permanente a las sesiones que adelante la Junta Administradora de que trata el presente artículo.

Artículo 2.2.7.2.2. Convocatoria. Previo al proceso de selección para la asignación de los créditos, se realizará la respectiva convocatoria la cual estará a cargo del Icetex de acuerdo con los términos señalados en el reglamento operativo del fondo. En este sentido, la publicación de la convocatoria se hará a través de los medios de comunicación que disponga la Junta Administradora del Fondo.

Parágrafo. Las personas que se presenten a la convocatoria y no sean seleccionadas, podrán participar nuevamente en los futuros procesos de selección que se adelanten.

Artículo 2.2.7.2.3. Crédito educativo. El crédito educativo será condonable en un noventa por ciento (90%) y estará compuesto por los siguientes rubros: **I.** Matrícula por período académico a cursar; **II.** Apoyo de sostenimiento semestral, valor que se girará directamente al beneficiario del crédito; **III.** Derechos de grado, en caso que aplique; **IV.** El valor de la prima de garantía para amparar los riesgos de muerte, invalidez física o mental, total y permanente del beneficiario.

Parágrafo 1°. La Junta Administradora del Fondo determinará en cada convocatoria el monto máximo de la matrícula a ser reconocido por cada beneficiario.

Parágrafo 2°. Por cada beneficiario solo se otorgará un crédito, en virtud del Fondo.

Parágrafo 3°. El Fondo cubrirá la totalidad del programa académico, incluso los períodos adicionales, de ser necesario, que en todo caso no podrán superar el equivalente a un (1) año.

Parágrafo 4°. El beneficiario de la Ley 1699 de 2013, al cual se le haya adjudicado un crédito mediante el Fondo en Administración creado entre el Ministerio de Defensa y el Icetex, tendrá derecho a acceder a los cuatro rubros estipulados en el artículo 2.2.7.2.3 del presente decreto.

Artículo 2.2.7.2.4. Número de créditos educativos a otorgar por cada anualidad y adjudicación. El número de créditos educativos a otorgar por cada período académico estará sujeto a la disponibilidad de los recursos asignados al Fondo en cada anualidad. En este sentido, el proceso de adjudicación de los créditos estará a cargo de la Junta Administradora del Fondo, a partir de la selección y calificación realizada por el Icetex entre los aspirantes con mayores puntajes. Lo anterior hasta agotar el presupuesto disponible, protegiendo siempre la sostenibilidad de los cohortes y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el Fondo.

Artículo 2.2.7.2.5. Requisitos mínimos de los aspirantes a los créditos educativos. Los aspirantes a los créditos educativos deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

1. Estar acreditados como beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, mediante el carnet que expida el Ministerio de Defensa Nacional.
2. Los beneficiarios deberán pertenecer a alguno de los estratos socioeconómicos definidos como uno (1), dos (2) o tres (3).
3. En caso de pregrado, estar admitidos o matriculados en programas académicos de pregrado que cuenten con Registro Calificado vigente o programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano registrados por las entidades certificadas en educación.
4. Tener título de bachiller, en el caso de aspirantes para estudios de pregrado en educación superior.
5. Cumplir con el grado mínimo de estudios según el programa académico al que desee ingresar el aspirante, en el caso de educación para el trabajo y desarrollo humano.
6. Cumplir con los requisitos y aprobar los exámenes de admisión exigidos por la respectiva institución educativa.
7. Inscribirse a través de la página web del Icetex dentro de los plazos, términos y condiciones señalados.

Parágrafo. Los estudiantes que deseen acceder al Fondo y que ya hayan iniciado un programa académico, deben haber aprobado el período académico inmediatamente anterior.

Artículo 2.2.7.2.6. Criterios de selección y calificación. Todo el proceso de selección y calificación se llevará a cabo por el Icetex, a partir de las solicitudes recibidas y de acuerdo a los criterios que la Junta Administradora defina y señale en cada convocatoria. Lo anterior en cumplimiento con los siguientes criterios de selección que estarán estipulados en el reglamento operativo del Fondo tales como: **I.** Mérito académico. **II.** Nivel de formación académica. **III.** Estrato socioeconómico; y, **IV.** Carácter de la Institución Educativa.

Parágrafo. Tratándose de aspirantes a cursar programas de pregrado, el mérito académico será evaluado por el Icetex teniendo como base los resultados que hayan obtenido estas personas en el examen de Estado de la Educación Media ICFES Saber 11.

Artículo 2.2.7.2.7. Legalización del crédito. Adjudicados los créditos por la Junta Administradora del Fondo, los beneficiarios deberán legalizar su crédito a través del Icetex.

Parágrafo. Los documentos exigidos para la legalización del crédito, se encontrarán señalados expresamente en el reglamento operativo del Fondo.

Artículo 2.2.7.2.8. Duración del crédito educativo. El crédito tendrá una duración equivalente a la totalidad del programa académico, incluso de los períodos adicionales si fuesen necesarios, que en todo caso no podrán superar un (1) año.

Artículo 2.2.7.2.9. Programas autorizados. Sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en este Decreto, solo serán elegibles los aspirantes a cursar programas académicos de pregrado que cuenten con Registro Calificado vigente o programas de educación para el trabajo y desarrollo humano registrados por las entidades certificadas en educación.

Artículo 2.2.7.2.10. Renovación del crédito educativo ante el Icetex. Para efectos de la renovación de los créditos para un nuevo período académico, el beneficiario tendrá que actualizar la información y los datos que le sean solicitados dentro de los plazos establecidos.

Artículo 2.2.7.2.11. Desembolso de los créditos educativos. El Icetex realizará directamente a favor de las instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano el desembolso de los créditos por concepto de matrícula y derechos de grado (en caso que aplique al programa). Así mismo, girará directamente al beneficiario el valor por concepto de apoyo de sostenimiento, mediante el mecanismo de desembolso que establezca el Icetex.

Artículo 2.2.7.2.12. Condonación de los créditos educativos. Los beneficiarios de los créditos educativos podrán solicitar una vez se gradúen del respectivo programa académico, la condonación de estos créditos por el noventa por ciento (90%) de su valor total; cumpliendo –previamente– y a cabalidad con los siguientes requisitos: **I.** Carta solicitando la condonación de los créditos; **II.** Copia del título académico obtenido y del acta de grado o sus equivalentes en caso de ser programas de educación para el trabajo y desarrollo humano.

CAPÍTULO III

Beneficios en los productos básicos de primera necesidad

Artículo 2.2.7.3.1. Descuentos en grandes almacenes de cadena o grandes superficies. Los grandes almacenes de cadena o grandes superficies y sus respectivas filiales, subsidiarias y sucursales a nivel nacional otorgarán descuentos en los productos básicos de primera necesidad a la población beneficiaria de la Ley 1699 de 2013, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 2° y 5° de la ley.

Parágrafo. Los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013 al momento de hacer el pago efectivo de estos productos, deberán hacerlo personalmente y presentar el carnet junto con su documento de identidad.

Artículo 2.2.7.3.2. Convenios u otras modalidades de vinculación jurídica con los grandes almacenes de cadena o grandes superficies. El Ministerio de Defensa Nacional suscribirá convenios u otras modalidades de vinculación jurídica con los grandes almacenes de cadena o grandes superficies para otorgar los descuentos en los productos básicos de primera necesidad; en ellos se contendrán e incorporarán los parámetros bajo los cuales se hará eficaz este descuento, además de las condiciones y restricciones establecidas en el artículo 5° de la Ley 1699 de 2013.

Parágrafo 1°. La obligación de otorgar este beneficio, es decir los descuentos en los productos básicos de primera necesidad, se hará eficaz para cada gran almacén de cadena o grande superficie a partir del sexto (6) mes contado desde del momento en que se suscriba el respectivo convenio u otra modalidad de vinculación jurídica con el Ministerio de Defensa Nacional, en los términos, condiciones y restricciones que se acuerden.

Parágrafo 2°. El porcentaje de los descuentos en los productos básicos de primera necesidad otorgados por los grandes almacenes de cadena o grandes superficies se estipulará en cada uno de los convenios u otras modalidades de vinculación jurídica que se suscriban entre los anteriores y el Ministerio de Defensa Nacional. No será obligatorio el mismo porcentaje de descuento en todos los convenios ni en todos los productos.

Artículo 2.2.7.3.3. Uso no autorizado del carnet. No está autorizado el uso del carnet de beneficiario Ley 1699 de 2013 por quien no sea titular del mismo, ni su empleo para la compra de los productos básicos de primera necesidad con fines distintos al consumo doméstico tales como, pero sin limitarse a: comercialización y/o reventa; y en todo caso propósitos comerciales.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de la cancelación de la acreditación como beneficiario de la Ley 1699 de 2013.

CAPÍTULO IV

Beneficios en exhibición cinematográfica en salas de cine

Artículo 2.2.7.4.1. Descuentos en exhibiciones cinematográficas en salas de cine. Los exhibidores cinematográficos otorgarán descuentos del cincuenta por ciento (50%) en el valor de la boletería a los beneficiarios acreditados de la Ley 1699 de 2013, de acuerdo con las condiciones y restricciones que se señalan en el presente Decreto, conforme al artículo 7° de la misma ley.

Artículo 2.2.7.4.2. Términos, condiciones y restricciones para otorgar el descuento en exhibiciones cinematográficas en salas de cine. Para que el beneficio del artículo 7° de la Ley 1699 de 2013 sea eficaz, los beneficiarios de la Norma deberán comprar el boleto de entrada personalmente en las taquillas de cada sala de cine y presentar al momento de efectuar el pago del boleto el carnet de beneficiario Ley 1699 de 2013, junto con su documento de identidad.

Parágrafo 1°. Lo anterior sin perjuicio de los términos, condiciones y restricciones propias de cada uno de los exhibidores cinematográficos en cada una de las salas de cine; esto además, sujeto a la disponibilidad de ubicaciones en cada una de las salas por función.

Parágrafo 2°. El beneficiario al momento de realizar la compra en la taquilla del exhibidor cinematográfico solo podrá adquirir una (1) boleta por función. Por ende, no podrá utilizarse este beneficio más de una (1) vez por día frente a la misma función y en diferentes operadores cinematográficos.

Parágrafo 3°. Este descuento aplica única y exclusivamente para exhibiciones cinematográficas en la localidad general de cada una de las salas de cine y en formatos 2D y 3D. Quedan excluidas de este descuento las tecnologías de las cuales los exhibidores cinematográficos no son propietarios sino licenciarios.

Parágrafo 4°. Este descuento solo aplica para el boleto del beneficiario en la tarifa plena del día de la función y la localidad señalada en este artículo, por lo cual no resulta acumulable y se excluye con otro tipo de beneficios, descuentos, precios y promociones; bien sean estos regulares y/o especiales.

CAPÍTULO V

Tarifa diferencial en transporte aéreo

Artículo 2.2.7.5.1. Tarifa diferencial en transporte aéreo. Las empresas nacionales de transporte aéreo concederán a los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013 un descuento

del diez por ciento (10%) en la tarifa más económica en cualquiera de las rutas nacionales, sin incluir impuestos.

Parágrafo 1°. El beneficiario que solicite este descuento, sin perjuicio de las condiciones y restricciones que imponga cada aerolínea, tendrá que acreditar la calidad de beneficiario presentando su carnet junto con su documento de identidad; además de ser él quien personalmente compre el tiquete directamente en las oficinas de venta de cada empresa.

Parágrafo 2°. Los tiquetes tendrán que ser adquiridos personalmente por el beneficiario y a su nombre, además no podrá cederlos ni transferirlos.

Parágrafo 3°. Las aerolíneas dispondrán y establecerán los mecanismos, procesos y procedimientos de control y verificación que consideren necesarios para garantizar que el beneficio se otorgue única y exclusivamente a los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013.

Parágrafo 4°. La calidad de beneficiario no exime en ningún caso a la persona de cumplir con las normas y obligaciones que regulan este tipo de contrato de transporte ni la reglamentación en materia aeronáutica. Es decir que los términos, condiciones y restricciones serán exactamente las mismas que estén vigentes para todos los pasajeros; las cuales incluyen, el no reembolso del valor de los tiquetes cuando a ello hubiere lugar, pago de las penalidades por cambio de fechas o pérdidas del vuelo, el pago de los impuestos sobre el valor de la tarifa, entre otros.

Artículo 2.2.7.5.2. Tarifa más económica. Entiéndase por tarifa más económica para la aplicación del presente Decreto, la que se encuentre disponible al momento de hacer la compra o la reserva conforme la fecha y hora requerida por el beneficiario. Si las condiciones de la tarifa más económica, considerando lo previsto anteriormente exige la compra efectiva del tiquete en un periodo de tiempo específico, el beneficiario tendrá que hacerlo de tal forma.

Parágrafo. El descuento aplicará únicamente sobre la tarifa más económica aérea básica publicada o disponible al momento de la reserva o la compra, es decir, no se hace efectivo al sobrecargo por combustible, tasas aeroportuarias, tarifa administrativa ni sobre los impuestos que le sean aplicables.

CAPÍTULO VI

Tarifa diferencial en telefonía e internet fija y móvil, y televisión por cable

Artículo 2.2.7.6.1. Tarifa diferencial en telefonía fija. Conforme al numeral primero del artículo 9° de la Ley 1699 de 2013, los beneficiarios tendrán derecho a tarifas diferenciales con descuentos del quince por ciento (15%), única y exclusivamente en una sola línea telefónica fija por núcleo familiar; la cual tendrá que ser solicitada personalmente por el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o por alguno de los integrantes del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido, quien deberá estar acreditado y al momento de la solicitud presentará su carnet junto con su documento de identidad.

Artículo 2.2.7.6.2. Tarifa diferencial en telefonía móvil celular. Conforme al numeral segundo del artículo 9° de la Ley 1699 de 2013, los beneficiarios tendrán derecho a tarifas diferenciales con descuentos del quince por ciento (15%), única y exclusivamente en una sola línea de telefonía móvil celular por núcleo familiar; la cual tendrá que ser solicitada personalmente por el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o por alguno de los integrantes del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido quien deberá estar acreditado y al momento de su solicitud presentará su carnet, junto con su documento de identidad.

Parágrafo. Entiéndase que el beneficio de la tarifa diferencial con descuento no aplica en ningún caso y bajo ninguna condición para la compra de equipos terminales móviles.

Artículo 2.2.7.6.3. Tarifa diferencial en internet fijo o móvil. Conforme al numeral tercero del artículo 9° de la Ley 1699 de 2013, los beneficiarios tendrán derecho a tarifas diferenciales con descuentos del quince por ciento (15%), única y exclusivamente en un solo plan de internet fijo o móvil por núcleo familiar; el cual tendrá que ser solicitado personalmente por el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o por alguno de los integrantes del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido quien deberá estar acreditado y al momento de su solicitud presentará su carnet, junto con su documento de identidad.

Artículo 2.2.7.6.4. Tarifa diferencial en televisión por cable. Conforme al numeral cuarto del artículo 9° de la Ley 1699 de 2013, los beneficiarios tendrán derecho a tarifas diferenciales con descuentos del quince por ciento (15%), única y exclusivamente en un solo plan de televisión por cable por núcleo familiar; el cual tendrá que ser solicitado personalmente por el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o por alguno de los integrantes del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido quien deberá estar acreditado y al momento de su solicitud presentará su carnet, junto con su documento de identidad.

Artículo 2.2.7.6.5. De los planes. Las tarifas diferenciales con descuentos del quince por ciento (15%) aplican única y exclusivamente, para nuevos planes que se contraten por el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o por alguno de los integrantes del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido; es decir que este beneficio no es eficaz para los planes contratados con anterioridad.

Artículo 2.2.7.6.6. Irretroactividad de la tarifa diferencial con descuentos. La tarifa diferencial con descuentos del quince por ciento (15%) en telefonía fija y móvil celular e internet fijo y móvil, y televisión por cable no es retroactiva. Entiéndase que este solo se aplicará hacia futuro, es decir para el nuevo plan que contrate el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o alguno de los integrantes del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido y se hará efectivo a partir del segundo (2) mes de facturación.

Artículo 2.2.7.6.7. Normas, regulaciones, condiciones y restricciones del servicio público de telefonía fija y móvil celular e internet fija y móvil y televisión por cable. El miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o alguno de los integrantes del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido que solicite el beneficio del artículo 9° de la Ley 1699 de 2013, estará sujeto y tendrá que cumplir en igualdad de condiciones como cualquier otro consumidor con la normatividad vigente que regula lo concerniente a

la prestación de este tipo de servicios públicos y sus contratos; sin perjuicio además de las condiciones y restricciones de cada operador del servicio que otorgue el beneficio.

Parágrafo 1°. Entiéndase que el beneficiario acreditado de la Ley 1699 de 2013 y suscriptor de alguno de los servicios a que se refiere este capítulo, no exime ni exonera al miembro de la Fuerza Pública con discapacidad ni al integrante del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido de cumplir con las obligaciones propias de estos contratos, como son entre otros, el pago oportuno de la respectiva factura y las demás obligaciones que estén incluidas en estos.

Parágrafo 2°. No es viable la acumulación o el uso del beneficio en más de un plan de la misma especie, bien sea con el mismo operador o en algún otro, es decir que, el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o el integrante del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido solo tendrá derecho a un descuento en cada uno de los planes de los servicios públicos relacionados en la Ley 1699 de 2013 y con un solo operador.

Parágrafo 3°. De llegarse a presentar el uso del beneficio en más de un plan de la misma especie, bien sea con el mismo operador o con algún otro por el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o el integrante del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido, le será cancelada la acreditación como beneficiario de la Ley 1699 de 2013; y además, las suscripciones por el operador o los operadores con los cuales contrató el servicio respectivo.

Artículo 2.2.7.6.8. Consulta de beneficiarios. Los operadores del servicio público de telefonía fija y móvil celular e internet fija y móvil y televisión por cable, al momento de recibir una solicitud para contratar un nuevo plan con tarifa diferencial con descuento en virtud de este beneficio, podrán consultar y verificar por los medios que defina el Ministerio de Defensa Nacional si el beneficiario de la Ley 1699 de 2013, cumple con las condiciones para recibir y mantener el beneficio.

CAPÍTULO VII

Operadores de hotelería

Artículo 2.2.7.7.1. Tarifas diferenciales en baja temporada, con descuentos del diez por ciento (10%) del valor de la tarifa rack. Conforme al artículo 10 de la Ley 1699 de 2013, y específicamente su numeral tercero, los descuentos otorgados por las empresas cuyo objeto social sea la actividad hotelera solo se aplicarán en el área o período donde estas se encuentren en baja ocupación o “baja temporada” y sobre el valor de la tarifa rack.

Parágrafo 1°. El operador hotelero o quien haga sus veces informará a los beneficiarios de esta ley al momento de la reserva los períodos o fechas de baja ocupación o “baja temporada”, de acuerdo a su ubicación geográfica y área comercial de influencia. Adicionalmente, para obtener el descuento el beneficiario deberá:

1. Registrarse en el respectivo hotel o establecimiento de comercio que haga sus veces y solicitar el descuento personalmente al momento de cancelar su factura.
2. Presentar al momento de cancelar su factura en el hotel o establecimiento de comercio que haga sus veces, el carnet junto con su documento de identidad.

Parágrafo 2°. El beneficiario que solicite el descuento está sujeto a las normas, regulaciones, términos, condiciones y restricciones vigentes propias del sector hotelero y del presente Decreto.

Parágrafo 3°. De manera voluntaria, bajo su única y exclusiva responsabilidad los operadores hoteleros podrán otorgar cualquier otro tipo de descuentos o beneficios en sus servicios a los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013. En dicho caso, tendrán plena y total autonomía para establecer los términos, condiciones y restricciones de los mismos.

Artículo 2.2.7.7.2. Baja ocupación o “baja temporada”. Para efectos del presente Decreto entiéndase por baja ocupación o “baja temporada”, las épocas de un año en que el movimiento turístico decae a la mínima proporción en determinado lugar de destino.

Artículo 2.2.7.7.3. Tarifa rack. Entiéndase por tarifa rack: la tarifa más alta de alojamiento sin “otros” descuentos ofrecidos por el operador hotelero. La anterior se basa en la categoría de la habitación, tipo de cama y ocupación.

CAPÍTULO VIII

Sitios turísticos

Artículo 2.2.7.8.1. Del ingreso a parques naturales administrados por el Estado o por particulares. La tarifa diferencial en baja temporada que otorga el descuento del treinta por ciento (30%) sobre el valor de las tarifas de ingreso a sitios de interés turísticos de acceso permitido a los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, se aplicará también al ingreso a las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia que cuenten con destinación, infraestructura y vocación ecoturística; según, lo establecido en las disposiciones previstas por Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Parágrafo 1°. Los beneficiarios tendrán que acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente que en materia ambiental y ecoturística regula lo relacionado con las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Así mismo, se someterán al plan de manejo del área protegida que visiten, en cuanto a las actividades ecoturísticas permitidas, los horarios, los accesos y los requisitos de ingreso, entre otros, y a las recomendaciones que se realicen por parte del personal encargado de la administración y logística del lugar.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios que soliciten el descuento deberán acreditar la calidad de beneficiarios a través del carnet, el cual presentarán personalmente junto con su documento de identidad al momento de cancelar el valor de la entrada.

Parágrafo 3°. El riesgo que pueda presentarse durante la permanencia en el área protegida será asumido por el visitante y no compromete la responsabilidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia ni del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 2.2.7.8.2. Sitio turístico. Para efectos del presente decreto entiéndase por “sitio turístico”, el espacio, lugar o zona distinta al entorno habitual de la persona, con fines entre otros, de convenciones, culturales, eventos, negocios, ocio y salud.

CAPÍTULO IX
Otros beneficios

Artículo 2.2.7.9.1. Entrada gratuita. Para que los beneficiarios puedan ingresar de manera gratuita a los establecimientos a los que hace mención el artículo 12 de la Ley 1699 de 2013, como son, museos, bienes de interés cultural y centros culturales de la Nación, de los Distritos, Municipios y otros de naturaleza privada, deberán presentar personalmente el carnet que los acredita como beneficiarios junto con su documento de identidad.

Artículo 2.2.7.9.2. Ventanilla preferencial. Los beneficiarios –única y exclusivamente– en condición de discapacidad, es decir, los que señala expresa y taxativamente el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1699 de 2013 al acercarse a las ventanillas de atención al ciudadano de las entidades que presten servicios públicos, podrán utilizar bien sea una nueva ventanilla que estas dispongan para ellos, de ser el caso; o las ya existentes y que son de uso preferencial para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad (o adultos mayores), en general.

CAPÍTULO X
Otras disposiciones

Artículo 2.2.7.10.1. Plazo para la implementación. Para la implementación del presente Decreto, con excepción del Capítulo III. Beneficios en los productos básicos de primera necesidad, se contará con un plazo no superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha en que finalice la primera sesión de carnetización por parte del Ministerio de Defensa Nacional.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en cada uno de los convenios u otra modalidad de vinculación jurídica que se suscriban entre el Ministerio de Defensa Nacional y los grandes almacenes de cadena o grandes superficies.

Artículo 2.2.7.10.2. Estructuración, consolidación suministro y actualización de la base de datos de los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013. El Ministerio de Defensa Nacional será el encargado de administrar y disponer de la base de datos de la población beneficiaria acreditada de la Ley 1699 de 2013.

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional será el encargado de mantener actualizado el registro de los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, así como de cancelar la acreditación de estos, en caso de verificar el uso indebido del carnet.

Artículo 2.2.7.10.3. Seguimiento. El Ministerio de Defensa Nacional presentará ante el Congreso de la República un informe anual donde se indicarán los avances en materia de beneficios a la población objeto de la Ley 1699 de 2013. Por tal razón, las entidades públicas y privadas, así como los establecimientos de comercio relacionados y quienes otorgarán tales beneficios deberán enviar en el mes de octubre de cada año a partir de la suscripción del presente Decreto, un documento donde informen las estadísticas y situaciones especiales relacionadas con los beneficios otorgados.

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional acordará con cada una de las entidades públicas y privadas, así como con los establecimientos de comercio los términos y condiciones del informe del cual trata este artículo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Defensa Nacional,

Luis Carlos Villegas Echeverri.

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

Cecilia Álvarez-Correa.

La Ministra de Educación Nacional,

Gina Parody D'Eechona.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Gabriel Vallejo López.

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

David Luna Sánchez.

La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.

La Ministra de Cultura

Mariana Garcés Córdoba.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 9536 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades legales, en especial de las que le confiere el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, Decreto número 4891 de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a Libia Mosquera Viveros, identificada con la cédula de ciudadanía número 31388436, en el empleo de Libre Nombramiento y Remoción, Asesor del Sector Defensa, Código 2-2. Grado 32, de la Planta Estructural de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Despacho del Secretario de Gabinete, por compensación de los requisitos para el empleo con fundamento en los factores de experiencia sobresaliente necesarios para el ejercicio de funciones relacionadas con defensa, seguridad o confidencialidad de que trata el artículo 18 del Decreto-ley 092 de 2007, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.

El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9537 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades legales, en especial de las que le confiere el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, Decreto número 4891 de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a Catalina Puerta Hoyos, identificada con la cédula de ciudadanía número 52850255, en el empleo de Libre Nombramiento y Remoción, Director del Sector Defensa, Código 1-3, Grado 18, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional -Unidad de Gestión General - Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, por haber reunido por equivalencia los requisitos para el empleo, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.

El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9539 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades legales, en especial de las que le confiere el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, Decreto número 4891 de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a Johanna Maryery Moreno Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía número 52424254, en el empleo de Libre Nombramiento y Remoción, Asesor del Sector Defensa, Código 2-2, Grado 14, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección de Estudios Estratégicos, por haber reunido los requisitos para el empleo, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.

El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9541 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades legales, en especial de las que le confiere el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, Decreto número 4891 de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a Alejandro Barrera Castro, identificado con la cédula de ciudadanía número 1090398564, en el empleo de Libre Nombramiento y Remoción, Asesor del Sector

Defensa, Código 2-2, Grado 10, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección de Estudios Estratégicos, por haber reunido los requisitos para el empleo, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9542 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Diego Esteban Eslava Avendaño, identificado con cédula de ciudadanía número 1032439427, en el empleo Profesional de Defensa, Código 3-1, Grado 6, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección de Estudios Estratégicos, por haber reunido los requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9544 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Diana Catalina Calderón Millán, identificada con cédula de ciudadanía número 1020719460, en el empleo Profesional de Defensa, Código 3-1, Grado 16, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección de Gestión Empresarial, por haber reunido por equivalencia los requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9546 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a María Camila Pineda Fonrodona, identificada con cédula de ciudadanía número 53910080, en el empleo Profesional de Defensa, Código 3-1, Grado 14, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección de Gestión Empresarial, por haber reunido los requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9548 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Juliana Forero Sanguino, identificada con cédula de ciudadanía número 52693834, en el empleo Profesional de Defensa, Código 3-1, Grado 12, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección de Gestión Empresarial, por haber reunido los requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9550 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Mauricio Garzón Caballero, identificado con cédula de ciudadanía número 80870758, en el empleo Profesional de Defensa, Código 3-1, Grado 10, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección de Gestión Empresarial, por haber reunido los requisitos, para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9551 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Johan Fernando Aldana Cifuentes, identificado con cédula de ciudadanía número 1032373557, en el empleo Profesional de Defensa, Código 3-1, Grado 6, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección de Estudios Estratégicos, por haber reunido por equivalencia los requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.

El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9552 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Javier Mauricio Alfonso Ávila, identificado con cédula de ciudadanía número 1014210071, en el empleo Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa, Código 5-1, Grado 14, de la planta global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Obispado Castrense, por haber reunido los requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.

El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9566 DE 2015

(octubre 22)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Martha Cecilia Beltrán Rincón, identificada con cédula de ciudadanía número 52363691, en el empleo Profesional de Defensa, Código 3-1, Grado 1, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Obispado castrense, por haber reunido los requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.

El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.

(C. F.).

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2089 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se modifica el Decreto 3045 de 2013.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente, las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en los artículos 154 y 230 parágrafo 1° de la Ley 100 de 1993 y en desarrollo del artículo 178 numeral 3 de la Ley 100 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 02 de 2009 dispone que la atención en la salud es un servicio público a cargo del Estado y se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Que corresponde al Estado garantizar el acceso al servicio de salud de la población colombiana, para lo cual dispone de las facultades de intervención orientadas, entre otros, a preservar la observancia de los principios constitucionales y legales que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y a asegurar su carácter obligatorio.

Que de conformidad con el principio de continuidad consagrado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, “las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas”.

Que el Decreto 3045 de 2013 establece unas medidas para garantizar la continuidad en el aseguramiento, las cuales van dirigidas a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), cualquiera sea su naturaleza jurídica, cuando dichas entidades se retiren o liquiden voluntariamente, ocurra la revocatoria de la autorización de funcionamiento del régimen contributivo o del certificado de habilitación para el régimen subsidiado o sean sujeto de intervención forzosa administrativa para liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que en aplicación de la precitada norma, se ha evidenciado la necesidad de precisar algunas de las responsabilidades de los agentes que participan en el procedimiento general de asignación de afiliados, así como la necesidad de contar con un mecanismo adicional que permita el traslado masivo de afiliados, cuando por las características y la participación en el aseguramiento de una Entidad Promotora de Salud, se configure una situación de riesgo sistémico para los afiliados al SGSSS.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Adición del artículo 3A al Decreto 3045 de 2013.* Adiciónese el artículo 3A al Decreto 3045 de 2013, así:

“**Artículo 3A. Mecanismo de asignación especial de afiliados.** En aquellos casos de liquidación, de revocatoria de la autorización de funcionamiento del Régimen Contributivo o del certificado de habilitación para el Régimen Subsidiado, de retiro voluntario o intervención forzosa administrativa para liquidar, en los cuales la población afiliada a la respectiva EPS supere el cuatro por ciento (4%) de la población total afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Superintendencia Nacional de Salud podrá aprobar la asignación especial de toda la población o parte de ella, a una o varias EPS receptoras habilitadas en el respectivo departamento. Todo lo anterior deberá producirse previa solicitud y presentación del plan de asignación especial por parte del representante legal o el liquidador de la EPS interesada en realizar la asignación especial, al cual se anexará la comunicación de aceptación firmada por el representante legal de cada una de las EPS que se proponen como receptoras.

Para la aprobación del plan especial de asignación, la Superintendencia Nacional de Salud deberá considerar la menor afectación en la prestación de los servicios y la viabilidad financiera del mismo.

Una vez aprobado el plan especial de asignación por la Superintendencia Nacional de Salud y distribuida y asignada la población de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, deberán aplicarse las demás reglas contenidas en el presente decreto.

Parágrafo 1°. En caso de que la Superintendencia Nacional de Salud no apruebe el plan especial de asignación de afiliados, la distribución deberá surtirse de conformidad con las reglas generales del presente decreto.

Parágrafo 2°. El plan especial de asignación incluirá el traslado de los afiliados en movilidad, para lo cual su asignación se realizará a las mismas Entidades Promotoras de Salud receptoras, sin importar el régimen de la entidad que se retira o liquida.

Parágrafo 3°. En aquellos casos en que por la asignación de afiliados de que trata el presente artículo una EPS reciba una población de afiliados igual o superior al dos por ciento (2%) del total de población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la misma podrá presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud el plan de ajuste de que trata el parágrafo 3° del artículo 9° del Decreto 2702 de 2014, el cual podrá incluir la sumatoria del defecto del ente receptor antes del traslado, con el que surja como consecuencia de dicho traslado y diferir la capitalización de las pérdidas del ejercicio que pudieren resultar en cualquier periodo.

Artículo 2°. *Modificación del artículo 5° del Decreto 3045 de 2013.* El artículo 5° del Decreto 3045 de 2013, quedará así:

“**Artículo 5°. Obligaciones de las Entidades Promotoras de Salud que reciben los afiliados.** Además de las obligaciones propias de su naturaleza, las Entidades Promotoras de Salud que reciban los afiliados a través del mecanismo de afiliación previsto en el presente decreto deberán:

1. Informar a los afiliados, que han sido asignados a dicha Entidad Promotora de Salud, a través de su página web y de un medio de comunicación de amplia circulación en los lugares en que cumple funciones de aseguramiento, suministrando los números telefónicos, las direcciones electrónicas, el sitio web y la ubicación física donde pueden contactarse; la fecha a partir de la cual la entidad se hará responsable de la prestación de los servicios de salud y el derecho que le asiste al usuario de hacer uso de la libre elección después de 90 días contados a partir de tal fecha.

2. Informar a empleadores, entidades públicas o privadas pagadoras de pensiones, a través de un medio de comunicación de amplia circulación en los lugares en que asumirá las funciones de aseguramiento, los datos de los sitios físicos, electrónicos y números telefónicos de contacto a través de los cuales ofrecerá atención e información sobre los afiliados asignados.

3. Disponer a través de su página web, para consulta general el listado de afiliados asignados.

Artículo 3°. Modificación del artículo 6° del Decreto 3045 de 2013. El artículo 6° del Decreto 3045 de 2013, quedará así:

“**Artículo 6°.** *Obligaciones de las Entidades Promotoras de Salud que asignen a sus afiliados.* El liquidador o el representante legal de las Entidades Promotoras de Salud que asignan a sus afiliados a través del mecanismo de afiliación previsto en el presente decreto deberán:

1. Informar a los afiliados que han sido asignados a otra Entidad Promotora de Salud, a través de su página web y de un medio de comunicación de amplia circulación en los lugares en que cumple funciones de aseguramiento.
2. Informar a los aportantes de los afiliados asignados, por medio de comunicación escrita, su obligación de cotizar a la EPS receptora y la fecha a partir de la cual debe hacerlo.
3. Entregar a cada una de las EPS receptoras la carpeta original con los documentos soporte de afiliación de cada afiliado asignado.
4. Entregar a cada una de las EPS receptoras, la base de datos de usuarios con fallos de tutela y Comité Técnico Científico (CTC) aprobados de cada afiliado asignado y la carpeta con los documentos soporte de la tutela y el CTC de las prestaciones continuas.
5. Disponer a través de su página web, para consulta general el listado de afiliados asignados.
6. Realizar las acciones de cobro de las cotizaciones causadas hasta el momento del traslado efectivo de los afiliados, así como el proceso de compensación, de conformidad con la normatividad vigente.
7. Garantizar que los afiliados entregados queden efectivamente trasladados y registrados en la Base Única de Afiliados (BDUA) o el instrumentos que haga sus veces en las EPS receptoras.
8. Verificar que no queden registros de afiliados a su cargo en la Base Única de Afiliados (BDUA) o el instrumento que haga sus veces. Para el efecto, deberá adelantar los procedimientos establecidos en la normatividad vigente para la depuración de los registros.
9. Entregar a las EPS receptora la información de los servicios autorizados que a la fecha de la asignación no hayan sido prestados.
10. Entregar a las EPS receptoras la información de las prestaciones económicas no liquidadas.

Artículo 4°. *Modificación del artículo 9° del Decreto 3045 de 2013.* El artículo 9° del Decreto 3045 de 2013, quedará así:

“**Artículo 9°.** *Garantía de la continuidad en la prestación de los servicios de salud.* Las Entidades Promotoras de Salud receptoras de afiliados asignados, a quienes la Entidad Promotora de Salud de donde provienen les hubiese autorizado procedimientos o intervenciones que a la fecha de asignación no hayan sido realizados deberán reprogramarlos dentro de los 30 días siguientes a la asunción de la prestación de los servicios, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida del paciente, caso en el cual deberá garantizar la oportuna atención.

En el caso de servicios no incluidos en el Plan de Beneficios que deban prestarse en virtud de fallos de tutela o hayan sido autorizados por CTC, la Entidad receptora garantizará la continuidad del tratamiento.

En ningún caso se podrán requerir trámites adicionales al afiliado”.

Artículo 5°. *Vigencia y derogatorias.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, adiciona el artículo 3A y modifica los artículos 5°, 6° y 9° del Decreto 3045 de 2013.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

MINISTERIO DEL TRABAJO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2090 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se establecen las reglas para la asunción de la función pensional de las Telesociadas y de Telecom.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le confiere los numerales 17 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 651 de 2001 autorizó la constitución de un Patrimonio Autónomo en beneficio de los pensionados y servidores públicos activos de Telecom, con el propósito de servir como mecanismo de conmutación pensional y pago de las obligaciones pensionales de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) frente a sus trabajadores, que por virtud de la ley y las disposiciones convencionales adquirieron el derecho de pensión o lo adquieran en el futuro, y que estará también habilitado para hacer las veces de sistema de amortización de reservas pensionales.

Que el parágrafo 4° del artículo 3° de la Ley 651 de 2001 y el artículo 2° del Decreto número 2387 de 2001 establecieron como función del Patrimonio Autónomo Pensional de Telecom (PAP), efectuar los giros equivalentes al monto de las obligaciones pensionales que se vayan causando, ya sean de carácter legal, extralegal o como consecuencia de un fallo judicial, con excepción de los valores que le corresponda concurrir al Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap), según lo dispuesto en las Leyes 314 de 1996 y 419 de 1997.

Que en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 4° de la Ley 314 de 1996, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) creó un Fondo Común de Naturaleza Pública denominado Foncap, el cual concurre en la financiación de las pensiones, con base en las cotizaciones recibidas, a partir del momento en que el pensionado cumpla las condiciones generales señaladas por la Ley 100 de 1993, tal y como lo ordena el artículo 4° de la Ley 419 de 1997.

Que el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquetá (Telecaquetá), la Empresa de Telecomunicaciones de Maicao (Telemaicao), la Empresa de Telecomunicaciones de Calarcá (Telecalarcá), la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño (Telenariño), la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena (Telecartagena), la Empresa de Telecomunicaciones de Armenia (Telearmenia), la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima (Teletolima), la Empresa de Telecomunicaciones del Huila (Telehuila), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Marta (Telesantamarta), mediante los Decretos 1603, 1604, 1605, 1607, 1609, 1611, 1612, 1614 y 1615 de 2003, y 1773 de 2004, respectivamente.

Que el artículo 19 de cada uno de los decretos anteriormente enunciados, establece que las Telesociadas y Telecom en Liquidación presentarán para la respectiva aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, con el concepto previo de la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social de ese Ministerio, el cálculo actuarial correspondiente a los pasivos pensionales, y que en el evento en que se encuentren personas no incluidas en el cálculo actuarial será necesario efectuar previamente los ajustes a que haya lugar para el pago de las respectivas pensiones.

Que los artículos 21 y 23 de los Decretos 1603 de 2003, 1604 de 2003, 1605 de 2003, 1607 de 2003, 1609 de 2003, 1611 de 2003, 1612 de 2003, 1614 de 2003, los artículos 22 y 24 del Decreto 1773 de 2004, y los artículos 20 y 22 del Decreto 1615 de 2003, asignaron a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom la función de reconocer las pensiones y cuotas partes pensionales, así como los bonos pensionales y las cuotas partes de bonos pensionales de los ex trabajadores de las Telesociadas y de Telecom en Liquidación.

Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, el artículo 20 de cada uno de los Decretos 1603 de 2003, 1604 de 2003, 1605 de 2003, 1607 de 2003, 1609 de 2003, 1611 de 2003, 1612 de 2003 y 1614 de 2003, y el artículo 21 del Decreto 1773 de 2004, ordenaron la subrogación de las obligaciones pensionales de las Telesociadas en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), así como la transferencia de los activos destinados al pago de los pasivos pensionales al patrimonio autónomo constituido por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), en los términos de la Ley 651 de 2001.

Que el artículo 24 de los Decretos 1603 de 2003, 1604 de 2003, 1605 de 2003, 1607 de 2003, 1609 de 2003, 1611 de 2003, 1612 de 2003 y 1614 de 2003, el artículo 25 del Decreto 1773 de 2004 y el artículo 23 del Decreto 1615 de 2003, establecieron que las cuotas partes pensionales de las Telesociadas y Telecom en Liquidación serán pagadas por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), mientras que el cobro de las mismas estará a cargo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) o del Patrimonio Autónomo.

Que el artículo 3° del Decreto 4781 de 2005 adicionó el numeral 12.29 al artículo 12 del Decreto 1615 de 2003 y estableció como función del liquidador de Telecom la celebración de un contrato de fiducia mercantil para la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) Telecom, cuya finalidad es la administración y enajenación de los activos no afectos a la prestación del servicio; la administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos; la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales, arbitrales o reclamaciones en curso al momento de terminación de los procesos liquidatorios, y el cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o fines que determine el Gobierno Nacional.

Que en virtud al contrato CVG-033/2003 suscrito entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) y el Consorcio Fidupensiones se estableció la administración del Patrimonio Autónomo Pensional de Telecom.

Que el 30 de diciembre de 2005 se celebró un contrato de fiducia mercantil entre Fiduciaria La Previsora S.A., actuando en calidad de liquidador de Telecom en Liquidación y Telesociadas en Liquidación, y el Consorcio Remanentes Telecom conformado por Fiduagraría S.A. y Fiduciaria Popular S.A., para la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Telesociadas en Liquidación (PAR). A su vez, en el numeral 4.2 de la cláusula cuarta del Contrato de Fiducia Mercantil, se pactó la transferencia y cesión de contratos vigentes de las entidades contratantes al Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR).

Que conforme a lo dispuesto en el literal i) del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, vigente en virtud de los artículos 276 de la Ley 1450 de 2011 y 267 de la Ley 1753 de 2015, y según lo ordenado por los artículos 1° y 2° del Decreto-ley 169 de 2008 y en el artículo 2° del Decreto 575 de 2013, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) tiene por objeto reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida de entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, cuando se haya decretado o se decrete su liquidación o el cese de actividades de quien esté desarrollando estas funciones.

Que el artículo 4° del Decreto 2011 de 2012, modificado por los artículos 1° del Decreto 1389 de 2013, 1° del Decreto 653 de 2014, 1° del Decreto 1440 de 2014 y 1° del Decreto 2408 de 2014, determinó el plazo para el traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) de las funciones pensionales de la Empresa Nacional de Comunicaciones - Telecom, la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima (Teletolima), la Empresa de Telecomunicaciones del Huila (Telehuila), la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño (Telenariño), la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena (Telecartagena), la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Marta (Telesantamarta), la Empresa de Telecomunicaciones de Armenia (Telearmenia) y la Empresa de Telecomunicaciones de Calarcá (Telecalarcá), que actualmente son administradas y pagadas por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).

Que el artículo 2° del Decreto 2408 de 2014 ordenó a Caprecom trasladar las reservas de vejez, invalidez y sobrevivencia del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap), correspondientes a las entidades cuya función pensional sea asumida por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, antes del 31 de diciembre de 2014.

Que, en consecuencia, se hace necesario establecer las reglas para la asunción de la función pensional de las Telesociadas y de Telecom, y dictar otras disposiciones.

DECRETA:

Artículo 1°. *Financiación de las obligaciones pensionales de las Telesociadas y de Telecom.* Las obligaciones pensionales de la Empresa de Telecomunicaciones del Huila (Telehuila), la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena (Telecartagena), la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Marta (Telesantamarta), la Empresa de Telecomunicaciones de Armenia (Telearmenia), la Empresa de Telecomunicaciones de Calarcá (Telecalarcá), la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño (Telenariño), la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima (Teletolima) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), serán financiadas con recursos del Patrimonio Autónomo Pensional de Telecom (PAP), previa validación de las nóminas de Pensionados que efectúe el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR), con excepción de los valores que le corresponda concurrir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, como administrador de los recursos del Fondo de Naturaleza Pública de Caprecom (Foncap), y según lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto número 2387 de 2001, si a ello hay lugar.

Para el efecto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) enviará al PAR en medio magnético los archivos con las novedades de la nómina de pensionados de cada una de las extintas Telesociadas de que trata este artículo y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) para su revisión y validación.

De la misma manera, dicha Unidad determinará su valor con el fin de que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) genere una cuenta de cobro al Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) para que se trasladen los recursos necesarios, incluida la comisión fiduciaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 651 de 2001 y artículo 1° del Decreto número 2387 de 2001.

Artículo 2°. *Concurrencia a cargo del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap).* La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) determinará, con la liquidación de cada pago de nómina de las entidades a que se refiere este decreto, el valor de la concurrencia a cargo del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap), con el fin de que la misma sea pagada por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) con cargo a los recursos que fueron trasladados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento del Decreto 2408 de 2014, para lo cual se dará información a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para el pago de la concurrencia.

Parágrafo 1°. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), a la fecha de traslado de la administración y del pago de la nómina de pensionados a la UGPP y al Fopep, respectivamente, entregará la nómina de pensionados discriminando el valor de la concurrencia Foncap para cada caso.

Parágrafo 2°. La determinación de la concurrencia a cargo del Foncap aplica para las pensiones de los exfuncionarios de las extintas Telesociadas y Telecom que se causen con posterioridad a la fecha de traslado de la función pensional y las anteriores que no hubiesen sido reconocidas por Caprecom.

Artículo 3°. *Cálculo actuarial.* La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) elaborará y llevará a término las acciones que conduzcan a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los cálculos actuariales por los derechos pensionales que no se encuentren incluidos en los cálculos aprobados de las Empresas Telesociadas Liquidadas y de Telecom, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

Artículo 4°. *Cuotas Partes Pensionales.* La administración de las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado de la función pensional de cada una de las Telesociadas de que trata este decreto y de Telecom, estará a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o a quien este designe para tal fin.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a la fecha de traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), serán administradas por esta Unidad.

El pago de todas las cuotas partes será cancelado con recursos que deberán ser transferidos por el Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) de que trata el artículo 1° de la Ley 651 de 2001, con excepción de los valores que le corresponda concurrir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional como administrador del Fondo de Naturaleza Pública de Caprecom (Foncap), y según lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto número 2387 de 2001.

Parágrafo 1°. Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pensionales, deben ser girados al Patrimonio Autónomo Pensional de Telecom de que trata el artículo 1° de la Ley 651 de 2001 y el Decreto número 2387 de 2001.

Parágrafo 2°. Caprecom deberá suministrar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o a quien este designe, la información y los archivos correspondientes, tanto en físico como en medio magnético, que soporten la gestión adelantada en el cobro y pago de las cuotas partes pensionales (activas y pasivas) hasta el momento del traslado de la función pensional a la UGPP.

Artículo 5°. *Bonos Pensionales.* El reconocimiento y pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales correspondiente a tiempos laborados en las extintas Telesociadas y en Telecom con anterioridad al 1° de abril de 1994 estarán a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o a quien este designe, con los recursos suministrados por el Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) de que trata el artículo 1° de la Ley 651 de 2001 y el Decreto número 2387 de 2001.

El reconocimiento y pago de la concurrencia de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales emitidos o por emitir a cargo de las entidades señaladas en el presente decreto, correspondiente a tiempos laborados con posterioridad al 1° de abril de 1994, está a cargo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando se encuentren incluidos en el cálculo actuarial aprobado por el Ministerio de Hacienda.

Parágrafo. Para los efectos mencionados, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) deberá entregar al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, o a quien este designe, y a la Oficina de Bonos Pensionales toda la información que sea necesaria.

Artículo 6°. *Aportes pensionales.* El Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) podrá continuar efectuando las cotizaciones a pensión a nombre de los pensionados de las Empresas Telesociadas Liquidadas y de Telecom, los cuales deberán ser girados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en su condición de administrador de los recursos del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap). La imputación de las semanas que sean cotizadas deberá ser efectuada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

De la misma manera, el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) deberá realizar el pago de los aportes pensionales correspondientes a los períodos en que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) tenía a su cargo la función de administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, los cuales deberán ser girados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional como administrador del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap). Igualmente deberá pagar los aportes de pensión que se deben efectuar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) o a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Para efectos de compartibilidad con la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), continuará efectuando las cotizaciones al Sistema General de Pensiones.

Artículo 7°. *Revisión y Revocatoria de Pensiones.* La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003. Para el efecto deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo o a solicitar su revisión en los términos establecidos por las normas vigentes.

Artículo 8°. *Expedientes pensionales y laborales.* La custodia y administración de los archivos laborales de las Empresas Telesociadas Liquidadas y de Telecom, una vez se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), continuará a cargo del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR), mientras este subsista. De la misma manera deberá expedir las certificaciones de Historia Laboral que se requieran.

La custodia y administración de los expedientes pensionales de las Empresas Telesociadas Liquidadas y de Telecom una vez se dé el paso de la función pensional a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) estará a cargo de dicha Unidad.

Artículo 9°. *Defensa Judicial.* La defensa en los procesos judiciales relacionados con las obligaciones pensionales de las entidades de que trata este decreto, que sean trasladados por Caprecom y en la de aquellos que se inicien con posterioridad al traslado de la función pensional prevista en este decreto deberá ser ejercida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad que deberá coordinar conjuntamente con el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) las estrategias de defensa judicial y los eventos en que se deba actuar simultáneamente buscando garantizar la mejor defensa de los recursos públicos.

Parágrafo. Caprecom deberá efectuar las gestiones necesarias para entregar a la UGPP la totalidad de la información y soportes físicos de cada uno de los procesos de las entidades de que trata este decreto.

Artículo 10. *Entrega de información.* Caprecom y el PAR Telecom, deberá poner a disposición de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), las bases de datos, los aplicativos de los cuales tenga la propiedad intelectual y la información completa relacionada con la función pensional de las Empresas Telesociadas Liquidadas y de Telecom y necesaria para que la UGPP pueda ejercer cabalmente sus funciones.

Artículo 11. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe
El Ministro del Trabajo,
Luis Eduardo Garzón
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
David Luna Sánchez
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2076 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de la que le confiere el artículo 189, numeral 13 de la Constitución Política,

DECRETA:

Artículo 1°. Nómbrase a la doctora Silvana Beatriz Habib Daza, identificada con la cédula de ciudadanía 52267321 de Bogotá, en el cargo de Presidente de Agencia E1 Grado 07 de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Minas y Energía,
Tomás González Estrada

DECRETO NÚMERO 2077 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se designa un Viceministro de Energía ad hoc

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que el doctor Carlos Fernando Eraso Calero, Viceministro de Energía del Ministerio de Minas y Energía, puso en conocimiento del Ministro de Minas y Energía la existencia de un conflicto de intereses para conocer de un curso de queja presentado por la Sociedad Refinería de Cartagena (Reficar) S. A.

Que el Ministro de Minas y Energía aceptó el impedimento presentado, a través de la Resolución 4-1138 del 20 de octubre de 2015.

Que, de acuerdo con el impedimento aceptado al Viceministro de Energía, se hace necesaria la designación de un Viceministro de Energía *Ad hoc*.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designar a la doctora María Isabel Ulloa Cruz, Viceministra de Minas del Ministerio de Minas y Energía, como Viceministra de Energía *Ad hoc*, para que conozca del recurso de queja presentado por la Sociedad Refinería de Cartagena (Reficar) S. A., en contra de la Resolución 31-409 de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Minas y Energía,
Tomás González Estrada

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2093 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se modifica el Artículo 2.2.2.29.4.5 del Capítulo 29 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 1340 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 1523 de 2015 se modificó el Capítulo 29 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, sobre beneficios a las personas naturales y jurídicas que colaboren en la detección y represión de acuerdos restrictivos de la libre competencia.

Que, en consecuencia, en el artículo 2.2.2.29.2.5 del Decreto 1074 de 2015 se señaló que “[l]as solicitudes de beneficios por colaboración podrán presentarse hasta antes del vencimiento del término de los veinte (20) días para recorrer el traslado del pliego de cargos y solicitar o aportar pruebas dentro de la investigación por la presunta comisión de prácticas restrictivas de la competencia”, reduciendo así la oportunidad que, de conformidad con la normatividad anterior, tenían las personas naturales y jurídicas de presentar solicitudes de beneficios por colaboración hasta antes de la expedición del informe motivado.

Que el artículo 2.2.2.29.4.5 del Decreto 1074 de 2015 “se aplica a las solicitudes de beneficios por colaboración presentadas con posterioridad a su vigencia”, y que “[l]as solicitudes de beneficios por colaboración presentadas con anterioridad a la vigencia de este Capítulo se regirán por las disposiciones previstas al momento de la solicitud de beneficios por colaboración”.

Que a partir de la publicación en el *Diario Oficial* del Decreto 1523 de 2015, que modificó el Decreto 1074 de 2015, las personas naturales y jurídicas involucradas en actuaciones administrativas en las cuales ya se hubiese vencido el término de traslado de la Resolución de apertura de investigación y pliego de cargos, por la presunta comisión de prácticas anti-competitivas, perdieron de inmediato la posibilidad de solicitar beneficios por colaboración, a pesar de que bajo el régimen anterior hubiesen podido acceder a tales beneficios hasta la expedición del Informe Motivado dentro de la investigación.

Que a efectos de aplicar la normatividad más favorable a los investigados por la presunta comisión de prácticas restrictivas de la competencia en actuaciones en las cuales ya se hubiese formulado pliego de cargos y vencido el término del mismo, es necesario modificar el artículo referido, con el fin de que actuales investigados, si es su intención, puedan solicitar su ingreso al programa de beneficios por colaboración aplicando para ello la normatividad anterior.

DECRETA

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.2.2.29.4.5 del Capítulo 29 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará así:

Artículo. 2.2.2.29.4.5. Tránsito de normas. El presente capítulo se aplica a las solicitudes de beneficios por colaboración presentadas con posterioridad a su vigencia.

Las solicitudes de beneficios por colaboración presentadas con anterioridad a la vigencia de este capítulo se regirán por las disposiciones previstas al momento de la solicitud de beneficios por colaboración.

No obstante, las solicitudes de beneficios por colaboración presentadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 1523 de 2015, pero que versen sobre actuaciones administrativas anteriores a la vigencia de dicho Decreto en las cuales ya se hubiese formulado apertura de investigación con pliego de cargos, se regirán por las disposiciones aplicables con anterioridad a la vigencia del Decreto 1523 de 2015, si el solicitante así lo indica expresamente.

Artículo 2°. *Vigencia y modificaciones.* Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial*.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen

DECRETO NÚMERO 2094 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se reglamenta la composición y el procedimiento para la selección de los representantes al Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo y se modifican las secciones 4 y 7 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 202 de la Ley 1753 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 202 de la Ley 1753 de 2015 estableció que la integración del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo “*será definida por el Gobierno Nacional mediante decreto, para lo cual deberá garantizar la participación en el mismo del sector privado, las organizaciones gremiales de aportantes y las entidades territoriales*”.

Que se hace necesario limitar el número de integrantes del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), con el fin de simplificar los trámites, procesos y procedimientos para la aprobación de los proyectos que sean puestos a consideración del anotado comité, sin afectar la participación mayoritaria de las organizaciones gremiales de aportantes.

Que surtida la publicidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con el texto del presente decreto,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, la cual quedará así:

“SECCIÓN 4

FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA PROMOCIÓN DEL TURISMO

Artículo 2.2.4.2.4.1. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo tendrá las siguientes funciones:

1. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo presentado por la Entidad Administradora del mismo, previo visto bueno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Aprobar las inversiones y proyectos que con recursos del Fondo deba llevar a cabo la Entidad Administradora para cumplir con el contrato de administración del mismo.

3. Velar por la correcta y eficiente gestión del Fondo por de la Entidad Administradora. (*Decreto 505 de 1997, artículo 19*)”.

Artículo 2°. Modifíquese la Sección 7 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, la cual quedará así:

“SECCIÓN 7

COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES AL COMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE TURISMO

Artículo 2.2.4.2.7.1. Comité Directivo del Fondo Nacional del Turismo. El Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo estará compuesto por siete (7) miembros, así:

1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o quien este delegue.
2. El Viceministro de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3. El Presidente de Procolombia quien podrá delegar en el Vicepresidente de Turismo.
4. Cuatro (4) representantes de organizaciones gremiales de aportantes de la contribución parafiscal.

Parágrafo 1°. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo presidirá el Comité y en su ausencia lo presidirá el Viceministro de Turismo. Para la adopción de decisiones por parte del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), se requerirá de mayoría simple y del voto favorable de quien preside el Comité.

Parágrafo 2°. El Comité se dará su propio reglamento; no obstante, podrá continuar aplicando el reglamento vigente, con los ajustes que sean necesarios de acuerdo con las normas vigentes.

Parágrafo 3°. Serán invitados los Alcaldes y Gobernadores de los municipios y gobernaciones con proyectos a ser considerados dentro de su jurisdicción para aquellas reuniones en las que se discutan dichos proyectos.

Artículo 2.2.4.2.7.2. Organizaciones gremiales de aportantes. Se entenderá por organizaciones gremiales de aportantes de la Contribución Parafiscal de que trata el artículo 1° de la Ley 1101 de 2006, las entidades sin ánimo de lucro debidamente constituidas y con cobertura nacional, que cumplan los siguientes requisitos:

1. Las entidades gremiales especializadas en turismo que representen mínimo el 30% de los aportes de la contribución parafiscal de su categoría señaladas en el artículo 3° de la Ley 1101 de 2006. Para tal efecto, la entidad gremial correspondiente deberá presentar una certificación expedida por el Fondo Nacional de Turismo, donde se relacionen los aportes de sus agremiados correspondientes a los pagos efectuados en el año inmediatamente anterior al de la elección de los representantes al Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo.

2. Tratándose de entidades que agremien prestadores de servicios turísticos, estos deberán tener vigente el Registro Nacional de Turismo, según certificación del Grupo de Análisis Sectorial y Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para lo cual la entidad gremial deberá enviar un listado de sus agremiados a este grupo.

3. Tratándose de las entidades que agremien aportantes no catalogados como prestadores de servicios turísticos, estos deberán tener vigente el Registro Mercantil, según certificación del representante legal de la organización gremial.

4. Las organizaciones gremiales deberán tener una constitución mínima de cinco (5) años.

Parágrafo. La Secretaría Técnica del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo, verificará los requisitos señalados en el presente artículo.

Artículo 2.2.4.2.7.3. Convocatoria para la elección de las organizaciones gremiales de aportantes. Para efectos de la elección de los representantes de las organizaciones gremiales de aportantes para integrar el Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo, el Ministe-

rio de Comercio, Industria y Turismo convocará a través su sitio web a las organizaciones gremiales de aportantes e informará sobre los requisitos previstos en la presente sección.

Artículo 2.2.4.2.7.4. Inscripción de las organizaciones gremiales de aportantes. Las organizaciones gremiales interesadas en participar en la elección de los representantes en el Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo, además de cumplir con los requisitos señalados en el artículo 2.2.4.2.7.2 del presente decreto, deberán:

1. Inscribirse ante el Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria realizada en su sitio web.

2. Indicar mediante correo postal el representante o apoderado de la organización gremial que asistirá a la reunión de la elección de los representantes en el Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo.

3. Indicar el representante principal y suplente que asistirán a las reuniones del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

Parágrafo 1°. Una vez surtida la etapa de revisión de la documentación aportada por los gremios, la Secretaría Técnica Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo convocará a los representantes de las organizaciones gremiales a la reunión de elección que se realizará a más tardar el último día hábil del mes de septiembre de cada año impar.

Parágrafo 2°. Solo podrán ser elegidos aquellos gremios que se hayan inscrito, cumplan con los requisitos exigidos y que estén representados en la reunión de elección, bien sea por su representante legal o por su apoderado.

Artículo 2.2.4.2.7.5. Proceso de elección. La elección de los representantes de los gremios se realizará mediante votación dirigida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Con el fin de elegir a los cuatro (4) gremios que obtengan la mayoría de los votos, cada uno de los representantes de los gremios que asista a la reunión de elección tendrá derecho a diez (10) votos distribuidos en cuatro (4) gremios, con asignaciones de cuatro (4), tres (3), dos (2) y un (1) votos respectivamente, las cuales deberán tener un destinatario diferente.

Parágrafo 1°. Solo podrán elegir y ser elegidos los representantes de las organizaciones gremiales presentes en la reunión de elección.

Parágrafo 2°. Tendrá representación en el Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo una sola asociación gremial por cada una de las categorías de aportantes señalados en el artículo 3° de la Ley 1101 de 2006.

Parágrafo 3°. No tendrán derecho a voto los representantes de los gremios regionales o locales que hagan parte de un gremio nacional.

Parágrafo 4°. En caso que no se pudieren elegir todos los miembros o existiere empate en la votación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los designará de acuerdo con la mayor representatividad de los aportes de la contribución parafiscal. En el caso de renuncia o pérdida de representatividad del gremio principal, será reemplazado por el gremio no elegido con mayor votación.

Artículo 2.2.4.2.7.6. Secretaría Técnica del Comité. De acuerdo con lo previsto en el numeral 12 del artículo 8° del Decreto 2785 de 2006, corresponde a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo ejercer la Secretaría Técnica del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo.

Artículo 2.2.4.2.7.7. Periodo de los representantes. El representante de la organización gremial elegido de conformidad con los artículos precedentes ejercerá su cargo como miembro del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo por un período de dos (2) años, el cual comenzará el día quince (15) de diciembre del año de la elección y culminará el catorce (14) de diciembre del año impar siguiente”.

Artículo 3°. *Vigencia y derogatorias.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en su integridad las Secciones 4 y 7 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Cecilia Álvarez-Correa Glen

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2070 DE 2015

(octubre 23)

por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar parcialmente la Ley 1740 de 2014.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es un derecho de las personas y un servicio público que tiene una función social.

Que de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política, le corresponde al Estado velar por la adecuada y continua prestación de los servicios públicos, de tal manera que

a través de estos se puedan satisfacer necesidades de interés general y alcanzar los demás fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2° de la Carta.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política le asignan al Presidente de la República las facultades de inspección y vigilancia del servicio público educativo, para que este cumpla las finalidades asignadas por el mismo Constituyente, entre las que se destacan el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, así como la formación de los colombianos en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

Que en desarrollo de las normas anotadas y en cumplimiento del artículo 150 numeral 8 de la misma Constitución, el Congreso de la República expidió la Ley 1740 de 2014, *por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones*, la cual constituye uno de los principales marcos normativos con los que cuenta el Estado colombiano para “*velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de educación superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria constitucionalmente establecida*”, según lo dispuesto en el artículo 1° de dicha ley.

Que es necesario reglamentar la Ley 1740 de 2014 en sus aspectos técnicos y operativos, para garantizar su cumplimiento y adecuada ejecución, y especialmente, para precisar la forma cómo el Ministerio de Educación Nacional cumplirá las competencias de inspección y vigilancia de la educación superior, que le fueron delegadas por el Presidente de la República mediante el Decreto 698 de 1993.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1075 de 2015 *por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación*, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen dicho Sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo.

Que la presente norma se expide con fundamento en la potestad reglamentaria del Presidente de la República, motivo por el cual, debe quedar compilada en el Decreto 1075 de 2015 en los términos que a continuación se señalan.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Adicionar la Sección 2, Capítulo 9, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015. Adiciónese la Sección 2, al Capítulo 9, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, la cual quedará así:

“SECCIÓN 2

REGLAMENTACIÓN DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SUBSECCIÓN 1

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 2.5.3.9.2.1.1. Objeto. La presente Sección tiene como objeto reglamentar la ley 1740 de 2014 en lo relativo a:

1. Los parámetros a seguir por parte del Ministerio de Educación Nacional para la designación de sus delegados ante los órganos de dirección, y de los inspectores *in situ*, consejeros, directivos, representantes legales, administradores y revisores fiscales en las instituciones de educación superior, en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial que el Ministerio adopte en dichas instituciones.

2. Las funciones que deberán cumplir en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial, los delegados, inspectores *in situ*, consejeros, directivos, representantes legales, administradores y revisores fiscales de las instituciones de educación superior, señalados en el numeral anterior.

3. Los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas al Ministerio de Educación Nacional, para el desarrollo de las medidas preventivas y de vigilancia especial que sean impuestas a las instituciones de educación superior.

Artículo 2.5.3.9.2.1.2. Ámbito de aplicación. La presente Sección se aplica a, todas las instituciones que prestan el servicio de educación superior y que por ende, están sometidas a la inspección y vigilancia que ejerce el Ministerio de Educación Nacional.

La inspección y vigilancia de la educación superior son de carácter preventivo y sancionatorio.

Por no tener carácter sancionatorio, las medidas preventivas no están sujetas a las normas y principios propios del proceso administrativo sancionatorio, sino a lo señalado específicamente por la Ley 1740 de 2014 para este tipo de medidas.

SUBSECCIÓN 2

DE LOS DELEGADOS Y DEMÁS PERSONAS DESIGNADAS EN EL MARCO
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE LA VIGILANCIA ESPECIAL

Artículo 2.5.3.9.2.2.1. De los delegados. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, como medida preventiva, el Ministerio de Educación Nacional podrá enviar delegados a los órganos de dirección de una institución de educación superior para los fines que indica ese artículo.

El Ministerio de Educación Nacional deberá designar a los correspondientes delegados mediante acto administrativo motivado, indicando el órgano en el cual ejercerán sus funciones, de acuerdo con la estructura prevista en los estatutos de la institución de educación superior.

Parágrafo. Una persona podrá ser designada como delegado en varias instituciones de educación superior, siempre y cuando no exista impedimento o inhabilidad legal o estatutaria.

Artículo 2.5.3.9.2.2.2. Funciones de los delegados. Los delegados del Ministerio de Educación Nacional ante los órganos de dirección de las instituciones de educación superior, tendrán las siguientes funciones:

1. Llevar la vocería del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo órgano de dirección, para el cumplimiento de los fines de la medida preventiva.

2. Informar al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con las verificaciones que haga, sobre la gestión y el cumplimiento de funciones por parte del respectivo órgano de dirección.

3. Asistir a las reuniones o sesiones de los órganos para los que haya sido designado y elaborar su propio informe al Ministerio de Educación de lo acontecido y actuado.

4. Solicitar al respectivo órgano directivo que analice y decida sobre uno o varios temas relacionados o necesarios para la superación de la situación que generó la aplicación de la(s) medida(s) preventiva(s).

5. Solicitar a quien corresponda al interior de la institución de educación superior, la convocatoria a reunión o sesión del órgano al cual hayan sido designados, dentro del plazo determinado en los estatutos o reglamentos internos, para que trate los temas indicados en el numeral anterior.

6. Hacer seguimiento a las actuaciones, deliberaciones y decisiones que adopte el respectivo órgano de dirección.

7. Acceder a la información y documentación de la institución de educación superior que sea necesaria para que el Ministerio de Educación revise el cumplimiento de la medida preventiva y sus fines.

8. Solicitar informes periódicos o específicos al órgano de dirección al cual hayan sido designados, para que el Ministerio de Educación verifique el cumplimiento de las funciones del respectivo órgano, en relación con las medidas adoptadas por el Ministerio.

9. Rendir informes periódicos al Ministerio de Educación Nacional y, cada vez que este se lo requiera, sobre el cumplimiento de las funciones previstas en los anteriores numerales.

10. Informar al Ministro de Educación Nacional y a la Subdirección de Inspección y Vigilancia los hechos que deban ser investigados administrativamente.

11. Denunciar ante las entidades competentes los hechos que puedan constituir responsabilidad penal, civil, disciplinaria, fiscal, tributaria o administrativa.

Parágrafo. La institución de educación superior que sea objeto de la medida preventiva de que trata este artículo, deberá garantizar que los delegados sean convocados a todas las sesiones o reuniones del órgano de dirección al cual hayan sido designados.

Artículo 2.5.3.9.2.2.3. Del inspector *in situ*. El Ministerio de Educación Nacional podrá designar un inspector *in situ* para una institución de educación superior, como medida de vigilancia especial, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.

La designación del inspector *in situ* será realizada en el acto administrativo que declare la vigilancia especial o en acto administrativo separado, indicando la institución de educación superior frente a la cual procede la medida.

Parágrafo. Una persona podrá ser designada como inspector *in situ* ante varias instituciones de educación superior que estén sujetas a vigilancia especial, siempre y cuando no exista impedimento o inhabilidad legal o estatutaria.

Artículo 2.5.3.9.2.2.4. Funciones del inspector *in situ*. El inspector *in situ* tendrá las siguientes funciones:

1. Ejercer vigilancia a la gestión administrativa y/o financiera de la respectiva institución de educación superior, así como a los aspectos que afectan la calidad y continuidad del servicio público que ella tiene a su cargo.

2. Revisar de forma continua la evolución de las causas que originaron la declaratoria de la medida de vigilancia especial.

3. Vigilar que la institución preste el servicio público educativo de manera continua y con plena observancia de las condiciones de calidad definidas en la ley y en los reglamentos.

4. Acceder y revisar la información y documentación administrativa o financiera de la institución de educación superior y aquella relacionada con los aspectos que afectan la calidad y continuidad del servicio público educativo, y transmitirla al Ministerio de Educación Nacional.

5. Interponer dentro del término legal, las acciones de revocatoria y simulación referidas en el artículo 15 de la Ley 1740 de 2014, siempre y cuando ostente el título de abogado y se encuentre habilitado para ejercer su profesión, o en su defecto, adelantar ante las demás entidades y/o personas mencionadas por esa norma, las gestiones necesarias para que dichas acciones sean interpuestas.

6. Rendir al Ministerio de Educación Nacional los informes periódicos o los específicos que se le soliciten.

7. Asistir cuando lo estime necesario a las sesiones o reuniones de los órganos de dirección de la respectiva institución de educación superior, para informar al Ministerio de Educación la evolución de los hechos o causas que originaron la medida preventiva. Su participación tendrá los mismos alcances que la de un invitado.

8. Informar a la Subdirección de Inspección y Vigilancia los hechos que puedan ser objeto de investigación por parte del Ministro de Educación Nacional.

9. Denunciar ante las entidades competentes los hechos que puedan constituir responsabilidad penal, civil, disciplinaria, fiscal, tributaria o administrativa.

Parágrafo. Con el fin de garantizar el logro de los objetivos de la vigilancia especial, la institución de educación superior deberá asignarle al inspector *in situ*, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto de designación, un espacio físico para su instalación y otorgarle las facilidades logísticas para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 2.5.3.9.2.2.5. Del reemplazo de los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales de las instituciones de educación superior. El Ministerio de Educación Nacional podrá reemplazar a los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales que incurran en una de las causales señaladas por el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.

Una persona podrá ser designada como reemplazo de consejero, directivo, representante legal, administrador o revisor fiscal, ante varias instituciones de educación superior, siempre y cuando no exista impedimento o inhabilidad legal o estatutaria.

En las instituciones de educación superior, que por su naturaleza jurídica no se tenga prevista la figura de revisor fiscal, podrá ser reemplazado el funcionario equivalente o el que haga sus veces.

Artículo 2.5.3.9.2.2.6. Funciones y facultades de los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales reemplazantes. Los funcionarios reemplazantes tendrán las siguientes funciones:

1. Cumplir oportuna y adecuadamente las funciones que la ley, los estatutos y los reglamentos internos de la institución asignan al cargo asumido.

2. Propender porque la institución de educación superior supere en el menor tiempo posible la situación que generó la medida de vigilancia especial, y se garanticen los derechos de la comunidad educativa, la continuidad y la calidad del servicio, así como la inversión y el manejo adecuado de los recursos de la institución.

3. Cumplir y facilitar el acatamiento de las medidas y órdenes que adopte el Ministerio de Educación Nacional para la institución de educación superior durante la medida de vigilancia especial.

4. Recaudar y entregar oportunamente al inspector *in situ*, a los delegados y al Ministerio de Educación Nacional, la información y documentación solicitada.

5. Velar porque la institución preste el servicio público educativo de manera continua y con plena observancia de las condiciones de calidad definidas en la ley y en los reglamentos.

6. Interponer o adelantar las gestiones necesarias para que sean presentadas dentro del término legal las acciones de revocatoria y simulación a las que se refiere el artículo 15 de la Ley 1740 de 2014.

7. Presentar al Ministerio de Educación Nacional los informes periódicos o los específicos que se le soliciten sobre su gestión en la institución de educación superior y la evolución de la situación que originó la medida de vigilancia especial.

8. Informar a la Subdirección de Inspección y Vigilancia los hechos que puedan ser objeto de investigación por parte del Ministro de Educación Nacional.

9. Denunciar ante las entidades competentes los hechos que puedan constituir responsabilidad penal, civil, disciplinaria, fiscal, tributaria o administrativa.

Artículo 2.5.3.9.2.2.7. Calidades de los delegados, el inspector in situ y los reemplazantes. El Ministerio de Educación Nacional determinará las calidades que deben reunir las personas que sean designadas como delegado, inspector *in situ* o reemplazante.

El Ministerio podrá dar por terminado y reemplazar en cualquier momento a la persona designada.

Artículo 2.5.3.9.2.2.8. Acompañamiento del Ministerio. El Ministerio de Educación Nacional brindará a través de sus dependencias y en el marco de las competencias de cada una de ellas, el acompañamiento y el apoyo necesario a los delegados, inspectores *in situ* y miembros reemplazantes, para el cumplimiento de sus funciones.

SUBSECCIÓN 3

OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Artículo 2.5.3.9.2.3.1. Identificación de acreedores cuando se decreta la suspensión de pagos. Cuando el Ministerio de Educación Nacional decreta la medida de suspensión de pagos, la institución deberá presentar al Ministerio, dentro de los cinco (5) meses siguientes a la notificación de dicha medida, la relación de las deudas y obligaciones a su cargo causadas hasta el momento en que entró en vigencia la suspensión de pagos, con los conceptos, montos debidamente liquidados hasta esa fecha y los demás detalles que le señale el Ministerio.

En el plazo establecido en el inciso anterior, la institución de educación superior, además de utilizar la información que obre en sus archivos y con el fin de identificar sus acreedores, deberá realizar una convocatoria mediante la publicación de dos (2) avisos en un medio de comunicación de amplia circulación, con un intervalo mínimo de diez (10) días entre cada uno. La convocatoria deberá permanecer fijada en la página web de la institución y en los lugares de acceso al público en todas sus sedes administrativas y académicas, hasta la terminación del plazo para la presentación de documentos.

En la convocatoria se indicará expresamente la fecha límite, el lugar y los horarios para que los acreedores presenten las obligaciones adeudadas por la institución, así como los documentos que deben anexar. El término para la presentación de documentos por parte de los acreedores no podrá ser inferior a quince (15) días hábiles contados desde la primera publicación en el medio masivo de comunicación.

Con la información de los acreedores, deudas y obligaciones, la institución deberá elaborar un plan para el pago ordenado de las mismas, incluidas las de carácter laboral, que no ponga en riesgo ni afecten la continuidad y calidad del servicio educativo, y que respete en todo caso las reglas de prelación de pagos definidas por la ley. Se deberá indicar, además, las fuentes de financiación que se tengan previstas para el cumplimiento del mencionado plan.

El plan de pagos será enviado por la institución al Ministerio de Educación Nacional dentro del plazo indicado en el inciso primero de este artículo, y deberá estar de acuerdo con la planeación hecha por el Ministerio para restablecer el servicio en condiciones de continuidad y calidad. De no ser así, el Ministerio hará las observaciones y solicitará que

se realicen los ajustes que considere necesarios, dentro del plazo que estime conveniente, buscando que se garantice a los estudiantes la continuidad y calidad del servicio educativo.

Artículo 2.5.3.9.2.3.2. Evaluación integral. Cuando se cumpla un (1) año de haberse decretado una o varias medidas preventivas de vigilancia especial, el Ministerio de Educación Nacional contará con dos (2) meses para realizar una evaluación integral sobre las posibilidades reales que tiene la institución de educación superior de: i) superar las causas que originaron la adopción de la medida; ii) prestar el servicio público de educación superior de forma continua y con plena observancia de las condiciones de calidad, y iii) contar con un patrimonio suficiente para el normal y correcto desarrollo de sus actividades de docencia, investigación y extensión.

Vencido los dos (2) meses, el Ministerio de Educación Nacional deberá comunicar a la institución de educación superior el resultado de su evaluación. La institución de educación superior podrá formular observaciones a la evaluación realizada, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del resultado. Dichas observaciones deberán ser analizadas y respondidas por el Ministerio en un término máximo de dos (2) meses.

Si de lo anterior se concluye que la institución no puede continuar prestando el servicio educativo, la institución informará a la comunidad educativa y, con el seguimiento del Ministerio de Educación Nacional, ejecutará un plan de transición y reubicación que facilite a los estudiantes continuar sus estudios en otras instituciones de educación superior.

Una vez ejecutado el plan de transición y reubicación, y sin perjuicio de las investigaciones administrativas que se encuentren en curso contra los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el control de la institución de educación superior, se levantará la medida o medidas de vigilancia especial que se hayan impuesto y cesarán las actuaciones por parte del Ministerio de Educación Nacional, de sus delegados, del inspector *in situ* y de los reemplazantes designados, según el caso.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Educación Nacional,

Gina Parody D'Echeona.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2095 DE 2015

(octubre 23)

por medio del cual se modifican los artículos 2.1.1.2.7.2.1., 2.1.1.2.7.2.3. y 2.1.1.2.7.2.4 del Capítulo Segundo, Sección 7 Subsección 2 del Decreto número 1077 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012 facultó al Gobierno nacional para fijar criterios de focalización encaminados a la asignación de vivienda a título de subsidio familiar de vivienda en especie con la participación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que en la Subsección 2 de la Sección 7 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 se estableció un criterio de focalización para el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas a los hogares que tengan como miembro del grupo familiar a un Soldado Campesino, Soldado, Infante de Marina Regular o Auxiliar de Policía, activo o retirado, herido en combate o en actos del servicio, que se encuentren en estado de vulnerabilidad y no cuenten con una solución habitacional.

Que se requiere ampliar el criterio de focalización para atender a los hogares que tienen como miembro del grupo familiar a un Oficial de las Fuerzas Militares o Policía Nacional, Suboficial de las Fuerzas Militares o un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, Soldado Campesino, Soldados o Infante de Marina Profesional, activo o retirado, herido en combate o en actos del servicio, que se encuentran en estado de vulnerabilidad y no cuenten con una solución habitacional.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.1.1.2.7.2.1 del Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que en adelante, tendrá el siguiente contenido:

Artículo 2.1.1.2.7.2.1. Criterio de focalización. Establézcase como criterio de focalización para el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas a los hogares que se encuentren en una de estas condiciones:

Los hogares que tengan como miembro del grupo familiar a un Soldado Campesino, Soldado o Infante de Marina Regular o Auxiliar de Policía, Soldado o Infante de Marina Profesional, Suboficial de las Fuerzas Militares o un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, Oficial de las Fuerzas Militares o Policía Nacional, activo o retirado, herido en combate o en actos del servicio, que se encuentre en estado de vulnerabilidad y no cuenten con una solución habitacional.

La asignación del subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas de que trata el presente decreto se sujetará a la disponibilidad de recursos con que cuente el Fondo Nacional Vivienda (Fonvivienda).

El subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas de que trata el presente criterio de focalización, no se podrá recibir cuando el destinatario haya sido beneficiario del subsidio de vivienda otorgado por el Estado a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.1.1.2.7.2.3 del Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que en adelante, tendrá el siguiente contenido:

Artículo 2.1.1.2.7.2.3. Condiciones para acceso. Podrá acceder al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas el hogar que cumpla con las siguientes condiciones:

3.1. Que tenga como miembro del hogar a un Soldado Campesino, Soldado o Infante de Marina Regular o Auxiliar de Policía, Soldado o Infante de Marina Profesional, Suboficial de las Fuerzas Militares o un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, Oficial de las Fuerzas Militares o Policía Nacional, activo o retirado, herido en combate o en actos del servicio que se encuentre en estado de vulnerabilidad.

3.2. Que su discapacidad se encuentre debidamente diagnosticada y certificada por una Junta Médica de las Fuerzas Militares o Policía Nacional tratándose de Soldado Campesino, Soldado o Infante de Marina Regular, Auxiliar de Policía, Soldado o Infante de Marina Profesional, Suboficial de las Fuerzas Militares o un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, Oficial de las Fuerzas Militares o Policía Nacional, activo o retirado.

El Ministerio de Defensa Nacional implementará los mecanismos de postulación al subsidio familiar de vivienda en especie, al personal descrito anteriormente.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2.1.1.2.7.2.4 del Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que en adelante, tendrá el siguiente contenido:

Artículo 2.1.1.2.7.2.4. Selección de hogares. La relación de los Soldados Campesinos, Soldados Regulares, Infantes de Marina Regulares o Auxiliares de Policía, Soldados o Infantes de Marina Profesionales, Suboficiales de las Fuerzas Militares o miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, Oficiales de las Fuerzas Militares o Policía Nacional activos o retirados, heridos en combate o en actos del servicio, potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie será remitida por el Ministerio de Defensa Nacional al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).

Artículo 4°. *Vigencia y derogatorias.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, a 23 de octubre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Defensa Nacional,

Luis Carlos Villegas Echeverri.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Luis Felipe Henao Cardona.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Tatiana Orozco de la Cruz.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0004303 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se reglamenta la Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV).

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por los numerales 6.2, 6.3 y 6.10 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, el párrafo del artículo 2.5.4.1 y el artículo 2.5.4.3 del Título 4 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 105 de 1993, señala que le corresponde al Estado la planeación, control, regulación y vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas y en su artículo 2° establece que la seguridad de las personas constituye una prioridad del sistema y el transporte y un elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano;

Que el artículo 5° ibídem, establece que “*Es atribución del Ministerio de Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito*”;

Que el artículo 84 de la Ley 1450 del 16 de junio del 2011, “por medio de la cual se expide el Plan de Desarrollo 2010-2014” establece que: (...):

(...) “*Los Sistemas Inteligentes de Transporte son un conjunto de soluciones tecnológicas informáticas y de telecomunicaciones que recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información, y se deben diseñar para mejorar la operación, la gestión y la seguridad del transporte y el tránsito. El Gobierno nacional, con base en estudios y previa consulta con los prestadores de servicio, adoptará los reglamentos técnicos y los estándares y protocolos de tecnología, establecerá el uso de la tecnología en los proyectos SIT y los sistemas de compensación entre operadores (...)*

(...) *Parágrafo 3°. El montaje de los Sistemas Inteligentes de Transporte, podrá implicar la concurrencia de más de un operador; lo que significará para el usuario la posibilidad de acceder a diferentes proveedores, en diferentes lugares y tiempo. El Gobierno nacional, con base en estudios y previa consulta con los prestadores de servicio reglamentará la manera como esos operadores compartirán información, tecnologías o repartirán los recursos que provengan de la tarifa, cuando un mismo usuario utilice servicios de dos operadores diferentes*”;

Que el sector transporte debe utilizar las tecnologías de la información y comunicación, como una herramienta que contribuye a la prestación de un servicio competitivo, dinámico, y seguro;

Que el Recaudo Electrónico Vehicular es un sistema inteligente para la infraestructura, el tránsito y el transporte, que permite a los usuarios pagar mediante una transacción electrónica bienes o servicios, mediante la utilización de tecnología de apoyo, instaladas en la infraestructura o en dispositivos a bordo del vehículo, el cual busca mejorar la seguridad y competitividad de las cadenas logísticas, abriendo oportunidades para promover soluciones eficientes e innovadoras, permitiendo el pago electrónico de peajes o de tasas por uso de áreas de alta congestión, de alta contaminación o de infraestructura construida o mejorada para evitar congestión urbana; así como el cobro de otros bienes y servicios;

Que el Gobierno nacional efectuó los estudios y realizó socialización para adoptar los estándares de tecnología, facilitando la organización y el funcionamiento de los sistemas REV, estableciendo la Norma ISO 18000-63 como el estándar a adoptar en Colombia;

Que por lo anterior, se hace necesario definir el procedimiento, estructuración, implementación y operación de los sistemas de Recaudo Electrónico Vehicular que deben operar en nuestro país, así como los principios fundamentales que regirán su implementación, operación e interoperabilidad.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte, en cumplimiento del literal octavo del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el día 14 de septiembre hasta el día 13 de octubre de 2015, con el objeto de recibir opiniones, comentarios y propuestas alternativas;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. *Objeto y principios.* La presente resolución tiene por objeto reglamentar el Sistema Inteligente para la Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV), establecer los requisitos que deben cumplir los actores estratégicos interesados en obtener y mantener la habilitación para la prestación del servicio de Recaudo Electrónico Vehicular (REV), regular las condiciones financieras, técnicas y jurídicas mínimas para la operación, implementación e interoperabilidad del Recaudo Electrónico Vehicular (REV) en peajes, dentro del territorio nacional, cumpliendo con los principios rectores de los sistemas inteligentes para la infraestructura, el tránsito y el transporte (ITS) definidos en el artículo 2.5.1.4 del Decreto número 1079 de 2015, además de los principios rectores del transporte como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se les aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales.

Artículo 2°. *Ámbito de aplicación.* Las disposiciones contenidas en la presente resolución se aplicarán íntegramente a la prestación del servicio de Recaudo Electrónico Vehicular (REV), para los peajes de todo el territorio nacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Título 4 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015.

Artículo 3°. *Recaudo Electrónico Vehicular (REV).* Para efectos de la presente resolución, se entenderá por Recaudo Electrónico Vehicular (REV) lo dispuesto en el artículo 2.5.4.1 del Título 4, de la Parte 5, del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015.

Artículo 4°. *Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (REV).* Es aquel servicio que se presta bajo la responsabilidad de un actor estratégico de los ITS, debidamente habilitado de conformidad con las formalidades previstas por el Ministerio de Transporte, y que posee la capacidad de interactuar e intercambiar datos entre peajes, de acuerdo a estándares internacionales definidos, a través de regulación normativa y la integración de tecnología, para realizar el pago de la tasa de peaje utilizando un único dispositivo TAG RFID por vehículo.

Artículo 5°. *Definiciones.* Para la interpretación y aplicación de la presente resolución, se tendrán en cuenta además de las contempladas en el artículo 2.5.1.3 del Título 1 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, las siguientes:

1. **Actor Estratégico IP/REV:** persona natural o jurídica, pública o privada, relacionada directa o indirectamente con la planeación, regulación, desarrollo, implementación, operación, gestión, inspección, vigilancia, control, administración y uso del Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV); o aquellos que realicen actividades de recaudo, intermediación o captación de dinero para el uso del Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV) como medio para el pago de la tasa de peaje.

2. **Anexo Técnico:** Es el documento que contiene los requisitos que deben cumplir los actores estratégicos, para ser habilitados o autorizados por el Ministerio de Transporte, ejercer un rol en el Sistema IP/REV y usar la marca de certificación de interoperabilidad, el cual se adopta mediante la presente resolución y que está publicado en la página web del Ministerio de Transporte en el link: https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/grupo_its.

3. **Carril IP/REV:** Dentro de una plaza de peaje, es el carril que tiene la tecnología para realizar el cobro de la tasa de peaje utilizando medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en la presente resolución, en el anexo técnico o en las normas que las modifiquen, sustituyan o adicione.

4. **Centro de Operación de Peajes (COP):** Lugar físico desde donde se controla, configura, recoge, almacena y procesa la información de una o más plazas de peaje, incluyendo uno o más Carriles IP/REV, bajo responsabilidad del Operador IP/REV (OP IP/REV). De

igual forma, permite que la información sea consultada de forma remota por las entidades del sector transporte o cualquier otro interesado, por solicitud previa; cuando requieran información de la concesión vial o del operador de peajes.

5. Cuenta IP/REV: Lugar donde se almacena la información del usuario IP/REV, de su vehículo, y de todas las transacciones de abonos, saldos, y descuentos por uso de los peajes IP/REV de dicho usuario IP/REV. Las cuentas IP/REV son ofrecidas por los Intermediadores IP/REV a los usuarios.

6. Marca de Certificación de Interoperabilidad: Marca de Certificación del Ministerio de Transporte, cuyo uso está limitado a los actores habilitados. Dicha marca de certificación identifica, mediante un signo distintivo, la interoperabilidad a nivel Nacional del servicio IP/REV prestado por el actor habilitado o autorizado.

7. Concesionario Vial: Persona natural o jurídica adjudicataria en un proceso de selección, con quien la entidad estatal adjudicante ha suscrito un contrato de concesión vial. El concesionario vial es responsable, ante la entidad estatal adjudicante, de la operación del peaje y del recaudo de la tasa de peaje por el uso de su infraestructura.

8. Interoperabilidad: Es la interacción e intercambio de datos de acuerdo con un método definido a través de la integración de tecnología y regulación normativa, entre dos o más sistemas (computadoras, medios de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnologías de la información).

9. Interoperabilidad de Peajes REV (IP/REV): Es la habilidad de los sistemas de Recaudo Electrónico Vehicular (REV) de interactuar e intercambiar datos entre ellos, de acuerdo a estándares internacionales definidos, a través de regulación normativa y la integración de tecnología, para realizar el pago de la tasa de peaje utilizando un único dispositivo TAG RFID por vehículo.

10. Lista Blanca: En el ámbito del sistema REV, hace referencia a los reportes de los dispositivos TAG RFID activos.

11. Lista Negra: En el ámbito del sistema REV, hace referencia a los reportes de los dispositivos TAG RFID invalidados.

12. Modelo de Interoperabilidad de Peajes: Define las condiciones requeridas por el REV, para que un usuario del sistema IP/REV pueda moverse entre Operadores IP/REV de peajes, que ofrecen funcionalidades similares, aun cuando dichos Operadores (OP IP/REV) pertenezcan a diferentes entidades.

13. Novedad: Cambio en relación con la información registrada en una base de datos existente. En el caso de las entidades Intermediadoras IP/REV, se refiere a la activación o inactivación de un dispositivo TAG RFID, cambio en el saldo asociado o cualquier otro cambio que incide en el sistema IP/REV. En el caso de los Operadores IP/REV, se refiere al reporte de cobros por un bien o servicio o cualquier cambio que incide en el sistema IP/REV.

14. Operador IP/REV (OP IP/REV): Persona jurídica, habilitada por el Ministerio de Transporte, responsable de operar y garantizar el funcionamiento de los peajes IP/REV, así como realizar el recaudo de la tasa de peaje por el uso de la infraestructura relacionada con el peaje a su cargo, proporcionando las herramientas, instalaciones, elementos (físicos y humanos) necesarios para el funcionamiento del sistema IP/REV. El Operador IP/REV (OP IP/REV) solo podrá ser persona natural si utiliza el mismo nombre de persona natural que aparece en su contrato de concesión vial. El Operador IP/REV (OP IP/REV) de persona natural también debe cumplir los requerimientos de habilitación del Ministerio de Transporte. Para la Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular, el Concesionario Vial podrá realizar la Operación de sus Peajes IP/REV de forma directa o mediante la subcontratación de un tercero, previa habilitación por parte del Ministerio de Transporte.

15. Paso: Tránsito satisfactorio de un vehículo por un carril REV o por un carril de pago manual. En el caso de vehículos exentos de pago, el paso corresponde al tránsito satisfactorio del automotor por una estación de peaje.

16. Plaza o Estación de peaje: Área o parte de una vía donde se gestiona el pago de una tarifa por el uso de la infraestructura. Este incluye todos los carriles del peaje y el lugar físico donde se controla la información de dichos carriles.

17. Intermediador IP/REV (INT IP/REV): Persona jurídica debidamente habilitada para la vinculación de usuarios IP/REV, entrega y activación del dispositivo TAG RFID, administración de la información de las cuentas de los usuarios asociadas a los dispositivos TAG RFID, y la gestión para el pago de la tasa de peaje a las entidades OP IP/REV por el uso de su infraestructura vial por parte de los clientes que tengan relación contractual con el INT IP/REV.

18. Reportes de TAG RFID: Hace referencia a la información de todos los dispositivos TAG RFID activados para IP/REV y que permite la conciliación y posterior compensación financiera, que deberá hacerse en forma directa entre los Intermediadores IP/REV y los Operadores IP/REV.

19. SiGAEE: Subsistema perteneciente al SINITT, para la Gestión de la Autenticación de Actores Estratégicos de ITS, cuyo objetivo principal es permitir a los actores debidamente habilitados el acceso al SINITT y a los subsistemas de gestión de ITS.

20. SiGD: Subsistema (componente del SINITT) para la Gestión de Disputas generadas durante la operación de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (ITS).

21. SiGT: Subsistema perteneciente al SINITT, para la Gestión de Transacciones de REV utilizando dispositivos TAG RFID y realiza la consolidación de la información de las transacciones REV realizadas por los usuarios (saldos, exentos, reducción de tarifas, entre otras funciones).

22. TAG RFID: Dispositivo electrónico que se emplea para Identificación por Radiofrecuencia (RFID). Para el caso específico de Recaudo Electrónico Vehicular en Peajes, se considera como la etiqueta de radiofrecuencia (TAG RFID) según el estándar ISO 18000-63, o aquel que lo modifique o actualice, previa adopción por parte del Ministerio de Transporte,

de conformidad a lo establecido en el Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

23. Validación: Proceso de evaluación de la interoperabilidad del recaudo electrónico vehicular que se realiza al final de la etapa de desarrollo o construcción, para determinar si el producto realiza las funciones descritas en el anexo técnico que se adopta mediante la Resolución y será publicado en la página web del Ministerio de Transporte link: https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/grupo_its cumpliendo con los requisitos que determine el propietario del sistema y el Ministerio de Transporte.

24. Verificación: Proceso de evaluación de productos que se realiza durante la etapa de desarrollo o construcción, para determinar si el producto cumple con los requisitos especificados en el anexo técnico que se adopta mediante la presente Resolución y será publicado en la página web del Ministerio de Transporte en el siguiente link: https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/grupo_its

Artículo 6°. Autoridad competente. Para todos los efectos a que haya lugar, el Servicio de Recaudo Electrónico Vehicular REV será regulado por el Ministerio de Transporte.

Artículo 7°. De la inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control de la prestación del Servicio de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV) estará a cargo en forma conjunta, por la Superintendencia Financiera; la Superintendencia de Comercio, Industria y Turismo; la Agencia Nacional del Espectro; la Comisión de Regulación de Comunicaciones; y la Superintendencia de Puertos y Transporte, de conformidad con las competencias de cada entidad o las entidades que hagan sus veces.

Parágrafo 1°. El control operativo de los vehículos usuarios del servicio IP/REV estará a cargo de las autoridades de tránsito, a través de su personal autorizado.

Artículo 8°. Actores del sistema IP/REV y sus roles. Los actores del sistema IP/REV pueden ejercer uno o varios de los siguientes roles:

1. Operador de peajes con Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV (OP IP/REV): Persona jurídica o natural que se desempeñe como concesionario vial, habilitada por el Ministerio de Transporte, responsable de operar y garantizar el funcionamiento de los peajes IP/REV, como el recaudo de la tasa de peaje por el uso de la infraestructura relacionada con el peaje a su cargo, proporcionando las herramientas, instalaciones, elementos (físicos y humanos) necesarios para el funcionamiento del sistema IP/REV. Los OP IP/REV solo podrán ser personas naturales si son concesionarios viales en cuyos contratos de concesión aparecen como personas naturales.

Para la Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular, el Concesionario Vial podrá realizar la Operación de sus Peajes IP/REV de forma directa o mediante la subcontratación de un tercero, previa habilitación por parte del Ministerio de Transporte.

Solo se podrá desempeñar el rol de operador si es previamente habilitado por el Ministerio de Transporte, de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente resolución y en el anexo técnico que se adopta mediante la presente resolución y será publicado en la página web del Ministerio de Transporte en el siguiente link https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/grupo_its, y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

2. Intermediador del Sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV (INT IP/REV): Persona jurídica debidamente habilitada para la vinculación de usuarios IP/REV, gestión para la entrega y activación del dispositivo TAG RFID, administración de la información de las cuentas IP/REV de los usuarios asociadas a los dispositivos TAG RFID y la gestión para el pago de la tarifa de peaje a las entidades OP IP/REV por el uso de su infraestructura vial por parte de los usuarios que tengan relación contractual con el INT IP/REV.

Podrán ejercer el rol de intermediador, las siguientes personas jurídicas:

Intermediador financiero: Es una entidad financiera que realiza las actividades previstas para el rol de intermediador, habilitada por la entidad competente para captar recursos del público con destinación al pago de la tasa de peaje por el uso de la infraestructura vial utilizando para ello el servicio de recaudo electrónico vehicular IP/REV. El Intermediador Financiero puede ofrecer a los usuarios cuentas IP/REV tipo prepago simple, prepago con cargo recurrente, pago inmediato y pospago, de acuerdo a lo descrito en la presente resolución.

Intermediador no-financiero: Persona jurídica que realiza las actividades previstas para el rol de intermediador, enlazando en su sistema de información la cuenta IP/REV del usuario a un producto financiero del mismo usuario para así realizar el pago de la tasa de peaje por el uso de la infraestructura vial utilizando para ello el servicio de recaudo electrónico vehicular IP/REV. El Intermediador no-financiero no realiza captación de recursos. El Intermediador no-financiero puede ofrecer a los usuarios cuentas IP/REV tipo pago inmediato y tipo pospago, de acuerdo a lo descrito en la presente Resolución.

Intermediador mixto: Persona jurídica que realiza las actividades previstas para el rol de intermediador, obligado para ello a establecer un contrato o convenio con una entidad financiera o con una entidad autorizada por la normatividad financiera colombiana, para que esta última realice la captación de recursos de los usuarios IP/REV. El Intermediador mixto puede ofrecer a los usuarios cuentas IP/REV tipo prepago simple, prepago con cargo recurrente, pago inmediato y pospago, de acuerdo a lo descrito en la presente resolución. Para usuarios que carecen de un producto financiero y utilicen una cuenta IP/REV de prepago simple, la entidad financiera del intermediador mixto y el mismo intermediador mixto, deben garantizar contractualmente que los dineros captados de los usuarios IP/REV únicamente pueden hacer egreso de la entidad financiera posterior al momento en que el usuario haga uso de los peajes IP/REV. En dicho momento de uso del peaje IP/REV o posteriormente, según acuerden las partes, se transferirá hacia la cuenta del Intermediador mixto hasta el 1% de la tasa de peaje por concepto de comisión de todos los servicios prestados al Operador IP/REV, y mínimo el 99% de los dineros de la tasa de peaje se transferirán hacia la cuenta del Operador IP/REV por concepto de uso de la infraestructura vial.

3. Redes de Interconexión de Actores Estratégicos (RED IP/REV): Persona jurídica cuya actividad principal consiste en la administración y operación de una o varias redes

de interconexión de sistemas de información, incluyendo los sistemas de pago de bajo valor definidas en el Decreto número 2555 de 2010, o las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan; debidamente habilitados de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente resolución, el anexo técnico que se adopta mediante la Resolución y será publicado en la página web del Ministerio de Transporte en el link: https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/grupo_its y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

El actor que desee asumir el rol de INT IP/REV, debidamente prehabilitado por el Ministerio de Transporte, podrá suscribir un contrato o convenio con una entidad RED IP/REV habilitada por el Ministerio de Transporte, para obtener su habilitación como INT IP/REV sin necesidad de suscribir contratos o convenios con cada OP IP/REV.

4. Usuario IP/REV: Persona natural o jurídica que suscriba un contrato con un INT IP/REV debidamente habilitado por la autoridad competente, para la prestación del servicio de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV.

Parágrafo. Solo se podrá desempeñar el rol Intermediador IP/REV si es previamente habilitado por el Ministerio de Transporte, de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente resolución y en el anexo técnico que se adopta mediante la presente resolución y será publicado en la página web del Ministerio de Transporte en el siguiente link https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/grupo_its. y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 9°. Derechos y obligaciones de los usuarios del servicio de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV. Los usuarios podrán utilizar los servicios de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV al suscribir un contrato con un INT IP/REV debidamente habilitado. Los usuarios del sistema IP/REV deberán ser informados del tratamiento que se dará a sus datos personales y de los derechos que les concede la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

De igual manera, es obligación del usuario asegurar que todos los datos que suministre al INT IP/REV al momento de suscribir el contrato, son correctos y veraces. Además, deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el dispositivo TAG RFID esté debidamente instalado y operativo al momento de su paso, de conformidad con los parámetros que le haya suministrado previamente el Intermediador (INT IP/REV).

Es obligación del usuario del sistema IP/REV pagar el importe o tasa correspondiente al bien o servicio que se le prestó a través del Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV, incluso si el sistema se encontraba fuera de línea al momento del uso de la infraestructura vial. En todo caso, el OP IP/REV deberá aportar los soportes y/o pruebas de los pasos de los usuarios, si este controvierte el cobro efectuado.

Artículo 10. Habilitación. Es la autorización que otorga el Ministerio de Transporte, a las personas naturales o jurídicas interesadas en ejercer un rol dentro del Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para desempeñar el rol al cual aplicó.

La habilitación es intransferible a cualquier título. En consecuencia, los beneficiarios de la misma no podrán ejecutar actos que impliquen que la actividad relacionada con el servicio de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV, se desarrolle por una persona diferente a la que inicialmente fue habilitada.

Artículo 11. Prehabilitación. Es la autorización condicionada que otorga el Ministerio de Transporte al Operador IP/REV, al Intermediador IP/REV y a las Redes de Interconexión IP/REV cuando cumplen con todos los requisitos de habilitación exceptuando la suscripción de los contratos o convenios con el resto de actores estratégicos del sistema IP/REV prehabilitados o habilitados en el momento de la solicitud.

Parágrafo 1°. La solicitud de prehabilitación presentada al Ministerio de Transporte deberá estar acompañada de una certificación expedida por un Organismo de Certificación debidamente acreditado de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de Normalización, Certificación y Metrología; y en donde conste el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el parágrafo 1° del artículo 12, y las del anexo técnico que se adopta mediante la presente resolución y será publicado en la página web del Ministerio de Transporte en el link https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/grupo_its. El Ministerio de Transporte reglamentará las certificaciones que se exigirán como requisito para la prehabilitación de un Operador IP/REV, Intermediador IP/REV y para las Redes de Interconexión IP/REV.

Parágrafo 2°. Los Intermediadores IP/REV y las Redes de Interconexión IP/REV prehabilitadas, podrán solicitar de forma voluntaria rangos para la fabricación de TAGS RFID. En caso de no conseguir la habilitación en un término no superior a seis meses calendario, contados a partir de la fecha de prehabilitación, los rangos autorizados durante la prehabilitación serán desactivados, siendo esto responsabilidad única y exclusiva del solicitante.

Artículo 12. Condiciones y requisitos para la habilitación. Para obtener la habilitación para ejercer un rol en el sistema, y de esta manera prestar el servicio de Peajes Interoperables con Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV, los solicitantes deberán demostrar y mantener los siguientes requisitos que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo primero de la presente Resolución:

Operador IP/REV (OP IP/REV):

1. Solicitud suscrita por el interesado o su representante legal, dirigida al Ministerio de Transporte.

2. RUT vigente expedido con una antelación máxima de treinta (30) días hábiles, que tenga dentro de su Actividad Económica CIU relacionada la sección H división 52, 5221 “Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre”.

3. Identificación del domicilio principal y relación de sus oficinas, señalando su dirección de notificación, misma que deberá concordar con lo registrado en el RUT.

4. Presentación del estado financiero de la última vigencia fiscal debidamente certificado y dictaminado con sus respectivas notas.

5. Demostrar que cuentan con un patrimonio líquido mínimo de tres mil trescientos (3300) SMMLV. El patrimonio solicitado se verificará con los estados financieros de la última vigencia fiscal.

6. Tener una infraestructura tecnológica e informática que cumpla con las especificaciones establecidas en el anexo técnico que se adopta mediante la presente resolución y será publicado en la página web del Ministerio de Transporte en el siguiente link https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/grupo_its

7. Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema, el Operador IP/REV deberá suscribir, en forma directa, contrato(s) o convenio(s) con todos los intermediadores IP/REV (INT IP/REV) prehabilitados o habilitados hasta la fecha de la solicitud, o con una de las redes de interconexión de actores estratégicos (RED IP/REV) prehabilitadas o habilitadas hasta la fecha la su solicitud, que incluyen a las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 2555 de 2010, o las demás disposiciones que la adicionen, modifiquen o sustituyan con base en la certificación de prehabilitación que para tal fin expida el Ministerio de Transporte. La comisión por todos los servicios prestados a los Operadores IP/REV, ya sea en calidad de Intermediador IP/REV o en calidad de Red de Interconexión IP/REV, no debe superar el uno por ciento (1%) de las tasas de peaje cobradas a los usuarios.

8. Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV, el OP IP/REV deberá tener la capacidad de poder leer cualquier dispositivo TAG RFID según el estándar ISO 18000-63, que haya sido entregado y activado por los INT IP/REV debidamente habilitados.

9. Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema, el Operador IP/REV deberá contar con un sistema de información capaz de establecer conexiones recurrentes con el SiGT o con el sistema o subsistema designado por el Ministerio de Transporte que cumpla con su función, una vez se creen los mismos. En ningún caso los sistemas OP IP/REV podrán tener conexiones directas con los sistemas de información de los INT IP/REV o de los RED IP/REV, sino a través del SiGT, excepto cuando exista autorización previa del Ministerio de Transporte para sustituir temporalmente al SiGT hasta su creación o en eventualidades de fallas de dicho sistema.

10. Contar con un sistema de información de seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y resolución de disputas capaz de establecer conexiones recurrentes con el SiGD o el sistema o subsistema designado por el Ministerio de Transporte para que cumpla con su función, una vez se creen los mismos.

11. Habilitarse como usuario ante la plataforma SiGAAE del Ministerio de Transporte, o el sistema o subsistema designado por el Ministerio de Transporte para que cumpla con su función, una vez se creen los mismos.

Intermediador del Sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV (INT IP/REV)

1. Solicitud dirigida al Ministerio Transporte, suscrita por su representante legal. En todo caso, el rol de Intermediador del Sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV (INT IP/REV) solo podrá ser ejercido por una persona jurídica legalmente constituida como sociedad anónima, sociedades por acciones simplificadas, asociación de naturaleza cooperativa, o una entidad administradora de un sistema de pago de bajo valor.

2. Certificado de existencia y representación legal, expedido con una antelación máxima de treinta (30) días hábiles, en donde conste que se trata de sociedades anónimas, asociaciones de naturaleza cooperativa, o una entidad administradora de un sistema de pago de bajo valor.

3. Identificación del domicilio principal y relación de sus oficinas, señalando su dirección y adjuntando el certificado del registro mercantil de los establecimientos de comercio donde desarrollará la actividad.

4. Contar con un sistema de información que permita registrar y administrar los datos relacionados con los dispositivos TAG RFID y sus usuarios, los abonos realizados a las cuentas tipo prepago (con sus respectivos saldos) y su estado (activo/inactivo), el estado (activo/inactivo) de los dispositivos TAG RFID asociados a cuentas de tipo pospago, y demás información relacionada con sus usuarios y contratos respectivos.

5. Demostrar que cuentan con un patrimonio líquido mínimo de siete mil setecientos (7700) SMMLV. El patrimonio solicitado se verificará con los estados financieros de la última vigencia fiscal.

6. Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema, el INT IP/REV deberá tener una infraestructura tecnológica e informática que cumpla con las especificaciones establecidas en el anexo técnico que se adopta mediante la presente resolución y será publicado en la página web del Ministerio de Transporte en el siguiente link https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/grupo_its, y que permita la conexión con SiGT o con la entidad designada por el Ministerio de Transporte para que asuma sus funciones. La conexión con el SiGT debe ser de forma directa o a través del sistema de información de la RED IP/REV. En ningún caso los sistemas INT IP/REV podrán tener conexiones directas con los sistemas de información de los Operadores IP/REV (OP IP/REV) sino a través del SiGT, excepto cuando exista autorización previa del Ministerio de Transporte para sustituir temporalmente al SiGT hasta su creación o en eventualidades de fallas de dicho sistema.

7. Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema, el INT IP/REV deberá demostrar que tiene contrato(s) o convenio(s) con todos los OP IP/REV que se encuentren prehabilitados o habilitados por el Ministerio de Transporte en el momento de la solicitud, o con una RED IP/REV que haya sido prehabilitada o habilitada como tal por el Ministerio de Transporte en el momento de la solicitud. La comisión por todos los servicios prestados a los Operadores IP/REV, ya sea en calidad de Intermediador IP/REV o en calidad de Red de Interconexión IP/REV, no debe superar el uno por ciento (1%) de las tasas de peaje cobradas a los usuarios.

8. En caso de realizar captación de dinero, deberá cumplir con la Circular Externa No. 029 de 2014, Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, o las disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema, el INT IP/REV deberá contar con un sistema de información capaz de establecer conexiones recurrentes con el SiGT o el sistema o subsistema designado por el Ministerio de Transporte para que cumpla con su función, una vez se creen los mismos. La conexión con el SiGT debe ser de forma directa o a través del sistema de información de la RED IP/REV.

10. Contar con un sistema de información de seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y resolución de disputas capaz de establecer conexiones recurrentes con el SiGD o el sistema o subsistema designado por el Ministerio de Transporte para que cumpla con su función, una vez se creen los mismos. La conexión con el SiGD solo puede ser de forma directa, excepto en los casos que el Intermediador IP/REV se haya habilitado presentando como requisito un contrato con una RED IP/REV para garantizar la interoperabilidad descrita en el punto 7.

11. Habilitarse como usuario ante la plataforma SIGAAE del Ministerio de Transporte, o el sistema o subsistema designado por el Ministerio de Transporte para que cumpla con su función, una vez se creen los mismos.

Red de Interconexión de Actores Estratégicos IP/REV (RED IP/REV):

1. Solicitud dirigida al Ministerio Transporte, suscrita por su representante legal. En todo caso, el rol de Red de Interconexión de Actores Estratégicos IP/REV (RED IP/REV) solo podrá ser ejercido por una persona jurídica legalmente constituida como sociedad anónima, sociedades por acciones simplificadas, asociación de naturaleza cooperativa, o una entidad administradora de un sistema de pago de bajo valor.

2. Certificado de existencia y representación legal, expedido con una antelación máxima de treinta (30) días hábiles.

3. Identificación del domicilio principal y relación de sus oficinas, señalando su dirección y adjuntando el certificado del registro mercantil de los establecimientos de comercio donde desarrollará la actividad.

4. Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema, la Red de Interconexión RED IP/REV deberá contar con un sistema de información que permita la interconexión y el intercambio de datos relacionados con los dispositivos TAG RFID, transferidos entre los Intermediadores IP/REV (INT IP/REV) y Operadores IP/REV (OP IP/REV) habilitados, a través del SiGT. En ningún caso los sistemas RED IP/REV podrán tener conexiones directas con los sistemas de información de los Operadores IP/REV (OP IP/REV) sino a través del SiGT, excepto cuando exista autorización previa del Ministerio de Transporte para sustituir temporalmente al SiGT hasta su creación o en eventualidades de fallas de dicho sistema.

5. Demostrar que cuentan con un patrimonio líquido mínimo de siete mil setecientos (7700) SMMLV. El patrimonio solicitado se verificará con los estados financieros de la última vigencia fiscal.

6. Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema, la Red de Interconexión IP/REV (RED IP/REV) deberá tener una infraestructura tecnológica e informática que cumpla con las mismas especificaciones establecidas para el SiGT en el anexo técnico que se adopta mediante la presente resolución y será publicado en la página web del Ministerio de Transporte en el siguiente link https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/grupo_its y que permita la conexión con el SiGT o la entidad designada por el Ministerio de Transporte para que asuma sus funciones.

7. Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema, la RED IP/REV deberá demostrar que tiene contrato(s) o convenio(s) con todos los OP IP/REV que estén prehabilitados o habilitados por el Ministerio de Transporte en el momento de la solicitud. La comisión por todos los servicios prestados a los Operadores IP/REV, ya sea en calidad de Intermediador IP/REV o en calidad de Red de Interconexión IP/REV, no debe superar el uno por ciento (1%) de las tasas de peaje cobradas a los usuarios.

8. En caso de ser un Sistema de Pago de Bajo Valor, deberá cumplir con la Circular Externa número 029 de 2014, Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, o las disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema, la Red de Interconexión IP/REV deberá contar con un sistema de información capaz de establecer conexiones recurrentes con el SiGT o el sistema o subsistema designado por el Ministerio de Transporte para que cumpla con su función, una vez se creen los mismos.

10. Contar con un sistema de información de seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y resolución de disputas capaz de establecer conexiones recurrentes con el SiGD o el sistema o subsistema designado por el Ministerio de Transporte para que cumpla con su función, una vez se creen los mismos.

11. Habilitarse como usuario ante la plataforma SiGAAE del Ministerio de Transporte, o el sistema o subsistema designado por el Ministerio de Transporte para que cumpla con su función, una vez se cree el mismo.

Parágrafo 1°. El Operador IP/REV, Intermediador IP/REV y las Redes de Interconexión IP/REV podrán solicitar una certificación de prehabilitación previamente cumplidos los requisitos de habilitación contenidos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del presente artículo, respectivamente.

Parágrafo 2°. El Intermediador del Sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV (INT IP/REV) con el objeto de garantizar la prestación de un servicio continuo y regular, deberá suscribir en todo caso, contrato con el usuario para la prestación del servicio, en donde se deberán tener en cuenta como mínimo las siguientes condiciones:

1. Se considerarán inicialmente cuatro (4) modalidades para el pago utilizando el Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV y otras que autorice el Ministerio de Transporte, a saber:

Prepago simple: El INT IP/REV activa al usuario un dispositivo TAG RFID sin estar amparado por un producto financiero, haciendo una recarga mínima (definida en su contrato), utilizando dicho dispositivo hasta que se haga necesaria realizar una nueva recarga. Estos dineros captados deberán estar en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En todo caso, los dineros captados a los usuarios que utilicen una cuenta IP/

REV de prepago simple, solo podrán hacer egreso en el momento del uso de los peajes IP/REV por parte del usuario.

Prepago con cargo recurrente: El INT IP/REV activa al usuario un dispositivo TAG RFID indicando sus datos de facturación, además el límite que desee recargar con cargo a su tarjeta de crédito u otro producto financiero, y dicha recarga será automática una vez que el saldo restante llegue a un valor predeterminado por el usuario. En este caso el usuario debe contar con un producto financiero que respalde la activación y el uso del dispositivo TAG RFID.

Pago Inmediato: El INT IP/REV activa al usuario un dispositivo TAG RFID cargando inmediatamente el costo de los pasos a su tarjeta de crédito u otro producto financiero en el momento del uso del peaje IP/REV. En este caso específico, el usuario debe contar con un producto financiero que respalde la activación y uso del dispositivo TAG RFID.

Pospago: El INT IP/REV activa al usuario un dispositivo TAG RFID cargando el costo de los pasos a su tarjeta de crédito u otro producto financiero después de un periodo determinado en su contrato. En este caso específico, el usuario debe contar con un producto financiero que respalde la activación y uso del dispositivo TAG RFID.

El usuario IP/REV podrá cambiar de modalidad de pago con un mismo Intermediador IP/REV conservando el mismo dispositivo TAG RFID que le fue asignado. Si el usuario desea cambiar de Intermediador IP/REV, deberá cancelar primero su cuenta IP/REV para que la desactivación de su dispositivo TAG RFID sea efectiva, antes de poder vincularse a otro Intermediador IP/REV que le asignará un nuevo dispositivo TAG RFID.

En el contrato se debe establecer el mecanismo mediante el cual se garantizará que el usuario pagará la tarifa de peaje cuando efectivamente se haya realizado su paso por el carril IP/REV en caso que el sistema se encuentre fuera de línea.

2. Se debe establecer como condición para la prestación del servicio, un período de espera de máximo 6 horas entre la activación del dispositivo TAG RFID o la recarga de la cuenta asociada, y el uso del dispositivo TAG RFID para la prestación efectiva del servicio de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV.

3. Se deben establecer entre las obligaciones a cargo del usuario el mantenimiento y perfecto estado de la placa del vehículo, sin ningún elemento, pintura, adición o modificación que pueda alterar de alguna manera la correcta identificación del vehículo a través de su placa.

4. Se debe establecer como obligación del usuario que cuando se trate de un vehículo tipo tractocamión con cabezote y tráiler, se debe registrar la categoría del vehículo según la configuración que el usuario utilice de forma frecuente.

5. El Operador IP/REV (OP IP/REV) podrá recategorizar automáticamente en su sistema la configuración de un vehículo tractocamión de acuerdo a la configuración utilizada en los 3 últimos pasos por el carril IP/REV que haya realizado el usuario.

6. Se debe informar a los usuarios los peajes en donde puede utilizar el servicio de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV y cualquier cambio que se produjera en la cobertura.

7. Establecer las condiciones para la provisión y correcta instalación del dispositivo TAG RFID en el vehículo de los usuarios del sistema IP/REV, de tal manera que se garantice que al momento de la instalación del mismo, se ajustan a los requisitos técnicos necesarios para su apropiada lectura.

8. El INT IP/REV debe tener disponibles para el usuario al menos dos canales de comunicación para que el usuario pueda consultar el estado de su cuenta y saldo disponible en el sistema IP/REV. Adicionalmente, el INT IP/REV debe notificar mediante alertas a través de dos canales de comunicación, el valor del peaje y el saldo de la cuenta del usuario en un tiempo no mayor a 10 minutos después que el usuario utilice el servicio IP/REV.

9. Se debe informar al usuario mediante al menos dos canales de comunicación el proceso para instaurar peticiones, quejas y reclamos (PQR) sobre el Sistema IP/REV o su uso.

Parágrafo 3°. El Intermediador del Sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV (INT IP/REV) deberá suscribir en todo caso y de forma directa, un contrato con cada OP IP/REV para la prestación del servicio o utilizando una Red de Interconexión IP/REV (RED IP/REV) habilitada incluyendo los denominadas sistemas de pago de bajo valor de conformidad con lo establecido en el Decreto número 2555 de 2010, en donde se deberán tener en cuenta como mínimo las siguientes condiciones:

1. Condiciones uniformes para la resolución en forma directa de discrepancias y disputas generadas entre los actores por la utilización del sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV

2. Condiciones uniformes para el intercambio de información entre el OP IP/REV y el INT IP/REV, y entre el OP IP/REV y la RED IP/REV

3. Condiciones uniformes para la conciliación y compensación directa entre los actores estratégicos por la utilización del sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV.

4. Condiciones uniformes para la resolución de disputas iniciadas por cualquiera de los actores estratégicos y usuarios del sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV.

5. Condiciones uniformes para la colaboración con los OP IP/REV y con los demás actores del Sistema IP/REV, respetando la normatividad que los regule, con el fin de evaluar la idoneidad de los componentes de interoperabilidad para su uso en los lugares donde preste el servicio.

Artículo 12. *Trámite de la habilitación.* La habilitación se otorgará o negará mediante acto administrativo debidamente motivado, en el que se especificará el nombre, razón social o denominación, domicilio principal, correo electrónico y la información de usuario mediante la cual se identifica el actor en el SIGAAE.

Artículo 13. *Vigencia de la habilitación.* La habilitación para la prestación del servicio de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV y de esta manera ejercer un rol en el sistema IP/REV será indefinida, mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas.

El Ministerio de Transporte con el objeto de garantizar la interoperabilidad del sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV, podrá verificar en cualquier momento que se

mantengan las condiciones que dieron lugar a la habilitación y en caso que no se cumplan, declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que la otorgó.

Artículo 14. *Habilitación en múltiples roles.* Los actores del sistema, que pretendan habilitarse para ejercer más de un rol en el sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV, deberán ajustar su patrimonio, funcionamiento, operación y estructura, de conformidad con las condiciones de habilitación de cada rol.

Artículo 15. *Suministro de información.* Los actores estratégicos que están debidamente habilitados para ejercer un rol en el sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV, deberán tener permanentemente a disposición de las entidades de inspección, vigilancia y control relacionadas en el artículo 7° de la presente resolución y demás autoridades de control, las estadísticas, libros, documentos y demás productos que permitan validar y verificar los requisitos e información suministrada.

Artículo 16. *Seguros.* Los actores estratégicos que están debidamente habilitados para ejercer un rol en el sistema de Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV, deben tomar por cuenta propia con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare riesgos inherentes a la actividad de cada actor estratégico, de conformidad con el rol que ejerza, la cual deberá cumplir al menos los siguientes riesgos:

Operador IP/REV (OP IP/REV):

Seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare los daños y perjuicios que se causen a terceros, entendiéndose también por terceros cualquier vehículo o sus pasajeros, como consecuencia de su actividad como Operador IP/REV. El Ministerio de Transporte tendrá calidad de asegurado. Este seguro debe cubrir un monto mínimo de mil quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.500 smmlv) y debe contar con el amparo de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. En caso de ya poseer pólizas de seguros, presentar una certificación en la que conste las coberturas y los montos exigidos.

Cuando el Operador sea el Concesionario Vial, el requisito de este seguro podrá ser acreditado a través del seguro de responsabilidad civil que debe tomar el Concesionario Vial en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto número 1082 de 2015 o de la norma que lo modifique, siempre y cuando en el seguro se ampare la responsabilidad derivada de su actividad como Operador IP/REV.

El Operador IP/REV debe mantener vigente este seguro durante el periodo de su habilitación como Operador.

INTERMEDIADOR IP/REV (INT IP/REV)

Seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare los daños y perjuicios que se causen a los usuarios como consecuencia de su actividad como Intermediador IP/REV por un monto mínimo de quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 smmlv). El Ministerio de Transporte tendrá calidad de asegurado. Adicionalmente debe adquirir una póliza de seguros de infidelidad y riesgos financieros que cubra los actos dolosos de sus empleados que se conviertan en pérdidas económicas para el asegurado, por un monto mínimo de mil quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.500 smmlv). En caso de ya poseer pólizas de seguros, presentar una certificación en la que conste las coberturas y los montos exigidos.

El Intermediador IP/REV debe mantener vigente este seguro durante el periodo de la correspondiente habilitación.

RED DE INTERCONEXIÓN IP/REV (RED IP/REV)

Seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare los daños y perjuicios que se causen a los usuarios como consecuencia de su actividad como Red de Interconexión IP/REV por un monto mínimo de quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 smmlv). El Ministerio de Transporte tendrá calidad de asegurado. Adicionalmente debe adquirir una póliza de seguros de infidelidad y riesgos financieros que cubra actos dolosos de sus empleados que se conviertan en pérdidas económicas para el asegurado, por un monto mínimo de mil quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.500 smmlv). En caso de ya poseer pólizas de seguros, presentar una certificación en la que conste las coberturas y los montos exigidos.

La Red de Interconexión debe mantener vigente este seguro durante el periodo de la correspondiente habilitación.

Artículo 17. *Marca de interoperabilidad.* Los actores estratégicos que están debidamente habilitados para ejercer un rol en el sistema IP/REV deberán utilizar la marca de certificación del Ministerio de Transporte, en un lugar visible del carril IP/REV, y de forma física o electrónica para indicar los lugares donde se realicen los pagos y recargas del servicio IP/REV, o en los lugares y en las formas definidas por el Ministerio de Transporte para tal fin. Esto con el fin que los usuarios puedan distinguir fácilmente los peajes que pertenecen al Sistema IP/REV.

Artículo 18. *Régimen de transición.* A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los actores estratégicos que tienen actualmente implementado un sistema de recaudo electrónico vehicular REV, contarán con un tiempo de dieciocho (18) meses para cumplir con las condiciones definidas en el presente acto administrativo. Durante el régimen de transición, los actores estratégicos que tengan un sistema REV implementado podrán continuar proveniente su servicio y paralelamente ofrecer el servicio IP/REV hasta que el periodo de transición finalice.

Artículo 19. *Vigencia.* La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0004304 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se deroga el ordinal 2 del literal i) del artículo 6° de la Resolución número 3768 de 2013 modificado por el artículo 8° de la Resolución número 3318 de 2015.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, por el artículo 20 de la Ley 1702 de 2013, el artículo 54 del Decreto número 1471 de 2014, el artículo 30 de la Ley 1753 de 9 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010, señala que le corresponde al Ministerio de Transporte, como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito;

Que los servicios que prestan Centros de Diagnóstico Automotor, en adelante Organismos de apoyo, están habilitados por el Ministerio de Transporte y sometidos a la reglamentación que este expida;

Que como organismos de apoyo, los Centros de Diagnóstico Automotor certifican la revisión técnico mecánica y de gases contaminantes de los vehículos que circulan por las vías del país;

Que el artículo 2.2.1.7.8.6 del Decreto número 1595 de 2015, otorgó la facultad a las entidades reguladoras, en este caso Ministerio de Transporte, para reglamentar las condiciones de las pólizas correspondientes en cada reglamento técnico;

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 3318 de 2015, mediante la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y rangos de precios al usuario para servicios prestados por Centros de Diagnóstico Automotor;

Que con el fin de contar con un mecanismo que permita poner en funcionamiento el aplicativo necesario para controlar la expedición de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, de que trata el ordinal 2° del literal i) del artículo 6° de la Resolución número 3768 de 2013 modificado por el artículo 8° de la Resolución número 3318 de 2015, se hace necesario derogar este requisito;

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página Web del Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, desde el 15 de octubre de 2015, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas;

Que los comentarios recibidos fueron evaluados, atendidos y los pertinentes fueron incorporados en el contenido del presente acto administrativo;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Derogar el ordinal 2 del literal i) del artículo 6° de la Resolución número 3768 de 2013 modificado por el artículo 8° de la Resolución número 3318 de 2015.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0004305 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se emite concepto vinculante previo al establecimiento de dos estaciones de peaje denominadas Fuemia y Mutatá, se establecen las tarifas a cobrar en las estaciones de peaje Fuemia, Mutatá, Cirilo, Chaparral y Río Grande.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002 y el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 105 de 1993, “*por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones* en su artículo 21 (modificado parcialmente por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002) establece:

“*Artículo 2.1. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.*

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán exclusivamente para ese modo de transporte”;

Que el Decreto número 087 de 2011, “*por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias*” estableció en los numerales 6.14 y 6.15 del artículo 6°:

“*6.14. Emitir, en su calidad de suprema autoridad del Sector Transporte y del Sistema Nacional de Transporte, concepto vinculante previo al establecimiento de los peajes que deban cobrarse por el uso de las vías a cargo de la Nación, los departamentos, distritos y municipios.*

6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo”;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 4° del Decreto número 4165 de 2011, establecen que le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y relacionados, así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas contribución de valorización y otras modalidades “de retribución por el diseño, construcción, operación, explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo;

Que igualmente el numeral 15 del artículo 11 ibídem, dispone que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), debe solicitar al Ministerio de Transporte, concepto vinculante previo para la instalación de las casetas de peaje y otros puntos de cobro de acuerdo con las normas vigentes y las políticas del Ministerio para los proyectos a cargo de la misma;

Que de conformidad con los artículos 1° y 5° de la Ley 1508 de 2012, las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica, en el cual se involucran mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad, el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio; igualmente se contempla el derecho al recaudo de recursos de explotación económica del proyecto;

Que en el Proyecto Autopista al Mar 2, se contempla una longitud total estimada origen - destino de 254 kilómetros y su recorrido discurre íntegramente en el departamento de Antioquia. Las obras objeto de esta concesión consisten en un mejoramiento de la calzada actual en el tramo Cañasgordas-Uramita, construcción de una nueva vía en calzada sencilla (Variante de Fuemia), operación y mantenimiento de la vía actual entre Uramita y Dabeiba, mejoras puntuales de trazado y rehabilitación del resto del tramo de Dabeiba-Mutató, rehabilitación del tramo Mutató-El Tigre y mantenimiento y operación de El Tigre a Necoclí. También se incluyen: Los 45.8 km en doble calzada de Turbo-El Tigre y el paso entre “El Dos” y “El Tres”, pactados en los Otrosí números 2 y 7 del Contrato de Concesión número 008 de 2010. Que esta infraestructura deberá ser operada y mantenida por el concesionario durante toda la ejecución del Contrato de Concesión;

Que de conformidad con el estudio de estructuración realizado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), hay viabilidad técnica y socioeconómica para la instalación de las estaciones de peaje denominadas, Fuemia ubicada en el PK 6+200 y Mutató ubicada en el PK 38+500 (equivalente al PR 61 de la ruta 6202);

Que posterior a la culminación de las Unidades Funcionales 2 y 3 se instalará la Estación de Peaje denominada Fuemia, y una vez terminada la Unidad Funcional 4 se instalará la Estación de Peaje denominada Mutató. Las tarifas a cobrar y el procedimiento respectivo serán los que se establecen en la Parte Especial del Contrato de Concesión que se suscriba de conformidad con el Proceso Licitatorio número VJ-VE -APP-IPB-002-2015;

Que este proyecto cuenta con la estación de peaje en el tramo Turbo-Necoclí con cobro bidireccional: denominada Cirilo, ubicada en el PR18+070, la estación de peaje del tramo Turbo-El Tigre, conformada: ir por dos puntos de cobro unidireccionales que se denominan Chaparral ubicada en el PK 53+715 (en frente a la abscisa PR 48+400 correspondiente a la calzada existente) y Río Grande ubicada en el PR 23+300;

Que las estaciones de peaje inmediatamente referidas se encuentran comprendidas dentro del Contrato de Concesión número 008 de 2010, cuyo objeto es: “*el otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 105 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto número 2474 de 2008, y el Decreto número 4533 de 2008 el Concesionario, realice por 20 su cuenta y riesgo, las obras necesarias para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y conservación, según corresponda, del Proyecto Vial Transversal de las Américas y la preparación de los estudios y diseños definitivos, la gestión predial, social y ambiental, la obtención y/o modificación de licencias ambientales, la financiación, la operación y el mantenimiento de las obras, en el Corredor Vial “Transversal de las Américas Sector 1”, denominado Corredor Vial del Caribe”*;

Que la entrega al concesionario del Proyecto Autopista al Mar 2 de las estaciones de peaje se hará una vez se haya culminado el contrato de concesión y se hayan revertido la estación de peajes a la Nación. Que las tarifas son el resultado de un estudio de tráfico específico realizado para el proyecto, donde las mismas son utilizadas para determinar los ingresos dentro del modelo financiero de estructuración de la concesión, lo cual constituye uno de los parámetros necesarios para la obtención de la viabilidad financiera del proyecto;

Que como consecuencia de lo anterior, la oficina de Regulación Económica el día 14 de abril de 2015, emitió concepto vinculante previo favorable, para el establecimiento de las estaciones de peaje denominadas, Fuemia ubicada en el PK 6+200 y Mutató ubicada en el PK 38+500 (equivalente al PR 61 de la ruta 6202), este concepto fue complementado mediante el Oficio número 20151410144103 emitido el día 20 de agosto de 2015;

Que el contenido de la presente resolución, fue publicado en la página web de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), desde el 2 de octubre del 2015 en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8° del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas;

Que los comentarios recibidos fueron evaluados, atendidos y los pertinentes fueron incorporados en el contenido del presente acto administrativo;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Emitir concepto vinculante previo favorable, para el establecimiento de dos estaciones de peaje denominadas Fuemia ubicada en el PK 6+200 y Mutató ubicada en el PK 38+500 (equivalente al PR 61 de la ruta 6202).

Artículo 2°. La estación de peaje del tramo Turbo-Necoclí con cobro bidireccional denominada Cirilo, ubicada en el PR18+070 y la estación de peaje del tramo Turbo-El

Tigre, conformada por dos puntos de cobro unidireccionales que se denominan Chaparral ubicada en el PK 53+715 (en frente a la abscisa PR 48+400 correspondiente a la calzada existente) y Río Grande ubicada en el PR 23+300, las cuales se encuentran comprendidas dentro del Contrato de Concesión número 008 de 2010, en el corredor vial “*Transversal de las Américas Sector 1*”, continuarán siendo operadas por el concesionario actual hasta la entrega de las estaciones de peaje, lo cual se hará una vez culmine el citado contrato y se hayan revertido las estaciones de peaje a la Nación.

Parágrafo 1°. Las tarifas que se cobrarán en la estaciones de peaje denominadas: Cirilo, ubicada en el tramo Turbo-Necoclí con cobro bidireccional, y en la estación de peaje del tramo Turbo-El Tigre, conformada por dos casetas de control con cobro unidireccional denominadas Chaparral y Río Grande, seguirán siendo las mismas que se establecieron en la Resolución número 3598 del 29 de septiembre de 2015 hasta tanto no se termine el Contrato Concesión número 008 de 2010 y en consecuencia se entreguen las estaciones de peaje y el recaudo al concesionario del Proyecto Autopista al Mar 2, y se cumplan los presupuestos establecidos en el Contrato de Concesión que se suscriba de conformidad con el Proceso Licitatorio número VJ-VE-APP-IPB-002-2015.

Parágrafo 2°. Una vez culmine el Contrato Concesión número 008 de 2010 y en consecuencia se entreguen las estaciones de peaje y el recaudo al concesionario del Proyecto Autopista al Mar 2, las tarifas establecidas en la Resolución número 3598 del 29 de septiembre de 2015, se ajustarán y actualizarán de acuerdo a lo establecido por el Contrato de Concesión que se suscriba de conformidad con el Proceso Licitatorio número VJ-VE-APP-IPB-002-2015 y deberán ser ajustadas a la centena más cercana, con el fin de facilitar el recaudo por parte del Concesionario.

Artículo 3°. Establecer el cobro de tarifas de peaje de tránsito vehicular de las estaciones de peaje denominadas Fuemia ubicada en el PK 6+200 y Mutató ubicada en el PK 38+500 (equivalente al PR 61 de la ruta 6202):

Estación de peaje de Fuemia

CATEGORÍAS	DESCRIPCIÓN	TARIFAS (pesos 2012) (no incluye FSV)
Categoría I	Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla	\$12.700
Categoría II	Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta	\$15.800
Categoría III	Vehículos pequeños de dos ejes	\$15.800
Categoría IV	Vehículos grandes de dos ejes	\$15.800
Categoría V	Vehículos de tres y cuatro ejes	\$37.700
Categoría VI	Vehículos de cinco ejes	\$47.400
Categoría VII	Vehículos de seis ejes o más	\$54.800

Estación de peaje de Mutató

CATEGORÍAS	DESCRIPCIÓN	TARIFAS (pesos 2012) (no incluye FSV)
Categoría I	Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla	\$8.700
Categoría II	Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta	\$10.900
Categoría III	Vehículos pequeños de dos ejes	\$10.900
Categoría IV	Vehículos grandes de dos ejes	\$10.900
Categoría V	Vehículos de tres y cuatro ejes	\$26.200
Categoría VI	Vehículos de cinco ejes	\$32.900
Categoría VII	Vehículos de seis ejes o más	\$38.000

Parágrafo. El derecho a percibir la retribución por recaudo de peajes, solo procederá una vez se cumplan los presupuestos establecidos en el Contrato de Concesión que se suscriba de conformidad con el Proceso Licitatorio número VJ-VE-APP-IPB-002-2015.

Artículo 4°. A las tarifas de peaje de que trata la presente resolución, se le adicionará el valor de doscientos pesos (\$200) por cada vehículo que transite por las estaciones de peaje, destinado a adelantar programas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación.

Artículo 5°. Las tarifas de peajes de que trata la presente resolución se actualizarán cada año, de acuerdo a lo establecido al contrato de concesión que se suscriba del Proceso Licitatorio número VJ-VE-APP- IPB-002-2015 y deberán ser ajustadas a la centena más cercana, con el fin de facilitar el recaudo por parte del Concesionario.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0004306 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se modifica la Resolución número 0000856 de 9 de abril de 2015, mediante la cual se transfiere a título gratuito un predio localizado en la Carrera 15 N° 17N-31, del municipio de Armenia, departamento de Quindío, identificado con la Matricula Inmobiliaria número 280-78025 y referencia catastral 01-07-077-0025-000, al Instituto Nacional de Vías (“Invias”), identificado con el NIT. 800.215.807-2.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 12 de la Ley 105 de 1993, el Decreto número 2171 de 1992, artículo 55, numeral 6.23 del Decreto número 087 de 2011, y Decreto número 2618 del 20 de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto número 3129 de 1954, se suprimió el Consejo Administrativo de Ferrocarriles Nacionales, y se creó en cambio la Empresa denominada Ferrocarriles Nacionales de Colombia, destinada a administrar los ferrocarriles de propiedad de la Nación, sobre una base comercial y a cuyo cargo estará la organización, administración, desarrollo y mejoramiento de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia;

Que el artículo 1° del Decreto número 2378 de 1955, dispone que el Ministro de Obras Públicas, en nombre de la Nación, mediante escritura pública hará el traspaso a la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia de todos los bienes raíces que hacían parte del activo patrimonial que administraba el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, sea que tales bienes, hayan sido adquiridos por la Nación, por el Consejo Administrativo o por los Ferrocarriles Nacionales que administraba esta última entidad;

Que con el fin de enfrentar la crisis del sector ferroviario, mediante la Ley 21 de 1988, se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir las normas conducentes a la organización y recuperación del sistema de transporte ferroviario nacional, autorizándolo para crear nuevas entidades, liquidar las existentes y adscribir sus servicios a otras personas jurídicas;

Que como consecuencia de lo anterior, mediante Decreto número 1586 del 18 de julio de 1989, se ordenó la liquidación de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en orden a obtener una operación eficiente a los menores costos posibles y cumplir así con los objetivos previstos por el legislador, proceso que no podía ser superior a tres años;

Que el artículo 25 del citado Decreto número 1586 de 1989, señala:

“Artículo 25. Los bienes de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación gozarán de especial protección del Estado. Las operaciones que sobre los mismos se realicen, tales como avalúos y ventas, se harán con criterio estrictamente comercial y no podrán ser objeto de donación o utilizados con fines distintos de los de la liquidación de la Empresa y prestación del servicio público de transporte ferroviario a su cargo; no obstante, los que a juicio de la Junta Liquidadora no requiera la Empresa para tales propósitos, podrán ser transferidos a título gratuito exclusivamente como se señala a continuación:

a) A la Nación, para que se destinen como aportes a la empresa que se cree con el objeto de mantener, mejorar, extender y explotar la red férrea nacional, sus anexidades y equipos;

b) A la Nación, para que se destinen como aportes de esta en la sociedad de economía mixta que se cree para atender el servicio público de transporte ferroviario, y

c) Al fondo que se cree para atender el pasivo social al cual se refiere el artículo 7° de la Ley 21 de 1988, para que este los comercialice con dicho fin”;

Que mediante el Decreto número 1588 del 18 de julio de 1989, se creó la Empresa Colombiana de Vías Férreas (“Ferroviás”), la cual tenía como objeto principal la de mantener, mejorar, rehabilitar, extender, modernizar, explotar, dirigir y administrar la red férrea nacional con las anexidades y equipos que la constituyen, así como la de regular y controlar, en general la operación del sistema ferroviario nacional;

Que el literal f), artículo 10 del Decreto número 1588 de 1989, dispuso que el patrimonio de la Empresa Colombiana de Vías Férreas, estaba constituido así:

“... f) Los bienes que obtenga por cualquier otro concepto y a cualquier título”;

Que la Ley 105 del 30 de 1993, y la Ley 187 de 1995, facultan al Ministerio de Transporte, para que en nombre y representación de la Nación, efectuara los trasposos de bienes inmuebles de propiedad de la liquidada Empresa de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación, a la Empresa Colombiana de Vías Férreas (“Ferroviás”) o Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia;

Que mediante Decreto número 1791 del 26 de junio de 2003, se dispuso la liquidación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas (“Ferroviás”), proceso que debería adelantarse a más tardar dentro de un plazo de dos (2) años; plazo que fue ampliado por el Decreto número 2089 del 21 de junio de 2005, hasta el 26 de junio de 2007; nuevamente prorrogado hasta el 27 de junio de 2008, mediante Decreto número 2386 del 25 de junio de 2007;

Que los numerales 13.1 y 13.3, del artículo 13 del Decreto número 1791 del 26 de junio de 2003, señalan que son bienes y recursos excluidos del patrimonio a liquidar de la Empresa Colombiana de Vías Férreas “Ferroviás”, en Liquidación, la red férrea a su cargo, la cual será transferida al Instituto Nacional de Vías “Invías”, así como los bienes muebles, inmuebles y derechos de los cuales era titular y que requieran, para el cumplimiento de su objeto, las entidades que asuman las funciones o competencias de la red férrea;

Que el Decreto número 2618 del 20 de noviembre de 2013, por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías “Invías”, en su artículo 3°, numerales 3.3; 3.8 y 3.9, señala que conforman el patrimonio de la entidad los bienes muebles e inmuebles que adquiriera a cualquier título y los bienes, contratos, derechos y obligaciones que le transfieran de la extinta Empresa Colombiana de Vías Férreas “Ferroviás”; así como los bienes, contratos, derechos y obligaciones que el Ministerio de Transporte le transfiera, por disposición legal, entre otros;

Que el lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 280-78025, que hace parte de la línea férrea, localizado en el municipio de Armenia, departamento de Quindío, el cual fue adquirido por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales por Escritura Pública número 1439 de 30 de septiembre de 1948, protocolizada en la Notaría 3ª de Armenia;

Que según los archivos catastrales del IGAC, el predio con referencia catastral 01-07-0077-0025-000, de Armenia, figura inscrito con un área de terreno de 785 m², en razón a que el municipio de Armenia realizó una apertura a la carrera 15, pasando parte de dicho predio al Perímetro número 78, que quedó inscrito con el número 01-07-0078-0023-000, por quedar separado de la vía pública, según informa dicha entidad con Oficio número 3632013EE6860 del 26 de noviembre de 2013, con el cual remite la Resolución número 840 de 2011, que sustenta la información;

Que mediante Resolución número 000239 de 2 de febrero de 2010, proferida por el Ministerio de Transporte, solicitó el registro y anotación a su nombre del predio con Matrícula Inmobiliaria número 280-78025, localizado en la Carrera 15 N° 17 N-31, del municipio de Armenia, departamento del Quindío, con referencia catastral 01-07-0077-0025-000, cuya cabida y linderos se detallan a continuación: *“el predio se localiza en la carrera 15 N° 17N-31, del municipio de Armenia, departamento de Quindío, lote de terreno que consta de 1.600 m² (sic), zona comprendida dentro de las absisas (sic) Km 364 + 780 m, a Km 364 (sic) + 820 m, faja que linda así: Por el Norte, Sur y Oeste, con el vendedor Sotero María Orozco, y por el Este con el Ferrocarril, conforme se describe en la Escritura Pública número 1439, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Armenia el 30 de septiembre de 1948, anotación hecha el 5 de octubre de 1948, dando nacimiento a la Matrícula número 280-78025. De igual manera el predio aparece inscrito en la base de datos catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; identificado como Predio 01-07-0077-0025-000, inscrito a nombre de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, de acuerdo a certificación expedida por el IGAC, con el número 3632009EE1740-01 fechada el 16/07/2009”;*

Que mediante Oficio número MT-20153250092541 de 14 de abril de 2015, se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, el registro y anotación a nombre del Instituto Nacional de Vías “Invías”, del inmueble con Matrícula Inmobiliaria número 280-78025, localizado en el municipio de Armenia, actuación jurídica que se pretendía protocolizar mediante Resolución número 0000856 de 9 de abril de 2015;

Que con Oficio número 2802015EE02803 del 5 de mayo de 2015, radicado en el Ministerio de Transporte con número 20153210270302 de 14 de mayo de 2015, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, envía la Resolución número 196 de 4 de mayo de 2015, mediante la cual suspende el trámite de registro a prevención, por las siguientes causales:

“1. Debe determinarse el inmueble por sus linderos; conforme se encuentran consignados en el título adquisitivo (Resolución número 00239 de 2010 - Ministerio de Transporte). (Parágrafo 1° del artículo 16 de la Ley 1579 de 2012).

2. Falta citar NIT. de Invías, debiendo constar ello dentro del texto de la resolución no en el formato (parágrafo 1° del artículo 10 y 16 de la Ley 1579 de 2012). (...)”.

Con Oficio número 20153250136511 de 25 de mayo de 2015, el Coordinador Bienes Inmuebles, solicita nuevamente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, el registro y anotación de la Resolución número 0000856 de 9 de abril de 2015, dentro del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 280-78025, exponiendo los argumentos que permiten superar las causales indicadas en la Resolución número 196 de 4 de mayo de 2015, mediante la cual decidió suspender el trámite de registro a prevención.

Con Oficio número 2802015EE004019 del 22 de junio de 2015, radicado en el Ministerio de Transporte con el número 20153210362642 de 30 de junio de 2015, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia da respuesta mediante Resolución número 296 de 19 de junio de 2015, la cual resuelve suspender el trámite de registro a prevención de la Resolución número 000856 de 9 de abril de 2015, por los siguientes motivos:

“Nos indiquen si lo que pretenden es registrar el acto de transferencia de dominio o actualizar los linderos del predio.

De tal forma que si lo que pretenden es registrar la transferencia de dominio, es necesario, que nos indiquen los linderos consignados en el título adquisitivo. (Resolución número 000239 de 2010 – Ministerio de Transporte) y el NIT del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Caso contrario si lo que desean es actualizar los linderos deberán allegar todo lo requerido en la Instrucción Administrativa número 01-11 del 20 de mayo del 2010, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro y el Igac”.

Por lo anterior, de acuerdo a las normas y al análisis precedente, a fin de dar cumplimiento a la Resolución número 296 de 19 de junio de 2015, se modifica a través de este acto administrativo la Resolución número 0000856 del 9 de abril de 2015, en el siguiente sentido:

1. Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, efectuar la anotación de transferencia de dominio del predio con Matrícula Inmobiliaria número 280-78025, a nombre del Instituto Nacional de Vías “Invías” identificado con el NIT 800.215.807-2, el cual forma parte de la infraestructura férrea y se encuentra ubicado en esa ciudad.

2. Que mediante Resolución número 000239 del 2 de febrero de 2010, el lote mencionado tiene la siguiente descripción, cabida y linderos: *“el predio se localiza en la carrera 15 N° 17N-31, del municipio de Armenia, departamento del Quindío, lote de terreno que consta de 1.600 m² (sic), zona comprendida dentro de las absisas (sic) Km 364 + 780 m, a Km 364 (sic) + 820 m, faja que linda así: Por el Norte, Sur y Oeste, con el vendedor Sotero María Orozco, y por el Este con el Ferrocarril, conforme se describe en la Escritura Pública número 1439, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Armenia el 30 de septiembre de 1948, anotación hecha el 5 de octubre de 1948, dando nacimiento a la Matrícula número 280-78025. De igual manera el predio aparece inscrito en la base de datos catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; identificado como Predio 01-07-0077-0025-000, inscrito a nombre de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, de acuerdo a certificación expedida por el IGAC, con el número 3632009EE1740-01 fechada el 16/07/2009”.*

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 0000856 del 9 de abril de 2015, que quedará para todos los efectos, así:

“Artículo 1°. Solicitud anotación. Transferir a favor del Instituto Nacional de Vías “Invías”, identificado con el NIT 800.215.807-2, por medio de la presente resolución, el derecho de dominio y la posesión real y material, pacífica e ininterrumpida que ejerce este Ministerio del lote de terreno localizado en el municipio de Armenia, departamento del Quindío; el que fue adquirido por Resolución número 000239 de 2 de febrero de 2010, proferida por la Nación - Ministerio de Transporte, por la cual se solicitó el registro y anotación

a nombre de esta entidad, del Predio 280-78025, localizado en la Carrera 15 N° 17N-31, del municipio de Armenia, departamento del Quindío, y referencia catastral 01-07-0077-0025-000, cuya cabida y linderos son como se detallan a continuación: “*el predio se localiza en la carrera 15 N° 17N-31, del municipio de Armenia, departamento del Quindío, lote de terreno que consta de 1.600 m2 (sic), zona comprendida dentro de las absisas (sic) Km 364 + 780 m, a Km 364 (sic) + 820 m, faja que linda así: Por el Norte, Sur y Oeste, con el vendedor Sotero María Orozco, y por el Este con el Ferrocarril, conforme se describe en la Escritura Pública número 1439, otorgada en la Notaría Tercera del Circulo de Armenia el 30 de septiembre de 1948, anotación hecha el 5 de octubre de 1948, dando nacimiento a la Matrícula número 280-78025. De igual manera el predio aparece inscrito en la base de datos catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; identificado como Predio 01-07-0077-0025-000, inscrito a nombre de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, de acuerdo a certificación expedida por el IGAC, con el número 3632009EE1740-01 fechada el 16/07/2009*”.

Artículo 2°. El predio objeto de la presente transferencia es de plena y exclusiva propiedad de la entidad transferente - Ministerio de Transporte, quien no lo ha enajenado por acto anterior al presente; dicho terreno se encuentra libre de todo gravamen, embargo judicial, pleito pendiente, hipoteca y demás limitaciones que puedan afectar su dominio.

Artículo 3°. *Valor del predio.* El terreno objeto de la presente transferencia, de acuerdo a conciliación de los estados contables a fecha de corte, 30 de septiembre de 2014, figura con un valor histórico ajustado de \$77.858.000,00.

Artículo 4°. *Gastos de impuesto y registro.* Los gastos correspondientes a impuestos y derechos de registro que demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, serán por cuenta del Instituto Nacional de Vías “Invías”.

Artículo 5°. *Tradición y registro.* La presente resolución deberá inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia-Quindío, de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 6°. El Instituto Nacional de Vías “Invías”, una vez recibido el lote de terreno deberá proceder a su respectiva actualización, teniendo en cuenta que esta transferencia se hace como cuerpo cierto.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.
(C. F.).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0895 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se hace una delegación.

La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 211 de la Constitución Política, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 y el artículo 2° del Decreto 1522 de 2003, que modifica el artículo 8° del Decreto 2469 de 2000,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delégase la participación que corresponde a la Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como miembro de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional de Colombia en la doctora Paula Ximena Acosta Márquez, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.414.539, actual Director de la Presidencia II, Código 1140 de la Dirección para la Ejecución de Gobierno y Áreas Estratégicas de este Departamento.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

María Lorena Gutiérrez Botero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0902 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se hacen unos nombramientos ordinarios.

La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a las siguientes personas:

DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CARGO	CÓDIGO	GRADO	NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA
Profesional	3320	02	Juan Carlos	Zambrano Rodríguez	79485727

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

CARGO	CÓDIGO	GRADO	NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA
Asesor	2210	13	María Claudia	Rojas Macías	51559710

DESPACHO MINISTRO CONSEJERO PARA EL GOBIERNO
Y EL SECTOR PRIVADO

CARGO	CÓDIGO	GRADO	NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA
Asesor	2210	09	Luisa Fernanda	Martínez Arciniegas	52776066

DESPACHO MINISTRO CONSEJERO PARA EL POSCONFLICTO,
DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD

CARGO	CÓDIGO	GRADO	NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA
Asesor	2210	10	Rino Augusto	Acero Camacho	79974137
Asesor	2210	07	Jahyr Fernando	Ibarra Ruiz	79462425
Asesor	2210	05	María Fernanda	Angarita Pardo	53907173
Asesor	2210	05	Luisa Fernanda	París Vallecilla	34571324
Asesor	2210	05	María Pía	Alvira Lacayo	52868963
Asesor	2210	03	Carolina	Duarte Cala	52817505
Asesor	2210	01	Alexandra	Rodríguez Erazo	1020719069
Asesor	2210	01	Grace Marcela	Serrato Salazar	52812933
Asesor	2210	01	María Clemencia	Márquez Barragán	53107358
Profesional Especializado	3330	12	Gerson	Sáenz Alba	80760529
Profesional Especializado	3330	12	Zabja Indhira	Hoyos Mustafá	1032435417
Secretario Ejecutivo	5540	17	Doralba	Ocampo Gallego	24868167
Secretario Ejecutivo	5540	11	Diana Yudely	Trujillo Cáceres	52532728

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica a los cargos de Asesor nombrados en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1086 del 26 de mayo de 2015.

Artículo 3°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

La Directora,

María Lorena Gutiérrez Botero.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas
y Grupos Alzados en Armas

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1893 DE 2015

(octubre 21)

por la cual se reglamenta el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones.

El Director General de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, en uso de sus atribuciones legales y, en especial las que le confieren el artículo 22 de la Ley 1755 de 2015, el numeral 19 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y los numerales 17 y 18 del Decreto número 4138 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en sus artículos 23 y 74, consagra el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, así como a acceder a documentos públicos, respectivamente, salvo los casos que establezca la ley;

Que la Carta Política en su artículo 209, y la Ley 489 de 1998, en su artículo 3°, determinan que la función administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, con arreglo a los principios generales de buena fe, igualdad, moralidad, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad;

Que la Ley 734 de 2002, en su artículo 34, numeral 19, expresa que es deber de los servidores públicos competentes, dictar los reglamentos internos sobre el trámite de las peticiones en sus respectivas entidades;

Que el artículo 55 de la Ley 190 de 1995, señala que las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, y su incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo ordenamiento;

Que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 1755 de 2015, las autoridades deben reglamentar el trámite interno de las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo;

Que la Corte Constitucional ha señalado los parámetros esenciales en la observancia del derecho de petición, así:

“...La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. 3.

La propuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición...” (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia T-630 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra);

Que la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-818 de 2011, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, declaró la Inexequibilidad diferida de los artículos 13 al 33 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante (CPACA), hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin que el Congreso de la República expidiera en el entretanto la Ley Estatutaria correspondiente que regule el citado derecho fundamental;

Que atendiendo lo dispuesto por la citada Sentencia de la Corte Constitucional, se procedió a reglamentar el trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias al interior de la entidad, a través de la Resolución número 0795 de 2012, supeditando su vigencia al mismo plazo que la Corte Constitucional indicó en su Sentencia C-818 de 2011;

Que en acatamiento a lo resuelto por la Corte Constitucional, el Congreso de la República procedió a tramitar el respectivo proyecto de ley estatutaria, correspondiéndole el número 65 de 2012 Senado y el número 227 de 2013 Cámara de Representantes, bajo el título “*Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”; de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 241 de la Constitución Política, el proyecto de ley estatutaria fue enviado a la Corte Constitucional, para su respectivo control de constitucionalidad, concluyendo con la expedición de la Sentencia C-951 de 2014, por medio de la cual se declaró su exequibilidad;

Que habiéndose agotado el procedimiento legal y constitucional que le correspondía al proyecto de ley estatutaria, el 30 de junio de 2015 fue expedida la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1755 de 2015, las autoridades deberán reglamentar el trámite interno de las peticiones que les corresponda resolver;

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

De las peticiones en interés general y particular

Artículo 1°. *Competencia.* La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, atenderá y resolverá en lo referente a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS-D), entre otros, de conformidad con el Decreto número 4138 de 2011, los siguientes asuntos:

1. Las peticiones respetuosas en interés general y en interés particular dirigidas a la Entidad, que toda persona tiene derecho a presentar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política.
2. Las solicitudes de información sobre los trámites y servicios a cargo de la Entidad.
3. Las solicitudes de certificación que por disposición legal o reglamentaria le corresponda expedir.
4. Las consultas verbales o escritas, relacionadas con las funciones de la Entidad, sin perjuicio de lo que se disponga en normas especiales.
5. Las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por el funcionamiento de los servicios propios de la Entidad, en los términos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecido en el Decreto número 1082 de 2015, en la presente resolución y demás normas relacionadas con esta materia.

Parágrafo 1°. Si dado el objeto o el fin de la petición, la Entidad no fuere la autoridad competente para tramitar la solicitud presentada, se informará de inmediato al interesado cuando este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la recepción, si lo hizo por escrito.

Dentro del término de los cinco (5) días, anteriormente señalado, se remitirá la petición al competente y se enviará copia del oficio remitisorio al peticionario. En caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará.

El término y condiciones de los traslados por competencia solo operan entre entidades, mas no frente a las dependencias internas de la Entidad.

Parágrafo 2°. Las quejas referentes a la presunta comisión de faltas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, se regirán por el trámite dispuesto en la Ley 734 de 2002 y demás normas que la modifiquen o adicionen, y de las cuales conocerá la Secretaría General de la Entidad, directamente o a través de la delegación de esta función.

Artículo 2°. *Formulación de peticiones.* Las solicitudes que se presenten ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, podrán realizarse verbalmente o por escrito o a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos que garantice la autenticidad, integridad y su disponibilidad.

De la atención de las solicitudes o peticiones verbales se deberá dejar registro en el Sistema de Gestión Documental con el cual cuente la Entidad y demás plataformas que se dispongan para el efecto, conforme al asunto que corresponda, o en su defecto se dejará constancia en dicho sistema, la fecha, hora, identificación del peticionario, contenido de la solicitud y respuesta o trámite que se brindó.

Para el recibo, trámite, respuesta y discusión con el ciudadano de la petición formulada por mensaje de datos o medios electrónicos, se aplicará lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título II de la Ley 1755 de 2015, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Artículo 3°. *Contenido de las peticiones.* En las peticiones deberán constar como mínimo los siguientes requisitos:

1. Indicación de la Entidad a la que se dirige.
2. Nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.
3. Objeto de la petición; si se trata de consultas, relacionar las preguntas pertinentes.
4. Razones en las que se fundamenta su petición.
5. Relación de los documentos que se acompañan conforme a las exigencias de ley o que se deseen presentar por parte del peticionario.
6. Firma del peticionario en medio físico o digital, conforme a los criterios del artículo 7° de la Ley 527 de 1999, o por cualquier otro medio que permita reconocer la manifestación de la voluntad del solicitante.

Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de mandatario o apoderado, se deberá acompañar el respectivo poder, en los términos señalados en el artículo 74 del Código General del Proceso, concordante con el artículo 35 del Decreto-ley 196 de 1971 y los artículos 33 del Decreto-ley 2150 de 1995 y 5°. de la Ley 962 de 2005.

Parágrafo 2°. Cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición en los términos del artículo 19 de la Ley 1755 de 2015.

Parágrafo 3°. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la Entidad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.

Artículo 4°. *Recepción y radicación de las peticiones escritas.* El Grupo de Gestión Documental y los Grupos Territoriales o Puntos de Atención de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, recibirán las peticiones escritas o por medios electrónicos, las sellarán con la fecha y hora de recibo y el número de radicación interno respectivo.

El peticionario podrá requerir información sobre el estado de su solicitud ante la Dependencia competente mediante el número de radicación.

Los servidores públicos y contratistas de la Entidad que reciban peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias a través de su buzón de correo electrónico, deberán remitirlas al Grupo de Atención al Ciudadano. En todo caso, el trámite y respuesta estará a cargo del funcionario o de la dependencia competente, quien remitirá copia de la respuesta por el mismo medio en que esta se emita, al Grupo de Atención al Ciudadano.

Artículo 5°. *Peticiones verbales.* Los Grupos Territoriales, Puntos de Atención, y el Grupo de Atención al Ciudadano de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, atenderán las peticiones verbales que presenten los usuarios dentro del horario oficial y reglamentario de trabajo. El funcionario que la recibe, expedirá constancia de la presentación, señalando los mismos requisitos establecidos para la petición escrita.

La decisión de estas peticiones podrá comunicarse en forma verbal al interesado, dejándose constancia de la misma; excepto, cuando por la complejidad del asunto se requiera hacerlo por escrito.

Artículo 6°. *Competencia para dar respuesta a las peticiones.* Son responsables de atender las peticiones elevadas ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, los servidores públicos, que por su competencia y funciones tengan relación directa con la petición presentada.

Artículo 7°. *Término para resolver las peticiones y derecho de turno.* Las peticiones de que trata este capítulo se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación.

Parágrafo 1°. Cuando no fuere posible contestar al interesado dentro del término señalado anteriormente, se enviará al peticionario antes del vencimiento del término inicial, una comunicación en tal sentido, señalando la causa de dicha situación y la fecha en que se resolverá su solicitud, cuyo plazo no podrá exceder del doble fijado por la Ley 1755 de 2015.

Parágrafo 2°. En virtud del principio de igualdad, en el cumplimiento del término de respuesta que se dé a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a cargo de la Entidad, se observará de manera estricta el orden de su presentación o derecho de turno, al cual hace relación el artículo 15 de la Ley 962 de 2005, en concordancia con el artículo 13 de la Constitución Política; salvo las excepciones de preferencia, debilidad manifiesta, reconocimiento de un derecho fundamental para evitar un perjuicio irremediable u otras expresamente consagradas en la ley; en especial las del régimen especial del artículo 20 de la Ley 1755 de 2015, el artículo 50 de la Ley 1098 de 2006, y la genérica del numeral 6 del artículo 5° de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 3°. En todo caso, cuando no se dé cumplimiento a los términos establecidos en el presente artículo, el jefe inmediato, tan pronto tenga conocimiento de dicha circunstancia, deberá requerir al servidor público responsable para que absuelva la petición e informe inmediatamente la razón por la cual no lo hizo dentro de los términos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 734 de 2002 y sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que hubiere lugar.

Artículo 8°. *Peticiones incompletas y desistimiento tácito.* Cuando se advierta que la petición presentada no reúne los requisitos de ley, el servidor que la recibe o el encargado de resolverla, dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación, requerirá al peticionario por una sola vez, para que la complete o aporte la documentación necesaria dentro de un plazo máximo de un (1) mes. A partir de la fecha de envío del requerimiento por parte de la Entidad, se suspenderá el término para resolver; y se reanudará a partir del cumplimiento de lo requerido.

No podrá exigirse al peticionario, copias o documentos que reposen en la Entidad o de los cuales esta tenga la facultad para acceder.

Vencido el término, sin que el solicitante haya cumplido con lo requerido, se declarará el desistimiento tácito y el archivo de la petición, mediante acto administrativo motivado emitido por el Director General de la Entidad o por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con la Resolución número 1527 del 16 de diciembre de 2013, por medio de la cual se delega esta función. Frente a este pronunciamiento procede el recurso de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 12 numeral 9 del Decreto número 4138 de 2011.

Artículo 9°. *Peticiones oscuras y desistimiento expreso.* Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales; sin embargo, por razones de interés público, la Entidad podrá continuar la actuación de oficio hasta su culminación.

En caso de que la petición sea oscura en su sentido u objeto, se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes a la devolución. Si no fuera corregida o aclarada, se procederá a su archivo y se informará al interesado.

En concordancia con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1755 de 2015, las peticiones reiterativas y que ya fueron resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, excepto cuando se trate de derechos imprescriptibles, o cuando la petición se hubiese negado por la no acreditación de requisitos, salvo que en la nueva petición se subsane.

Artículo 10. *Requisitos especiales.* Cuando la ley o los reglamentos exijan acreditar requisitos especiales para que pueda iniciarse o adelantarse una actuación administrativa, la relación de todos estos se fijará en las carteleras de acceso al público o cualquier lugar visible al mismo, en las dependencias de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Este requisito podrá suplirse con la publicación de dichas exigencias especiales, en la página web institucional de la Entidad.

CAPÍTULO II

De las solicitudes de información

Artículo 11. *Acceso a documentos públicos.* Los documentos públicos que versen sobre información general de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, podrá ser consultada o solicitada a través de la página www.reintegración.gov.co, de conformidad con los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, acorde con la reglamentación parcial de la Ley 1341 de 2009, dispuesta en el Decreto número 1078 de 2015.

Artículo 12. *Documentos.* Los interesados podrán consultar los documentos que reposan en la Entidad, solicitar copias de los mismos, pedir certificaciones y obtener información sobre las funciones y actuaciones de la Agencia, a menos que la información que contenga el documento sea de reserva constitucional o legal, según lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, la Ley 1581 de 2012, y la Ley 1712 de 2014.

Los documentos, datos o información referentes a la ubicación, situación de la ruta de reintegración, y/o situación jurídica de las personas en proceso de reintegración, tendrán el tratamiento de datos personales sensibles; por lo tanto su divulgación frente a autoridades y terceros es restringida, y deberá ajustarse a lo dispuesto en las normas citadas en el inciso anterior.

Artículo 13. *Trámite de las copias.* Cuando la petición verse sobre la expedición de copia de documentos públicos, la misma se hará a través de reproducción o fotocopiado de los mismos. Sin embargo, cuando la entidad lo estime pertinente, podrá entregar la información solicitada en medios digitales o análogos, con las restricciones de seguridad a que haya lugar, en un término no mayor a diez (10) días hábiles.

Artículo 14. *Negación de acceso a información reservada y/o restringida.* Tendrán el carácter de reservado o restringido los documentos definidos como tales por la Constitución Política y la ley.

Cuando la dependencia competente para atender la solicitud, niegue la consulta de los documentos, deberá informarlo al interesado, señalando el carácter reservado de la información negada y su fundamento legal; además, indicando la procedencia de la solicitud de insistencia en los términos del artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.

En caso de presentarse la insistencia, la documentación se enviará a la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad, para que proceda con el trámite previsto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.

Artículo 15. *Consulta de documentos.* La consulta de documentos se hará en horas de despacho al público y previa la autorización del jefe de la respectiva dependencia, o del servidor público en quien este haya delegado dicha facultad. Los documentos que tengan información de carácter reservada se conservarán en cuadernos separados dentro del mismo expediente, colocando la inscripción de “Carácter Reservado”. A estos documentos reservados no podrán tener acceso los peticionarios.

Artículo 16. *Plazo para decidir.* Las peticiones de documentos y de información se resolverán en un término máximo de diez (10) días hábiles. Si en este lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, la entrega del correspondiente documento o la información requerida será entregado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Cuando la solicitud provenga de una autoridad, y estas no prevean un término especial para su respuesta, deberán ser atendidas en un término no superior a diez (10) días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 1755 de 2015.

Parágrafo. Si dentro del término legal no se ha dado respuesta a la petición que verse sobre documentos, dicha circunstancia no exime la obligación de responder, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar.

CAPÍTULO III

Certificaciones

Artículo 17. *Concepto y procedencia.* Las certificaciones son aquellos actos por medio de los cuales el jefe de la dependencia o Director General de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, o su delegado, o en quien se hubiere fijado la respectiva competencia, dan fe sobre la existencia o estado de actuaciones, documentos o procesos administrativos que se hayan surtido.

Dichas certificaciones serán expedidas por parte de los servidores públicos competentes de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, a quien las solicite y acredite su interés en ello.

Artículo 18. *Información que reposa en la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.* Toda persona tendrá derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, haya recogido sobre ellas y las que mantenga en sus archivos oficiales.

Artículo 19. *Plazo para obtener certificaciones.* Las peticiones que se realicen con el propósito de obtener certificaciones, serán resueltas en un término máximo de diez (10) días hábiles, conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

CAPÍTULO IV

Consultas

Artículo 20. *Concepto y trámite de solicitudes.* Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, relacionado con los temas a cargo de la misma y dentro del marco de su competencia. Esta solicitud deberá tramitarse dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Artículo 21. *Naturaleza de la respuesta.* De conformidad con el artículo 12 del Decreto número 4138 de 2011, la respuesta a las consultas abstractas de contenido jurídico, serán atendidas por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad y no comprometerán la responsabilidad de esta, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015.

CAPÍTULO V

Quejas, reclamos y sugerencias

Artículo 22. *Concepto y trámite de quejas, reclamos y sugerencias.* Se entiende por sugerencia aquel consejo o propuesta que formula un usuario o institución para el mejoramiento de los servicios de la Entidad; por queja se tendrá toda manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o su representante, con respecto a la conducta o actuar de un funcionario de la Entidad en desarrollo de sus funciones; y por reclamo se tomará la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica, sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las características de los servicios ofrecidos por la Entidad.

Las quejas, reclamos y sugerencias serán atendidas y canalizadas por el Grupo de Atención al Ciudadano o quien haga sus veces, y serán resueltas en un término no mayor a quince (15) días hábiles, informando el trámite que se surtirá frente a lo requerido.

Si las quejas, reclamos y sugerencias son presentadas vía fax, correo electrónico o cualquier otro medio digital o electrónico, ante otra dependencia de la Entidad, esta deberá enviarla a más tardar el día siguiente de su recepción al Grupo de Atención al Ciudadano, o quien haga sus veces.

Las personas interesadas en formular denuncias, quejas, reclamos y sugerencias que residan en una ciudad diferente al de la sede de la Entidad, podrán presentarlas por medio de la página web de la ACR, de conformidad con el Decreto-ley 019 de 2012 y la Ley 1474 de 2011.

CAPÍTULO VI

Peticiones de atención prioritaria y de unificación jurisprudencial

Artículo 23. *Trámite.* Dada la naturaleza especial de las peticiones de atención prioritaria, de que trata el artículo 20 de la Ley 1755 de 2015, los asuntos que se refieran a situaciones relativas a personas en proceso de reintegración, se tramitarán a través de la Dirección Programática de Reintegración y las dependencias que la integran, de manera inmediata.

En los demás casos, cuando el peticionario acredite el carácter prioritario de su solicitud, la atención de la misma estará a cargo del área respectiva, de acuerdo con sus funciones.

El servidor público de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, que de acuerdo con sus competencias conozca de las peticiones de atención prioritaria en materia de seguridad personal, dará traslado de manera inmediata a la Unidad Nacional de Protección, para que esta la resuelva en lo de su competencia, de conformidad con el 1066 de 2015.

En relación con las peticiones de unificación de jurisprudencia, de que trata el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, se dará traslado a la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad, para su evaluación y trámite respectivo.

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

Artículo 24. *Responsabilidad por la indebida aplicación.* Los Jefes de las respectivas dependencias y los servidores públicos a quienes se les haya asignado el trámite de los asuntos aquí determinados, serán responsables disciplinariamente por la indebida atención de las peticiones y consultas a su cargo y por la inobservancia de los principios generales de la función administrativa.

Artículo 25. *Legislación complementaria.* En lo no dispuesto en esta resolución, se aplicarán las fuentes generales del Derecho.

Artículo 26. *Vigencia y derogatoria.* La presente resolución regirá a partir de la fecha de su publicación en el “*Diario Oficial*”, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Octubre 21 de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Director General,

Joshua Shuajo Mitrotti Ventura.
(C. F.).

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001806 DE 2015

(octubre 8)

por medio de la cual se prohíbe la interacción con boyas de datos científicas durante el desarrollo de actividades de pesca, como dispositivo agregador de peces por parte de cualquier tipo de embarcación pesquera.

El Director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las contempladas en la Ley 13 de 1990, el Decreto 1071 de 2015 y el Decreto 4181 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece que “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica fines”.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia determinó que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales, exigiendo la reparación de los daños causados y cooperando con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Que la Ley 13 de 1990, tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.

Que el artículo 2° de la Ley 13 de 1990 determinó que “compete al Estado administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera” y el artículo 3° ibídem declaró “la actividad pesquera como de utilidad pública e interés social”.

Que mediante los numerales 2° y 5° del artículo 13 de la Ley 13 de 1990, se asignaron como competencias funcionales del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), hoy en cabeza de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) las de contribuir en la formulación de la política pesquera nacional; administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera y acuícola, así como la atribución para expedir las normas para su ejercicio y establecer los trámites y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos.

Que de conformidad con el artículo 29 de la Ley 13 de 1990, “la extracción es la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la aprehensión de los recursos pesqueros” y su administración control y fomento corresponden a la Aunap.

Que de conformidad con el artículo 54 numerales 5 y 7 de la Ley 13 de 1990, se prohíbe “*pesca con métodos ilícitos*, tales como el empleo de materiales tóxicos, explosivos y otros cuya naturaleza entrañe peligro para la vida humana o los recursos pesqueros, así como llevar a bordo tales materiales, y llevar a bordo o *emplear aparejos o sistemas de pesca diferentes a los permitidos*”.

Que en concordancia con lo anterior, el Decreto 1071 de 2015 en su artículo 2.16.3.2.1. *Extracción.*, consagra que la extracción de los recursos pesqueros cuando se efectúa en aguas marinas jurisdiccionales colombianas o en aguas marinas no jurisdiccionales, donde se empleen embarcaciones autorizadas por la autoridad acuícola y pesquera, estarán sujetas a las disposiciones de la mencionada Ley 13 de 1990 y en las demás normas legales sobre la materia.

Que según artículo 2.16.7.2. *Autorización de uso de artes, aparejos y sistemas de pesca* del Decreto Reglamentario 1071 de 2015, la Aunap determinará y autorizará periódicamente el uso de artes, aparejos y sistemas de pesca que garanticen la explotación racional de los recursos pesqueros, especificando sus características en función de las especies a capturar y de las zonas de pesca.

Que en consecuencia de lo anterior, en el Decreto 1071 de 2015, en el numeral 1 del artículo 2.16.15.2.1 *Métodos ilícitos de pesca*, dispone que se consideran métodos ilícitos de pesca, los aparejos, redes, aparatos de arrastre, instrumentos no autorizados o de especificaciones que corresponden a las no permitidas, o que estando permitidas, se usen en lugares distintos de aquellos en donde estén autorizados.

Que atendiendo las directrices del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO aprobado en la 28ª Conferencia de 1995, en el marco de la ordenación pesquera, resulta indispensable que los artes y métodos pesqueros que se utilizan en cualquier zona

de pesca estén acordes con los principios de sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos pesqueros naturales.

Que mediante Decreto 4181 del 03 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), como una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de carácter técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 3° del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990.

Que sabiendo que diferentes análisis y estudios de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) (*Special report 11: Proceedings of the international workshop on the ecology and fisheries for tunas associated with floating objects, 1992*) han evidenciado una abundante agregación de recursos pesqueros y otras especies marinas a objetos flotantes, como lo son las boyas de datos científicas, las cuales son utilizadas de manera indirecta como refugio y zona de alimentación, motivo por el cual en determinadas circunstancias son usadas como instrumento o mecanismo (método o aparejo) para el desarrollo de actividades de pesca.

Que conociendo que las boyas de datos científicas son emplazadas por organizaciones o entidades gubernamentales o científicas reconocidas como un aparejo flotante, a la deriva o anclado, con el único propósito de recolectar datos oceanográficos y meteorológicos con fines exclusivamente ambientales, y no en apoyo de actividades de pesca.

Que reconociendo que las boyas de datos científicas registran una invaluable e importante información usada para generar mejores pronósticos meteorológicos y marinos, así como brindar ayuda al manejo de las pesquerías mediante la generación de datos sobre temperaturas oceánicas, apoyar y ayudar esfuerzos de búsqueda y rescate en el mar, y obtener datos críticos para la investigación de temas meteorológicos y oceanográficos y predicción climática, se hace necesario propender por su cuidado y protección.

Que considerando que la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental Unesco han determinado que la interacción, daño y vandalismo a las boyas de datos científicas por parte de los buques pesqueros constituyen un problema importante en todo el mundo, resultando en una pérdida importante de datos críticos para la predicción del tiempo, el estudio de condiciones marinas, avisos de tsunamis, entre otros.

Que en el entendido que la interacción directa con boyas de datos científicas por parte de embarcaciones pesqueras trae graves efectos en la pérdida de información para la predicción y seguimiento de las condiciones meteorológicas y oceanográficas en las regiones marinas a nivel mundial, se hace necesario implementar una medida que permita impedir esta práctica en las actividades de pesca.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Prohibir durante el desarrollo de actividades de pesca cualquier interacción con boyas de datos científicas, como dispositivo agregador de pesca por parte de cualquier tipo de embarcación pesquera de bandera colombiana y de bandera extranjera vinculadas a empresas colombianas, donde quiera que operen.

Parágrafo. Entiéndase por interacción: tocar, amarrar o sujetar, cercar o calar, arrastrar, recoger, alterar, intervenir, manipular, descomponer, dañar y destruir una boya de datos científicas o cualquiera de sus partes, por parte de una embarcación, la tripulación a bordo, con las artes de pesca, y demás equipos métodos e instrumentos a bordo.

Artículo 2°. Establézcase a todas las embarcaciones autorizadas y su tripulación, la obligación de estar atentos a boyas de datos científicas en el mar, y requerirles que tomen toda medida razonable para evitar el contacto e interacción de cualquier forma con las boyas de datos ancladas o que flotan a la deriva durante el desarrollo de cualquier tipo de actividad de pesca.

Parágrafo. Para el caso de embarcaciones de bandera extranjera afiliadas a empresas nacionales, esta medida será aplicable siempre que pesquen en las aguas jurisdiccionales colombianas.

Artículo 3°. La autoridad pesquera en coordinación con las demás entidades competentes, implementará las medidas de seguimiento, control y vigilancia que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución y podrá en cualquier momento solicitar y verificar la información que considere pertinente en aras de ejercer su control.

Artículo 4°. El no cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente resolución, acarreará las sanciones consagradas en la Ley 13 de 1990 (Estatuto General de Pesca), Decreto 1071 de 2015, y las demás normas previstas en esa materia.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y deberá publicarse en el *Diario Oficial*.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2015.

El Director General,

Otto Polanco Rengifo
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 010374 DE 2015

(octubre 21)

por la cual se efectúa la designación de un Auxiliar Jurídico ad honórem.

La Subdirectora de Gestión de Personal, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 11 numeral 6 del Decreto número 4048 del 2008 y de conformidad con la Ley 1322 de julio 13 de 2009 y en uso de las facultades delegadas mediante el artículo 2° de la Resolución número 006358 de fecha julio 8 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 1322 de 2009 se autorizó la prestación del servicio Auxiliar Jurídico Ad Honórem en los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, en los niveles Central y descentralizado, así como en sus representaciones en el exterior;

Que de conformidad con lo establecido en la citada Ley 1322 de 2009, la prestación del servicio de Auxiliar Jurídico Ad Honórem será de dedicación exclusiva, se ejercerá de tiempo completo durante nueve (9) meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar por el título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado;

Que quienes ingresen como Auxiliares Jurídicos Ad Honórem, al tenor de la misma ley desempeñarán funciones en las áreas de naturaleza jurídica que conforme a las actividades de cada dependencia les asignen los respectivos jefes como superiores inmediatos;

Que la judicatura o práctica jurídica, además de constituirse en un requisito para optar el título de Abogado, tiene por objeto la aplicación, por parte del estudiante, de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante su formación, que ejecutados en la DIAN, coadyuvan en la optimización, modernización y mejoramiento de sus procesos;

Que de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1322 de 2009, para todos los efectos legales, los Auxiliares Jurídicos Ad Honórem, tendrán las mismas responsabilidades y obligaciones de los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;

Que de conformidad con el artículo 6° de la Resolución número 006358 de junio 8 de 2011. La aspirante a prestar el servicio de Auxiliar Jurídico Ad Honórem **Adriana Marcela Mendoza Martínez**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1018456713, cumple con los requisitos, acreditando:

1. La terminación y aprobación de las materias correspondientes al pénsum académico, así como el Consultorio Jurídico mediante certificados expedidos por la Universidad Externado de Colombia de fecha 15 de septiembre de 2015 y 9 de septiembre de 2015 respectivamente.
 2. El interés de realizar el servicio de Auxiliar Jurídico Ad Honórem en la DIAN, mediante oficio de fecha 11 de septiembre de 2015.
 3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
 4. Certificación de Afiliación de SaludCoop EPS.
 5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
 6. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia.
 7. Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación;
- Que en consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Designar a **Adriana Marcela Mendoza Martínez**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1018456713, como Auxiliar Jurídico Ad Honórem en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá por el término de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del Acta de inicio de la que trata el artículo 7° en su numeral 1.

Artículo 2°. Ubicar a la Auxiliar Jurídica Ad Honórem **Adriana Marcela Mendoza Martínez**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1018456713, en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

Artículo 3°. La Auxiliar Jurídica Ad Honórem desempeñará las siguientes funciones:

- a) Apoyar en registro de la información contenida en los aplicativos informáticos de la división con el fin de mantener una información actualizada, veraz y confiable;
- b) Proyectar las resoluciones que ordenan el cumplimiento de los fallos judiciales, conciliaciones, transacciones o cualquier medio alternativo de solución de conflictos con el fin de dar cumplimiento oportunamente a las decisiones judiciales o conciliaciones;
- c) Elaborar proyecto de actos administrativos que resuelvan los recursos, solicitudes y derechos de petición presentados;
- d) Proyectar análisis jurisprudencial;
- e) Hacer control, vigilancia y seguimiento de las actuaciones que se profieran dentro de los procesos contra o por la DIAN, ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa, Constitucional y Ordinaria, con el fin de mantener control sobre los términos judiciales;
- f) Ayudar en la consecución de las copias de los fallos y demás piezas necesarias para la defensa de los intereses de la entidad;
- g) Apoyar el seguimiento a las sentencias que imponen el pago de indemnización de perjuicios en favor de la DIAN dentro de los procesos penales;
- h) Presentar los informes de las actividades desarrolladas por la dependencia en donde esté ubicado;

i) Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la designación.

Artículo 4°. Notifíquese personalmente a la judicante **Adriana Marcela Mendoza Martínez**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1018456713, el contenido del presente Acto Administrativo a la dirección Calle 146 n.º 17-30 de la ciudad de Bogotá, de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. De conformidad con el párrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publíquese el presente Acto Administrativo en el **Diario Oficial**.

Artículo 6°. Remítir copia de la presente resolución al Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y a la Coordinación Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales de la Subdirección de Gestión de Personal.

Artículo 7°. Al presente Acto Administrativo no le procede Recurso alguno por la Vía Gubernativa.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2015.

La Subdirectora de Gestión de Personal,

Edelmira Franco Silva
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 010375 DE 2015

(octubre 21)

por la cual se efectúa la designación de un Auxiliar Jurídico Ad Honórem.

La Subdirectora de Gestión de Personal, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 11 numeral 6 del Decreto número 4048 del 2008 y de conformidad con la Ley 1322 de julio 13 de 2009 y en uso de las facultades delegadas mediante el artículo 2° de la Resolución número 006358 de fecha julio 8 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 1322 de 2009 se autorizó la prestación del servicio Auxiliar Jurídico Ad Honórem en los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, en los niveles Central y descentralizado, así como en sus representaciones en el exterior;

Que de conformidad con lo establecido en la citada Ley 1322 de 2009, la prestación del servicio de Auxiliar Jurídico Ad Honórem será de dedicación exclusiva, se ejercerá de tiempo completo durante nueve (9) meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar por el título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado;

Que quienes ingresen como Auxiliares Jurídicos Ad Honórem, al tenor de la misma ley desempeñarán funciones en las áreas de naturaleza jurídica que conforme a las actividades de cada dependencia les asignen los respectivos jefes como superiores inmediatos;

Que la judicatura o práctica jurídica, además de constituirse en un requisito para optar el título de Abogado, tiene por objeto la aplicación, por parte del estudiante, de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante su formación, que ejecutados en la DIAN, coadyuvan en la optimización, modernización y mejoramiento de sus procesos;

Que de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1322 de 2009, para todos los efectos legales, los Auxiliares Jurídicos Ad Honórem, tendrán las mismas responsabilidades y obligaciones de los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;

Que de conformidad con el artículo 6° de la Resolución número 006358 de junio 8 de 2011. El aspirante a prestar el servicio de Auxiliar Jurídico Ad Honórem **Diego Felipe Moreno Camargo**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1032457322, cumple con los requisitos, acreditando:

1. La terminación y aprobación de las materias correspondientes al pénsum académico, así como el Consultorio Jurídico mediante certificados expedidos por la Pontificia Universidad Javeriana, de fecha 28 de julio de 2015 y 26 de agosto de 2015 respectivamente.
 2. El interés de realizar el servicio de Auxiliar Jurídico Ad Honórem en la DIAN, mediante correo electrónico de fecha 1° de septiembre de 2015.
 3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
 4. Certificación de Afiliación de Aliansalud EPS.
 5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
 6. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia.
 7. Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación;
- Que en consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Designar a **Diego Felipe Moreno Camargo**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1032457322, como Auxiliar Jurídico Ad Honórem en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá por el término de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del acta de inicio de la que trata el artículo 7° en su numeral 1.

Artículo 2°. Ubicar al Auxiliar Jurídico Ad Honórem **Diego Felipe Moreno Camargo**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1032457322, en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

Artículo 3°. El Auxiliar Jurídico Ad Honórem desempeñará las siguientes funciones:

- a) Apoyar en registro de la información contenida en los aplicativos informáticos de la división con el fin de mantener una información actualizada, veraz y confiable;
- b) Proyectar las resoluciones que ordenan el cumplimiento de los fallos judiciales, conciliaciones, transacciones o cualquier medio alternativo de solución de conflictos con el fin de dar cumplimiento oportunamente a las decisiones judiciales o conciliaciones;
- c) Elaborar proyecto de actos administrativos que resuelvan los recursos, solicitudes y derechos de petición presentados;
- d) Proyectar análisis jurisprudencial;
- e) Hacer control, vigilancia y seguimiento de las actuaciones que se profieran dentro de los procesos contra o por la DIAN, ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa, Constitucional y Ordinaria, con el fin de mantener control sobre los términos judiciales;
- f) Ayudar en la consecución de las copias de los fallos y demás piezas necesarias para la defensa de los intereses de la entidad;
- g) Apoyar el seguimiento a las sentencias que imponen el pago de indemnización de perjuicios en favor de la DIAN dentro de los procesos penales;
- h) Presentar los informes de las actividades desarrolladas por la dependencia en donde esté ubicado;
- i) Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la designación.

Artículo 4°. Notifíquese personalmente al judicante **Diego Felipe Moreno Camargo**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1032457322, el contenido del presente Acto Administrativo a la dirección Carrera 50 n.º 50-49 apartamento 1104 en la ciudad de Bogotá, de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. De conformidad con el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publíquese el presente Acto Administrativo en el *Diario Oficial*.

Artículo 6°. Remitir copia de la presente resolución al Despacho de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y a la Coordinación Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales de la Subdirección de Gestión de Personal.

Artículo 7°. Al presente Acto Administrativo no le procede Recurso alguno por la Vía Gubernativa.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2015.
La Subdirectora de Gestión de Personal,

Edelmira Franco Silva
(C. F.).

ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS

Universidad Surcolombiana

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO P0150 DE 2015

(enero 23)

por la cual se concede una comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción y se efectúa un nombramiento ordinario.

El Rector de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Acuerdo número 037 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 31, numeral 6, del Acuerdo número 075 de 1994, emanado del Consejo Superior Universitario, señala que es función del Rector nombrar y remover el personal administrativo y académico de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes;

Que el artículo 81 del Acuerdo número 037 de 1993, emanado del Consejo Superior Universitario, establece que las comisiones pueden ser: “Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, dentro o fuera de la institución cuando el nombramiento recaiga en un funcionario escalafonado o de carrera docente”;

Que el artículo 99 del Acuerdo número 037 de 1993, emanado del Consejo Superior Universitario, establece que el docente escalafonado de tiempo completo y de medio tiempo que sea llamado a desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción en la institución, ejercerá sus funciones en comisión y continuará gozando de todos los derechos y garantías de los profesores;

Que mediante Resolución número P0149 del 23 de enero de 2015, se le terminó la Comisión y el nombramiento a la profesora Lisseth Suguey Rojas Barreto, como Director de Departamento de Universidad, Código 0095, Grado 02, de la Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en Inglés, a partir del 23 de enero de 2015;

Que mediante Oficio número 5.2-003 del 23 de enero de 2015, la Decana de la Facultad de Educación, doctora Nidia Guzmán Durán, informa que ante la renuncia del Director de Departamento, se requiere el nombramiento del docente que va a asumir el cargo, por lo

tanto en Consejo de Programa realizado el día 16 de enero de 2015 decidió y respaldó el nombre del docente Leonardo Herrera Mosquera, al cargo de Director de Departamento de Universidad a partir del I Periodo;

Que se hace necesario nombrar al profesor Leonardo Herrera Mosquera, para que se desempeñe en el cargo de Director de Departamento de Universidad, Código 0095, Grado 02, de la Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en Inglés, quien cumple con los requisitos para ejercer el empleo; en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder Comisión y nombrar al profesor Leonardo Herrera Mosquera, identificado con la cédula de ciudadanía número 7697761 de Neiva, en el cargo de Director de Departamento de Universidad, Código 0095, Grado 02, de la Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en Inglés, a partir del 23 de enero de 2015.

Artículo 2°. El Profesor devengará la asignación mensual que le corresponde como docente de planta de tiempo completo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Neiva, a 23 de enero de 2015.
El Rector,

Pedro León Reyes Gaspar

El Secretario General,

Edwin Alirio Trujillo Cerquera
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO P0251 DE 2015

(febrero 3)

por la cual se efectúa un Nombramiento Ordinario y se concede una Comisión.

El Rector de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 40 del Acuerdo número 075 de 1994 –Estatuto General–, emanado del Consejo Superior Universitario, señala que es función del Rector nombrar los Vicerrectores de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes;

Que el artículo 81 del Acuerdo número 037 de 1993, emanado del Consejo Superior Universitario, establece que las Comisiones pueden ser: “Para desempeñar un cargo de Libre Nombramiento y Remoción, dentro o fuera de la Institución cuando el nombramiento recaiga en un funcionario escalafonado o de carrera docente”;

Que el artículo 99 del Acuerdo número 037 de 1993 –Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana–, emanado del Consejo Superior Universitario, establece que el docente escalafonado de tiempo completo y de medio tiempo que sea llamado a desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción en la institución, ejercerá sus funciones en comisión y continuará gozando de todos los derechos y garantías de los profesores;

Que el cargo de Director de Centro de Universidad, Código 0095, Grado 04, adscrito al Centro Dirección de Sedes, se encuentra vacante de manera definitiva a partir del 1 de enero de 2015 por renuncia aceptada a la doctora Mercedes Quintero Díaz;

Que mediante Resolución número 182 del 23 de octubre de 2014, “por medio del cual se ajusta el Manual de Funciones, Requisitos, Equivalencias y de Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la Universidad Surcolombiana, y modificada por la Resolución número 2016 del 30 de diciembre de 2014, establece que para el cargo de director de centro de universidad, código 0095, grado 04, adscrito al centro Dirección de Sedes se requiere: **Estudios:** Título profesional en Economía, Administración Pública, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Industrial, Sociología, Trabajo Social, Psicología, Periodismo, Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Comunicación Social, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Administración Bancaria y Financiera, Administración Regional y Urbana, Estadística, Finanzas, Ciencias Políticas, Administración Financiera, Ingeniería de Minas, Ingeniería Petróleos, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Ciencias de la Salud y licenciado en cualquier ciencia de la educación. Y adicional: Título profesional de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Alimentos, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Pecuaria, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecánica. Título de postgrado en la modalidad de especialización. **Experiencia:** Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Que revisada la Historia Laboral del Profesor Yamil Armando Cerquera Rojas, se verifica que cumple con los requisitos anteriormente señalados para desempeñar el cargo de Director de Centro de Universidad, Código 0095, Grado 04, adscrito al Centro Dirección de Sedes;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar al profesor Yamil Armando Cerquera Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía número 12122600 de Neiva en el cargo de Director de Centro de Universidad, Código 0095, Grado 04, adscrito al Centro Dirección de Sedes.

Parágrafo. De conformidad con el parágrafo del artículo 99 del Acuerdo número 037 de 1993, el docente podrá escoger entre la remuneración de este cargo o la que le corresponde como Profesor según su categoría y dedicación.

Artículo 2°. Conceder Comisión al profesor Yamil Armando Cerquera Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía número 12122600 de Neiva en el cargo de Director de Centro de Universidad, Código 0095, Grado 04, adscrito al Centro Dirección de Sedes, a

partir del tres (3) de febrero de 2015 y durante el tiempo que permanezca en el cargo según lo establecido en el Estatuto de los profesores de la Universidad Surcolombiana, artículos 97, 98 y subsiguientes.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Neiva, a 3 de febrero de 2015.

El Rector,

Pedro León Reyes Gaspar

El Secretario General,

Edwin Alirio Trujillo Cerquera
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO P0287 DE 2015

(febrero 9)

por la cual se hace un nombramiento de un Profesor Ocasional.

El Rector (e) de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 74 de la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 74 de la Ley 30 de 1992, los profesores ocasionales deben ser nombrados mediante resolución;

Que conforme al artículo 5° del Acuerdo número 037 de 1993, son profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo y medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la Universidad, para un período inferior a un (1) año;

Que los Profesores Ocasionales de conformidad con la Sentencia C-006 de 1996 tienen derecho a que se les cancele las prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales que los profesores de planta;

Que los Profesores Ocasionales cumplen similares funciones a las de un profesor de planta, pues tienen las mismas obligaciones que estos, salvo que su vinculación se hace a través de resolución y esta tiene un carácter temporal;

Que según el artículo 34 del Acuerdo número 014 del 21 de mayo de 2014, los aspirantes a docentes Ocasionales para su vinculación con la Universidad no requieren concurso de mérito;

Que con fundamento en lo aludido y por necesidad del servicio, para no entorpecer el normal funcionamiento académico de la Facultad de Economía y Administración y mientras se aprueba e implementa la Reorganización de la Universidad, se hace necesario vincular al señor Sergio Alexánder Santos Sánchez, como profesor Ocasional de tiempo completo, en el Programa de Administración de Empresas, sede Pitalito;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar al señor Sergio Alexánder Santos Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 7714642 de Neiva, como Profesor Ocasional de tiempo completo, categoría Asistente, en la Facultad de Economía y Administración, Programa de Administración de Empresas, Área o Asignatura Gerencia – Sede Pitalito.

Artículo 2°. Que el señor Sergio Alexánder Santos Sánchez devengará una asignación mensual de tres millones doscientos cincuenta mil trescientos sesenta y tres pesos (\$3.250.363) según puntaje asignado por el Comité Asignación de Puntaje (CAP), en el Acta número 017 del 17 de diciembre de 2014, de 302.5 puntos salariales a razón de \$10.745 valor del punto, para un valor total de \$59.648.889, que corresponde a los salarios devengados por el profesor y sus prestaciones sociales.

Artículo 3°. El cuadro anexo que contiene: Sueldo total, Prima de Servicio, Vacaciones, Prima de Navidad, Cesantías, Intereses a las Cesantías, Seguridad Social, Aportes Parafiscales y Total del Contrato, hará parte integral de la presente resolución.

Artículo 4°. Que se cuenta con Disponibilidad Presupuestal según CDP número 103-1500183 expedido el 2 de febrero de 2015 por la Oficina de Presupuesto, por valor de un mil doscientos treinta y dos millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos ochenta pesos (\$1.232.557.380).

Artículo 5°. El presente nombramiento se hace desde el dos (2) de febrero de 2015 y tendrá efecto a partir de la fecha y hasta el dieciocho (18) de diciembre de 2015.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Neiva, a 9 de febrero de 2015.

El Rector (e),

Alberto Ducuara Manrique

El Secretario General,

Edwin Alirio Trujillo Cerquera
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO P0380 DE 2015

(febrero 20)

por la cual se hace un nombramiento de un Profesor Ocasional.

El Rector de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 74 de la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 74 de la Ley 30 de 1992, los Profesores Ocasionales deben ser nombrados mediante resolución;

Que conforme al artículo 5° del Acuerdo número 037 de 1993, son Profesores Ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo y medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la Universidad, para un período inferior a un (1) año;

Que los Profesores Ocasionales de conformidad con la Sentencia C-006 de 1996 tienen derecho a que se les cancele las prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales que los profesores de planta;

Que los Profesores Ocasionales cumplen similares funciones a las de un profesor de planta, pues tienen las mismas obligaciones que estos, salvo que su vinculación se hace a través de resolución y esta tiene un carácter temporal;

Que según el artículo 34 del Acuerdo número 014 del 21 de mayo de 2014, los aspirantes a docentes Ocasionales para su vinculación con la Universidad no requieren concurso de mérito;

Que con fundamento en lo aludido y por necesidad del servicio, para no entorpecer el normal funcionamiento académico de la Facultad de Salud y mientras se aprueba e implementa la Reorganización de la Universidad, se hace necesario vincular al doctor Christian Ernesto Melgar Burbano, como profesor Ocasional de Medio Tiempo, en el Departamento de Ciencias Clínicas;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar al doctor Christian Ernesto Melgar Burbano, identificado con la cédula de ciudadanía número 79723571 de Bogotá, como Profesor Ocasional de Medio Tiempo, categoría Asistente, en la Facultad de Salud, Departamento de Ciencias Clínicas, Área o Asignatura Semiología y Apoyo a la Coordinación de Postgrados Clínicos.

Artículo 2°. Que el doctor Christian Ernesto Melgar Burbano devengará una asignación mensual de un millón setecientos setenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos (\$1.778.298) según puntaje asignado por el Comité Asignación de Puntaje (CAP), en el Acta número 01 del 28 de enero de 2015, de 331 puntos salariales a razón de \$10.745 valor del punto, para un valor total de \$13.963.490, que corresponde a los salarios devengados por el profesor y sus prestaciones sociales.

Artículo 3°. El cuadro anexo que contiene: Sueldo total, Prima de Servicio, Vacaciones, Prima de Navidad, Cesantías, Intereses a las Cesantías, Seguridad Social, Aportes Parafiscales y Total del Contrato, hará parte integral de la presente resolución.

Artículo 4°. Que se cuenta con Disponibilidad Presupuestal según CDP número 103-1500204 expedido el 5 de febrero de 2015 por la Oficina de Presupuesto, por valor de doscientos ochenta y un millones ciento veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos (\$281.127.498).

Artículo 5°. El presente nombramiento se hace desde el veinte (20) de febrero de 2015 y tendrá efecto a partir de la fecha y hasta el veintiséis (26) de junio de 2015.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Neiva, a 20 de febrero de 2015.

El Rector,

Pedro León Reyes Gaspar

El Secretario General (e),

José Hildebran Perdomo Fernández
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO P0427 DE 2015

(marzo 2)

por la cual se efectúa un Nombramiento Provisional.

El Rector (e) de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 consagra la autonomía de las Universidades para organizar, seleccionar y escoger su personal administrativo;

Que mediante Acuerdo número 042 de 1996, el Consejo Superior Universitario en el Capítulo III distribuyó los cargos de la nueva planta de personal administrativo fijada en el Acuerdo número 021 de 1996;

Que en ejercicio de las facultades el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo número 014 del 14 de abril de 2004, expidió el Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana;

Que el artículo 30 del Capítulo VII del precitado Acuerdo –Estatuto de Personal Administrativo–, dispone:

“Se considera la conformación de una vacante definitiva cuando su anterior titular se haya retirado del servicio, por cualquiera de las causales previstas en el artículo 21 de esta normatividad”;

Que el cargo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 20, adscrito a la Facultad de Educación, se encuentra vacante de manera definitiva;

Que según el certificado del 2 de marzo de 2015 expedido por el Profesional de Gestión Institucional del Área de Personal Néncer Cárdenas Cediell, la señora Deicy Rojas Sepúlveda cumple con los requisitos estatutarios para ejercer el cargo;

Que con fundamento en lo aludido y por necesidad del servicio, se hace necesario nombrar provisionalmente a la señora Deicy Rojas Sepúlveda, en el cargo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 20, adscrito a la Facultad de Educación;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente a la señora Deicy Rojas Sepúlveda, identificada con la cédula de ciudadanía número 55111540 de Gigante, en el cargo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 20, adscrito a la Facultad de Educación, por el término de cuatro (4) meses contados a partir del dos (2) de marzo y hasta el primero (1°) de julio de 2015, sin perjuicio de terminarlo por razón a que cese la situación administrativa que lo originó.

Artículo 2°. Que la señora Deicy Rojas Sepúlveda devengará una asignación mensual de \$1.325.712 (un millón trescientos veinticinco mil setecientos doce pesos).

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de la posesión.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Neiva, a 2 de marzo de 2015.

El Rector (e),

Alberto Ducuara Manrique

El Secretario General,

Edwin Alirio Trujillo Cerquera
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO P0428 DE 2015

(marzo 2)

por la cual se efectúa un Nombramiento Provisional.

El Rector (e) de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales y Estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 consagra la autonomía de las Universidades para organizar, seleccionar y escoger su personal administrativo;

Que mediante Acuerdo número 042 de 1996, el Consejo Superior Universitario en el Capítulo III distribuyó los cargos de la nueva planta de personal administrativo fijada en el Acuerdo número 021 de 1996;

Que en ejercicio de las facultades el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo número 014 del 14 de abril de 2004, expidió el Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana;

Que el artículo 30 del Capítulo VII del precitado Acuerdo –Estatuto de Personal Administrativo–, dispone:

“Se considera la conformación de una vacante definitiva cuando su anterior titular se haya retirado del servicio, por cualquiera de las causales previstas en el artículo 21 de esta normatividad”;

Que el cargo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 20, adscrito al Grupo de Administración de Documentos y Recepción, se encuentra vacante de manera definitiva;

Que según el certificado del 2 de marzo de 2015 expedido por el Profesional de Gestión Institucional del Área de Personal Néncer Cárdenas Cediell, la señora Martha Lucía Leiva Bahamón cumple con los requisitos estatutarios para ejercer el cargo;

Que con fundamento en lo aludido y por necesidad del servicio, se hace necesario nombrar provisionalmente a la señora Martha Lucía Leiva Bahamón, en el cargo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 20, adscrito al Grupo de Administración de Documentos y Recepción;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente a la señora Martha Lucía Leiva Bahamón, identificada con la cédula de ciudadanía número 55150830 de Neiva, en el cargo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 20, adscrito al Grupo de Administración de Documentos y Recepción, por el término de cuatro (4) meses contados a partir del dos (2) de marzo y hasta el primero (1°) de julio de 2015, sin perjuicio de terminarlo por razón a que cese la situación administrativa que lo originó.

Artículo 2°. Que la señora Martha Lucía Leiva Bahamón devengará una asignación mensual de un millón trescientos veinticinco mil setecientos doce pesos (\$1.325.712).

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de la posesión.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Neiva, a 2 de marzo de 2015.

El Rector (e),

Alberto Ducuara Manrique

El Secretario General,

Edwin Alirio Trujillo Cerquera
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO P0446 DE 2015

(marzo 4)

por la cual se hace un nombramiento de un Profesor Ocasional.

El Rector de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 74 de la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 74 de la Ley 30 de 1992, los Profesores Ocasionales deben ser nombrados mediante resolución;

Que conforme al artículo 5° del Acuerdo número 037 de 1993, son Profesores Ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo y medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la Universidad, para un período inferior a un (1) año;

Que los Profesores Ocasionales de conformidad con la Sentencia C-006 de 1996 tienen derecho a que se les cancele las prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales que los profesores de planta;

Que los Profesores Ocasionales cumplen similares funciones a las de un Profesor de planta, pues tienen las mismas obligaciones que estos, salvo que su vinculación se hace a través de Resolución y esta tiene un carácter temporal;

Que según el artículo 34 del Acuerdo número 014 del 21 de mayo de 2014, los aspirantes a docentes Ocasionales para su vinculación con la Universidad no requieren concurso de mérito;

Que con fundamento en lo aludido y por necesidad del servicio, para no entorpecer el normal funcionamiento académico de la Facultad de Ingeniería y mientras se aprueba e implementa la Reorganización de la Universidad, se hace necesario vincular al señor Renso Alfredo Aragón Calderón, como profesor Ocasional de Medio Tiempo, en el Programa de Ingeniería Agrícola-Pitalito;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar al señor Renso Alfredo Aragón Calderón, identificado con la cédula de ciudadanía número 93207608 de Purificación (Tolima), como Profesor Ocasional de Medio Tiempo, categoría Auxiliar, en la Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Agrícola, Área o Asignatura Construcciones, Sede Pitalito.

Artículo 2°. Que el señor Renso Alfredo Aragón Calderón devengará una asignación mensual de un millón trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos (\$1.348.497) según puntaje asignado por el Comité Asignación de Puntaje (CAP), en el Acta número 02 del 25 de febrero de 2015, de 251 puntos salariales a razón de \$10.745 valor del punto, para un valor total de \$22.180.490, que corresponde a los salarios devengados por el profesor y sus prestaciones sociales, según el detalle:

SUELDO TOTAL	VACACIONES ANUAL	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	APORTES PARAFIS.	TOTAL VIGENCIA
12.810.722	1.137.989	4.427.821	2.696.070	1.107.888	\$22.180.490

Artículo 3°. Que se cuenta con Disponibilidad Presupuestal según CDP número 103-1500516 expedido el 3 de marzo de 2015 por la Oficina de Presupuesto, por valor de doscientos cincuenta millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos (\$250.747.596).

Artículo 4°. El presente nombramiento se hace desde el cuatro (4) de marzo de 2015 y tendrá efecto a partir de la fecha y hasta el dieciocho (18) de diciembre de 2015.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Neiva, a 4 de marzo de 2015.

El Rector,

Pedro León Reyes Gaspar

El Secretario General,

Edwin Alirio Trujillo Cerquera
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO P0447 DE 2015

(marzo 4)

por la cual se hace un nombramiento de un Profesor Ocasional.

El Rector de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 74 de la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 74 de la Ley 30 de 1992, los Profesores Ocasionales deben ser nombrados mediante resolución;

Que conforme al artículo 5° del Acuerdo número 037 de 1993, son Profesores Ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo y medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la Universidad, para un período inferior a un (1) año;

Que los Profesores Ocasionales de conformidad con la Sentencia C-006 de 1996 tienen derecho a que se les cancele las prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales que los profesores de planta;

Que los Profesores Ocasionales cumplen similares funciones a las de un Profesor de planta, pues tienen las mismas obligaciones que estos, salvo que su vinculación se hace a través de Resolución y esta tiene un carácter temporal;

Que según el artículo 34 del Acuerdo número 014 del 21 de mayo de 2014, los aspirantes a docentes Ocasionales para su vinculación con la Universidad no requieren concurso de mérito;

Que con fundamento en lo aludido y por necesidad del servicio, para no entorpecer el normal funcionamiento académico de la Facultad de Ingeniería y mientras se aprueba e implementa la Reorganización de la Universidad, se hace necesario vincular al señor Juan Manuel Rojas Acuña, como profesor Ocasional de Tiempo Completo, en el Programa de Ingeniería de Petróleos;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar al señor Juan Manuel Rojas Acuña, identificado con la cédula de ciudadanía número 14242820 de Ibagué (Tolima), como Profesor Ocasional de Tiempo Completo, categoría Auxiliar, en la Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Petróleos, Área o Asignatura Métodos y Manejo de Producción, Producción, Crudos y Derivados.

Artículo 2°. Que el señor Juan Manuel Rojas Acuña devengará una asignación mensual de dos millones quinientos veinticinco mil setenta y cinco pesos (\$2.525.075) según puntaje asignado por el Comité Asignación de Puntaje (CAP), en el Acta número 02 del 25 de febrero de 2015, de 235 puntos salariales a razón de \$10.745 valor del punto, para un valor total de \$41.528.841, que corresponde a los salarios devengados por el profesor y sus prestaciones sociales.

SUELDO TOTAL	VACACIONES ANUAL	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	APORTES PARAFIS.	TOTAL VIGENCIA
23.988.213	2.130.897	8.291.141	5.045.802	2.072.788	\$41.528.841

Artículo 3°. Que se cuenta con Disponibilidad Presupuestal según CDP número 103-1500516 expedido el 3 de marzo de 2015 por la Oficina de Presupuesto, por valor de doscientos cincuenta millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos (\$250.747.596).

Artículo 4°. El presente nombramiento se hace desde el cuatro (4) de marzo de 2015 y tendrá efecto a partir de la fecha y hasta el dieciocho (18) de diciembre de 2015.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Neiva, a 4 de marzo de 2015.

El Rector,

Pedro León Reyes Gaspar

El Secretario General,

Edwin Alirio Trujillo Cerquera

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO P0448 DE 2015

(marzo 4)

por la cual se hace un nombramiento de un Profesor Ocasional.

El Rector de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 74 de la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 74 de la Ley 30 de 1992, los Profesores Ocasionales deben ser nombrados mediante resolución;

Que conforme al artículo 5° del Acuerdo número 037 de 1993, son Profesores Ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo y medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la Universidad, para un período inferior a un (1) año;

Que los Profesores Ocasionales de conformidad con la Sentencia C-006 de 1996 tienen derecho a que se les cancele las prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales que los profesores de planta;

Que los Profesores Ocasionales cumplen similares funciones a las de un Profesor de planta, pues tienen las mismas obligaciones que estos, salvo que su vinculación se hace a través de Resolución y esta tiene un carácter temporal;

Que según el artículo 34 del Acuerdo número 014 del 21 de mayo de 2014, los aspirantes a docentes Ocasionales para su vinculación con la Universidad no requieren concurso de mérito;

Que con fundamento en lo aludido y por necesidad del servicio, para no entorpecer el normal funcionamiento académico de la Facultad de Ingeniería y mientras se aprueba e implementa la Reorganización de la Universidad, se hace necesario vincular al señor Andrés Javier Anaya Isaza, como profesor Ocasional de Medio Tiempo, en el Programa de Tecnología en Desarrollo de Software;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar al señor Andrés Javier Anaya Isaza, identificado con la cédula de ciudadanía número 7731181 de Neiva, como Profesor Ocasional de Medio Tiempo, categoría Auxiliar, en la Facultad de Ingeniería, Programa Tecnología en Desarrollo de Software, Área o Asignatura Programación Orientada y Avanzada a Objetos TDS.

Artículo 2°. Que el señor Andrés Javier Anaya Isaza devengará una asignación mensual de un millón doscientos dieciséis mil trescientos treinta y cuatro pesos (\$1.216.334) según puntaje asignado por el Comité Asignación de Puntaje (CAP), en el Acta número 02 del 25 de febrero de 2015, de 226.4 puntos salariales a razón de \$10.745 valor del punto, para un valor total de \$20.007.123, que corresponde a los salarios devengados por el profesor y sus prestaciones sociales.

SUELDO TOTAL	VACACIONES ANUAL	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	APORTES PARAFIS.	TOTAL VIGENCIA
11.555.173	1.026.458	3.993.860	2.432.129	999.503	\$20.007.123

Artículo 3°. Que se cuenta con Disponibilidad Presupuestal según CDP número 103-1500516 expedido el 3 de marzo de 2015 por la Oficina de Presupuesto, por valor de doscientos cincuenta millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos (\$250.747.596).

Artículo 4°. El presente nombramiento se hace desde el cuatro (4) de marzo de 2015 y tendrá efecto a partir de la fecha y hasta el dieciocho (18) de diciembre de 2015.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Neiva, a 4 de marzo de 2015.

El Rector,

Pedro León Reyes Gaspar

El Secretario General,

Edwin Alirio Trujillo Cerquera

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO P0449 DE 2015

(marzo 4)

por la cual se hace un nombramiento de una Profesora Ocasional.

El Rector de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 74 de la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 74 de la Ley 30 de 1992, los Profesores Ocasionales deben ser nombrados mediante resolución;

Que conforme al artículo 5° del Acuerdo número 037 de 1993, son Profesores Ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo y medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la Universidad, para un período inferior a un (1) año;

Que los Profesores Ocasionales de conformidad con la Sentencia C-006 de 1996 tienen derecho a que se les cancele las prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales que los profesores de planta;

Que los Profesores Ocasionales cumplen similares funciones a las de un Profesor de planta, pues tienen las mismas obligaciones que estos, salvo que su vinculación se hace a través de Resolución y esta tiene un carácter temporal;

Que según el artículo 34 del Acuerdo número 014 del 21 de mayo de 2014, los aspirantes a docentes Ocasionales para su vinculación con la Universidad no requieren concurso de mérito;

Que con fundamento en lo aludido y por necesidad del servicio, para no entorpecer el normal funcionamiento académico de la Facultad de Ingeniería y mientras se aprueba e implementa la Reorganización de la Universidad, se hace necesario vincular a la señora Martha Lucía Peña Quimbaya, como profesora Ocasional de Medio Tiempo, en el Programa de Ingeniería Agrícola-Garzón;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la profesora Martha Lucía Peña Quimbaya, identificada con la cédula de ciudadanía número 55058924 de Garzón, como Profesora Ocasional de Medio Tiempo, categoría Auxiliar, en la Facultad de Ingeniería, Programa Ingeniería Agrícola, Área o Asignatura Construcciones, Sede Garzón.

Artículo 2°. Que la señora Martha Lucía Peña Quimbaya devengará una asignación mensual de un millón doscientos sesenta y dos mil quinientos treinta y siete pesos (\$1.262.537) según puntaje asignado por el Comité Asignación de Puntaje (CAP), en el Acta número 02 del 25 de febrero de 2015, de 235 puntos salariales a razón de \$10.745 valor del punto, para un valor total de \$20.766.910, que corresponde a los salarios devengados por la profesora y sus prestaciones sociales, según el detalle:

SUELDO TOTAL	VACACIONES ANUAL	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	APORTES PARAFIS.	TOTAL VIGENCIA
11.994.102	1.065.448	4.145.567	2.524.400	1.037.393	\$20.766.910

Artículo 3°. Que se cuenta con Disponibilidad Presupuestal según CDP número 103-1500516 expedido el 3 de marzo de 2015 por la Oficina de Presupuesto, por valor de doscientos cincuenta millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos (\$250.747.596).

Artículo 4°. El presente nombramiento se hace desde el cuatro (4) de marzo de 2015 y tendrá efecto a partir de la fecha y hasta el dieciocho (18) de diciembre de 2015.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Neiva, a 4 de marzo de 2015.

El Rector,

Pedro León Reyes Gaspar

El Secretario General,

Edwin Alirio Trujillo Cerquera

(C. F.).

ACUERDOS DE CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 26 DE 2015

(septiembre 9)

por medio del cual se hace una adición presupuestal.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con las normas constitucionales y legales aplicadas a la Universidad, y el alcance de la Sentencia C-220 de 1997, emanada de la honorable Corte Constitucional, los ajustes presupuestales de la Institución se harán mediante acuerdos del Consejo Superior.

Que en el artículo 17 numeral 8 del Acuerdo 014 de 1994, Estatuto General de la Universidad, se establece que es función del Consejo Superior aprobar el presupuesto y traslados presupuestales de la Universidad, a nivel de cuentas (gastos de personal, gastos generales, transferencias, gastos de operación comercial, inversiones).

Que en el Estatuto Presupuestal de la Universidad, Acuerdo 22 de noviembre 2 de 2004, en su artículo 26 “Modificaciones Al Presupuesto” se estipula que “En cualquier mes del año fiscal, el Consejo Superior, a solicitud del Rector podrá aumentar, disminuir, trasladar, o aplazar las apropiaciones presupuestales, cuando así lo ameriten las circunstancias”.

Que el artículo 87 de la Ley 30 de 1992 establece que a partir del sexto año de la vigencia de esa Ley, (...) // el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las Universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del producto interno bruto. Este incremento se efectuará de conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales y oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran.

Parágrafo. El incremento al que se refiere el presente artículo se hará para los sistemas que se creen en desarrollo de los artículos 81 y 82 y los dineros serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU//.

Que mediante Resolución número 13031 del 25 de agosto 2015, el Ministerio de Educación Nacional, realizó la distribución presupuestal de gastos de funcionamiento asignando la suma de mil quinientos diez y siete millones veintitrés mil trescientos diez y siete pesos (\$1.517.023.317) moneda corriente, a la Universidad Tecnológica de Pereira.

Que se requiere el acto administrativo que autorice adicionar al presupuesto de funcionamiento de la Universidad para la vigencia 2015, los recursos antes mencionados para garantizar el pago de los gastos de los docentes transitorios al cierre de la vigencia, teniendo en cuenta que el Acuerdo del Consejo Superior número 05 del 24 de febrero de 2015, previó que dichos profesores transitorios pueden tener una vinculación hasta por once (11) meses en cada vigencia fiscal.

Por lo anterior,

ACUERDA:

Artículo 1°. Adicionar al presupuesto de Ingresos de la Universidad Tecnológica de Pereira los siguientes aportes de la Nación como transferencia para funcionamiento de la presente vigencia:

NIVEL				DETALLE	APROPiación ACTUAL	ADICIÓN	APROPiación FINAL
4	0	0	0	II. APORTES DE LA NACIÓN	100.091.236.639	1.517.023.317	101.608.259.956
4	1	0	0	Transferencia para funcionamiento	83.698.722.230	1.517.023.317	85.215.745.547
4	2	0	0	Servicio de la deuda pública	0	0	0
4	4	0	0	Concurrencia Nación pasivo pensional	1.500.000.000	0	1.500.000.000
4	3	0	0	Transferencia para inversión	14.892.514.409		14.892.514.409
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS					100.091.236.639	1.517.023.317	101.608.259.956

Artículo 2°. Adicionar en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Universidad Tecnológica de Pereira, los siguientes aportes de la Nación para la presente vigencia:

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Subordinal	Detalle	Apropiación actual transferencia recursos de la nación	Adición transferencia recursos de la nación	Apropiación final transferencia recursos de la nación
1					GASTOS DE PERSONAL	8.783.260.900	1.517.023.317	10.300.284.217
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	8.783.260.900	1.517.023.317	10.300.284.217
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.783.260.900	1.517.023.317	10.300.284.217
1	0	2	16		HORAS CÁTEDRA	8.783.260.900	1.517.023.317	10.300.284.217
TOTAL FUNCIONAMIENTO						8.783.260.900	1.517.023.317	10.300.284.217

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.

El Presidente,

Carlos Lugo Silva

La Secretaria General,

Liliana Ardila Gómez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$271.000

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 27 DE 2015

(septiembre 9)

por medio del cual se hace una adición presupuestal.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con las normas constitucionales y legales aplicadas a la Universidad y el alcance de la Sentencia C-220 de 1997, emanada de la honorable Corte

Constitucional, los ajustes presupuestales de la Institución se harán mediante Acuerdos del Consejo Superior.

Que en el artículo 17 numeral 8 del Acuerdo 014 de 1994, Estatuto General de la Universidad se establece que es función del Consejo Superior aprobar el presupuesto y traslados presupuestales de la Universidad, a nivel de cuentas (gastos de personal, gastos generales, Transferencias, gastos de operación comercial, inversiones).

Que en el Estatuto Presupuestal de la Universidad, Acuerdo 22 de noviembre 2 de 2004, en su artículo 26 “Modificaciones Al Presupuesto” se estipula que “En cualquier mes del año fiscal, el Consejo Superior, a solicitud del Rector podrá aumentar, disminuir, trasladar o aplazar las apropiaciones presupuestales, cuando así lo ameriten las circunstancias”.

Que en el numeral 5 del artículo 2° de la Ley 403 de 1997, aclarado por el artículo 1° de la Ley 815 de 2003, se señala que: “el descuento del diez por ciento (10%) en el valor de la matrícula a que tiene derecho el estudiante de Institución Oficial de Educación Superior, como beneficio por el ejercicio del sufragio, se hará efectivo no sólo en el período académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio, sino en todos los períodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que pueda participar”.

Que mediante el Oficio número 2-2015-018211 del 15 de mayo de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó el levantamiento del previo concepto solicitado sobre el rubro 3-6-3-20, recurso 10, Otras Transferencias - Distribución previo concepto DGPPN por valor de treinta y un mil doscientos catorce millones trescientos noventa y un mil ochocientos noventa y dos pesos (\$31.214.391.892) moneda corriente, para continuar con la modificación presupuestal que distribuye estos recursos como apoyo a las universidades públicas, en virtud de lo señalado en las leyes 403 de 1997 y 815 de 2003.

Que mediante Resolución número 08685 del 17 de junio de 2015, el Ministerio de Educación Nacional, realizó la distribución presupuestal de gastos de funcionamiento asignando la suma de mil cuarenta y un millones setecientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta pesos (\$1.041.763.940) moneda corriente, a la Universidad Tecnológica de Pereira - descuento votaciones (Ley 403/1997 y 815/2003).

Que se requiere el acto administrativo que autorice adicionar al presupuesto de funcionamiento de la Universidad para la vigencia 2015, los recursos antes mencionados para garantizar el pago de los gastos de personal al cierre de la vigencia.

Por lo anterior.

ACUERDA:

Artículo 1°. Adicionar al presupuesto de Ingresos de la Universidad Tecnológica de Pereira los siguientes aportes de la Nación como transferencia para funcionamiento de la presente vigencia:

NIVEL				DETALLE	APROPiación ACTUAL	ADICIÓN	APROPiación FINAL
4	0	0	0	II. APORTES DE LA NACIÓN	99.049.472.699	1.041.763.940	100.091.236.639
4	1	0	0	Transferencia para funcionamiento	82.656.958.290	1.041.763.940	83.698.722.230
4	2	0	0	Servicio de la deuda pública	0	0	0
4	4	0	0	Concurrencia Nación pasivo pensional	1.500.000.000	0	1.500.000.000
4	3	0	0	Transferencia para inversión	14.892.514.409	0	14.892.514.409
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS					99.049.472.699	1.041.763.940	100.091.236.639

Artículo 2°. Adicionar en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Universidad Tecnológica de Pereira, los siguientes aportes de la Nación para la presente vigencia:

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Subordinal	Detalle	Apropiación actual transferencia recursos de la nación	Adición transferencia recursos de la nación	Apropiación final transferencia recursos de la nación
1					GASTOS DE PERSONAL	28.357.214.100	1.041.763.940	29.398.978.040
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	28.357.214.100	1.041.763.940	29.398.978.040
1	0	1	1		SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	28.357.214.100	1.041.763.940	29.398.978.040
1	0	1	1	1	SUELDO	28.357.214.100	1.041.763.940	29.398.978.040
TOTAL FUNCIONAMIENTO						28.357.214.100	1.041.763.940	29.398.978.040

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.

El Presidente,

Carlos Lugo Silva

La Secretaria General,

Liliana Ardila Gómez

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$271.000.

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 28 DE 2015

(septiembre 9)

por medio del cual se hace una adición presupuestal.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con las normas constitucionales y legales aplicadas a la Universidad y el alcance de la Sentencia C-220 de 1997, emanada de la honorable Corte Constitucional, los ajustes presupuestales de la Institución se harán mediante Acuerdos del Consejo Superior.

Que en el artículo 17 numeral 8 del Acuerdo 014 de 1994, Estatuto General de la Universidad se establece que es función del Consejo Superior aprobar el presupuesto y traslados presupuestales de la Universidad, a nivel de cuentas (gastos de personal, gastos generales, Transferencias, gastos de operación comercial, inversiones).

Que en el Estatuto Presupuestal de la Universidad, Acuerdo 22 de noviembre 2 de 2004, en su artículo 26 “Modificaciones Al Presupuesto” se estipula que “En cualquier mes del año fiscal, el Consejo Superior, a solicitud del Rector podrá aumentar, disminuir, trasladar o aplazar las apropiaciones presupuestales, cuando así lo ameriten las circunstancias”.

Que la Ley 1607 de 2012, en su artículo 20 creó el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, a partir del 1º de enero de 2013, como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos previstos en la citada Ley.

Que mediante Decreto 1246 de 2015 el Ministerio de Educación Nacional reglamentó la asignación y distribución de los recursos para educación superior provenientes del impuesto sobre la renta para la equidad CREE.

Que en el numeral 1 del artículo 2.5.4.3.6 del Decreto 1246 de 2015 se establecen los criterios para la distribución de los recursos del CREE correspondientes a la vigencia 2015 y se dispone que se distribuirá a las Instituciones de Educación Superior Públicas el 50% de los recursos efectivamente transferidos en la vigencia 2014 por Impuesto a la Renta para la equidad CREE.

Que mediante Resolución número 2917 del 5 de agosto 2015 el Ministerio de Educación Nacional realizó la distribución presupuestal de gastos de inversión asignando la suma de cuatro mil ochocientos noventa y un millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos (\$4.891.382.464) moneda corriente, a la Universidad Tecnológica de Pereira.

Que se requiere el acto administrativo que autorice adicionar al presupuesto e inversión de la Universidad para la vigencia 2015, los recursos antes mencionados.

Por lo anterior,

ACUERDA:

Artículo 1º. Adicionar al presupuesto de Ingresos de la Universidad Tecnológica de Pereira los siguientes aportes de la Nación como transferencia para inversión de la presente vigencia:

NIVEL				DETALLE	APROPiación ACTUAL	ADICIÓN	APROPiación FINAL
4	0	0	0	II. APORTES DE LA NACIÓN	101.608.259.956	4.891.382.464	106.499.642.420
4	1	0	0	Transferencia para funcionamiento	85.215.745.547	0	85.215.745.547
4	2	0	0	Servicio de la deuda pública	0	0	0
4	4	0	0	Concurrencia Nación pasivo pensional	1.500.000.000	0	1.500.000.000
4	3	0	0	Transferencia para inversión	14.892.514.409	4.891.382.464	19.783.896.873
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS					101.608.259.956	4.891.382.464	106.499.642.420

Artículo 2º. Adicionar en el presupuesto de gastos de inversión de la Universidad Tecnológica de Pereira, los siguientes aportes de la Nación para la presente vigencia:

Programa	Subprograma	Proyecto	Subproyecto	DETALLE	Apropiación actual transferencia recursos de la nación	Adición transferencia recursos de la nación	Apropiación final transferencia recursos de la nación
113				MEJORMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	13.651.177.081	4.850.278.447	18.501.455.528
113	705			EDUCACIÓN SUPERIOR	13.651.177.081	4.850.278.447	18.501.455.528
113	705	2		DESARROLLO FÍSICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	13.651.177.081	4.850.278.447	18.501.455.528
113	705	2	11	SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	13.266.990.301	4.175.278.447	17.442.268.748
113	705	2	7	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	384.186.780	675.000.000	1.059.186.780
							0
211				ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	601. 124.701	41.104.017	642.228.718
211	705			EDUCACIÓN SUPERIOR	601.124.701	41.104.017	642.228.718
211	705	2		DESARROLLO INFORMÁTICO Y COMUNICACIONES	601.124.701	41.104.017	642.228.718
211	705	2	2	SOSTENIBILIDAD DE HARDWARE Y SOFTWARE	601. 124.701	41. 104.017	642.228.718
TOTAL INVERSIÓN					14.252.301.782	4.891.382.464	19.143.684.246

Artículo 3º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.

El Presidente.

Carlos Lugo Silva

La Secretaria General,

Liliana Ardila Gómez

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$271.000.

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 29 DE 2015

(septiembre 9)

por medio del cual se hace una adición presupuestal.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con las normas constitucionales y legales aplicadas a la Universidad y el alcance de la Sentencia C-220 de 1997, emanada de la honorable Corte Constitucional, los ajustes presupuestales de la Institución se harán mediante acuerdos del Consejo Superior.

Que en el artículo 17 numeral 8 del Acuerdo 014 de 1994, Estatuto General de la Universidad se establece que es función del Consejo Superior aprobar el presupuesto y traslados presupuestales de la Universidad, a nivel de cuentas (gastos de personal, gastos generales, transferencias, gastos de operación comercial, inversiones).

Que en el Estatuto Presupuestal de la Universidad, Acuerdo 22 de noviembre 2 de 2004, en su artículo 26 “Modificaciones Al Presupuesto” se estipula que “En cualquier mes del año fiscal, el Consejo Superior, a solicitud del Rector podrá aumentar, disminuir, trasladar o aplazar las apropiaciones presupuestales, cuando así lo ameriten las circunstancias”.

Que el artículo 2º de la Ley 1697 de 2013 establece que “La estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia” es una contribución parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las universidades estatales y que será administrada directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo”.

Que el artículo 3º de la Ley 1697 de 2013 indica que “... La distribución de los recursos recaudados por la presente estampilla se realizará de la siguiente manera: // Durante los primeros cinco (5) años a partir de la expedición de la presente Ley, el 70% del recaudo se transferirá a la Universidad Nacional de Colombia y el 30% restante a las demás universidades estatales del país”.

Que en el artículo 4º de la precitada Ley 1697 de 2013 se prevé que dichos recursos deben destinarse prioritariamente, entre otros, a “la construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria y a los estudios y diseños requeridos para esta finalidad.

Que mediante Resolución número 05497 del 27 de abril 2015, el Ministerio de Educación Nacional realizó la distribución presupuestal de gastos de inversión asignando la suma de doscientos cuarenta y cinco millones quinientos cincuenta mil ochocientos noventa pesos (\$245.550.890) moneda corriente a la Universidad Tecnológica de Pereira.

Que se requiere el acto administrativo que autorice adicionar al presupuesto de inversión de la Universidad para la vigencia 2015, los recursos antes mencionados.

Por lo anterior,

ACUERDA:

Artículo 1º. Adicionar al presupuesto de Ingresos de la Universidad Tecnológica de Pereira los siguientes aportes de la Nación como transferencia para inversión de la presente vigencia:

NIVEL				DETALLE	APROPiación ACTUAL	ADICIÓN	APROPiación FINAL
4	0	0	0	II. APORTES DE LA NACIÓN	106.499.642.420	245.550.890	106.745.193.310
4	1	0	0	Transferencia para funcionamiento	85.215.745.547	0	85.215.745.547
4	2	0	0	Servicio de la deuda pública	0	0	0
4	4	0	0	Concurrencia Nación pasivo pensional	1.500.000.000	0	1.500.000.000
4	3	0	0	Transferencia para inversión	19.783.896.873	245.550.890	20.029.447.763
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS					106.499.642.420	245.550.890	106.745.193.310

Artículo 2º. Adicionar en el presupuesto de gastos de inversión de la Universidad Tecnológica de Pereira, los siguientes aportes de la Nación para la presente vigencia:

Programa	Subprograma	Proyecto	Subproyecto	Detalle	Apropiación actual transferencia recursos de la nación	Adición transferencia recursos de la nación	Apropiación final transferencia recursos de la nación
113				MEJORMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	17.966.408.375	245.550.890	18.211.959.265
113	705			EDUCACIÓN SUPERIOR	17.966.408.375	245.550.890	18.211.959.265
113	705	2		DESARROLLO FÍSICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	17.966.408.375	245.550.890	18.211.959.265
113	705	2	10	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS	524.139.627	144.278.500	668.418.127
113	705	2	11	SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	17.442.268.748	101.272.390	17.543.541.138
TOTAL INVERSIÓN					17.966.408.375	245.550.890	18.211.959.265

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.
El Presidente.

Carlos Lugo Silva

La Secretaria General,

Liliana Ardila Gómez

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$271.000.

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 30 DE 2015

(septiembre 9)

por medio del cual se modifica el Acuerdo 22 de 1991 por el cual se aprueba un programa de formación universitaria.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 10 del artículo 17 del Acuerdo 014 de 1999, por el cual se reformó el Estatuto General de la Universidad Tecnológica de Pereira, prevé entre otras funciones del Consejo Superior, la de crear, suspender y suprimir programas académicos a propuesta del Consejo Académico y elaborar las directrices para la creación, supresión, seguimiento y evaluación.

Que mediante Acuerdo 22 del 30 de octubre de 1991, el Consejo Superior aprobó el programa de formación universitaria, pregrado, denominado “Administración del Medio Ambiente”.

Que el programa de Administración del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica de Pereira, no se encuentra en el sistema Snies bajo la denominación de Administración Ambiental y por lo tanto puede ser considerado solo como un programa afín a los programas de Administración Ambiental en Colombia, para la entrega de las tarjetas profesionales.

Que se hace necesario cambiar la denominación del programa “Administración del Medio Ambiente” por “Administración Ambiental”.

Que mediante referendo llevado a cabo el día 31 de agosto de 2015, el Consejo Académico conceptuó favorablemente sobre el cambio de denominación del programa “Administración del Medio Ambiente” por “Administración Ambiental”.

En consecuencia,

ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el Acuerdo 22 de octubre 30 de 1991, en cuanto a la denominación del programa de formación universitaria, pregrado, “Administración del Medio Ambiente” el cual a partir de la fecha se denominará “Administración Ambiental”.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.

El Presidente,

Carlos Lugo Silva

La Secretaria General,

Liliana Ardila Gómez

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$271.000.

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 31 DE 2015

(septiembre 9)

por medio del cual se autoriza el funcionamiento del programa Maestría en Educación Extensión Guajira.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere el numeral 10 del artículo 17 del Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Estatuto General,

la Universidad Tecnológica de Pereira tiene la potestad de decidir cuáles programas de educación puede ofertar a la comunidad en las diferentes modalidades educativas.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 17 del Estatuto General, el Consejo Superior Universitario es el órgano de gobierno competente para crear, suspender y suprimir programas académicos a propuesta del Consejo Académico.

Que el Consejo Académico en sesión celebrada el 26 de agosto de 2015, estudió y recomendó la aprobación del programa Maestría en Educación Extensión Guajira y su respectivo plan de estudios, la cual será administrada por la Facultad de Ciencias de la Educación.

Que el programa tendrá una duración de cuatro (4) semestres, cincuenta y un (51) créditos académicos, en modalidad presencial y el título a otorgar será “Magíster en Educación”.

Que para su refrendación y ejecución, se requiere surtir los pasos reglamentarios ante el Ministerio de Educación Nacional MEN.

Que teniendo en cuenta lo antes expuesto, el Consejo Superior

ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar el funcionamiento del programa Maestría en Educación Extensión Guajira, con las características enunciadas en la parte considerativa.

Artículo 2°. La Universidad otorgará el título de Magíster en Educación a quienes cursen y aprueben el plan de estudios del programa aquí referido.

Parágrafo. Para efectos de lo indicado en el presente artículo, la Rectoría adelantará los trámites pertinentes ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Artículo 3°. Para su refrendación y ejecución, el programa aprobado por el presente acuerdo debe surtir los requisitos reglamentarios ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.

El Presidente.

Carlos Lugo Silva

La Secretaria,

Liliana Ardila Gómez

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$271.000.

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 33 DE 2015

(septiembre 9)

Por medio del cual se aprueba el plan de estudios correspondiente al Programa Maestría en Educación Extensión Guajira.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Estatuto General, la Universidad Tecnológica de Pereira tiene la potestad de decidir cuáles programas de educación puede ofertar a la comunidad en las diferentes modalidades educativas.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 17 del Estatuto General, el Consejo Superior Universitario es el órgano de gobierno competente para crear, suspender y suprimir programas académicos a propuesta del Consejo Académico.

Que el Consejo Académico en sesión celebrada el 26 de agosto de 2015 estudió y recomendó la aprobación del programa Maestría en Educación extensión Guajira. y su respectivo plan de estudios, la cual será administrada por la Facultad de Ciencias de la Educación.

Que el programa tendrá una duración de cuatro (4) semestres, cincuenta y un (51) créditos académicos, en modalidad presencial y el título a otorgar será “Magíster en Educación”.

Que el Consejo Superior Universitario aprobó mediante Acuerdo número 31 del 9 de septiembre de 2015 el funcionamiento del programa “Maestría en Educación Extensión Guajira”, y su respectivo plan de estudios, atendiendo las disposiciones establecidas en el Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 y en especial las referidas en el Capítulo II “De los Créditos Académicos”.

Que se requiere la expedición del acto administrativo que aprueba el Plan de Estudios de dicho Programa; en consecuencia,

ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar el Plan de Estudios de la Maestría en Educación extensión Guajira, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación, así:

SEMESTRE I																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanas	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
FP115	Investigación educativa. Problemización y definición de la pregunta	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP121	Educación y pedagogías contemporáneas	1	7	3	1	1	10	3	20	21	10	31		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP134	Fundamentación de las didácticas específicas	4	7	3	2	2	20	6	30	42	18	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP141	Tendencias y enfoques del desarrollo humano	1	5	5	1	1	8	2	18	10	10	20		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
TOTALES		11	24	16			68	17	108	103	68	171				Nº Asignaturas	4

SEMESTRE II

Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompañ./Semanales	Semanas	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
FP215	Seminario de proyecto de grado I. Elaboración de propuesta.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP221	Tendencias curriculares contemporáneas	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP235	Profundización en Didácticas I	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP241	Evaluación del aprendizaje	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
TOTALES		12	20	20			80	16	120	80	80	160				Nº Asignaturas	4

SEMESTRE III

Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompañ./Semanales	Semanas	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
FP315	Seminario de proyecto de grado II Estrategias, técnicas e instrumentos de recolección de información.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP321	Contexto sociopolítico de la educación local y global	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP335	Profundización en Didácticas II	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP341	Cognición, inteligencias y creatividad	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
TOTALES		12	20	20			80	16	120	80	80	160				Nº de asignaturas	4

SEMESTRE IV

Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompañ./Semanales	Semanas	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
FP413	Seminario de Proyecto de grado III Análisis e interpretación de información	3	4	6	2	2	20	4	30	16	24	40	FP315	Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP421	Gestión del conocimiento en la educación	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP435	Profundización en Didácticas III	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60	FP235 y FP335	Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP441	Educación en la diversidad. Multicultural e intercultural	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP452	Seminario de Proyecto de grado IV preparación del informe final	2	5	5	2	2	20	3	30	15	15	30		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP464	Trabajo de grado	4	0	0	0	0	12	16	12	0	0	0		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
TOTALES		16	24	26			102	17	152	81	89	170				Nº Asignaturas	6

		ENFOQUE PROFUNDIZACIÓN
Total Horas Teóricas Semanales		88
Total Horas Prácticas Semanales		82
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL TOTAL		170
Total Horas Teóricas Totales		344
Total Horas Prácticas Totales		317
INTENSIDAD HORARIA TOAL		661

TOTAL CRÉDITOS PROGRAMA	51
NÚMERO DE ASIGNATURAS	18

		ENFOQUE PROFUNDIZACIÓN
Total Horas Teóricas Semanales		88
Total Horas Prácticas Semanales		82
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL TOTAL		170
Total Horas Teóricas Totales		344
Total Horas Prácticas Totales		317
INTENSIDAD HORARIA TOTAL		661

TOTAL CRÉDITOS PROGRAMA	51
NÚMERO DE ASIGNATURAS	18

SEMESTRE	CRÉDITOS	ACUMULADO CRÉDITOS ACADÉMICOS	$S_n = \sum_{i=1}^{n-1} C_i + \frac{C_n}{2}$		UBICACIÓN SEMESTRAL	
I	11	11	0	5,5	0	5
II	12	23	6,5	17	6	17
III	12	35	18	29	18	29
IV	16	51	30	43	30	43
(*) Estudiantes que tengan pendientes asignaturas y trabajo de grado para optar su título.			44	51	44	51

GAMA: OPCIONALES – ELECTIVAS																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompañ./Semanales	Semanas	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
ENFOQUE PROFUNDIZACIÓN																	
ELECTIVA BASE		FP235	Profundización en Didácticas I														
FP2A5	Didáctica de las Ciencias Sociales I.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP2B5	Didáctica de las Ciencias Experimentales I.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP2C5	Didáctica del Lenguaje I.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP2D5	Didáctica de la Informática Educativa I.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades

GAMA: OPCIONALES – ELECTIVAS																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompañá./ Semanales	Semanas	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
ELECTIVA BASE		FP335	Profundización en Didácticas II														
FP3A5	Didáctica de las Ciencias Sociales II.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP3B5	Didáctica de las Ciencias Experimentales II.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP3C5	Didáctica del Lenguaje II.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP3D5	Didáctica de la Informática Educativa II.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
ELECTIVA BASE		FP435	Profundización en Didácticas III														
FP4A5	Didáctica de las Ciencias Sociales III.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP4B5	Didáctica de las Ciencias Experimentales III.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP4C5	Didáctica del Lenguaje III.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FP4D5	Didáctica de la Informática Educativa III.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-práctica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.
El Presidente,

Carlos Lugo Silva

La Secretaria,

Liliana Ardila Gómez

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$271.000.

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 32 DE 2015

(septiembre 9)
por medio del cual se autoriza el funcionamiento del Programa Maestría en Educación Extensión San Andrés.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere el numeral 10 del artículo 17 del Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Estatuto General, la Universidad Tecnológica de Pereira tiene la potestad de decidir cuáles programas de educación puede ofertar a la comunidad en las diferentes modalidades educativas;

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 17 del Estatuto General, el Consejo Superior Universitario es el órgano de gobierno competente para crear, suspender y suprimir programas académicos a propuesta del Consejo Académico;

Que el Consejo Académico en sesión celebrada el 26 de agosto de 2015, estudió y recomendó la aprobación del programa Maestría en Educación Extensión San Andrés, y su respectivo plan de estudios, la cual será administrada por la Facultad de Ciencias de la Educación;

Que el programa tendrá una duración de cuatro (4) semestres, cincuenta y un (51) créditos académicos, en modalidad presencial y el título a otorgar será “Magíster en Educación”;

Que para su refrendación y ejecución, se requiere surtir los pasos reglamentarios ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN);

Que teniendo en cuenta lo antes expuesto, el Consejo Superior,

ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar el funcionamiento del Programa Maestría en Educación Extensión San Andrés, con las características enunciadas en la parte considerativa.

Artículo 2°. La Universidad otorgará el título de **Magíster en Educación** a quienes cursen y aprueben el plan de estudios del programa aquí referido.

Parágrafo. Para efectos de lo indicado en el presente artículo, la Rectoría adelantará los trámites pertinentes ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Artículo 3°. Para su refrendación y ejecución, el programa aprobado por el presente acuerdo debe surtir los requisitos reglamentarios ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.

El Presidente,

La Secretaria,

Carlos Lugo Silva.

Liliana Ardila Gómez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$271.000.

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 34 DE 2015

(septiembre 9)
por medio del cual se aprueba el Plan de Estudios correspondiente al Programa Maestría en Educación Extensión San Andrés.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Estatuto General, la Universidad Tecnológica de Pereira tiene la potestad de decidir cuáles programas de educación puede ofertar a la comunidad en las diferentes modalidades educativas;

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 17 del Estatuto General, el Consejo Superior Universitario es el órgano de gobierno competente para crear, suspender y suprimir programas académicos a propuesta del Consejo Académico;

Que el Consejo Académico en sesión celebrada el 26 de agosto de 2015, estudió y recomendó la aprobación del programa Maestría en Educación Extensión San Andrés, y su respectivo plan de estudios, la cual será administrada por la Facultad de Ciencias de la Educación;

Que el programa tendrá una duración de cuatro (4) semestres, cincuenta y un (51) créditos académicos, en modalidad presencial y el título a otorgar será “Magíster en Educación”;

Que el Consejo Superior Universitario aprobó mediante Acuerdo número 32 del 9 de septiembre de 2015 el funcionamiento del Programa “Maestría en Educación Extensión San Andrés”, y su respectivo plan de estudios, atendiendo las disposiciones establecidas en el Decreto número 2566 del 10 de septiembre de 2003 y en especial las referidas en el Capítulo II “De los Créditos Académicos”;

Que se requiere la expedición del acto administrativo que aprueba el Plan de Estudios de dicho Programa; en consecuencia,

ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar el Plan de Estudios de la Maestría en Educación extensión San Andrés, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación, así:

SEMESTRE I																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompañá./ Semanales	Semanas	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
FQ115	Investigación educativa. Problemización y definición de la pregunta.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FQ121	Educación y pedagogía contemporáneas.	1	7	3	1	1	10	3	20	21	10	31		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FQ134	Fundamentación de las didácticas específicas.	4	7	3	2	2	20	6	30	42	18	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FQ141	Tendencias y enfoques del desarrollo humano.	1	5	5	1	1	8	2	18	10	10	20		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
TOTALES		11	14	16			68	17	108	103	68	171	N° Asignaturas			4	

SEMESTRE II																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompaña/. Semanales	Semanales	Horas semana-les totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Cono-cimiento
FQ215	Seminario de proyecto de grado I. Elaboración de propuesta.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ221	Tendencias curriculares con-temporáneas.	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ235	Profundización en didácticas I.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ241	Evaluación del aprendizaje	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
TOTALES		12	20	20			80	16	120	80	80	160				Nº Asignaturas	4

SEMESTRE III																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompaña/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
FQ315	Seminario de proyecto de gra-do II. Estrategias técnicas e instrumentos de recolección de información.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ321	Contexto sociopolítico de la educación local y global.	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ335	Profundización en didácticas II.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ341	Cognición, inteligencias y crea-tividad.	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
TOTALES		12	20	20			80	16	120	80	80	160				Nº Asignaturas	4

SEMESTRE IV																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompaña/. Semanales	Semanales	Horas semana-les totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
FQ413	Seminario de proyecto de grado III. Análisis e interpretación de información.	3	4	6	2	2	20	4	30	16	24	40	FQ315	Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ421	Gestión del conocimiento en educación.	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ435	Profundización en didácticas III.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60	FQ235 y FQ335	Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ441	Educación en la diversidad. Multicultura e intercultura.	1	5	5	1	1	10	2	20	10	10	20		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ452	Seminario de proyecto de gra-do IV. Preparación del informe final.	2	5	5	2	2	20	3	30	15	15	30		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ464	Trabajo de grado.	4	0	0	0	0	12	16	12	0	0	0		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
TOTALES		16	24	26			102	17	152	81	89	170				Nº Asignaturas	6

ENFOQUE PROFUNDIZACIÓN	
Total Horas Teóricas Semanales	88
Total Horas Prácticas Semanales	82
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL TOTAL	170
Total Horas Teóricas Totales	344
Total Horas Prácticas Totales	317
INTENSIDAD HORARIA TOAL	661

TOTAL CRÉDITO PROGRAMA	51
NÚMERO DE ASIGNATURAS	18

SEMESTRE	CRÉDITOS	ACUMULADO CRÉDITOS ACADÉMICOS	$S_n = \sum_{i=1}^{n-1} C_i + \frac{C_n}{2}$		UBICACIÓN SEMESTRAL	
I	11	11	0	5,5	0	5
II	12	23	6,5	17	6	17
III	12	35	18	29	18	29
IV	16	51	30	43	30	43
(*) Estudiantes que tengan pendientes asignaturas y trabajo de grado para optar su título.			44	51	44	51
I	11	11	0	5,5	0	5
II	12	23	6,5	17	6	17
III	12	35	18	29	18	29
IV	16	51	30	43	30	43
(*) Estudiantes que tengan pendientes asignaturas y trabajo de grado para optar su título.			44	51	44	51

GAMA: OPCIONALES – ELECTIVAS																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompaña/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
ENFOQUE PROFUNDIZACIÓN																	
ELECTIVA BASE		FQ235	Profundización en Didácticas I														
FQ2A5	Didácticas de las Ciencias Sociales I.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ2B5	Didácticas de las Ciencias Experimentales I.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ2C5	Didácticas del Lenguaje I.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ2D5	Didácticas de la Informática Educativa I.	5	5	5	31	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
ELECTIVA BASE		FQ335	Profundización en Didácticas II														
FQ3A5	Didácticas de las Ciencias Sociales II.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ3B5	Didácticas de las Ciencias Experimentales II.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ3C5	Didácticas del Lenguaje II.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades
FQ3D5	Didácticas de la Informática Educativa II.	5	5	5	31	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras moda-lidades

GAMA: OPCIONALES – ELECTIVAS																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompañá./ Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
ELECTIVA BASE		FQ435	Profundización en Didácticas III														
FQ4A5	Didácticas de las Ciencias Sociales III.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FQ4B5	Didácticas de las Ciencias Experimentales III.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FQ4C5	Didácticas del Lenguaje III.	5	5	5	3	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
FQ4D5	Didácticas de la Informática Educativa III.	5	5	5	31	3	30	6	40	30	30	60		Teórico-Práctico	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.

El Presidente,

Carlos Lugo Silva.

La Secretaria,

Liliana Ardila Gómez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$271.000.

Artículo 3°. Para su refrendación y ejecución, el programa aprobado por el presente acuerdo debe surtir los requisitos reglamentarios ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.

El Presidente,

Carlos Lugo Silva.

La Secretaria,

Liliana Ardila Gómez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$271.000.

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 35 DE 2015

(septiembre 9)

por medio del cual se autoriza el funcionamiento del Programa Ingeniería de Manufactura.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere el numeral 10 del artículo 17 del Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Estatuto General, la Universidad Tecnológica de Pereira tiene la potestad de decidir cuáles programas de educación puede ofertar a la comunidad en las diferentes modalidades educativas;

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 17 del Estatuto General, el Consejo Superior Universitario es el órgano de gobierno competente para crear, suspender y suprimir programas académicos a propuesta del Consejo Académico;

Que el Consejo Académico en sesión celebrada el 26 de agosto de 2015, estudió y recomendó la aprobación del programa Ingeniería de Manufactura, y su respectivo plan de estudios, la cual será administrada por la Facultad de Tecnologías;

Que el programa tendrá una duración de diez (10) semestres, ciento sesenta y seis (166) créditos académicos, en modalidad presencial y el título a otorgar será “Ingeniero de Manufactura”;

Que para su refrendación y ejecución, se requiere surtir los pasos reglamentarios ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN);

Que teniendo en cuenta lo antes expuesto, el Consejo Superior,

ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar el funcionamiento del Programa Ingeniería de Manufactura, con las características enunciadas en la parte considerativa.

Artículo 2°. La Universidad otorgará el título de **Ingeniero de Manufactura** a quienes cursen y aprueben el plan de estudios del programa aquí referido.

Parágrafo. Para efectos de lo indicado en el presente artículo, la Rectoría adelantará los trámites pertinentes ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR NÚMERO 36 DE 2015

(septiembre 9)

por medio del cual se aprueba el Plan de Estudios correspondiente al Programa Ingeniería de Manufactura.

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Estatuto General, la Universidad Tecnológica de Pereira tiene la potestad de decidir cuáles programas de educación puede ofertar a la comunidad en las diferentes modalidades educativas;

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 17 del Estatuto General, el Consejo Superior Universitario es el órgano de gobierno competente para crear, suspender y suprimir programas académicos a propuesta del Consejo Académico;

Que el Consejo Académico en sesión celebrada el 26 de agosto de 2015, estudió y recomendó la aprobación del programa Ingeniería de Manufactura, y su respectivo plan de estudios, la cual será administrada por la Facultad de Tecnologías;

Que el programa tendrá una duración de diez (10) semestres, ciento sesenta y seis (166) créditos académicos, en modalidad presencial y el título a otorgar será “Ingeniero de Manufactura”;

Que el Consejo Superior Universitario aprobó mediante Acuerdo número 35 del 9 de septiembre de 2015 el funcionamiento del programa “Ingeniería de Manufactura”, y su respectivo plan de estudios, atendiendo las disposiciones establecidas en el Decreto número 2566 del 10 de septiembre de 2003 y en especial las referidas en el Capítulo II “De los Créditos Académicos”;

Que se requiere la expedición del acto administrativo que aprueba el Plan de Estudios de dicho Programa; en consecuencia,

ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar el Plan de perteneciente a la Facultad de Tecnologías, así:

SEMESTRE I																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompañá./ Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFA15	Matemáticas I.	5	4	3	1	1	7	16	14	64	48	112	NA	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFA22	Dibujo I.	2	2	2	1	1	4	16	8	32	32	64	NA	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFA33	Introducción a la Ingeniería de Manufactura.	3	2	2	1	1	4	16	8	32	32	64	NA	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFA43	Introducción a la Ciencia de los Materiales.	3	2	1	2	1	4	16	7	32	16	48	NA	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFA52	Ciencia Tecnológica y Sociedad.	2	3	0	2	0	6	16	9	48	0	48	NA	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFA61	Deportes I.	1	0	2	1	1	2	16	4	0	32	32	NA	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
		16	13	10			27		50	208	160	368				N° Asignaturas	6

SEMESTRE II																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompañá./ Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFB15	Matemáticas II.	5	4	3	1	1	7	16	14	64	48	112	IMFA15	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFB23	Dibujo II.	3	2	2	1	1	4	16	8	32	32	64	IMFA22	Teórico-Practica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFB33	Tecnología de Extracción de Materias.	3	3	1	2	1	5	16	9	48	16	64	IMFA33 Y IMFA43	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento

SEMESTRE II																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanales	Horas semana-les totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFB43	Física I.	4	5	0	2	2	8	16	13	80	0	80		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFB53	Laboratorio de Física I.	2	0	2	2	2	4	16	6	0	32	32	IMFB43 (S)	Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFB61	Deportes II.	1	0	2	1	1	2	16	4	0	32	32	IMFA61	Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
TOTALES		18	14	10			30		54	224	160	384				Nº Asignaturas	6

SEMESTRE III																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFC14	Matemáticas III.	4	4	1	2	2	10	16	15	64	16	80	IMBF15	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFC23	Algebra Lineal.	3	3	1	1	1	4	16	8	48	16	64	IMFA15	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFC33	Dibujo asistido por computa-dor CAD.	3	2	3	0	1	2	16	7	32	48	80	IMFB23	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFC44	Física II.	4	5	0	2	2	8	16	13	80	0	80		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFC52	Laboratorio de Física II.	2	0	2	0	2	4	16	6	0	32	32	IMFB53 Y IMFC44 (S)	Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFC63	Mecánica I.	3	4	0	1	0	4	16	8	64	0	64	IMGB43	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
TOTALES		19	18	7			32		57	288	112	400				Nº Asignaturas	6

SEMESTRE IV																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácti-cas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas tota-les	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFD13	Matemáticas IV.	3	3	1	1	1	4	16	8	48	16	64	IMFC14	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFD22	Metrología Dimensional.	2	2	1	1	0	2	16	5	32	16	48	IMFC33	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFD32	Procesos de Mecanizado I.	2	3	1	1	0	3	16	7	48	16	64	IMFC33	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFD43	Programación de Computa-dores.	3	2	3	1	1	5	16	10	32	48	80	IMFC23	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFD53	Mecánica II.	3	4	0	1	1	4	16	8	64	0	64	IMFC63	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFD63	Salud Ocupacional.	3	3	1	1	1	4	16	8	48	16	64	40 HC	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
TOTALES		16	17	7			22		46	272	112	384				Nº Asignaturas	6

SEMESTRE V																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFE14	Termodinámica y Mecánica de Fluidos.	4	4	1	1	1	6	16	11	64	16	80	IMFD13	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFE22	Estandarización intercambi-idad y Control.	2	2	1	1	1	2	16	5	32	16	48	IMFD22	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFE32	Procesos de Mecanizado II.	2	2	2	2	1	4	16	8	32	32	64	IMFD32	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFE43	Métodos numéricos.	3	2	1	2	2	6	16	9	32	16	48	IMFD13 Y IMFD43	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFE53	Máquinas y mecanismos de má-quinas – Herramientas.	3	3	2	1	1	6	16	11	48	32	80	IMFD53	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFE64	Resistencia de materiales y la-boratorio.	4	4	2	1	1	6	16	12	64	32	96	IMFD32	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
TOTALES		18	17	9			30		56	272	144	416				Nº Asignaturas	6

SEMESTRE VI																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácti-cas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFF13	Tribología y principios de eco-logía.	3	3	1	2	0	6	16	10	48	16	64	IMFE14	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFF23	Control numérico por com-putador	2	2	2	1	1	2	16	6	32	32	64	IMFE22	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFE33	Métodos básicos de sujeción y ensamble	2	2	1	2	1	4	16	7	32	16	48	IMFE22	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFF43	Estadística general	3	4	0	2	0	8	16	12	64	0	64	IMFD13	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFF53	Transferencia de calor	3	3	1	1	1	4	16	8	48	16	64	IMFE14	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFF63	Materiales metálicos y trata-mientos térmicos	3	3	1	2	2	6	16	10	48	16	64	IMFE64 (S)	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
TOTALES		16	17	6			30		53	272	96	368				Nº Asignaturas	6

SEMESTRE VII																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFG13	Control de Calidad	3	2	2	2	0	4	16	8	32	32	64	IMFF43	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFG24	Electricidad Industrial y La-boratorio	4	3	2	1	1	6	16	11	48	32	80	IMFC44	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFG32	Procesos de conformado por deformación plástica I.	2	3	1	1	1	5	16	9	48	16	64	IMFA33 Y IMFF63	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFG43	Materiales sintéticos.	3	3	1	1	1	5	16	9	48	16	64	90 HC	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFG53	Organización en la empresa industrial.	3	3	0	2	0	5	16	8	48	0	48	90 HC	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
IMFG63	Diseño con Herramientas Com-putacionales (CAE)	3	3	1	1	1	6	16	10	48	16	64	IMFC33 Y IMFF53	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conoci-miento
TOTALES		18	17	7			31		55	272	112	384				Nº Asignaturas	6

SEMESTRE VIII																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFH13	Potencia fluida y sus sistemas de control.	3	3	1	1	2	6	16	10	48	16	64	IMFG24	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFH23	Electrónica analógica y digital.	3	3	1	2	1	6	16	10	48	16	64	IMFG24	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFH32	Procesos de conformado por deformación plástica II.	2	3	1	1	1	5	17	9	51	17	68	IMFA33 Y IMFF63	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFH42	Procesos de conformado y acabado electro físicos y electro-químicos	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48	IMFG32	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFH52	Fundamentos de ingeniería económica.	3	3	1	2	2	6	16	10	48	16	64	IMFG53	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFH62	Tecnologías avanzadas de sujeción y ensamble.	2	2	1	2	1	4	16	7	32	16	48	IMFF33	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
TOTALES		15	17	5				30	52	275	81	356				Nº Asignaturas	6

SEMESTRE IX																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI13	Automatización y tecnologías de control.	3	3	1	1	1	4	16	8	48	16	64	IMFH32	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI23	Diseño de herramientas y herramientas.	4	4	2	1	2	8	16	14	64	32	96	IMFG63	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI33	Procesos CAD/CAE/CAM	3	3	2	1	1	3	16	8	48	32	80	IMFF23 Y IMFG63	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI43	Metodología de la investigación.	3	4	0	1	0	4	16	8	64	0	64	110 HC	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI52	Electiva general I.	2	3	0	2	0	6	16	9	48	0	48	130 HC	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
TOTALES		15	17	5				25	47	272	80	352				Nº Asignaturas	5

SEMESTRE X																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI13	Mantenimiento industrial	3	3	1	1	1	3	16	7	48	16	64	130 H.C.	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI23	Gerencia de producción y manufactura	3	4	0	2	0	6	16	10	64	0	64	IMFI13 Y IMFH52	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI33	Gerencia del ciclo de vida del producto PLM	3	3	2	1	1	3	16	8	48	32	80	IMFI13 Y IMFI33 Y IMFI52	Teórico-Práctica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI42	Seminario Constitución Política, Ética y Legislación Laboral	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48	130 H.C.	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI52	Electiva general II	2	3	9	2	0	6	16	9	48	0	48	130 H.C.	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFI62	Trabajo de grado	2	1	0	7		7	16	8	16	0	16	130 H.C.	Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
TOTALES		15	17	3				28	48	272	48	320				Nº Asignaturas	6

SEMESTRE	CRÉDITOS	ACUMULADO CRÉDITOS ACADÉMICOS	$S_n = \sum_{i=1}^{n-1} C_i + \frac{C_n}{2}$		UBICACIÓN SEMESTRAL	
I	16	16	0	8	0	8
II	18	34	9	25	9	25
III	19	53	26	43,5	26	43
IV	16	69	44,5	61	44	61
V	18	87	62	78	62	78
VI	16	103	79	95	79	95
VII	18	121	96	112	96	112
VIII	15	136	113	128,5	113	128
IX	15	151	129,5	143,5	129	143
X	15	166	144,5	158,5	144	158
(*) Estudiantes que tengan pendientes asignaturas y trabajo de grado para optar su título.			159,5	166	159	166

Total Horas Teóricas Semanales	164
Total Horas Prácticas Semanales	69
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL TOTAL	233
Total Horas Teóricas Totales	2627
Total Horas Prácticas Totales	1105
INTENSIDAD HORARIA TOAL	3732

TOTAL CRÉDITO PROGRAMA	166
NÚMERO DE ASIGNATURAS	59

GAMA: OPCIONALES - ELECTIVAS																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin compañía/. Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
ELECTIVAS GENERAL I																	
IMFK1	Tópicos Especiales de Ingeniería I.	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFK2	Diseño aplicado de moldes de inyección y matricería	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFK34	Tratamientos térmicos basados en tecnología láser	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFK	Proceso de acabado especiales	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFK5	Tecnologías de control avanzadas	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFK6	Diseño aplicado de matrices y troquelados	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFK7	Terología y recuperación de máquinas	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFK8	Fabricación de partes automotrices	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento

GAMA: OPCIONALES - ELECTIVAS																	
Código	Asignatura	CA	Horas Teóricas Semanales	Horas Prácticas Semanales	Factor Horas Teóricas	Factor Horas Prácticas	Horas sin acompaña./ Semanales	Semanales	Horas semanales totales	Horas teóricas totales	Horas prácticas totales	Horas totales	Requisitos	Carácter de las asignaturas	Escala de calificación	Área de Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
ELECTIVAS GENERAL II																	
IMFL1	Modelos de Simulación de Procesos Productivos	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFL2	Gestión de Tecnología de Manufactura	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFL3	Reconversión de Plantas Industriales y Máquinas	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFL4	Integración de Sistemas de Manufactura	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Área del Conocimiento	Núcleo Básico del Conocimiento
IMFL5	Tópicos Especiales de Ingeniería II	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
IMFL6	Automatización aplicada	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades
IML7	Diseño de plantas de ensamble automotor ICES	2	3	0	1	0	3	16	6	48	0	48		Teórica	Cuantitativa	Ciencias de la educación	Educación para otras modalidades

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Pereira, a 9 de septiembre de 2015.

El Presidente,

La Secretaria,

Carlos Lugo Silva.

Liliana Ardila Gómez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1292411. 21-X-2015. Valor \$327.600.

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Grupo Jurídico - Regional Bogotá

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1347 DE 2015

(junio 18)

por la cual se otorga personería jurídica y se aprueba estatutos de la entidad denominada Asociación Manos Unidas.

La directora ICBF regional Bogotá en uso de sus Facultades Legales y Estatutarias, y en especial las refrendadas en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 del 2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia”, Decreto número 276 de 1988, Decreto número 2388 de 1979, Decreto número 1422 de 1996, y la Resolución número 788 de 1989, por la cual se modifican las Resoluciones números 0255 del 19 de febrero de 1988, 0615 del 12 de abril de 1988 y 3899 de 08 de septiembre de 2010, que versan sobre la función de otorgar y reconocer las personerías jurídicas a las Instituciones de utilidad común que presten el servicio de Bienestar Familiar, y demás normas pertinentes emanadas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,

CONSIDERA:

Primero: Que las normas orgánicas del ICBF regulan expresamente en forma específica, la creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y que las mismas le confieren competencia Legal para reconocer, otorgar, suspender y cancelar personería jurídicas y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema, en su condición de entidad rectora del mismo.

Segundo: Que por mandato expreso de la Ley 1098 de 2006, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es el ente Coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, en consecuencia, las Instituciones del mismo, en su organización y funcionamiento, deben dar cumplimiento estricto a las normas del Servicio Público de Bienestar Familiar, dictadas por el ICBF. Por esta razón, al Instituto se le confirió la competencia de “Reconocer, Otorgar, Suspender y cancelar Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento a las Instituciones del Sistema”.

Tercero: Que son vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las Instituciones de carácter privado, sin ánimo de lucro que cumplan actividades relacionadas con la protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e integración armónica de la familia.

Cuarto: Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, establece que todas las personas naturales o jurídicas con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, las niñas y los adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado.

Quinto: Que la **Asociación Manos Unidas**, fue constituida mediante acta otorgada en asamblea general del 9 de junio de 2015, como una entidad sin ánimo de lucro vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Sexto: Que por acta del 9 de junio de 2015, se eligió como representante legal de la **Asociación Manos Unidas** a la señora Sandra Patricia Rodríguez Guevara identificada con cédula de ciudadanía número 52365414.

Séptimo: Que examinado cuidadosamente los estatutos; se reconoce la existencia de actividades relacionadas con la protección preventiva y especial del menor, la garantía y protección de sus derechos consideradas propias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, observándose que estas se ajustan a la Constitución Política y la ley y no contravienen el orden Público, la moral y las buenas costumbres.

Octavo: Que con fecha 17 de junio de 2015, la Coordinadora del Grupo Jurídico de la Regional, emitió Concepto favorable para el otorgamiento solicitado, por cumplirse los requisitos Legales especialmente los señalados por la Resolución número 3899 de 8 de Septiembre de 2010, emanada de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Que, en consideración a los expuestos, esta Dirección Regional

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar personería jurídica y aprobar estatutos de la **Asociación Manos Unidas**, como una entidad sin ánimo de lucro vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, conforme al acta del 9 de junio de 2015.

Artículo 2°. A partir de la ejecutoria de la presente resolución, la **Asociación Manos Unidas**, podrá desarrollar los programas propios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con el cumplimiento de requisitos y lineamientos.

Artículo 3°. Que se inscribe como representante legal de la **Asociación Manos Unidas** a la señora Sandra Patricia Rodríguez Guevara identificada con cédula de ciudadanía número 52365414.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente resolución, a través de su Representante Legal o apoderado, dentro de los cinco (05) días siguientes a su expedición, si no se pudiera realizar en dicho término, esta se realizará por medio de aviso, según lo contemplado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Artículo 5°. Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante el Director Regional del ICBF el cual se deberá interponer por escrito al momento de su notificación o dentro de los diez (10) siguientes a ella, según el caso, como lo establece el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Artículo 6°. Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante el Director Regional del ICBF el cual se deberá interponer por escrito al momento de su notificación o dentro de los diez (10) siguientes a ella, según el caso, como lo establece el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Artículo 7°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución número 3899 de 2010, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, impone el deber de acreditar la publicación en el **Diario Oficial** del presente acto administrativo dentro de los 15 días siguientes a su notificación por cuenta de la Fundación.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecución.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2015.

La Directora ICBF Regional Bogotá,

Diana Patricia Arboleda Ramírez

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21502149. 23-X-2015. Valor \$264.100.

Regional Caquetá - Grupo Jurídico

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1572 DE 2015

(octubre 15)

por la cual se reconoce personería jurídica a una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

La Directora Encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Caquetá, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 7ª de 1979, el Decreto número 117 de 2010, Ley 1098 de 2006 y la Resolución número 3899 del 08 de septiembre de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 205 de la Ley 1098 de 2006, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es el ente rector y coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas.

Que en este mismo sentido, el artículo 16 ibídem ordena que todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aún, con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado, y en tal virtud, compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema que prestan servicios de protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de adopción, de acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público de Bienestar Familiar.

Que mediante Resolución número 3899 del 8 de septiembre de 2010, la Dirección General del ICBF estableció el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que prestan servicios de protección integral, y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Que la Cámara de Comercio de Florencia otorgó personería jurídica con el número 0000000000000009284 del 29 de abril de 2014, inscrita en la Cámara de Comercio el 29 de abril de 2014 bajo el número 00009284 del Libro I.

Que mediante Oficio radicado con el número E - 2015 - 422702 - 180-00 de fecha 5 de octubre de 2015, la señora Olga Leonor Arenas de Silva, solicitó Reconocimiento de Personería Jurídica y aprobación de estatutos a la **Fundación Fundar** de acuerdo al acta de constitución de fecha 21 de abril de 2014 suscrita por la Cámara de Comercio de Florencia Caquetá.

Que mediante acta de fecha 4 de mayo de 2015, se nombró como representante legal de la **Fundación Fundar** a la señora Olga Leonor Arenas de Silva identificada con la cédula de ciudadanía número 41548628 de Bogotá, D. C.

Que una vez examinados los estatutos presentados se encuentra que su objeto social incluye el desarrollo de programas y proyectos de protección integral para niños, niñas y adolescentes, y/o a las familias, y, por consiguiente, deben prestarse en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en las condiciones y con los requisitos definidos en el marco normativo vigente aplicable.

Que así mismo, esta Dirección encuentra satisfechos los requisitos señalados en el artículo 7° de la Resolución número 3899 de 2010.

Que en consideración a lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocer Personería jurídica y aprobar los estatutos de la **Fundación Fundar**, domiciliada en el Kilómetro 2 Vía Morelia, como entidad sin ánimo de lucro, vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de acuerdo al acta de constitución de fecha 21 de abril de 2014 suscrita por la Cámara de Comercio de Florencia Caquetá.

Artículo 2°. Inscribir como representante legal de la **Fundación Fundar** a Olga Leonor Arenas de Silva, identificada con la cédula de ciudadanía número 41548628 de Bogotá D. C., de conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 4 de mayo de 2015.

Artículo 3°. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al representante legal de la **Fundación Fundar**, identificada con el NIT. 900.725.751-1 o a su apoderado legalmente constituido o a quien haga sus veces, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición ante esta Dirección Regional, el cual podrá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su notificación, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En caso de no poderse cumplir la notificación personal esta se surtirá por aviso en la forma prevista en el artículo 69 ibídem.

Artículo 4°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución número 3899 de 2010, la institución deberá acreditar la publicación en el **Diario Oficial** del presente acto administrativo dentro de los 15 días siguientes a su notificación.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Florencia, a 15 de octubre de 2015.

La Directora Encargada ICBF Regional Caquetá,

Adriana Marcela Echeverry Perdomo

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1622054. 20-X-2015. Valor \$271.000.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Junta Directiva

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 22 DE 2015

(octubre 21)

por el cual se modifica la Planta Global de Personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La Junta Directiva, en ejercicio de las facultades legales, en especial, las otorgadas por la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, artículo 39 numeral 5, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 39 de la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, establece que es función de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “Aprobar la modificación de la planta de personal del Instituto y las reformas que sean requeridas para su adecuado funcionamiento previo proyecto presentado por el Director General”;

Que en proceso de negociación entre los representantes de los empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y representantes del Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses suscrito el pasado 18 de julio de 2013 se analizaron y discutieron las solicitudes en el pliego llegando a acuerdos importantes para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores;

Que uno de los acuerdos logrados en el proceso de negociación hace referencia a que “se evidencian problemas de sobrecarga laboral y de competitividad salarial... razón por la cual se conformó una comisión técnica...; quienes presentaron un estudio técnico con la propuesta requerida para solucionar la problemática de sobrecarga laboral y de competitividad, la cual consiste en la creación de 101 empleos para la vigencia fiscal de 2014... Para posteriores fases, la administración del INMLCF se compromete a presentar, concertado con los sindicatos, al Gobierno nacional un estudio técnico para ajustar la planta de personal de manera gradual y progresiva hasta el año 2017 que permita atender las necesidades de prestación de servicios y la competitividad salarial. El Gobierno nacional asume el compromiso de prestar la asistencia técnica que se requiera, y estudiar la viabilidad técnica y presupuestal de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector”;

Que con tal propósito, entre junio y noviembre de 2014 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó el estudio técnico de ajuste salarial e incorporación de planta de personal, el cual contó con la participación de las organizaciones sindicales. Dicho estudio técnico se radicó el 28 de noviembre de 2014 en el Departamento Administrativo de la Función Pública para su análisis y aprobación;

Que el 9 de julio de 2015 el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante Oficio número 20154000114841 señala que el Estudio Técnico presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se ajusta a las directrices de esa entidad;

Que el 14 de julio de 2015 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibe y asigna Radicado Interno número 1-2015-055161 al estudio técnico de ajuste salarial e incorporación de planta de personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses;

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional mediante Oficio número 2-2015-039565 del 9 de octubre de 2015, informa que en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016, en la Sección 2902 00, para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, están previstos los recursos para la provisión de 110 cargos adicionales en la planta de personal, de los cuales 86 podrán ser creados y nombrados a partir del 13 de octubre de 2015 y 24 empleos para la vigencia 2016, debido a que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con la disponibilidad presupuestal en la vigencia 2015. Esta creación de cargos se autoriza con el fin de continuar cumpliendo con las obligaciones derivadas del apoyo y fortalecimiento a la justicia así como a las políticas del Gobierno;

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. *Adicionar.* En la vigencia 2015 ingresarán a planta de personal global y flexible del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 86 funcionarios, así:

NIVEL	DENOMINACIÓN DEL CARGO	GRADO	PLANTA AÑO 2014	NUEVOS CARGOS	TOTAL PLANTA
Directivo	Director General	27	1		1
	Secretario General	26	1		1
	Subdirector	26	3		3
	Director Regional	25	1		1

NIVEL	DENOMINACIÓN DEL CARGO	GRADO	PLANTA AÑO 2014	NUEVOS CARGOS	TOTAL PLANTA
	Director Regional	24	2		2
	Director Regional	24	1		1
	Director Regional	24	2		2
	Director Regional	23	1		1
	Director Regional	22	1		1
	Director Seccional	20	13		13
	Director Seccional	17	6		6
	Director Seccional	15	3		3
	Director Seccional	13	3		3
	TOTAL NIVEL DIRECTIVO		38	0	38
Asesor	Jefe Oficina Asesora	24	3		3
	Jefe Oficina Asesora	22	2		2
	Asesor	22	6		6
	Asesor	21	3		3
	Asesor	19	1		1
	Asesor	13	1		1
	TOTAL NIVEL ASESOR		16	0	16
Profesional	Profesional Especializado Forense	19	22	6	28
	Profesional Especializado Forense	18	22	12	34
	Profesional Especializado Forense	17	40	3	43
	Profesional Especializado Forense	16	45	6	51
	Profesional Especializado Forense	15	70	4	74
	Profesional Especializado Forense	14	72	4	76
	Profesional Especializado Forense	13	75	6	81
	Profesional Especializado Forense	12	85	7	92
	Profesional Universitario Forense	11	135		135
	Profesional Universitario Forense	10	235		235
	Profesional Especializado	19	7		7
	Profesional Especializado	18	0	10	10
	Profesional Especializado	17	6	6	12
	Profesional Especializado	16	2		2
	Profesional Especializado	15	10		10
	Profesional Especializado	14	17		17
	Profesional Especializado	13	25		25
	Profesional Especializado	12	30		30
	Profesional Universitario	11	15		15
	Profesional Universitario	10	38		38
	TOTAL NIVEL PROFESIONAL		951	64	1.015
Técnico	Técnico Forense	9	32	3	35
	Técnico Forense	8	36	2	38
	Técnico Forense	7	49		49
	Técnico	9	5	4	9
	Técnico	8	8		8
	Técnico	7	14		14
	TOTAL NIVEL TÉCNICO		144	9	153
Asistencial	Asistente Forense	6	41	5	46
	Asistente Forense	5	111	5	116
	Asistente Forense	4	132		132
	Asistente Forense	3	190		190
	Asistente	6	50	3	53
	Asistente	5	74		74
	Asistente	4	80		80
	Asistente	2	100		100
	Secretario Ejecutivo	6	15		15
	Secretario	5	25		25
	Conductor	4	5		5
	Conductor	2	7		7
	TOTAL NIVEL ASISTENCIAL		830	13	843
Total General Empleos			1.979	86	2.065

Artículo 2°. *Adicionar.* Para la vigencia 2016, veinticuatro (24) cargos a la planta de personal global y flexible del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así:

NIVEL	DENOMINACIÓN DEL CARGO	GRADO	PLANTA AÑO 2015	NUEVOS CARGOS	TOTAL PLANTA
Directivo	Director General	27	1		1
	Secretario General	26	1		1
	Subdirector	26	3		3
	Director Regional	25	1		1
	Director Regional	24	2		2
	Director Regional	24	1		1
	Director Regional	24	2		2
	Director Regional	23	1		1
	Director Regional	22	1		1
	Director Seccional	20	13		13
	Director Seccional	17	6		6
	Director Seccional	15	3		3
	Director Seccional	13	3		3
	TOTAL NIVEL DIRECTIVO		38	0	38

NIVEL	DENOMINACIÓN DEL CARGO	GRADO	PLANTA AÑO 2015	NUEVOS CARGOS	TOTAL PLANTA
Asesor	Jefe Oficina Asesora	24	3		3
	Jefe Oficina Asesora	22	2		2
	Asesor	22	6		6
	Asesor	21	3		3
	Asesor	19	1		1
	Asesor	13	1		1
	TOTAL NIVEL ASESOR		16	0	16
Profesional	Profesional Especializado Forense	19	28	2	30
	Profesional Especializado Forense	18	34	5	39
	Profesional Especializado Forense	17	43		43
	Profesional Especializado Forense	16	51		51
	Profesional Especializado Forense	15	74		74
	Profesional Especializado Forense	14	76		76
	Profesional Especializado Forense	13	81		81
	Profesional Especializado Forense	12	92		92
	Profesional Universitario Forense	11	135		135
	Profesional Universitario Forense	10	235		235
	Profesional Especializado	19	7	2	9
	Profesional Especializado	18	10	1	11
	Profesional Especializado	17	12		12
	Profesional Especializado	16	2		2
	Profesional Especializado	15	10		10
	Profesional Especializado	14	17		17
	Profesional Especializado	13	25		25
	Profesional Especializado	12	30		30
	Profesional Universitario	11	15		15
	Profesional Universitario	10	38		38
	TOTAL NIVEL PROFESIONAL		1.015	10	1.025
Técnico	Técnico Forense	9	35	4	39
	Técnico Forense	8	38		38
	Técnico Forense	7	49		49
	Técnico	9	9	2	11
	Técnico	8	8		8
	Técnico	7	14		14
	TOTAL NIVEL TÉCNICO		153	6	159
Asistencial	Asistente Forense	6	46	4	50
	Asistente Forense	5	116	2	118
	Asistente Forense	4	132		132
	Asistente Forense	3	190		190
	Asistente	6	53	2	55
	Asistente	5	74		74
	Asistente	4	80		80
	Asistente	2	100		100
	Secretario Ejecutivo	6	15		15
	Secretario	5	25		25
	Conductor	4	5		5
	Conductor	2	7		7
	TOTAL NIVEL ASISTENCIAL		843	8	851
Total General Empleos			2.065	24	2.089

Artículo 3°. *Distribución de empleos.* El Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses podrá distribuir los empleos de la planta global de personal mediante acto administrativo acorde con la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas establecidos por la entidad para el cumplimiento de su misión.

Artículo 4°. *De los nombramientos.* El Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizará la incorporación de los servidores públicos a la planta global de personal, así como las promociones que se generen como consecuencia de los movimientos de personal realizados con ocasión del incremento aprobado en los artículos primero y segundo del presente acuerdo.

Artículo 5°. La presente modificación de la planta global de personal para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.8.1.9.3, Capítulo 9, disposiciones varias del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015.

Artículo 6°. *Vigencia y derogatorias.* El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los que le sean contrarios.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2015.

El Presidente,

Jorge Fernando Perdomo Torres.

La Secretaria,

Claudia Isabel Niño Izquierdo.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21502154. 23-X-2015. Valor \$271.000.

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1797 DE 2015

(agosto 31)

por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada Guateque.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 (numeral 12) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 42 (numerales 1 y 27) de la Resolución 703 de 2003, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se aprobaron los Estatutos de la CAR,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política, consagra el deber de toda persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2 y 11) de la Ley 99 de 1993, corresponde a las corporaciones autónomas regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables.

Que el artículo 17 del Decreto número 1504 de 1998, dispone que las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público.

Que el artículo 5°, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1 (elementos constitutivos naturales), incluye en su literal b), dentro de las áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas.

Que el artículo 1° del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social.

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...”.

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el Estado resuelva explotarlos.

Que el artículo 14 del Decreto número 1541 de 1978 (compilado en el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto 1076 de 2015) dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 (literal d) del Decreto número 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado.

Que el artículo 124 del citado decreto (compilado en el artículo 2.2.3.2.13.15 del Decreto 1076 de 2015), establece que para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán alinear zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares.

Que según el artículo 1° del decreto mencionado, para cumplir los fines del artículo 2° del Decreto-ley 2811 de 1974, las corporaciones autónomas regionales deben adoptar las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, riberas, declaración de reserva y agotamiento del recurso para asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que dependen del mismo.

Que dicha potestad se encuentra relacionada con el artículo 284 (numeral 3) del mismo ordenamiento, conforme al cual las autoridades ambientales competentes tendrán a su cargo la determinación de la faja paralela al cauce permanente de los ríos y lagos, a la cual se refiere el artículo 83 (literal d) del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”, dispone que corresponde a

las corporaciones autónomas regionales: “efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes”.

Que el Plan de Acción 2012-2015 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), estableció como Meta 8, dentro del Programa 6, Enfoque de cuencas, la Actividad 8.4, correspondiente a la definición y delimitación de las zonas de ronda para 24 corrientes priorizadas en la jurisdicción de la entidad.

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la cuenca del río Negro, la CAR consideró necesario contar con una Guía metodológica para definir y delimitar las zonas de ronda de cuerpos hídricos, que involucrara la evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos.

Que según los artículos 19 y 46 del Decreto número 1640 de 2012 (compilados en los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto 1076 de 2015), “por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos”, la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, las corporaciones autónomas regionales son integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, y además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto-ley 19 de 2012 dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “cuando se garantice la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente”.

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas.

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, así como aquellas emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de formular y adoptar los correspondientes POT.

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo primero del Acuerdo CAR 16 de 1998, “por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipales”, las “áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general” se deben sujetar al siguiente régimen de usos en dichos instrumentos:

“Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación”.

Que en similar sentido, el artículo 3° del Decreto número 1449 de 1977 (compilado en el artículo 2.2.1.1.1.8.2 del Decreto 1076 de 2015), “por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1° del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-ley número 2811 de 1974”, establece que los propietarios de predios están obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del inmueble respectivo, las áreas forestales protectoras, entendiéndose por estas, entre otras, “una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua”.

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante radicación 1200-E2- 101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, manifestó: “... estas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se debe prohibir y restringir actividades que no tengan esa finalidad”.

Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de la CAR expidió la Resolución número 0608 del 18 marzo de 2014, por medio de la cual se adoptó la Guía metodológica para la delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la cual soporta técnicamente la delimitación del cauce natural o cauce permanente del río, con la siguiente definición: la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos, por efecto de las crecientes ordinarias, correspondiendo estos niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias a las cotas naturales promedio (líneas o niveles ordinarios) más altas de los últimos quince (15) años.

Que dando alcance a lo consignado como Meta 8, dentro del Programa 6, Enfoque de cuencas, Actividad 8.4, correspondiente a la definición y delimitación de las zonas de ronda para 24 corrientes priorizadas en la jurisdicción de la entidad, la entonces Subdirección de Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas conformó un equipo técnico de profesionales especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, ingeniería catastral, geología y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de ronda consignadas en dicha meta, con base a lo establecido en la Resolución número 0608 del 18 de marzo de 2014.

Que dicho grupo elaboró el estudio (anexo 1) denominado: *Estudio hidrológico e hidráulico para la determinación de la ronda de la quebrada Guateque*, donde se, determinaron los niveles máximos anuales presentados en los últimos quince (15) años; se promediaron; se detallaron la morfología del lecho, las orillas y las franjas inundables del cuerpo hídrico, en las veredas El Nudillo, El Pinal y Casco Urbano del municipio de Pacho, determinando secciones transversales espaciadas según los cambios de sinuosidad del cauce principal. Esta información fue procesada y analizada para generar modelos digitales de elevación de terreno, que constituyeron un insumo fundamental, además de los caudales generados, para el siguiente paso en el proceso, que fue el modelamiento hidráulico y la respectiva generación de las cotas de inundación de la quebrada Guateque, a partir de los cuales se generó la ronda hídrica de protección de 30 metros, según lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

Que la quebrada Guateque, por ser de cuarto orden, y dada su importancia geográfica, económica y social en el área de jurisdicción de la CAR, requiere para su adecuada protección y mantenimiento, la mayor área legalmente posible para el establecimiento de su ronda, tanto en el río como en su valle de inundación y sus afluentes.

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá a determinar la zona de ronda de protección de la quebrada Guateque, buscando su articulación con el plan de ordenamiento territorial del municipio de Pacho, perteneciente a la cuenca; y por supuesto, con el proceso de ordenación de la cuenca del río Negro.

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 4°, 47 y 83 del Código Nacional de Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la quebrada Guateque, realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con justa causa al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales se deben respetar según los preceptos mencionados.

Que sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual: *“todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”*. Así las cosas, los usos y actividades existentes en la ronda de protección de la quebrada Guateque, que cumplan las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los propósitos de conservación consagrados en el presente acto.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar como zona de ronda de protección de la quebrada Guateque, la franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a lado y lado del cauce, con un área total de ciento ochenta y seis mil trescientos nueve punto veinte y ocho (186309,28) metros cuadrados, aproximadamente. Dicha franja está limitada por las siguientes coordenadas:

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	991286,416	1060522,04	Izquierdo	991674,089	1058253,49
Derecho	991286,569	1060522,04	Izquierdo	991673,424	1058253,54
Derecho	991291,368	1060521,6	Izquierdo	991669,024	1058254,53
Derecho	991296,034	1060520,4	Izquierdo	991664,823	1058256,17
Derecho	991300,444	1060518,46	Izquierdo	991651,367	1058262,64
Derecho	991304,485	1060515,84	Izquierdo	991647,204	1058265,07
Derecho	991308,05	1060512,6	Izquierdo	991643,484	1058268,14
Derecho	991311,047	1060508,82	Izquierdo	991640,303	1058271,76
Derecho	991313,396	1060504,61	Izquierdo	991637,743	1058275,84
Derecho	991315,037	1060500,08	Izquierdo	991635,871	1058280,29
Derecho	991315,926	1060495,35	Izquierdo	991634,734	1058284,97
Derecho	991316,041	1060490,53	Izquierdo	991634,362	1058289,78
Derecho	991315,824	1060487,16	Izquierdo	991634,765	1058294,58
Derecho	991313,97	1060450,1	Izquierdo	991635,932	1058299,26
Derecho	991313,602	1060446,74	Izquierdo	991637,833	1058303,69
Derecho	991313,434	1060445,82	Izquierdo	991661,882	1058349,23
Derecho	991303,211	1060394,47	Izquierdo	991664,047	1058352,7
Derecho	991293,775	1060343,47	Izquierdo	991666,662	1058355,83
Derecho	991290,896	1060300,1	Izquierdo	991669,679	1058358,58
Derecho	991290,28	1060295,72	Izquierdo	991673,041	1058360,9

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	991289,024	1060291,48	Izquierdo	991676,687	1058362,74
Derecho	991287,156	1060287,48	Izquierdo	991680,548	1058364,06
Derecho	991284,716	1060283,79	Izquierdo	991703,787	1058370,31
Derecho	991287,898	1060231,92	Izquierdo	991708,501	1058371,15
Derecho	991287,955	1060230,09	Izquierdo	991713,289	1058371,22
Derecho	991287,819	1060227,23	Izquierdo	991718,028	1058370,53
Derecho	991283,336	1060180,31	Izquierdo	991722,597	1058369,1
Derecho	991278,473	1060111,81	Izquierdo	991726,879	1058366,96
Derecho	991278,474	1060111,14	Izquierdo	991729,316	1058365,49
Derecho	991278,438	1060109,66	Izquierdo	991733,943	1058369,81
Derecho	991276,17	1060063,27	Izquierdo	991737,931	1058372,92
Derecho	991279,312	1060060	Izquierdo	991742,219	1058375,25
Derecho	991293,876	1060054,18	Izquierdo	991743,548	1058375,84
Derecho	991297,827	1060052,26	Izquierdo	991743,577	1058376,68
Derecho	991301,455	1060049,78	Izquierdo	991739,178	1058405,99
Derecho	991304,681	1060046,79	Izquierdo	991727,306	1058443,55
Derecho	991307,436	1060043,37	Izquierdo	991702,318	1058471,78
Derecho	991314,425	1060033,25	Izquierdo	991669,843	1058508,69
Derecho	991326,49	1060027,01	Izquierdo	991668,691	1058510,08
Derecho	991330,187	1060024,75	Izquierdo	991666,267	1058513,71
Derecho	991333,519	1060021,98	Izquierdo	991626,34	1058584,15
Derecho	991355,247	1060001,07	Izquierdo	991624,568	1058587,84
Derecho	991384,513	1059978,5	Izquierdo	991623,316	1058591,74
Derecho	991387,846	1059975,5	Izquierdo	991622,606	1058595,78
Derecho	991390,695	1059972,05	Izquierdo	991622,453	1058599,87
Derecho	991392,999	1059968,21	Izquierdo	991622,859	1058603,95
Derecho	991394,705	1059964,07	Izquierdo	991632,772	1058661,74
Derecho	991395,775	1059959,72	Izquierdo	991630,45	1058684,14
Derecho	991398,825	1059941,57	Izquierdo	991630,347	1058685,21
Derecho	991399,236	1059936,94	Izquierdo	991614,683	1058704,01
Derecho	991399,422	1059919,71	Izquierdo	991538,46	1058734,55
Derecho	991399,056	1059914,87	Izquierdo	991493,319	1058752,49
Derecho	991397,915	1059910,15	Izquierdo	991447,24	1058770,52
Derecho	991396,029	1059905,68	Izquierdo	991404,792	1058787,54
Derecho	991386,103	1059886,63	Izquierdo	991375,912	1058788,92
Derecho	991382,998	1059870,48	Izquierdo	991371,696	1058789,43
Derecho	991388,417	1059849,01	Izquierdo	991367,593	1058790,52
Derecho	991389,059	1059845,68	Izquierdo	991363,685	1058792,18
Derecho	991389,322	1059842,3	Izquierdo	991360,051	1058794,38
Derecho	991389,203	1059838,92	Izquierdo	991354,262	1058798,46
Derecho	991387,573	1059821,23	Izquierdo	991350,894	1058801,23
Derecho	991386,286	1059789,78	Izquierdo	991347,962	1058804,45
Derecho	991385,896	1059786,03	Izquierdo	991345,528	1058808,06
Derecho	991385,038	1059782,36	Izquierdo	991343,642	1058811,99
Derecho	991383,728	1059778,83	Izquierdo	991281,268	1058883,79
Derecho	991381,985	1059775,49	Izquierdo	991217,621	1058954,41
Derecho	991351,457	1059724,99	Izquierdo	991216,989	1058955,14
Derecho	991337,415	1059700,72	Izquierdo	991155,131	1059028,37
Derecho	991328,269	1059662,11	Izquierdo	991152,774	1059031,57
Derecho	991329,243	1059615,4	Izquierdo	991150,86	1059035,05
Derecho	991329,142	1059612,24	Izquierdo	991149,422	1059038,75
Derecho	991328,71	1059609,11	Izquierdo	991148,488	1059042,62
Derecho	991316,176	1059543,94	Izquierdo	991147,222	1059049,94
Derecho	991315,075	1059539,82	Izquierdo	991134,593	1059123,16
Derecho	991283,743	1059449,49	Izquierdo	991121,131	1059203,73
Derecho	991281,784	1059445,05	Izquierdo	991120,725	1059208,22
Derecho	991281,228	1059444,06	Izquierdo	991120,994	1059212,71
Derecho	991262,375	1059412,16	Izquierdo	991121,933	1059217,11
Derecho	991260,045	1059395,11	Izquierdo	991123,52	1059221,33
Derecho	991265,477	1059379,27	Izquierdo	991125,72	1059225,25
Derecho	991266,481	1059375,6	Izquierdo	991153,63	1059267,34
Derecho	991267,012	1059371,84	Izquierdo	991158,878	1059283,56
Derecho	991267,063	1059368,03	Izquierdo	991160,68	1059290,54
Derecho	991266,517	1059357,16	Izquierdo	991161,156	1059292,19
Derecho	991266,145	1059353,72	Izquierdo	991168,603	1059315,45
Derecho	991265,822	1059352,07	Izquierdo	991170,374	1059319,78
Derecho	991258,289	1059318,61	Izquierdo	991172,796	1059323,79
Derecho	991256,87	1059314,04	Izquierdo	991175,812	1059327,36
Derecho	991254,743	1059309,76	Izquierdo	991193,742	1059345,55
Derecho	991251,963	1059305,87	Izquierdo	991197,842	1059358,15
Derecho	991248,6	1059302,47	Izquierdo	991197,504	1059359,11
Derecho	991229,729	1059286,21	Izquierdo	991196,682	1059361,88
Derecho	991224,749	1059269,63	Izquierdo	991190,792	1059385,94
Derecho	991224,45	1059268,69	Izquierdo	991190,117	1059389,75
Derecho	991222,641	1059263,31	Izquierdo	991189,937	1059393,61
Derecho	991218,997	1059245,04	Izquierdo	991190,254	1059397,46
Derecho	991218,042	1059241,44	Izquierdo	991194,973	1059429,37

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	991216,648	1059237,98	Izquierdo	991196,012	1059433,78
Derecho	991214,836	1059234,72	Izquierdo	991197,703	1059437,98
Derecho	991190,234	1059196,32	Izquierdo	991200,008	1059441,88
Derecho	991200,943	1059133,19	Izquierdo	991222,445	1059474,02
Derecho	991212,507	1059064,78	Izquierdo	991249,292	1059559,72
Derecho	991269,327	1058998,39	Izquierdo	991260,963	1059617,37
Derecho	991332,888	1058927,5	Izquierdo	991259,352	1059666,1
Derecho	991333,66	1058926,6	Izquierdo	991259,52	1059670,41
Derecho	991393,719	1058854,05	Izquierdo	991260,303	1059674,65
Derecho	991411,953	1058854,22	Izquierdo	991272,795	1059722,63
Derecho	991415,492	1058854,04	Izquierdo	991273,452	1059724,82
Derecho	991418,986	1058853,45	Izquierdo	991274,79	1059728,08
Derecho	991422,386	1058852,45	Izquierdo	991289,636	1059758,95
Derecho	991471,932	1058834,62	Izquierdo	991290,288	1059760,23
Derecho	991472,805	1058834,29	Izquierdo	991290,901	1059761,31
Derecho	991518,749	1058816,13	Izquierdo	991315,764	1059803,03
Derecho	991564,581	1058797,48	Izquierdo	991317,325	1059825,55
Derecho	991565,143	1058797,25	Izquierdo	991317,779	1059841,43
Derecho	991648,729	1058761,25	Izquierdo	991315,944	1059867,47
Derecho	991652,446	1058759,32	Izquierdo	991315,869	1059869,58
Derecho	991655,857	1058756,88	Izquierdo	991315,982	1059872,18
Derecho	991658,896	1058754	Izquierdo	991318,611	1059902,37
Derecho	991688,927	1058721,2	Izquierdo	991319,196	1059906,2
Derecho	991691,485	1058718	Izquierdo	991320,272	1059909,93
Derecho	991693,58	1058714,47	Izquierdo	991321,821	1059913,49
Derecho	991695,175	1058710,69	Izquierdo	991323,815	1059916,82
Derecho	991696,24	1058706,73	Izquierdo	991333,753	1059931,2
Derecho	991696,753	1058702,65	Izquierdo	991334,143	1059933,82
Derecho	991697,495	1058689,66	Izquierdo	991333,891	1059934,71
Derecho	991699,673	1058663,48	Izquierdo	991312,938	1059951,43
Derecho	991699,777	1058661	Izquierdo	991311,66	1059952,51
Derecho	991699,522	1058657,1	Izquierdo	991289,212	1059972,57
Derecho	991692,689	1058604,97	Izquierdo	991272,778	1059983,21
Derecho	991723,213	1058549,35	Izquierdo	991269,294	1059985,83
Derecho	991752,58	1058515,12	Izquierdo	991266,248	1059988,94
Derecho	991781,531	1058482,91	Izquierdo	991263,71	1059992,49
Derecho	991783,812	1058480,03	Izquierdo	991261,74	1059996,38
Derecho	991785,726	1058476,9	Izquierdo	991248,613	1060001,13
Derecho	991787,242	1058473,56	Izquierdo	991244,318	1060003,08
Derecho	991805,758	1058425,1	Izquierdo	991240,382	1060005,67
Derecho	991806,109	1058424,14	Izquierdo	991236,902	1060008,85
Derecho	991807,289	1058419,54	Izquierdo	991221,979	1060024,82
Derecho	991813,629	1058383,15	Izquierdo	991219,654	1060027,63
Derecho	991814,054	1058378,52	Izquierdo	991217,688	1060030,71
Derecho	991813,758	1058373,88	Izquierdo	991216,11	1060034
Derecho	991812,748	1058369,35	Izquierdo	991211,81	1060044,57
Derecho	991805,428	1058345,38	Izquierdo	991210,628	1060048,08
Derecho	991803,677	1058340,94	Izquierdo	991209,888	1060051,71
Derecho	991801,245	1058336,84	Izquierdo	991209,602	1060055,4
Derecho	991798,194	1058333,17	Izquierdo	991209,773	1060059,1
Derecho	991794,6	1058330,04	Izquierdo	991214,857	1060106,51
Derecho	991778,007	1058317,74	Izquierdo	991214,41	1060111,6
Derecho	991762,719	1058305,56	Izquierdo	991214,466	1060113,44
Derecho	991758,794	1058302,91	Izquierdo	991218,851	1060184,84
Derecho	991754,501	1058300,91	Izquierdo	991221,518	1060229,41
Derecho	991749,947	1058299,61	Izquierdo	991214,547	1060296,2
Derecho	991745,245	1058299,05	Izquierdo	991214,385	1060299,31
Derecho	991725,57	1058298,25	Izquierdo	991214,414	1060300,63
Derecho	991720,773	1058298,44	Izquierdo	991214,615	1060305,18
Derecho	991716,068	1058299,4	Izquierdo	991214,995	1060308,79
Derecho	991705,86	1058272,55	Izquierdo	991215,376	1060310,7
Derecho	991703,944	1058268,47	Izquierdo	991225,528	1060354,04
Derecho	991701,438	1058264,72	Izquierdo	991235,371	1060406,06
Derecho	991698,398	1058261,38	Izquierdo	991245,082	1060457,01
Derecho	991694,893	1058258,55	Izquierdo	991250,677	1060496,41
Derecho	991691,001	1058256,26	Izquierdo	991251,733	1060501,1
Derecho	991686,812	1058254,59	Izquierdo	991253,524	1060505,56
Derecho	991682,419	1058253,57	Izquierdo	991256,006	1060509,68
Derecho	991677,923	1058253,21	Izquierdo	991259,113	1060513,35
Derecho	991674,089	1058253,49	Izquierdo	991262,767	1060516,47
			Izquierdo	991266,873	1060518,97
			Izquierdo	991271,327	1060520,79
			Izquierdo	991276,012	1060521,87
			Izquierdo	991280,81	1060522,18
			Izquierdo	991283,662	1060522,07
			Izquierdo	991286,416	1060522,04

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia el presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico (Anexo 1) y en los planos anexos de determinación con sus correspondientes coordenadas (Anexo 2), los cuales forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación espacial. La zona determinada como ronda de protección de la quebrada Guateque que aquí se anuncia, se delimita en el Anexo 2, que forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. *Objeto*. El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación, restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares y concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la presente resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

Artículo 4°. *Régimen de usos de la zona de ronda de protección*. El régimen de usos de la zona de ronda de protección determinada por el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación.

Parágrafo 1°. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2°. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3°. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, conforme a lo dispuesto en el Decreto número 1076 de 2015 y el Acuerdo 28 de 2004, emanado de la CAR y, en general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización impartida por parte de la CAR.

Artículo 5°. *Parámetros para los usos condicionados*. La implementación de los usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros:

- a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar;
- b) Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR);
- c) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno natural;
- d) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo;
- e) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. *Zonas de alto riesgo no mitigable*. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control por la Administración Municipal de Pacho, con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. *Aumento de cobertura boscosa*. Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados en la ronda de protección de la quebrada Guateque, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto en el presente acto.

Artículo 8°. *Determinante ambiental*. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9. *Limitación*. La presente resolución conlleva una afectación del derecho de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de la quebrada Guateque, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de que estos inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos en el artículo 3°.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la quebrada Guateque no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, hipotecados, arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser objeto de cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. *Sanciones.* Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. *Inscripción.* Solicitar a las oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la ronda de protección de la quebrada Guateque.

Artículo 12. *Comunicaciones.* Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía del municipio en la cual se localiza el área objeto de la presente resolución, para el caso el municipio de Pacho.

Artículo 13. *Publicación.* Publicar el presente acto administrativo en el *Diario Oficial* y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. *Vigencia.* La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial*.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Director General,

Álfred Ignacio Ballesteros Alarcón
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1798 DE 2015

(agosto 31)

por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada El Salitre.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 (numeral 12) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 42 (numerales 1 y 27) de la Resolución número 703 de 2003, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se aprobaron los Estatutos de la CAR,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación;

Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental;

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política consagra el deber de toda persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente sano;

Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2 y 11) de la Ley 99 de 1993, corresponde a las corporaciones autónomas regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables;

Que el artículo 17 del Decreto número 1504 de 1998, dispone que las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público;

Que el artículo 5°, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1 (elementos constitutivos naturales), incluye en su literal b), dentro de las *áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico*, a los elementos naturales relacionados con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas;

Que el artículo 1° del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social;

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “*salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...*”;

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables señala que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el Estado resuelva explotarlos;

Que el artículo 14 del Decreto número 1541 de 1978 (compilado en el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto 1076 de 2015) dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 (literal d) del Decreto número 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o

lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado;

Que el artículo 124 del citado decreto, (compilado en el artículo 2.2.3.2.13.15 del Decreto 1076 de 2015) establece que para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares;

Que según el artículo 1° del decreto mencionado, para cumplir los fines del artículo 2° del Decreto-ley 2811 de 1974, las corporaciones autónomas regionales deben adoptar las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, declaración de reserva y agotamiento del recurso, en orden a asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que dependen del mismo;

Que dicha potestad se encuentra relacionada con el artículo 284 (numeral 3) del mismo ordenamiento, conforme al cual las autoridades ambientales competentes tendrán a su cargo la determinación de la faja paralela al cauce permanente de los ríos y lagos, a la cual se refiere el artículo 83 (literal d) del Decreto-ley 2811 de 1974;

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, “*por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014*”, dispone que corresponde a las corporaciones autónomas regionales: “*efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes*”;

Que el Plan de Acción 2012-2015 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), estableció como Meta 8, dentro del Programa 6, Enfoque de cuencas, la Actividad 8.4, correspondiente a la definición y delimitación de las zonas de ronda para 24 corrientes priorizadas en la jurisdicción de la entidad;

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la cuenca del río Bogotá, la CAR consideró necesario contar con una Guía metodológica para definir y delimitar las zonas de ronda de cuerpos hídricos, que involucrara la evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos;

Que según los artículos 19 y 46 del Decreto número 1640 de 2012, (compilados en los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto 1076 de 2015) “*por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos*”, la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas;

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, “*por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*”, las corporaciones autónomas regionales son integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, y además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “*apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo*”;

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto-ley 19 de 2012 dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “*cuando se garantice la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente*”;

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas;

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, así como aquellas emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de formular y adoptar los correspondientes POT;

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo 1° del Acuerdo número 16 de 1998, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), “*por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipales*”, las “*áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general*” se deben sujetar al siguiente régimen de usos en la formulación de dichos instrumentos:

“*Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.*

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de

infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación”;

Que en similar sentido, el artículo 3° del Decreto número 1449 de 1977, “por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1° del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 2811 de 1974”, establece que los propietarios de predios están obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del inmueble respectivo, las áreas forestales protectoras, entendiéndose por estas, entre otras, “una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua”;

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Radicación número 1200-E2-101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, manifestó: “...estas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se debe prohibir y restringir actividades que no tengan esa finalidad”;

Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de la CAR expidió la Resolución número 608 del 18 marzo de 2014, por medio de la cual se adoptó la Guía metodológica para la delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la cual soporta técnicamente la delimitación del cauce natural o cauce permanente del río, con la siguiente definición: la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos, por efecto de las crecientes ordinarias, correspondiendo estos niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias a las cotas naturales promedio (líneas o niveles ordinarios) más altas de los últimos quince (15) años;

Que dando alcance a lo consignado como Meta 8, dentro del Programa 6, Enfoque de cuencas, Actividad 8.4, correspondiente a la definición y delimitación de las zonas de ronda para 24 corrientes priorizadas en la jurisdicción de la entidad, la entonces Subdirección de Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas conformó un equipo técnico de profesionales especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, ingeniería catastral, geología y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de ronda consignadas en dicha meta, con base a lo establecido en la Resolución número 0608 del 18 de marzo de 2014;

Que dicho grupo elaboró el estudio (Anexo 1) denominado: *Estudio hidrológico e hidráulico para la determinación de la ronda de la quebrada El Salitre*, donde se determinaron los niveles máximos anuales presentados en los últimos quince (15) años; se promediaron; se detallaron la morfología del lecho, las orillas y las franjas inundables del cuerpo hídrico, en las Veredas Salitre, Carrón, Juaica del municipio de Tabío, determinando secciones transversales espaciadas según los cambios de sinuosidad del cauce principal. Esta información fue procesada y analizada para generar modelos digitales de elevación de terreno, que constituyeron un insumo fundamental, además de los caudales generados, para el siguiente paso en el proceso, que fue el modelamiento hidráulico y la respectiva generación de las cotas de inundación de la quebrada El Salitre, a partir de los cuales se generó la ronda hídrica de protección de 30 metros, según lo establecido en la normatividad ambiental vigente;

Que la quebrada El Salitre, por ser de cuarto orden, y dada su importancia geográfica, económica y social en el área de jurisdicción de la CAR, requiere para su adecuada protección y mantenimiento, la mayor área legalmente posible para el establecimiento de su ronda, tanto en el río como en su valle de inundación y sus afluentes;

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá a determinar la zona de ronda de protección de la quebrada El Salitre, buscando su articulación con el plan de ordenamiento territorial del municipio de Tabío, perteneciente a la cuenca; y por supuesto, con el proceso de ordenación de la cuenca del río Bogotá;

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 4°, 47 y 83 del Código Nacional de Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la quebrada El Salitre, realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con justa causa al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales se deben respetar según los preceptos mencionados;

Que sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual: “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Así las cosas, los usos y actividades existentes en la ronda de protección de la quebrada El Salitre, que cumplan las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los propósitos de conservación consagrados en el presente acto;

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar como zona de ronda de protección de la quebrada El Salitre, la franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a lado y lado del cauce, con un área total de doscientos sesenta mil doscientos cincuenta y ocho punto noventa y siete (260.258,97) metros cuadrados, aproximadamente. Dicha franja está limitada por las siguientes coordenadas:

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	997479,925	1034689,75	Izquierdo	996903,371	1037575,08
Derecho	997477,336	1034688,59	Izquierdo	996902,52	1037576,16
Derecho	997472,652	1034687,35	Izquierdo	996900,198	1037580,33
Derecho	997467,83	1034686,88	Izquierdo	996898,565	1037584,81
Derecho	997462,994	1034687,19	Izquierdo	996897,662	1037589,49
Derecho	997458,271	1034688,27	Izquierdo	996897,513	1037594,26
Derecho	997453,784	1034690,1	Izquierdo	996898,121	1037598,99
Derecho	997449,651	1034692,63	Izquierdo	996899,471	1037603,56
Derecho	997445,978	1034695,79	Izquierdo	996901,529	1037607,86
Derecho	997369,294	1034773,41	Izquierdo	996904,243	1037611,78
Derecho	997366,611	1034776,53	Izquierdo	996922,641	1037634,31
Derecho	997364,38	1034779,99	Izquierdo	996925,559	1037637,41
Derecho	997362,642	1034783,71	Izquierdo	996927,304	1037638,9
Derecho	997361,43	1034787,64	Izquierdo	996958,04	1037663,13
Derecho	997360,767	1034791,7	Izquierdo	996958,713	1037663,64
Derecho	997360,665	1034795,81	Izquierdo	996990,098	1037686,98
Derecho	997363,03	1034849,61	Izquierdo	996991,59	1037688,02
Derecho	997363,146	1034851,24	Izquierdo	996993,821	1037689,34
Derecho	997366,156	1034881,72	Izquierdo	997016,049	1037701,26
Derecho	997359,406	1034898,42	Izquierdo	997031,327	1037715,86
Derecho	997358,237	1034901,91	Izquierdo	997034,14	1037718,19
Derecho	997357,506	1034905,52	Izquierdo	997037,217	1037720,17
Derecho	997357,223	1034909,2	Izquierdo	997040,511	1037721,75
Derecho	997357,393	1034912,88	Izquierdo	997062,802	1037730,85
Derecho	997357,47	1034913,59	Izquierdo	997066,125	1037731,99
Derecho	997353,425	1034924,41	Izquierdo	997069,558	1037732,73
Derecho	997330,404	1034938,74	Izquierdo	997073,054	1037733,06
Derecho	997325,198	1034940,73	Izquierdo	997089,064	1037733,64
Derecho	997321,561	1034942,4	Izquierdo	997093,938	1037733,42
Derecho	997318,179	1034944,55	Izquierdo	997098,713	1037732,41
Derecho	997315,113	1034947,12	Izquierdo	997103,261	1037730,64
Derecho	997312,417	1034950,08	Izquierdo	997108,934	1037727,89
Derecho	997310,14	1034953,38	Izquierdo	997111,558	1037729,26
Derecho	997307,754	1034957,38	Izquierdo	997114,336	1037730,28
Derecho	997305,766	1034961,35	Izquierdo	997117,221	1037730,95
Derecho	997304,386	1034965,57	Izquierdo	997122,025	1037731,89
Derecho	997303,644	1034969,95	Izquierdo	997125,334	1037732,35
Derecho	997303,557	1034974,39	Izquierdo	997127,292	1037732,45
Derecho	997304,127	1034978,79	Izquierdo	997150,651	1037732,85
Derecho	997305,341	1034983,06	Izquierdo	997171,441	1037732,91
Derecho	997307,171	1034987,11	Izquierdo	997173,994	1037732,8
Derecho	997309,58	1034990,84	Izquierdo	997177,956	1037732,14
Derecho	997330,635	1035018,7	Izquierdo	997180,931	1037732,67
Derecho	997326,395	1035020,35	Izquierdo	997183,946	1037732,84
Derecho	997322,456	1035022,63	Izquierdo	997186,961	1037732,66
Derecho	997318,909	1035025,48	Izquierdo	997194,617	1037731,87
Derecho	997315,838	1035028,83	Izquierdo	997198,729	1037731,16
Derecho	997313,315	1035032,62	Izquierdo	997202,702	1037729,88
Derecho	997311,397	1035036,75	Izquierdo	997206,459	1037728,06
Derecho	997310,13	1035041,12	Izquierdo	997211,166	1037725,36
Derecho	997309,544	1035045,63	Izquierdo	997215,062	1037722,7
Derecho	997309,652	1035050,18	Izquierdo	997218,493	1037719,46
Derecho	997316,037	1035115,63	Izquierdo	997221,373	1037715,72
Derecho	997316,305	1035117,65	Izquierdo	997223,632	1037711,58
Derecho	997316,457	1035118,49	Izquierdo	997226,287	1037705,64
Derecho	997326,499	1035169,69	Izquierdo	997227,727	1037701,72
Derecho	997327,564	1035173,65	Izquierdo	997228,596	1037697,64
Derecho	997328,099	1035175,09	Izquierdo	997228,877	1037693,48
Derecho	997348,344	1035225,5	Izquierdo	997228,565	1037689,32
Derecho	997362,785	1035266,38	Izquierdo	997229,825	1037685,53
Derecho	997367,982	1035288,14	Izquierdo	997230,543	1037681,61
Derecho	997369,286	1035314,33	Izquierdo	997230,704	1037677,63
Derecho	997364,042	1035360,68	Izquierdo	997230,482	1037668,53
Derecho	997363,851	1035364,05	Izquierdo	997229,975	1037663,72
Derecho	997363,897	1035365,71	Izquierdo	997228,701	1037659,05
Derecho	997367,013	1035421,92	Izquierdo	997226,691	1037654,65
Derecho	997367,209	1035424,06	Izquierdo	997223,999	1037650,63
Derecho	997373,764	1035475,38	Izquierdo	997220,694	1037647,1
Derecho	997374,558	1035479,4	Izquierdo	997221,762	1037643,14
Derecho	997375,89	1035483,27	Izquierdo	997222,317	1037639,09
Derecho	997385,293	1035505,51	Izquierdo	997222,349	1037634,99
Derecho	997387,001	1035508,92	Izquierdo	997221,859	1037630,92
Derecho	997389,128	1035512,09	Izquierdo	997220,824	1037625,7
Derecho	997391,641	1035514,97	Izquierdo	997220,083	1037622,95
Derecho	997409,537	1035532,98	Izquierdo	997220,518	1037622,39
Derecho	997418,902	1035553,93	Izquierdo	997222,708	1037619,18
Derecho	997419,906	1035555,96	Izquierdo	997225,422	1037614,59

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	997422,121	1035559,46	Izquierdo	997228,697	1037610,6
Derecho	997442,357	1035586,98	Izquierdo	997231,383	1037606,75
Derecho	997445,38	1035590,49	Izquierdo	997233,436	1037602,52
Derecho	997448,905	1035593,49	Izquierdo	997236,737	1037594,11
Derecho	997452,85	1035595,91	Izquierdo	997237,999	1037590,08
Derecho	997457,121	1035597,69	Izquierdo	997238,683	1037585,91
Derecho	997512,583	1035616,01	Izquierdo	997238,775	1037581,69
Derecho	997557,067	1035631,62	Izquierdo	997238,517	1037576,39
Derecho	997559,641	1035632,4	Izquierdo	997238,032	1037572,3
Derecho	997563,455	1035633,11	Izquierdo	997236,97	1037568,32
Derecho	997586,133	1035635,81	Izquierdo	997235,352	1037564,52
Derecho	997606,86	1035656,01	Izquierdo	997235,531	1037555,41
Derecho	997631,577	1035685,5	Izquierdo	997237,166	1037532,6
Derecho	997668,777	1035728,79	Izquierdo	997242,379	1037510,23
Derecho	997671,211	1035731,31	Izquierdo	997259,573	1037477,21
Derecho	997672,138	1035732,13	Izquierdo	997306,236	1037408,42
Derecho	997677,316	1035736,52	Izquierdo	997308,597	1037404,27
Derecho	997674,902	1035784,57	Izquierdo	997310,267	1037399,78
Derecho	997673,371	1035827,57	Izquierdo	997322,44	1037356,95
Derecho	997673,352	1035828,59	Izquierdo	997323,312	1037352,77
Derecho	997673,274	1035878,54	Izquierdo	997323,581	1037348,5
Derecho	997667,821	1035920,49	Izquierdo	997323,242	1037344,24
Derecho	997634,997	1035975,25	Izquierdo	997322,487	1037339,28
Derecho	997634,411	1035976,27	Izquierdo	997323,669	1037335,65
Derecho	997611,643	1036017,88	Izquierdo	997324,364	1037331,9
Derecho	997609,612	1036022,5	Izquierdo	997324,56	1037328,08
Derecho	997599,674	1036051,59	Izquierdo	997324,254	1037324,28
Derecho	997598,506	1036056,15	Izquierdo	997323,841	1037321,36
Derecho	997598,067	1036060,84	Izquierdo	997325,381	1037317,22
Derecho	997598,368	1036065,55	Izquierdo	997326,26	1037312,9
Derecho	997599,401	1036070,14	Izquierdo	997326,458	1037308,48
Derecho	997601,142	1036074,52	Izquierdo	997325,909	1037288,57
Derecho	997603,547	1036078,57	Izquierdo	997333,119	1037281,28
Derecho	997623,039	1036106,21	Izquierdo	997336,028	1037277,86
Derecho	997629,246	1036118,86	Izquierdo	997338,395	1037274,05
Derecho	997624,855	1036120,64	Izquierdo	997340,165	1037269,92
Derecho	997620,806	1036123,1	Izquierdo	997341,3	1037265,58
Derecho	997617,202	1036126,17	Izquierdo	997341,775	1037261,11
Derecho	997614,137	1036129,79	Izquierdo	997342,032	1037252,83
Derecho	997611,69	1036133,84	Izquierdo	997347,286	1037243,58
Derecho	997609,923	1036138,24	Izquierdo	997349,15	1037239,67
Derecho	997600,526	1036167,96	Izquierdo	997350,43	1037235,53
Derecho	997566,841	1036187,98	Izquierdo	997351,101	1037231,25
Derecho	997563,089	1036190,61	Izquierdo	997352,54	1037213,99
Derecho	997559,783	1036193,79	Izquierdo	997352,643	1037211,49
Derecho	997556,999	1036197,44	Izquierdo	997352,387	1037208,4
Derecho	997554,805	1036201,47	Izquierdo	997389,987	1037172,38
Derecho	997553,249	1036205,78	Izquierdo	997392,906	1037169,14
Derecho	997552,37	1036210,28	Izquierdo	997394,306	1037167
Derecho	997552,188	1036214,87	Izquierdo	997399,242	1037169,73
Derecho	997552,706	1036219,42	Izquierdo	997403,196	1037171,55
Derecho	997553,913	1036223,85	Izquierdo	997407,371	1037172,78
Derecho	997555,781	1036228,04	Izquierdo	997411,68	1037173,39
Derecho	997561,629	1036238,85	Izquierdo	997416,033	1037173,38
Derecho	997564,34	1036243	Izquierdo	997449,53	1037170,81
Derecho	997565,017	1036243,84	Izquierdo	997454,511	1037169,99
Derecho	997582,436	1036264,63	Izquierdo	997455,586	1037169,7
Derecho	997601,952	1036288,43	Izquierdo	997494,394	1037158,32
Derecho	997613,997	1036308,74	Izquierdo	997495,79	1037157,87
Derecho	997621,624	1036329,62	Izquierdo	997544,626	1037140,92
Derecho	997622,411	1036352,13	Izquierdo	997548,479	1037139,28
Derecho	997622,846	1036356,27	Izquierdo	997552,064	1037137,11
Derecho	997623,85	1036360,31	Izquierdo	997555,312	1037134,46
Derecho	997625,405	1036364,18	Izquierdo	997593,024	1037098,43
Derecho	997627,481	1036367,79	Izquierdo	997595,548	1037095,7
Derecho	997630,037	1036371,08	Izquierdo	997633,951	1037048,6
Derecho	997635,125	1036376,77	Izquierdo	997634,375	1037048,07
Derecho	997638,612	1036380,09	Izquierdo	997636,213	1037045,43
Derecho	997642,586	1036382,8	Izquierdo	997658,748	1037009
Derecho	997670,937	1036399,02	Izquierdo	997660,684	1037005,33
Derecho	997683,657	1036411,55	Izquierdo	997662,093	1037001,42
Derecho	997700,8	1036439,24	Izquierdo	997662,949	1036997,35
Derecho	997701,824	1036440,79	Izquierdo	997663,235	1036993,21
Derecho	997718,609	1036464,5	Izquierdo	997663,184	1036923
Derecho	997719,36	1036473,47	Izquierdo	997676,017	1036858,98
Derecho	997720,136	1036478,18	Izquierdo	997676,193	1036858,02
Derecho	997721,652	1036482,72	Izquierdo	997676,429	1036856,31

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	997723,869	1036486,95	Izquierdo	997682,98	1036795,71
Derecho	997726,73	1036490,78	Izquierdo	997683,14	1036791,56
Derecho	997730,163	1036494,11	Izquierdo	997682,726	1036787,43
Derecho	997759,365	1036518,2	Izquierdo	997681,746	1036783,4
Derecho	997761,011	1036519,47	Izquierdo	997676,754	1036767,69
Derecho	997769,83	1036525,77	Izquierdo	997677,963	1036730,77
Derecho	997750,697	1036540,96	Izquierdo	997685,111	1036683,73
Derecho	997749,031	1036542,39	Izquierdo	997698,691	1036674,5
Derecho	997747,287	1036544,13	Izquierdo	997737,689	1036654,16
Derecho	997728,05	1036565,01	Izquierdo	997741,231	1036651,99
Derecho	997726,438	1036566,91	Izquierdo	997744,439	1036649,34
Derecho	997724,857	1036569,14	Izquierdo	997747,251	1036646,29
Derecho	997721,815	1036573,89	Izquierdo	997749,614	1036642,87
Derecho	997715,187	1036578,04	Izquierdo	997757,739	1036629,17
Derecho	997712,12	1036580,29	Izquierdo	997763,757	1036625,03
Derecho	997709,363	1036582,91	Izquierdo	997767,076	1036622,39
Derecho	997706,959	1036585,85	Izquierdo	997769,137	1036620,29
Derecho	997704,947	1036589,08	Izquierdo	997777,023	1036611,46
Derecho	997698,394	1036601,28	Izquierdo	997796,267	1036589,95
Derecho	997666,794	1036618,12	Izquierdo	997817,742	1036568,74
Derecho	997664,745	1036619,32	Izquierdo	997819,656	1036566,66
Derecho	997645,925	1036631,36	Izquierdo	997840,977	1036541,21
Derecho	997641,698	1036634,66	Izquierdo	997843,574	1036537,59
Derecho	997632,794	1036643,15	Izquierdo	997845,608	1036533,63
Derecho	997630,08	1036646,11	Izquierdo	997847,034	1036529,42
Derecho	997627,786	1036649,41	Izquierdo	997847,82	1036525,03
Derecho	997625,953	1036652,98	Izquierdo	997847,948	1036520,58
Derecho	997624,613	1036656,77	Izquierdo	997847,417	1036516,16
Derecho	997623,791	1036660,7	Izquierdo	997846,237	1036511,87
Derecho	997614,987	1036723,6	Izquierdo	997844,435	1036507,8
Derecho	997614,7	1036727,32	Izquierdo	997842,051	1036504,04
Derecho	997614,047	1036771,52	Izquierdo	997839,136	1036500,67
Derecho	997614,455	1036776,68	Izquierdo	997835,755	1036497,78
Derecho	997615,426	1036780,73	Izquierdo	997798,613	1036470,46
Derecho	997619,977	1036795,21	Izquierdo	997779,148	1036455,09
Derecho	997614,371	1036848,09	Izquierdo	997778,842	1036451,13
Derecho	997602,183	1036914,5	Izquierdo	997778,267	1036447,16
Derecho	997601,732	1036919,69	Izquierdo	997777,169	1036443,31
Derecho	997601,764	1036984,28	Izquierdo	997775,567	1036439,64
Derecho	997585,19	1037011,38	Izquierdo	997773,489	1036436,21
Derecho	997549,172	1037055,11	Izquierdo	997752,413	1036406,17
Derecho	997517,841	1037084,9	Izquierdo	997733,636	1036375,99
Derecho	997476,209	1037099,79	Izquierdo	997731,837	1036373,41
Derecho	997441,892	1037109,62	Izquierdo	997729,358	1036370,6
Derecho	997421,259	1037110,83	Izquierdo	997711,392	1036352,67
Derecho	997403,856	1037101,31	Izquierdo	997708,318	1036349,99
Derecho	997399,756	1037099,46	Izquierdo	997704,909	1036347,75
Derecho	997395,424	1037098,23	Izquierdo	997683,117	1036335,49
Derecho	997390,958	1037097,67	Izquierdo	997682,705	1036322,43
Derecho	997386,459	1037097,79	Izquierdo	997682,31	1036318,44
Derecho	997382,027	1037098,57	Izquierdo	997681,008	1036313,39
Derecho	997377,762	1037100,01	Izquierdo	997670,681	1036284,92
Derecho	997362,681	1037106,4	Izquierdo	997668,864	1036280,87
Derecho	997358,835	1037108,4	Izquierdo	997668,167	1036279,65
Derecho	997355,317	1037110,93	Izquierdo	997653,397	1036255,17
Derecho	997352,2	1037113,94	Izquierdo	997651,258	1036252,08
Derecho	997349,55	1037117,37	Izquierdo	997630,192	1036225,75
Derecho	997347,423	1037121,15	Izquierdo	997629,524	1036224,95
Derecho	997342,474	1037131,64	Izquierdo	997628,561	1036223,83
Derecho	997294,71	1037178,4	Izquierdo	997642,144	1036214,27
Derecho	997291,803	1037181,69	Izquierdo	997668,092	1036199,91
Derecho	997289,408	1037185,38	Izquierdo	997670,005	1036198,75
Derecho	997287,578	1037189,38	Izquierdo	997700,358	1036178,81
Derecho	997286,352	1037193,6	Izquierdo	997703,884	1036176,1
Derecho	997285,755	1037197,95	Izquierdo	997706,969	1036172,9
Derecho	997285,801	1037202,35	Izquierdo	997709,548	1036169,27
Derecho	997286,488	1037206,69	Izquierdo	997711,562	1036165,31
Derecho	997287,803	1037210,88	Izquierdo	997712,969	1036161,09
Derecho	997289,847	1037216,04	Izquierdo	997713,736	1036156,71
Derecho	997289,519	1037219,99	Izquierdo	997713,848	1036152,26
Derecho	997284,236	1037230,11	Izquierdo	997713,301	1036147,85
Derecho	997282,41	1037234,4	Izquierdo	997712,108	1036143,57
Derecho	997281,268	1037238,91	Izquierdo	997710,295	1036139,51
Derecho	997280,838	1037243,54	Izquierdo	997690,881	1036103,47
Derecho	997280,785	1037247,08	Izquierdo	997677,968	1036076,63
Derecho	997278,514	1037249,38	Izquierdo	997677,318	1036075,36
Derecho	997275,434	1037253,04	Izquierdo	997675,107	1036071,87

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	997272,975	1037257,14	Izquierdo	997663,051	1036055,46
Derecho	997267,463	1037268,26	Izquierdo	997666,892	1036044,73
Derecho	997265,729	1037272,57	Izquierdo	997688,23	1036006,05
Derecho	997264,68	1037277,09	Izquierdo	997723,973	1035946,45
Derecho	997264,343	1037281,73	Izquierdo	997725,836	1035942,79
Derecho	997264,441	1037301,62	Izquierdo	997727,184	1035938,92
Derecho	997262,745	1037305,26	Izquierdo	997727,992	1035934,9
Derecho	997261,549	1037309,09	Izquierdo	997734,57	1035884,49
Derecho	997260,875	1037313,05	Izquierdo	997734,822	1035880,6
Derecho	997260,735	1037317,06	Izquierdo	997734,781	1035829,16
Derecho	997261,131	1037321,05	Izquierdo	997736,239	1035787,15
Derecho	997261,537	1037323,46	Izquierdo	997739,327	1035724,35
Derecho	997260,222	1037327,36	Izquierdo	997739,223	1035719,98
Derecho	997259,48	1037331,41	Izquierdo	997738,484	1035715,67
Derecho	997259,327	1037335,53	Izquierdo	997737,126	1035711,51
Derecho	997259,766	1037339,62	Izquierdo	997735,178	1035707,59
Derecho	997261,125	1037347,27	Izquierdo	997732,682	1035704
Derecho	997253,038	1037378,45	Izquierdo	997729,689	1035700,81
Derecho	997207,607	1037444,04	Izquierdo	997714,758	1035687,06
Derecho	997182,239	1037480,94	Izquierdo	997678,13	1035646,12
Derecho	997180,042	1037484,69	Izquierdo	997653,874	1035615,69
Derecho	997178,41	1037488,72	Izquierdo	997651,108	1035612,67
Derecho	997177,378	1037492,94	Izquierdo	997620,917	1035583,92
Derecho	997172,328	1037522,86	Izquierdo	997617,347	1035581,05
Derecho	997171,968	1037526,02	Izquierdo	997613,382	1035578,76
Derecho	997170,392	1037552,15	Izquierdo	997609,116	1035577,1
Derecho	997170,338	1037553,95	Izquierdo	997604,646	1035576,11
Derecho	997170,774	1037559,05	Izquierdo	997574,422	1035571,8
Derecho	997173,806	1037576,11	Izquierdo	997532,432	1035557,46
Derecho	997173,796	1037576,92	Izquierdo	997486,131	1035542,5
Derecho	997172,655	1037579,96	Izquierdo	997473,617	1035525,66
Derecho	997165,562	1037586,84	Izquierdo	997463,181	1035502,64
Derecho	997162,768	1037589,89	Izquierdo	997461,482	1035499,42
Derecho	997160,419	1037593,29	Izquierdo	997459,408	1035496,44
Derecho	997158,559	1037596,98	Izquierdo	997456,988	1035493,73
Derecho	997156,01	1037603,04	Izquierdo	997439,644	1035476,52
Derecho	997155,29	1037604,92	Izquierdo	997434,706	1035463,15
Derecho	997154,312	1037608,47	Izquierdo	997427,566	1035417,32
Derecho	997153,061	1037614,39	Izquierdo	997425,765	1035364,92
Derecho	997152,504	1037618,13	Izquierdo	997430,739	1035318,21
Derecho	997152,454	1037621,92	Izquierdo	997430,908	1035315,04
Derecho	997152,912	1037625,67	Izquierdo	997430,863	1035313,4
Derecho	997153,87	1037629,34	Izquierdo	997429,145	1035281,94
Derecho	997151,59	1037633,35	Izquierdo	997428,78	1035278,64
Derecho	997149,962	1037637,68	Izquierdo	997428,377	1035276,65
Derecho	997149,026	1037642,21	Izquierdo	997422,187	1035250,58
Derecho	997148,805	1037646,82	Izquierdo	997421,343	1035247,69
Derecho	997149,304	1037651,42	Izquierdo	997406,252	1035204,61
Derecho	997150,51	1037655,88	Izquierdo	997405,76	1035203,3
Derecho	997152,394	1037660,1	Izquierdo	997386,153	1035154,72
Derecho	997153,581	1037662,17	Izquierdo	997376,685	1035109,55
Derecho	997158,644	1037671,76	Izquierdo	997376,892	1035066,68
Derecho	997151,216	1037671,69	Izquierdo	997393,896	1035056,38
Derecho	997134,195	1037671,46	Izquierdo	997397,589	1035053,74
Derecho	997129,696	1037669	Izquierdo	997400,842	1035050,58
Derecho	997126,741	1037667,89	Izquierdo	997403,58	1035046,96
Derecho	997117,757	1037665,03	Izquierdo	997405,741	1035042,97
Derecho	997113,528	1037664,01	Izquierdo	997407,274	1035038,69
Derecho	997109,196	1037663,62	Izquierdo	997408,146	1035034,24
Derecho	997104,853	1037663,86	Izquierdo	997408,336	1035029,71
Derecho	997100,59	1037664,72	Izquierdo	997407,84	1035025,19
Derecho	997096,497	1037666,19	Izquierdo	997406,669	1035020,81
Derecho	997084,151	1037671,73	Izquierdo	997404,85	1035016,65
Derecho	997080,523	1037671,55	Izquierdo	997402,424	1035012,81
Derecho	997068,351	1037667,09	Izquierdo	997378,968	1034981,28
Derecho	997054,534	1037654,31	Izquierdo	997396,375	1034970,08
Derecho	997050,602	1037651,25	Izquierdo	997400,179	1034967,15
Derecho	997049,369	1037650,49	Izquierdo	997403,468	1034963,66
Derecho	997025,47	1037636,47	Izquierdo	997406,159	1034959,69
Derecho	996995,152	1037614,57	Izquierdo	997408,181	1034955,34
Derecho	996967,66	1037593,61	Izquierdo	997417,444	1034930,35
Derecho	996952,47	1037573,35	Izquierdo	997450,936	1034915,85
Derecho	996949,3	1037569,82	Izquierdo	997454,988	1034913,7
Derecho	996945,613	1037566,83	Izquierdo	997458,665	1034910,96
Derecho	996941,501	1037564,46	Izquierdo	997461,881	1034907,69
Derecho	996937,066	1037562,77	Izquierdo	997464,561	1034903,97
Derecho	996932,421	1037561,8	Izquierdo	997466,643	1034899,88

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	996927,681	1037561,58	Izquierdo	997468,078	1034895,53
Derecho	996922,964	1037562,1	Izquierdo	997468,832	1034891
Derecho	996918,389	1037563,37	Izquierdo	997468,888	1034886,42
Derecho	996914,071	1037565,33	Izquierdo	997468,244	1034881,88
Derecho	996910,117	1037567,96	Izquierdo	997466,915	1034877,49
Derecho	996906,626	1037571,17	Izquierdo	997464,934	1034873,35
Derecho	996905,474	1037572,42	Izquierdo	997462,345	1034869,57
Derecho	996903,371	1037575,08	Izquierdo	997459,209	1034866,22
			Izquierdo	997438,224	1034847,11
			Izquierdo	997456,938	1034828
			Izquierdo	997459,654	1034824,81
			Izquierdo	997461,899	1034821,28
			Izquierdo	997463,629	1034817,46
			Izquierdo	997496,642	1034728,62
			Izquierdo	997497,932	1034724,09
			Izquierdo	997498,495	1034719,41
			Izquierdo	997498,319	1034714,7
			Izquierdo	997497,406	1034710,07
			Izquierdo	997495,781	1034705,65
			Izquierdo	997493,482	1034701,53
			Izquierdo	997490,566	1034697,83
			Izquierdo	997489,366	1034696,53
			Izquierdo	997485,803	1034693,24
			Izquierdo	997481,758	1034690,57
			Izquierdo	997479,925	1034689,75

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia el presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico (Anexo 1) y en los planos anexos de determinación con sus correspondientes coordenadas (Anexo 2), los cuales forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación espacial. La zona determinada como ronda de protección de la quebrada El Salitre que aquí se anuncia, se delimita en el Anexo 2, que forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. *Objeto*. El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación, restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares y concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la presente resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

Artículo 4°. *Régimen de usos de la zona de ronda de protección*. El régimen de usos de la zona de ronda de protección determinada por el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación.

Parágrafo 1°. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2°. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3°. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, conforme a lo dispuesto en el Decreto número 1076 de 2015 y el Acuerdo número 28 de 2004, emanado de la CAR y, en general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización impartida por parte de la CAR.

Artículo 5°. *Parámetros para los usos condicionados*. La implementación de los usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros:

- a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar;
- b) Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR);
- c) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno natural;

d) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo;

e) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. *Zonas de alto riesgo no mitigable*. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control por la Administración Municipal de Tabio, perteneciente a la cuenca con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. *Aumento de cobertura boscosa*. Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados en la ronda de protección de la quebrada El Salitre, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto en el presente acto.

Artículo 8°. *Determinante ambiental*. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9°. *Limitación*. La presente resolución conlleva una afectación del derecho de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de la quebrada El Salitre, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de que estos inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos en el artículo 3°.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la quebrada El Salitre no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, hipotecados, arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser objeto de cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. *Sanciones*. Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. *Inscripción*. Solicitar a las oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la ronda de protección de la quebrada El Salitre.

Artículo 12. *Comunicaciones*. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía del municipio en la cual se localiza el área objeto de la presente resolución, para el caso el municipio de Tabio.

Artículo 13. *Publicación*. Publicar el presente acto administrativo en el **Diario Oficial** y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. *Vigencia*. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial**.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Director General,

Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1799 DE 2015

(agosto 31)

por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada El Coyal.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 (numeral 12) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 42 (numerales 1 y 27) de la Resolución 703 de 2003, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se aprobaron los Estatutos de la CAR,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política consagra el deber de toda persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2 y 11) de la Ley 99 de 1993, corresponde a las corporaciones autónomas regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables.

Que el artículo 17 del Decreto 1504 de 1998, dispone que las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán a su cargo el

manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público.

Que el artículo 5°, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1 (elementos constitutivos naturales), incluye en su literal b), dentro de las *áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico*, a los elementos naturales relacionados con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas.

Que el artículo 1° del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social.

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “*salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...*”.

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables señala que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el Estado resuelva explotarlos.

Que el artículo 14 del Decreto 1541 de 1978 (compilado en el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto 1076 de 2015) dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 (literal d) del Decreto 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado.

Que el artículo 124 del citado decreto, (compilado en el artículo 2.2.3.2.13.15 del Decreto 1076 de 2015) establece que para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares.

Que según el artículo 1° del decreto mencionado, para cumplir los fines del artículo 2° del Decreto-ley 2811 de 1974, las corporaciones autónomas regionales deben adoptar las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, riberas, declaración de reserva y agotamiento del recurso, para asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que dependen del mismo.

Que dicha potestad se encuentra relacionada con el artículo 284 (numeral 3) del mismo ordenamiento, conforme al cual las autoridades ambientales competentes tendrán a su cargo la determinación de la faja paralela al cauce permanente de los ríos y lagos, a la cual se refiere el artículo 83 (literal d)) del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, “*por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014*”, dispone que corresponde a las corporaciones autónomas regionales: “*efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes*”.

Que el Plan de Acción 2012-2015 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), estableció como Meta 8, dentro del Programa 6, Enfoque de cuencas, la Actividad 8.4, correspondiente a la definición y delimitación de las zonas de ronda para 24 corrientes priorizadas en la jurisdicción de la entidad.

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la cuenca del río Magdalena, la CAR consideró necesario contar con una guía metodológica para definir y delimitar las zonas de ronda de cuerpos hídricos, que involucrara la evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos.

Que según los artículos 19 y 46 del Decreto 1640 de 2012, (compilados en los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto 1076 de 2015) “*por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos*”, la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, “*por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*”, las corporaciones autónomas regionales son integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, y además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “*apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo*”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto-ley 19 de 2012 dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “*cuando se garantice la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de*

riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente”.

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, ya que permite evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas.

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, así como aquellas emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de formular y adoptar los correspondientes POT.

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo primero del Acuerdo 16 de 1998, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), “por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipales”, las “áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general” se deben sujetar al siguiente régimen de usos en la formulación de dichos instrumentos:

“Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación”.

Que en similar sentido, el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977, (compilado en el artículo 2.2.1.1.1.8.2 del Decreto 1076 de 2015) “por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1° del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 2811 de 1974”, establece que los propietarios de predios están obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del inmueble respectivo, las áreas forestales protectoras, entendiéndose por estas, entre otras, “una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua”.

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante radicación 1200-E2-101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, manifestó: “... estas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se debe prohibir y restringir actividades que no tengan esa finalidad”.

Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de la CAR expidió la Resolución 0608 del 18 marzo de 2014, por medio de la cual se adoptó la guía metodológica para la delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la cual soporta técnicamente la delimitación del cauce natural o cauce permanente del río, con la siguiente definición: la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos, por efecto de las crecientes ordinarias, correspondiendo estos niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias a las cotas naturales promedio (líneas o niveles ordinarios) más altas de los últimos quince (15) años.

Que dando alcance a lo consignado como Meta 8, dentro del Programa 6, Enfoque de cuencas, Actividad 8.4, correspondiente a la definición y delimitación de las zonas de ronda para 24 corrientes priorizadas en la jurisdicción de la entidad, la entonces Subdirección de Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas conformó un equipo técnico de profesionales especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, ingeniería catastral, geología y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de ronda consignadas en dicha meta, con base a lo establecido en la Resolución 0608 del 18 de marzo de 2014.

Que dicho grupo elaboró el estudio (Anexo 1) denominado: *Estudio hidrológico e hidráulico para la determinación de la ronda de la Quebrada El Coyal*, donde se determinaron los niveles máximos anuales presentados en los últimos quince (15) años; se promediaron; se detallaron la morfología del lecho, las orillas y las franjas inundables del cuerpo hídrico, en las veredas Aguablanca, Santa Helena y Casco Urbano del municipio de Girardot, determinando secciones transversales espaciadas según los cambios de sinuosidad del cauce principal. Esta información fue procesada y analizada para generar modelos digitales de elevación de terreno, que constituyeron un insumo fundamental, además de los caudales generados, para el siguiente paso en el proceso, que fue el modelamiento hidráulico y la respectiva generación de las cotas de inundación de la Quebrada El Coyal, a partir de los cuales se generó la ronda hídrica de protección de 30 metros, según lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

Que la Quebrada El Coyal, por ser de cuarto orden, y dada su importancia geográfica, económica y social en el área de jurisdicción de la CAR, requiere para su adecuada protección y mantenimiento, la mayor área legalmente posible para el establecimiento de su ronda, tanto en el río como en su valle de inundación y sus afluentes.

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá a determinar la zona de ronda de protección de la Quebrada El Coyal, buscando su articulación con el plan de ordenamiento territorial del municipio de Girardot, perteneciente a la cuenca; y por supuesto, con el proceso de ordenación de la cuenca del río Bogotá;

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 4°, 47 y 83 del Código Nacional de Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la Quebrada El Coyal, realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con justa causa al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales se deben respetar según los preceptos mencionados.

Que sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual: “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Así las cosas, los usos y actividades existentes en la ronda de protección de la Quebrada El Coyal, que cumplan las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los propósitos de conservación consagrados en el presente acto.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar como zona de ronda de protección de la Quebrada El Coyal, la franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a lado y lado del cauce, con un área total de ciento sesenta y cinco mil setecientos veinticuatro punto cuarenta y tres (165724,43) metros cuadrados, aproximadamente. Dicha franja está limitada por las siguientes coordenadas:

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	918150,13	967699,723	Izquierdo	917482,468	969203,86
Derecho	918147,889	967699,747	Izquierdo	917483,516	969205,323
Derecho	918143,196	967700,551	Izquierdo	917486,957	969208,771
Derecho	918138,689	967702,088	Izquierdo	917490,91	969211,617
Derecho	918134,482	967704,318	Izquierdo	917495,272	969213,786
Derecho	918130,681	967707,185	Izquierdo	917499,928	969215,22
Derecho	918127,381	967710,618	Izquierdo	917504,754	969215,882
Derecho	918099,38	967744,811	Izquierdo	917536,423	969217,627
Derecho	918098,917	967745,392	Izquierdo	917563,54	969224,633
Derecho	918097,454	967747,444	Izquierdo	917568,497	969225,466
Derecho	918044,064	967829,404	Izquierdo	917572,781	969225,514
Derecho	918042,167	967832,773	Izquierdo	917591,14	969224,301
Derecho	918040,719	967836,357	Izquierdo	917595,412	969224,117
Derecho	918039,744	967840,097	Izquierdo	917599,433	969223,625
Derecho	918039,258	967843,932	Izquierdo	917603,348	969222,585
Derecho	918036,643	967886,342	Izquierdo	917607,083	969221,019
Derecho	918036,688	967890,664	Izquierdo	917610,568	969218,955
Derecho	918037,354	967894,935	Izquierdo	917613,737	969216,433
Derecho	918038,627	967899,065	Izquierdo	917626,593	969204,983
Derecho	918040,48	967902,97	Izquierdo	917629,681	969201,765
Derecho	918042,875	967906,568	Izquierdo	917632,233	969198,107
Derecho	918045,763	967909,785	Izquierdo	917634,188	969194,099
Derecho	918049,082	967912,553	Izquierdo	917635,499	969189,837
Derecho	918094,927	967945,488	Izquierdo	917654,665	969182,694
Derecho	918103,081	967973,252	Izquierdo	917659,067	969180,633
Derecho	918104,824	967977,789	Izquierdo	917663,078	969177,888
Derecho	918107,276	967981,984	Izquierdo	917666,594	969174,532
Derecho	918110,374	967985,729	Izquierdo	917669,521	969170,651
Derecho	918114,036	967988,925	Izquierdo	917671,784	969166,35
Derecho	918118,166	967991,487	Izquierdo	917679,536	969148,168
Derecho	918135,946	968000,614	Izquierdo	917680,96	969144,006
Derecho	918144,479	968010,605	Izquierdo	917681,761	969139,681
Derecho	918148,578	968020,139	Izquierdo	917681,92	969135,286
Derecho	918144,842	968044,281	Izquierdo	917681,434	969130,914
Derecho	918144,475	968048,325	Izquierdo	917680,315	969126,66
Derecho	918144,686	968052,381	Izquierdo	917678,325	969122,123
Derecho	918145,47	968056,365	Izquierdo	917677,546	969120,769
Derecho	918146,812	968060,198	Izquierdo	917675,872	969118,027
Derecho	918144,861	968063,184	Izquierdo	917698,657	969101,758
Derecho	918144,31	968064,253	Izquierdo	917701,543	969099,415
Derecho	918141,519	968069,945	Izquierdo	917703,798	969096,965
Derecho	918141,253	968070,502	Izquierdo	917708,497	969101,127
Derecho	918127,832	968099,355	Izquierdo	917711,247	969103,291
Derecho	918123,106	968098,941	Izquierdo	917714,23	969105,119
Derecho	918118,374	968099,279	Izquierdo	917717,406	969106,588
Derecho	918113,755	968100,361	Izquierdo	917735,39	969113,664
Derecho	918109,365	968102,16	Izquierdo	917739,441	969114,934
Derecho	918105,315	968104,631	Izquierdo	917743,63	969115,621
Derecho	918101,706	968107,711	Izquierdo	917747,874	969115,709
Derecho	918098,631	968111,323	Izquierdo	917752,089	969115,197

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	918096,164	968115,376	Izquierdo	917756,188	969114,096
Derecho	918094,37	968119,767	Izquierdo	917780,208	969105,78
Derecho	918093,293	968124,387	Izquierdo	917783,46	969104,436
Derecho	918092,96	968129,12	Izquierdo	917786,532	969102,72
Derecho	918093,38	968133,845	Izquierdo	917789,382	969100,656
Derecho	918094,541	968138,445	Izquierdo	917805,259	969087,675
Derecho	918096,416	968142,803	Izquierdo	917824,299	969076,909
Derecho	918097,128	968144,159	Izquierdo	917828,005	969074,433
Derecho	918080,826	968154,958	Izquierdo	917831,303	969071,435
Derecho	918077,201	968157,774	Izquierdo	917854,197	969047,287
Derecho	918074,05	968161,111	Izquierdo	917856,938	969043,943
Derecho	918071,447	968164,892	Izquierdo	917859,17	969040,239
Derecho	918069,453	968169,026	Izquierdo	917860,846	969036,253
Derecho	918068,116	968173,417	Izquierdo	917867,679	969015,72
Derecho	918067,467	968177,961	Izquierdo	917875,621	968993,293
Derecho	918067,521	968182,551	Izquierdo	917876,849	968988,567
Derecho	918068,277	968187,078	Izquierdo	917877,293	968983,705
Derecho	918069,717	968191,436	Izquierdo	917876,943	968978,835
Derecho	918071,808	968195,523	Izquierdo	917875,807	968974,086
Derecho	918074,499	968199,241	Izquierdo	917873,917	968969,585
Derecho	918057,781	968204,736	Izquierdo	917871,321	968965,449
Derecho	918053,644	968206,447	Izquierdo	917868,089	968961,79
Derecho	918049,808	968208,755	Izquierdo	917864,306	968958,703
Derecho	918046,358	968211,608	Izquierdo	917860,072	968956,271
Derecho	918043,37	968214,943	Izquierdo	917847,945	968950,563
Derecho	918040,913	968218,686	Izquierdo	917853,079	968923,464
Derecho	918039,04	968222,752	Izquierdo	917861,767	968884,044
Derecho	918037,793	968227,052	Izquierdo	917862,353	968880,238
Derecho	918037,199	968231,49	Izquierdo	917862,446	968876,388
Derecho	918037,273	968235,967	Izquierdo	917862,046	968872,559
Derecho	918038,012	968240,383	Izquierdo	917861,158	968868,812
Derecho	918039,4	968244,639	Izquierdo	917858,835	968861,217
Derecho	918057,667	968289,088	Izquierdo	917873,509	968795,69
Derecho	918046,059	968319,142	Izquierdo	917897,496	968744,687
Derecho	918027,133	968354,396	Izquierdo	917898,723	968741,66
Derecho	918020,425	968364,153	Izquierdo	917899,534	968738,86
Derecho	917995,692	968370,264	Izquierdo	917908,771	968700,016
Derecho	917991,425	968371,678	Izquierdo	917908,938	968699,272
Derecho	917987,417	968373,715	Izquierdo	917910,349	968692,592
Derecho	917983,758	968376,327	Izquierdo	917926,079	968691,305
Derecho	917980,531	968379,457	Izquierdo	917930,423	968690,625
Derecho	917977,808	968383,035	Izquierdo	917934,62	968689,317
Derecho	917975,65	968386,978	Izquierdo	917938,581	968687,409
Derecho	917974,106	968391,201	Izquierdo	917942,22	968684,943
Derecho	917973,21	968395,606	Izquierdo	917945,46	968681,972
Derecho	917972,982	968400,096	Izquierdo	917984,627	968640,373
Derecho	917973,428	968404,569	Izquierdo	917986,814	968637,769
Derecho	917979,405	968436,827	Izquierdo	917988,693	968634,935
Derecho	917972,227	968444,54	Izquierdo	917990,238	968631,906
Derecho	917959,863	968438,031	Izquierdo	918002,335	968604,454
Derecho	917955,694	968436,225	Izquierdo	918009,127	968598,074
Derecho	917951,3	968435,07	Izquierdo	918012,053	968594,9
Derecho	917946,782	968434,591	Izquierdo	918014,493	968591,339
Derecho	917942,243	968434,8	Izquierdo	918016,396	968587,465
Derecho	917937,788	968435,692	Izquierdo	918028,681	968557,12
Derecho	917933,519	968437,247	Izquierdo	918042,682	968527,003
Derecho	917929,533	968439,428	Izquierdo	918044,339	968522,543
Derecho	917925,923	968442,187	Izquierdo	918045,27	968517,878
Derecho	917922,77	968445,459	Izquierdo	918045,452	968513,123
Derecho	917920,148	968449,169	Izquierdo	918044,881	968508,4
Derecho	917918,117	968453,233	Izquierdo	918043,569	968503,827
Derecho	917906,973	968480,513	Izquierdo	918041,551	968499,518
Derecho	917882,143	968503,099	Izquierdo	918038,877	968495,583
Derecho	917881,556	968503,65	Izquierdo	918035,614	968492,12
Derecho	917861,702	968522,821	Izquierdo	918024,571	968482,28
Derecho	917858,731	968526,152	Izquierdo	918033,56	968473,118
Derecho	917856,287	968529,886	Izquierdo	918086,206	968451,182
Derecho	917854,424	968533,941	Izquierdo	918090,461	968448,944
Derecho	917853,183	968538,228	Izquierdo	918094,304	968446,055
Derecho	917852,592	968542,652	Izquierdo	918097,636	968442,59
Derecho	917850,6	968576,714	Izquierdo	918100,371	968438,636
Derecho	917850,553	968577,942	Izquierdo	918102,44	968434,296
Derecho	917850,162	968600,396	Izquierdo	918103,789	968429,682
Derecho	917845,213	968602,746	Izquierdo	918104,384	968424,911
Derecho	917841,021	968605,169	Izquierdo	918104,208	968420,107
Derecho	917837,274	968608,235	Izquierdo	918103,268	968415,392
Derecho	917834,068	968611,865	Izquierdo	918101,586	968410,888

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	917831,488	968615,962	Izquierdo	918099,207	968406,711
Derecho	917829,601	968620,421	Izquierdo	918096,191	968402,967
Derecho	917828,456	968625,126	Izquierdo	918083,889	968389,981
Derecho	917828,083	968629,954	Izquierdo	918113,152	968357,922
Derecho	917828,261	968654,569	Izquierdo	918115,827	968354,53
Derecho	917828,67	968659,29	Izquierdo	918117,987	968350,789
Derecho	917829,632	968663,318	Izquierdo	918119,587	968346,776
Derecho	917839,257	968694,052	Izquierdo	918120,595	968342,576
Derecho	917832,07	968717,647	Izquierdo	918127,471	968300,321
Derecho	917808,555	968770,994	Izquierdo	918138,169	968277,748
Derecho	917807,632	968773,353	Izquierdo	918176,835	968242,86
Derecho	917806,649	968776,918	Izquierdo	918179,769	968239,778
Derecho	917789,644	968857,751	Izquierdo	918182,237	968236,311
Derecho	917789,105	968861,429	Izquierdo	918184,191	968232,53
Derecho	917789,026	968865,146	Izquierdo	918185,589	968228,511
Derecho	917789,407	968868,844	Izquierdo	918186,405	968224,334
Derecho	917790,692	968876,581	Izquierdo	918186,621	968220,084
Derecho	917784,583	968910,635	Izquierdo	918186,234	968215,846
Derecho	917776,254	968952,682	Izquierdo	918183,093	968196,638
Derecho	917775,747	968956,534	Izquierdo	918194,689	968183,564
Derecho	917775,742	968960,419	Izquierdo	918197,389	968180,032
Derecho	917776,24	968964,271	Izquierdo	918199,534	968176,138
Derecho	917779,426	968980,559	Izquierdo	918201,076	968171,968
Derecho	917780,679	968985,073	Izquierdo	918201,981	968167,615
Derecho	917782,624	968989,334	Izquierdo	918202,229	968163,176
Derecho	917785,213	968993,238	Izquierdo	918201,815	968158,749
Derecho	917788,381	968996,688	Izquierdo	918200,746	968154,433
Derecho	917788,784	969001,495	Izquierdo	918199,048	968150,324
Derecho	917789,949	969006,176	Izquierdo	918196,758	968146,514
Derecho	917791,844	969010,611	Izquierdo	918196,235	968142,447
Derecho	917780,284	969021,402	Izquierdo	918195,14	968138,496
Derecho	917779,816	969021,839	Izquierdo	918193,497	968134,74
Derecho	917764,007	969036,949	Izquierdo	918191,337	968131,255
Derecho	917759,81	969041,025	Izquierdo	918188,705	968128,111
Derecho	917755,872	969040,076	Izquierdo	918185,654	968125,372
Derecho	917752,062	969039,414	Izquierdo	918193,049	968110,569
Derecho	917748,2	969039,247	Izquierdo	918193,96	968110,637
Derecho	917744,347	969039,578	Izquierdo	918198,703	968110,613
Derecho	917733,958	969029,317	Izquierdo	918203,382	968109,843
Derecho	917730,419	969026,237	Izquierdo	918207,881	968108,345
Derecho	917726,444	969023,747	Izquierdo	918212,088	968106,157
Derecho	917722,129	969021,906	Izquierdo	918215,898	968103,333
Derecho	917717,58	969020,761	Izquierdo	918219,215	968099,944
Derecho	917712,908	969020,339	Izquierdo	918221,957	968096,075
Derecho	917687,545	969020,04	Izquierdo	918224,054	968091,822
Derecho	917683,182	969020,307	Izquierdo	918225,456	968087,291
Derecho	917678,903	969021,206	Izquierdo	918226,126	968082,597
Derecho	917674,801	969022,716	Izquierdo	918226,047	968077,855
Derecho	917670,961	969024,807	Izquierdo	918225,223	968073,185
Derecho	917667,467	969027,434	Izquierdo	918223,673	968068,703
Derecho	917664,391	969030,541	Izquierdo	918212,745	968043,704
Derecho	917661,799	969034,062	Izquierdo	918216,565	968020,367
Derecho	917659,747	969037,922	Izquierdo	918216,956	968016,089
Derecho	917653,266	969052,602	Izquierdo	918216,731	968011,799
Derecho	917622,355	969071,941	Izquierdo	918215,896	968007,585
Derecho	917618,948	969074,421	Izquierdo	918214,468	968003,533
Derecho	917615,923	969077,354	Izquierdo	918203,754	967978,922
Derecho	917613,339	969080,682	Izquierdo	918201,639	967974,92
Derecho	917611,246	969084,339	Izquierdo	918198,945	967971,281
Derecho	917609,686	969088,253	Izquierdo	918182,513	967952,266
Derecho	917602,964	969109,317	Izquierdo	918179,647	967949,373
Derecho	917601,952	969113,398	Izquierdo	918176,416	967946,895
Derecho	917601,55	969117,582	Izquierdo	918172,88	967944,877
Derecho	917601,765	969121,781	Izquierdo	918162,893	967940,045
Derecho	917602,592	969125,903	Izquierdo	918156,389	967915,754
Derecho	917598,603	969125,578	Izquierdo	918155,035	967911,815
Derecho	917594,177	969125,545	Izquierdo	918153,149	967908,102
Derecho	917589,795	969126,164	Izquierdo	918150,766	967904,686
Derecho	917585,551	969127,421	Izquierdo	918147,934	967901,633
Derecho	917581,538	969129,289	Izquierdo	918144,705	967899,001
Derecho	917577,844	969131,727	Izquierdo	918105,953	967871,658
Derecho	917574,549	969134,682	Izquierdo	918108,806	967856,651
Derecho	917571,725	969138,09	Izquierdo	918152,546	967784,545
Derecho	917569,433	969141,877	Izquierdo	918177,325	967753,3
Derecho	917567,723	969145,959	Izquierdo	918179,857	967749,518
Derecho	917540,662	969150,284	Izquierdo	918181,788	967745,397
Derecho	917507,825	969150,414	Izquierdo	918183,073	967741,031

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	917502,993	969150,826	Izquierdo	918183,684	967736,522
Derecho	917498,291	969152,01	Izquierdo	918183,605	967731,971
Derecho	917493,841	969153,936	Izquierdo	918182,838	967727,485
Derecho	917489,759	969156,554	Izquierdo	918181,402	967723,167
Derecho	917486,152	969159,795	Izquierdo	918179,329	967719,115
Derecho	917483,115	969163,575	Izquierdo	918176,186	967713,975
Derecho	917480,727	969167,795	Izquierdo	918173,387	967710,122
Derecho	917479,049	969172,345	Izquierdo	918170,014	967706,761
Derecho	917477,509	969177,858	Izquierdo	918166,152	967703,976
Derecho	917476,584	969182,641	Izquierdo	918161,898	967701,838
Derecho	917476,446	969187,51	Izquierdo	918157,359	967700,399
Derecho	917477,097	969192,338	Izquierdo	918152,65	967699,696
Derecho	917478,52	969196,996	Izquierdo	918150,13	967699,723
Derecho	917480,679	969201,363			
Derecho	917482,468	969203,86			

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia el presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico (Anexo 1) y en los planos anexos de determinación con sus correspondientes coordenadas (Anexo 2), los cuales forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. **Ámbito de aplicación espacial.** La zona determinada como ronda de protección de la Quebrada El Coyal que aquí se anuncia, se delimita en el Anexo 2, que forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. **Objeto.** El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación, restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares y concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

Artículo 4°. **Régimen de usos de la zona de ronda de protección.** El régimen de usos de la ronda de protección definida en el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos, construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación.

Parágrafo 1°. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2°. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3°. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 28 de 2004, emanado de la CAR y, en general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización impartida por parte de la CAR.

Artículo 5°. **Parámetros para los usos condicionados.** La implementación de los usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros:

- a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar.
- b) Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
- c) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno natural.
- d) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo.
- e) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. **Zonas de alto riesgo no mitigable.** Bajo ninguna circunstancia se permitirá la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control por la Administración Municipal de Girardot, perteneciente a la cuenca con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. **Aumento de cobertura boscosa.** Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados en la ronda de protección de la Quebrada El Coyal, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto en el presente acto.

Artículo 8°. **Determinante ambiental.** De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9°. **Limitación.** La presente resolución conlleva una afectación del derecho de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de la Quebrada El Coyal, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de que estos inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos en el artículo 3°.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la Quebrada El Coyal no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, hipotecados, arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser objeto de cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. **Sanciones.** Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. **Inscripción.** Solicitar a las oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la ronda de protección de la Quebrada El Coyal.

Artículo 12. **Comunicaciones.** Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía del municipio en la cual se localiza el área objeto de la presente resolución, para el caso del municipio de Girardot.

Artículo 13. **Publicación.** Publicar el presente acto administrativo en el **Diario Oficial** y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. **Vigencia.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial**.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Director General,

Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón.
(C. F.).

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 030 DE 2015

(octubre 22)

por medio del cual se acata una medida de suspensión provisional del proceso de elección del Director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), convocado para el 22 de octubre de 2015.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal j), artículo 27 de la Ley 99 de 1993; el Decreto Reglamentario número 1076 de 2015, artículo 2.2.8.4.1.22 de 2015; artículo 52 del Acuerdo número 005 de 2010 - Estatutos Carder, y

CONSIDERANDO:

A) Que el 1° de octubre de 2015, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) mediante Acuerdo número 28, ordenó la apertura de la Convocatoria, estableció los parámetros y el Cronograma para la designación del Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) para el Período Institucional del 1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019;

B) Que el Consejo Directivo de la Carder, durante el desarrollo de la Convocatoria ha dado cumplimiento a todos y cada uno de los parámetros fijados previamente para que los aspirantes a ser designados en el cargo de Director de la Carder, presentaran sus hojas de vida, para ser verificados los requisitos de que trata el Decreto número 1076 de 2015, por parte del Consejo Directivo de la Corporación, cumpliéndose el cronograma establecido, así:

1. **Publicación Convocatoria:** Esta se publicó en el **Diario Oficial**; en el periódico *La Tarde*; en el *“Diario del Otún”* y en página web de la Corporación el día 2 de octubre de 2015; la cual contenía los requisitos del cargo (los definidos en Decreto número 1076 de 2015, artículo 2.2.8.4.1.21); funciones del cargo; asignación básica; lugar, fecha y hora límite para la recepción de documentos.

2. **Inscripciones y recepción de hojas de vida:** La Convocatoria para la designación del Director General de la Carder, se abrió el día dos (2) de octubre de 2015. El día siete (7) de octubre de 2015, se realizaron las inscripciones de los aspirantes en la Unidad de Correspondencia (Oficina número 102), desde las 07:00 a. m. hasta las 5 p.m., hora de cierre de la misma, en la que se procedió a la apertura de la urna, acto público en la que participaron los integrantes de la Comisión conformada por el Consejo Directivo de la Carder, como consta en el registro de asistencia.

3. **Verificación de requisitos.** Posteriormente, la Comisión designada por el Consejo Directivo de la Carder, procedió en las fechas indicadas a verificar el cumplimiento de los requisitos en las hojas de vida de los aspirantes; resultado que fue publicado el día 14 de octubre de 2015 en la página web de la Carder, para que los aspirantes presentaran reclamaciones si lo consideraban pertinente.

Los resultados de la verificación de los requisitos mínimos de conformidad con el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto número 1076 de 2015 fue puesto en conocimiento del Consejo Directivo de la Carder, por parte de la Comisión designada para tal fin, quien rindió el “Informe Preliminar”, sobre los resultados de la verificación de las hojas de vida de los aspirantes, conforme se contempla en el Acuerdo número 028 de 2015. En dicha reunión la comisión socializó con los demás Consejeros la verificación de las hojas de vida de los aspirantes y la experiencia profesional, incluyendo la ambiental y los estudios realizados; posteriormente, se conformó la Lista Definitiva de Habilitados para ser publicada en la página web de la Carder, el día 21 de octubre de 2015.

4. **Reclamaciones.** En este punto se precisa que no se presentaron reclamaciones. Se informó ante el Consejo Directivo que se presentaron derechos de petición y acciones de tutela, para lo cual recomendó el Consejo Directivo al Director General Ad-hoc, estar atento a que los Derechos Fundamentales de los aspirantes se garanticen en su totalidad y al mismo tiempo, atender todas las solicitudes que se presente dentro de la oportunidad legal para ello.

5. Que el día 19 de octubre de 2015, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira – Sala Unitaria de Decisión Laboral, profirió auto admitiendo Acción de Tutela con radicación 2015-00166 en contra de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), despacho que en principio niega la medida provisional de suspensión del proceso de elección del Director General y ante la reposición de la decisión, el magistrado de oficio deja sin efecto la decisión inicial y ordena la suspensión provisional del proceso de elección del Director convocado para el 22 de octubre de 2015.

6. Que la medida provisional a que se hace alusión en el numeral anterior fue notificada al Consejo Directivo de la Carder el día 21 de octubre de 2015, ante lo cual el Director General Ad-Hoc, con las facultades otorgadas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo número 029 de 2015, solicitó ese mismo día ante el despacho judicial dejar sin efecto el auto de fecha 20 de octubre de 2015 por el cual se ordenó la suspensión provisional del proceso de elección del Director convocado para el 22 de octubre de 2015, la que fuere confirmada mediante auto proferido el 21 de octubre de 2015.

7. Que en reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la Carder, llevada a cabo el día 22 de octubre de 2015 conforme a lo establecido en el Acuerdo número 28 de 2015, artículo cuarto del cronograma y en lo atinente al punto tercero del orden del día denominado Designación del Director General de la Corporación, se procedió a informar a los señores Consejeros la medida decretada por el Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala Unitaria de Decisión Laboral, la cual consiste en que se ordena la suspensión provisional del proceso de elección del Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) convocado para el 22 de octubre de 2015.

8. Que por lo expuesto anteriormente y acatando la medida proferida por el Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala Unitaria de Decisión Laboral, se hace necesario suspender provisionalmente la elección del Director General de la Corporación convocada para el día 22 de octubre de 2015, para que esta se realice con posterioridad al 25 de octubre de 2015, fecha de los próximos comicios electorales.

9. Hace parte del presente Acuerdo el informe final de la convocatoria para la designación del Director General de la Corporación, emitido y presentado por el Director ad hoc de fecha 22 de octubre de 2015.

10. Por lo expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder),

ACUERDA:

Artículo 1°. Acatar la Medida ordenada por el Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala Unitaria de Decisión Laboral de suspender provisionalmente el proceso de elección del Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), convocado para el 22 de octubre de 2015, para que esta se realice con posterioridad al 25 de octubre de 2015, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente Acuerdo.

Parágrafo. Una vez cumplida la fecha de los comicios electorales, el proceso de designación del Director General de la Corporación, se reanuda con el acto administrativo modificatorio del cronograma de dicho proceso, que adopte el Consejo Directivo de la Carder.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en el Pereira, a 22 de octubre de 2015.

La Presidenta (Delegada),

La Secretaria,

María Mercedes Ríos Ayala.

Irma Cecilia Cardona Martínez.

(C. F.).

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA

Dirección General Marítima

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0602-2015 MD-DIMAR-GLEMAR DE 2015

(septiembre 24)

por la cual se establece el trámite y procedimiento de las solicitudes para realizar tendidos de cables submarinos de fibra óptica en los espacios marítimos jurisdiccionales colombianos.

El Director General Marítimo, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las otorgadas en los numerales 14 y 15 del artículo 3° del Decreto-ley 2324 de 1984; numerales 21 y 22 del artículo 5 ibídem y numerales 2 y 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 019 del 10 de enero de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, tiene como fin el de facilitar las actividades de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen.

Que la actividad de tendidos de cables submarinos de fibra óptica en los espacios marítimos jurisdiccionales colombianos se realiza en tres etapas: La primera relacionada con los estudios de investigación con el objeto de determinar la línea o los puntos por donde se tendera el cable de fibra óptica, la segunda etapa comprende el tendido del cable propiamente dicho y la tercera etapa comprende el aterraje del cable en la costa nacional utilizando playas y terrenos de bajamar.

Que la actividad de estudios de investigación con el objeto de determinar la línea o los puntos por donde se tendera el cable de fibra óptica se viene realizando de manera eficiente y eficaz a través del trámite que será denominado “Permiso de permanencia para embarcaciones extranjeras, en labor científica y/o técnica en aguas jurisdiccionales colombianas”.

Que se hace necesario unificar en un solo trámite la actividad de tendido de cable de fibra óptica y la de aterraje del mismo en la costa nacional, que será denominado: “Tendido de cables submarinos de fibra óptica en los espacios marítimos jurisdiccionales colombianos”.

Que los numerales 14 y 15 del artículo 3° del Decreto-ley 2324 de 1984, establecen como actividades marítimas respectivamente, la conservación, preservación y protección del medio marino, así como la colocación de cualquier tipo de estructura, obras fijas o semifijas en el suelo o en el subsuelo marino.

Que numeral 5 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 determina que la Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que el numeral 6 ibídem establece que la Dirección General Marítima tiene la función de autorizar la operación de las naves y artefactos navales en aguas colombianas.

Que los numerales 21 y 22 del artículo 5° ibídem, establecen como función y atribución de la Dirección General Marítima, respectivamente, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas y terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público, así como autorizar y controlar la construcción y el uso de islas y estructuras artificiales en las áreas de su jurisdicción.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función de la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas entre otros con las actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que las naves de apoyo y/o artefactos navales tales como remolcadores, bongos y demás que se considere necesario utilizar para el desarrollo del proyecto de tendido de cableado submarino deberán ser de bandera colombiana en concordancia con el artículo 38 del Decreto 1423 de 1989 hoy artículo 2.4.3.2.3 del Decreto 1070 del 26 de mayo de 2015, “por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo

RESUELVE:

Artículo 1°. *Objeto.* Establecer el trámite y procedimiento de las solicitudes para realizar tendidos de cables submarinos de fibra óptica en los espacios marítimos jurisdiccionales colombianos.

Artículo 2°. *Solicitud.* Las solicitudes para realizar tendidos de cables submarinos de fibra óptica en los espacios marítimos jurisdiccionales colombianos deben presentarse como mínimo con seis (6) meses de anticipación a la fecha prevista para la iniciación de las actividades de tendido del cable submarino. La Dirección General Marítima exigirá los siguientes documentos:

a) Datos del solicitante, según se trate de personas jurídicas o personas naturales; si la solicitud se hace por medio de representante legal debe acompañarse el poder debidamente constituido que acredite su representación.

b) Certificado de Cámara de Comercio, cuando sea persona jurídica.

c) Anexo técnico que contenga como mínimo la descripción del proyecto, objetivos, ubicación geográfica detallada donde se tenderá el cable, coordenadas geográficas de los puntos de la línea del cable, estaciones de trabajo tanto en aguas marítimas como en zonas con características de playa o bajamar, planos de la construcción proyectada, levantados por profesionales con matrícula, licencia o tarjeta profesional vigente, descripción de las actividades a realizar y de los equipos, cronograma de actividades detallando puerto de arribo

en Colombia y fecha tentativa de ingreso del buque y de inicio de operaciones, itinerarios de viaje, partida definitiva de la nave. Deben ser entregados en presentación análoga y digital, formato Shapefile, Geodatabase o DXF, sistema de referencia Magna-Sirgas; Parámetros: Elipsoide GRS80; Sistema de Proyección: Gauss (Kruger) Sistema de Coordenadas Planas.

d) Nombre de la embarcación (es) y certificados estatutarios de navegabilidad y de seguridad marítima y lista de tripulación (nombres y apellidos, documentos de identidad, domicilios), así como carta de aceptación del agente marítimo.

e) Licencia ambiental, permiso ambiental o plan de manejo ambiental aprobado por la autoridad ambiental competente según corresponda.

f) Concepto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (Min Tic) en el que exprese la viabilidad del tendido del cable.

g) Certificado sobre la presencia o no de comunidades étnicas en la zona del proyecto, obras o actividades a realizarse, expedido por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

h) Certificado de la Alcaldía Municipal, en el que conste que el terreno sobre el cual se va a construir no está ocupado por otra persona, no está destinado a ningún uso público, ni a ningún servicio oficial, y que la construcción proyectada no ofrece ningún inconveniente a la respectiva municipalidad.

i) Constancia del Ministerio de Transporte, en la que se exprese que no existe ningún proyecto de instalaciones portuarias sobre el terreno o zona, que el área solicitada no ha sido otorgada en concesión portuaria ni tiene trámite alguno, y no se encuentra incluida en el Plan de Expansión Portuario.

j) Concepto del Viceministerio de Turismo, donde conste que las explotaciones o construcciones que se pretenden adelantar no interfieren los programas de desarrollo turístico de la zona.

k) Pago del valor del trámite correspondiente.

Artículo 3°. *Vigencia.* La presente resolución rige a partir de su publicación en el *Diario Oficial*.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de septiembre de 2015.

El Director General Marítimo (e),

Vicealmirante *Pablo Emilio Romero Rojas.*
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0604-2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT DE 2015

(septiembre 24)

por la cual se otorga una concesión a la Sociedad Hotel Santorini Ltda., en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en los numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 los numerales 1 y 2 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito del 26 de septiembre de 2013, el señor Édgar Villamil Pérez, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad Hotel Santorini Ltda., solicitó a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta una concesión, zona de playa, la cual fue complementada mediante escrito del 27 de octubre de 2014.

Que con la solicitud formal de concesión, fueron allegados los siguientes documentos e información.

a) **Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).**

Resolución número 0859 del 15 de mayo del 2013 por medro de la cual la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), otorgo autorización de ocupación temporal de la zona de playa por el término de cinco (5) anos a la Sociedad Hotel Santorini Ltda., identificada con NIT. 900124664-8, representada legalmente por el señor Édgar Villamil Pérez.

b) **Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, Secretaria de Infraestructura.**

Certificación del 29 de noviembre del 2012, por medio del cual el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Económico Sostenible la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, certifica que el área de interés no está ocupada por otras personas, no está destinada a ningún uso público ni a ningún servicio oficial y que las construcciones existentes no ofrecen ningún inconveniente a la municipalidad, además que están sujetas a las normas sobre uso del suelo enmarcadas dentro del P.O.T. del municipio.

c) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Certificación DM-040/2012 del 2 de octubre del 2012 el doctor Víctor Rafael Fernández Ávila, en su calidad de coordinador del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo el Viceministerio de Turismo, hace constar que La Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no adelanta ningún proyecto turístico que pueda ser interferido o afectado en la zona de uso público solicitada en concesión donde se pretende existen dos (2) kioskos ubicados en la parte de la playa frente a los lotes 4 y 5 de la urbanización Rocas de Piedra Hincada denominados como Villa del Mar.

d) **Ministerio de Transporte– Dirección de Infraestructura – Grupo Infraestructura para el Desarrollo Portuario y la Logística.**

Mediante Certificación número 043 de 2012, la doctora Esperanza Ledezma Lloreda en su calidad de Directora de Infraestructura (E) del Ministerio de Transporte hace constar que a la fecha, en el área de la zona a Intervenir, no existe proyecto de desarrollo portuario concesión portuaria otorgada ni trámite para el otorgamiento de concesión, permiso o licencia portuaria.

e) **Ministerio de Interior – Dirección de Consulta Previa.**

Certificación número 1655 del 16 de octubre de 2014, mediante el cual el doctor Álvaro Echeverry Londoño, en su calidad de Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior certifica que no se identifica la presencia de comunidades indígenas, Rom y minorías en el área de influencia del proyecto ni se registra presencia de comunidades negras, afrocolombianas raízales y palenqueras en el área del proyecto.

f) **Licencia de Construcción.**

Resolución número 33-2012 del 29 de noviembre de 2011, por medio del cual el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Económico Sostenible de la Alcaldía Municipal de Ciénaga, concede Licencia de Reconocimiento de la Existencia de Edificaciones al señor Edgar Villamil Pérez, representante legal de la sociedad Hotel Santorini Ltda.

Estudios técnicos del proyecto elaborados por Bathymetric Solutions S.A.S. de junio de 2012.

Que en cumplimiento al artículo 79, numeral 4 del Decreto-ley 19 de 2012, se verificó la Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes del señor Ernesto Serrano Pinto socio capitalista identificado con cédula de ciudadanía número 17037137 y del señor Édgar Villamil Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 79373827 representante legal de la sociedad Hotel Santorini Ltda.

Edicto fijado el tres (3) de diciembre de 2014 y desfijado el (19) de enero de 2015, así como tres (3) publicaciones en el Diario, hoy del Magdalena los días 16, 18 y 22 de diciembre de 2014.

Concepto Técnico número CT. 47-CP04-ALIT-613 del 28 de abril de 2014, proferido por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, mediante el cual emite concepto técnico favorable a la solicitud de concesión de un área de bien de uso público a Hotel Santorini Ltda.

Concepto Técnico número CT. 40-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 18 de agosto de 2015, emitido por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, contenido en cinco (5) folios y un (1) plano, mediante el cual emitió concepto técnico favorable a la solicitud de concesión presentada por la Sociedad Hotel Santorini Ltda.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para tal fin esta Dirección General otorgará una concesión en un área terreno que tiene las características técnicas de una zona de bajamar y playa marítima de acuerdo con lo descrito en el concepto técnico antes mencionado el cual forma parte integral de la presente resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “*La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano*”.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

Que el presente acto administrativo se emite sin perjuicio de las decisiones legales, judiciales o administrativas proferidas por la autoridad competente, así como los efectos que a futuro se produzcan por la dinámica del litoral que afecten la propiedad de la Nación o diriman a favor de particulares controversias reconociendo la validez de títulos traslaticios de dominio, sobre los bienes que hacen parte del trazado de jurisdicción de la Dirección General Marítima

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar en concesión a la Compañía Hotel Santorini Ltda., por el término de diez años (10) años contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, un área de treientos cincuenta y nueve coma novecientos setenta y cuatro metros cuadrados (359,974 m²) correspondiente a un bien de uso público en el sector Ciénaga Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta de acuerdo con los descrito en el concepto técnico número GT. 40-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 18 de agosto de 2015 emitido por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General, el cual forma parte integral de la presente resolución, localizada dentro de las siguientes coordenadas:

PLANAS MAGNA SIRGAS DATUM BOGOTÁ		
PUNTO	ESTE	NORTE
1	984976,756	1716769,881
2	984976,88	1716768,77
3	984953,62	1716776,39
4	984957,4	1716792,28
5	984976,806	1716787,241
6	984976,756	1716787,201
7	984975,137	1716785,745
8	984974,652	1716784,288
9	984974,49	1716782,507
10	984975,461	1716781,05
11	984975,947	1716779,917
12	984976,109	1716778,298
13	984976,109	176775,87
14	984976,109	1716774,737
15	984976,109	1716772,957
16	984976,756	1716771,338
17	984976,756	1716769,881

Artículo 2°. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en concesión y las obras construidas en ella revertirán a la Nación sin que haya de causarse con cargo a

la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, suma alguna de dinero a favor de la sociedad Hotel Santorini Ltda.

Parágrafo 1°. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente la Dirección General Marítima determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí construidas.

Parágrafo 2°. La concesión que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el principio de gratuidad está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 3°. El señor Édgar Villamil Pérez, identificado con cedula de ciudadanía número 79373827 de Bogotá, en su calidad de Gerente y Representante Legal de Hotel Santorini Ltda., deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que adquieren para con la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente resolución tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Dirección General Marítima.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que la Sociedad Hotel Santorini Ltda., a través de su representante legal otorgará a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), para responder ante la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente resolución.

La garantía tendrá una vigencia anual prorrogable que se mantendrá vigente durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de Santa Marta, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que se incrementa el índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento Administrativo.

Artículo 4°. Además de las obligaciones anteriores, la Sociedad Hotel Santorini Ltda., se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984 y demás normas concordantes.

2. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto se depositen basuras, desechos, escombros hidrocarburos, productos contaminantes o potencialmente contaminantes así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos, ni tampoco podrá hacer ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

3. No efectuar obras de protección como rompeolas tajamares, espolones, muros de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto del proyecto ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requemirlas deberán presentar la solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Santa Marta previo el lleno de los requisitos exigidos con el fin de obtener la autorización respectiva.

4. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la Capitanía de Puerto de Santa Marta con el fin de verificar que las obras se mantengan de conformidad con lo autorizado.

5. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el concepto técnico número CT. 40-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 18 de agosto de 2015, emitido por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 5°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las obligaciones aquí mencionadas dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria del presente acto administrativo tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios de la autorización de obra en el *Diario Oficial*, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la misma de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su publicación en la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Artículo 7°. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito personas y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 8°. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que correspondan.

Artículo 9°. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Santa Marta para hacer entrega mediante acta del área alargada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que deban iniciarse por parte de la autoridad local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Santa Marta la Escritura Pública debidamente registrada la póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en el *Diario Oficial*, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Santa Marta deberá verificar, controlar e informar por escrito bimestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones de la presente resolución, a la Dirección General Marítima.

Artículo 10. Notificar por conducto de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, la presente resolución al señor Édgar Villamil Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 79373827 de Bogotá en calidad de representante legal de la sociedad Hotel Santorini Ltda., de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 11. Una vez notificada y en firme la presente resolución la Capitanía de Puerto de Santa Marta deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, (CIOH).

Artículo 12. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 13. La presente resolución quedará en firme de conformidad con el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de septiembre de 2015.

El Director General Marítimo (e),

Vicealmirante *Pablo Emilio Romero Rojas*.

Imprenta nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 07704338. 22-X-2015. Valor \$214.000.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0605-2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT DE 2015

(septiembre 24)

por la cual se otorga una concesión a la Sociedad Hotel Santorini Ltda., en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en los numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 los numerales 1 y 2 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito del 26 de septiembre de 2013, el señor Édgar Villamil Pérez, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad Hotel Santorini Ltda., solicitó a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta una concesión, zona de playa, la cual fue complementada mediante escrito del 31 de diciembre de 2013 y del 14 de enero de 2014.

Que con la solicitud formal de concesión, fueron allegados los siguientes documentos e información.

a) Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).

Resolución número 0859 del 15 de mayo del 2013 por medio de la cual la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), otorgo autorización de ocupación temporal de la zona de playa por el término de cinco (5) años a la Sociedad Hotel Santorini Ltda., identificada con NIT. 900124664-8, representada legalmente por el señor Édgar Villamil Pérez.

b) Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, Secretaría de Infraestructura.

Certificación del 29 de noviembre del 2012, por medio del cual el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Económico Sostenible la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, certifica que el área de interés no está ocupada por otras personas, no está destinada a ningún uso público, ni a ningún servicio oficial y que las construcciones existentes no ofrecen ningún inconveniente a la municipalidad, además que están sujetas a las normas sobre uso del suelo enmarcadas dentro del P.O.T. del municipio.

c) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Certificación DM-041/2012 del 2 de octubre del 2012 el doctor Víctor Rafael Fernández Ávila, en su calidad de coordinador del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo el Viceministerio de Turismo, hace constar que: La Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no adelanta ningún proyecto turístico que pueda ser interferido o afectado en la zona de uso público solicitada en concesión donde se pretende existen dos (2) kioscos ubicados en la parte de la playa frente a los lotes 8, 9 y 10 de la urbanización Rocas de Piedra Hincada, denominados como Club House y Casa Delfín.

d) Ministerio de Transporte – Dirección de Infraestructura – Grupo Infraestructura para el Desarrollo Portuario y la Logística.

Mediante Certificación número 044 de 2012, la doctora Esperanza Ledezma Lloreda, en su calidad de Directora de Infraestructura (E) del Ministerio de Transporte hace constar que a la fecha, en el área de la zona a intervenir, no existe proyecto de desarrollo portuario concesión portuaria otorgada, ni trámite para el otorgamiento de concesión, permiso o licencia portuaria.

e) Ministerio de Interior – Dirección de Consulta Previa.

Certificación número 1647 del 15 de octubre de 2014, mediante el cual el doctor Álvaro Echeverry Londoño, en su calidad de Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior certifica que no se identifica la presencia de comunidades indígenas, Rom y minorías en el área de influencia del proyecto, ni se registra presencia de comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras en el área del proyecto.

Estudios técnicos de los predios Casa Delfín, Club House y Villa del Mar elaborados por Bathymetric Solutions S.A.S. de junio de 2012.

Que en cumplimiento al artículo 79, numeral 4 del Decreto-ley 19 de 2012, se verificó la Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes del señor Ernesto Serrano Pinto socio capitalista identificado con cédula de ciudadanía número 17037137 y del señor Édgar Villamil Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 79373827 representante legal de la sociedad Hotel Santorini Ltda.

Edicto fijado el diecinueve (19) de noviembre de 2014 y desfijado el (19) de enero de 2015, así como tres (3) publicaciones en el Diario, hoy del Magdalena los días 16, 18 y 22 de diciembre de 2014.

Concepto Técnico número CT. 46-CP04-ALIT-613 del 25 de abril de 2014, proferido por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, mediante el cual emite concepto técnico favorable a la solicitud de concesión de un área de bien de uso público a Hotel Santorini Ltda.

Concepto Técnico número CT. 38-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 13 de agosto de 2015, emitido por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, contenido en seis (6) folios y un (1) plano, mediante el cual emitió concepto técnico favorable a la solicitud de concesión presentada por la Sociedad Hotel Santorini Ltda.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para tal fin esta Dirección General otorgará una concesión en un área terreno que tiene las características técnicas de una zona de bajamar y de acuerdo con lo descrito en el concepto técnico antes mencionado el cual forma parte integral de la presente resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “*La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano*”.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

Que el presente acto administrativo se emite sin perjuicio de las decisiones legales, judiciales o administrativas proferidas por la autoridad competente, así como los efectos que a futuro se produzcan por la dinámica del litoral que afecten la propiedad de la Nación o diriman a favor de particulares controversias reconociendo la validez de títulos traslativos de dominio, sobre los bienes que hacen parte del trazado de jurisdicción de la Dirección General Marítima

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar en concesión a la Compañía Hotel Santorini Ltda., por el término de diez años (10) años contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, un área de dos mil seiscientos treinta y seis como seiscientos sesenta y nueve (2.636,669 m²) correspondiente a un bien de uso público en el sector Ciénaga Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta de acuerdo con los descrito en el concepto técnico número CT. 38-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 13 de agosto de 2015 emitido por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General, el cual forma parte integral de la presente resolución, localizado dentro de las siguientes coordenadas:

PLANAS MAGNA SIRGAS DATUM BOGOTÁ					
PUNTO	ESTE	NORTE	PUNTO	ESTE	NORTE
1	985000,14	1716642,26	22	984968,662	1716685,38
2	984993,11	1716638,44	23	984969,148	1716684,25
3	984937,75	1716655,36	24	984971,252	1716682,47
4	984925,73	1716660,58	25	984973,357	1716680,53
5	984917,423	1716664,19	26	984974,976	1716678,91
6	984917,319	1716664,36	27	984975,137	1716677,13
7	984917,67	1716665,77	28	984976,432	1716675,19
8	984817,71	1716666,04	29	984977,404	1716672,92
9	984917,907	1716667,57	30	984979,508	1716671,46
10	984917,91	1716667,57	31	984980,479	1716671,3
11	984928,18	1716689,31	32	984982,11	1716670,14
12	984933,031	1716691,07	33	984994,909	1716650,35
13	984961,83	1716701,49	34	984995,048	1716648,96
14	984962,997	1716699,3	35	984996,019	1716648,31
15	984963,483	1716696,07	36	984996,417	1716648,02
16	984964,292	1716694,45	37	984997,679	1716646,06
17	984965,425	1716693,15	38	984997,962	1716645,08
18	984966,234	1716691,05	39	984998,609	1716643,62
19	984966,558	1716690,08	40	984999,904	1716642,49
20	984967,206	1716688,46	41	985000,125	1716642,28
21	984967,691	1716686,84	42	985000,14	1716642,26

Artículo 2°. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en concesión y las obras construidas en ella revertirán a la Nación sin que haya de causarse con cargo a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, suma alguna de dinero a favor de la sociedad Hotel Santorini Ltda.

Parágrafo 1°. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente la Dirección General Marítima determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí construidas.

Parágrafo 2°. La concesión que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el principio de gratuidad está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 3°. El señor Édgar Villamil Pérez, identificado con cedula de ciudadanía número 79373827 de Bogotá, en su calidad de Gerente y Representante Legal de Hotel Santorini Ltda., deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que adquieren para con la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente resolución tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Dirección General Marítima.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que la Sociedad Hotel Santorini Ltda., a través de su representante legal otorgará a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), para responder ante la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente resolución.

La garantía tendrá una vigencia anual prorrogable que se mantendrá vigente durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de Santa Marta, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que se incrementa el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento Administrativo.

Artículo 4°. Además de las obligaciones anteriores, la Sociedad Hotel Santorini Ltda., se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984 y demás normas concordantes.

2. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto se depositen basuras, desechos, escombros hidrocarburos, productos contaminantes o potencialmente contaminantes así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos, ni tampoco podrá hacer ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

3. No efectuar obras de protección como rompeolas tajamares, espolones, muros de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto del proyecto ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requemarlas deberán presentar la solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Santa Marta previo el lleno de los requisitos exigidos con el fin de obtener la autorización respectiva.

4. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la Capitanía de Puerto de Santa Marta con el fin de verificar que las obras se mantengan de conformidad con lo autorizado.

5. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el concepto técnico número CT. 38-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 13 de agosto de 2015, emitido por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 5°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las obligaciones aquí mencionadas dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria del presente acto administrativo tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios de la autorización de obra en el **Diario Oficial**, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la misma de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su publicación en la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Artículo 7°. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito personas y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 8°. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que correspondan.

Artículo 9°. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Santa Marta para hacer entrega mediante acta del área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que deban iniciarse por parte de la autoridad local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Santa Marta la Escritura Publica debidamente registrada la póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en el **Diario Oficial**, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Santa Marta deberá verificar, controlar e informar por escrito bimestral mente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones de la presente resolución, a la Dirección General Marítima.

Artículo 10. Notificar por conducto de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, la presente resolución al señor Édgar Villamil Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 79373827 de Bogotá en calidad de representante legal de la sociedad Hotel Santorini Ltda., de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 11. Una vez notificada y en firme la presente resolución la Capitanía de Puerto de Santa Marta deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, (CIOH).

Artículo 12. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 13. La presente resolución quedará en firme de conformidad con el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C. a 24 de septiembre de 2015.

El Director General Marítimo (e),

Vicealmirante *Pablo Emilio Romero Rojas*.

Imprenta nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 07704338. 22-X-2015. Valor \$214.000.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0606- 2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT DE 2015

(septiembre 24)

por la cual se otorga una concesión a la Sociedad Condominio Vacacional Puntepietra S.A., en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas.

El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en los numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito del 7 de enero de 2015 la señora Camila Holguín Cuéllar, identificada con cédula de ciudadanía número 21247893, en su calidad de Gerente General del Condominio Vacacional Puntepietra S.A., con NIT. 800010792-1, solicitó a la Dirección General Marítima un área de Bien de Uso Público en concesión, ubicada en la margen derecha de la vía que conduce de Coveñas a Santiago de Tolú en el departamento de Sucre.

Que con la solicitud formal fueron allegados los siguientes documentos e información:

a) Alcaldía Municipal de Coveñas - Secretaria de Planeación

Certificación del 21 de noviembre de 2012, suscrita por el Secretario de Planeación Obras Publicas y Saneamiento Básico Municipal de Coveñas, certifica que el terreno (Bien de Uso Público) ubicado en el sector Punta de Piedra, zona urbana de Coveñas, donde encuentra funcionando el pozo de captación de dicho condominio, en la margen derecha de la vía Coveñas - Tolú, a la altura de la Segunda Ensenada, no está ocupada por terceras persona, no se encuentra destinado a ningún servicio oficial y las obras no ofrecen ningún inconveniente para esta municipalidad.

b) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Certificación DM-042/2011 del 19 de septiembre de 2011, el doctor Víctor Rafael Fernández Ávila, en su calidad de coordinador del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo hace constar que: La Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no adelanta en la actualidad ningún proyecto turístico que pueda ser intervenido o afectado y no encuentra inconveniente alguno en el área donde se construirá un pozo para la captación de agua subterránea, para la cual se hará una perforación a una profundidad de cien (100) metros de acuerdo al estudio de impacto ambiental, ubicado en el sector de la margen derecha de la Ciénaga de la Caimanera, jurisdicción del municipio de Coveñas, Departamento de Sucre.

c) Ministerio de Transporte - Dirección de Infraestructura - Grupo de Asuntos Portuarios.

Mediante Certificación número 044 de 2011, el doctor Juan Camilo Granados Riveros, en su calidad de Director de Infraestructura del Ministerio de Transporte hace constar que a la fecha en el área de la zona a intervenir no existe proyecto de desarrollo portuario, concesión portuaria otorgada, ni trámite para el otorgamiento de la concesión, permiso o licencia portuaria.

d) Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre).

Resolución número 1028 del 20 de septiembre de 2005, por medio de la cual se concede un permiso de exploración y perforación de un pozo a nombre de la Sociedad Condominio Vacacional Puntepietra y Resolución número 0784 del 25 de octubre del 2011, por medio del cual se otorga la prórroga de una concesión de aguas subterráneas a nombre de la misma sociedad.

e) Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa.

Certificación número 1459 del 26 de septiembre del 2014, mediante la cual el doctor Álvaro Echeverry Londoño, en su calidad de Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior certifica que no se identifica la presencia de comunidades indígenas, Rom y minorías en el área de influencia del proyecto, ni se registra presencia de comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras en el área del proyecto.

f) Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes

Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes número 70928 vigente hasta el 12 de octubre de 2016.

Edicto fijado el cinco (5) de septiembre de 2013 y desfijado el 17 de octubre de 2013, así como tres (3) publicaciones en el diario El Meridiano de Sucre los días 14 y 24 de septiembre y 2 de octubre de 2013.

Concepto Técnico número CT. 01-A-CP09-ALIT-613 del 7 de enero de 2015, proferido por la Capitanía de Puerto de Coveñas, mediante el cual emite concepto técnico favorable a la solicitud presentada por la señora Camila Holguín Cuéllar, en su calidad de Gerente General del Condominio Puntepietra S.A.

Concepto Técnico número CT. 36-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 06 de agosto de 2015, contenido en cinco (5) folios útiles y dos (01) planos, mediante el cual la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la esta Dirección General conceptuó favorablemente a la solicitud de concesión presentada por la Sociedad Condominio Vacacional Puntepietra S.A.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para tal fin, esta Dirección General otorgará una concesión en un área terreno que tiene las características técnicas de una zona de bajamar y playa marítima de acuerdo con lo descrito en el concepto técnico antes mencionado, el cual forma parte integral de la presente resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “*La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano*”.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

Que el presente acto administrativo, se emite sin perjuicio de las decisiones legales, judiciales o administrativas proferidas por la autoridad competente, así como los efectos que a futuro se produzcan por la dinámica del litoral, que afecten la propiedad de la Nación o diriman a favor de particulares controversias reconociendo la validez de títulos traslativos de dominio, sobre los bienes que hacen parte del trazado de jurisdicción de la Dirección General Marítima

Que en mérito de lo anterior el Director General Marítimo,

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar en concesión al Condominio Vacacional Puntepietra S.A., por el término de diez años (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, un área de cuatrocientos veintiséis coma nueve metros cuadrados (426,9 m²), correspondiente a un bien de uso público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas, de acuerdo con lo descrito en el concepto técnico número CT. 36-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 06 de agosto de 2015, emitido por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de esta Dirección General, el cual forma parte integral de la presente resolución, en las siguientes coordenadas.

COORDENADAS ÁREA SOLICITADA Y EN ZONA DE BAJAMAR SISTEMA DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ				
Punto	Latitud	Longitud	Norte	Este
1	9° 25' 23,96" N	75° 38' 19,98" W	1534221,0800	828498,3500
2	9° 25' 23,10" N	75° 38' 18,99" W	1534194,5277	828528,2662
3	9° 25' 22,84" N	75° 38' 19,22" W	1534186,6000	828521,2298
4	9° 25' 23,70" N	76° 38' 20,21" W	1534213,1522	828491,3137

Parágrafo 1°. Dentro del área entregada en concesión, se construirán las obras descritas en el numeral 4 (Tabla No. 3) del concepto técnico GT. 36-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 6 de agosto de 2015.

Artículo 2°. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la Nación sin que haya de causarse con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, suma alguna de dinero a favor de la Sociedad Condominio Vacacional Puntepietra S.A.

Parágrafo 1°. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Dirección General Marítima determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí construidas.

Parágrafo 2°. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 3°. La señora Camila Holguín Cuéllar, en calidad de Gerente General del Condominio Vacacional Puntepietra S.A. o quien la represente, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que adquieren para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Dirección General Marítima.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que otorgarán a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), para responder ante la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente resolución.

La garantía tendrá una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de Coveñas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que se incrementa el índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 4°. Además de las obligaciones anteriores, los beneficiarios de la concesión se obligan a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área otorgada en concesión se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos, ni tampoco podrá hacer ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

3. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto de la presente concesión, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Coveñas, previo el lleno de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

4. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la Capitanía de Puerto de Coveñas, con el fin de verificar que las obras se mantengan de conformidad con lo autorizado.

5. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el concepto técnico número CT. 36-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 6 de agosto de 2015, emitido por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, el cual hace parte integrante a la presente resolución.

Artículo 5°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios de la concesión en el **Diario Oficial**, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su publicación en la Capitanía de Puerto de Coveñas.

Artículo 7°. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuitu personas y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 8°. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que correspondan.

Artículo 9°. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Coveñas para hacer entrega mediante acta del área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Coveñas, la Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en el **Diario Oficial**, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Coveñas deberá verificar, controlar e informar por escrito bimestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones de la presente resolución, a la Dirección General Marítima.

Artículo 10. Notificar, por conducto de la Capitanía de Puerto de Coveñas, la presente resolución a la señora Camila Holguín Cuéllar, identificada con cédula de ciudadanía número 21247893, en su calidad de Gerente General del Condominio Vacacional Puntepietra S.A., o quien la represente de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 11. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de Puerto de Coveñas deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), a la Agencia Nacional de Infraestructura, y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Artículo 12. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 13. La presente resolución quedará en firme de conformidad con el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de septiembre de 2015.
El Vicealmirante,

Pablo Emilio Romero Rojas,
Director General Marítimo (e).

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario 64920348. 22-X-2015. Valor \$327.600.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0616-2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-GINSEM-ASEM DE 2015
(octubre 1°)

por la cual se crea una zona de fondeo para espera, amarrar y desamarrar convoyes de barcasas en un sector dentro de los 27 kilómetros del Río Magdalena jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Barranquilla.

El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 38 del Decreto-ley 091 de 2007 y el numeral 3 del artículo 2° de la Resolución 0358 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° numeral 5 del Decreto-ley 2324 de 1984, faculta a la Dirección General Marítima para Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación, de la vida humana en el mar de la prevención de la contaminación del medio ambiente por naves.

Que en el numeral 24 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, se establece como función y atribución de la Dirección General Marítima: “Establecer las Zonas de fondeo de naves y artefactos navales”.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función del Director General Marítimo, dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas con las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar y la prevención de la contaminación marina proveniente de buques.

Que el numeral 6 de la norma ibídem, dispone como función del Director General Marítimo: “Establecer mediante acto administrativo las zonas de fondeo de naves y artefactos navales, así como expedir la Cartografía Náutica Oficial y los mapas temáticos en áreas de su jurisdicción”.

Que mediante Resolución número 825 del 27 de diciembre de 1984, se establecieron las jurisdicciones de las Capitanías de Puerto de la Dirección General Marítima.

Que mediante Resolución número 372 del 13 de septiembre de 2001, la Dirección General Marítima estableció áreas de cuarentena y áreas restringidas en aguas Marítimas jurisdiccionales Colombianas del Mar Caribe, Archipiélago de San Andrés y Providencia y Océano Pacífico, graficadas en las Cartas Náuticas de uso oficial publicadas por la Dirección General Marítima.

Que de acuerdo con la Resolución 17 del 2 de febrero de 2007, se define como áreas de fondeo, aquellas zonas previamente establecidas por la Dirección General Marítima, debidamente señalizadas en la Cartografía Náutica Nacional.

Así mismo, contempla que excepcionalmente la Autoridad Marítima Nacional mediante acto administrativo, podrá habilitar, autorizar y modificar el uso de otras áreas de fondeo, cuando las circunstancias así lo requieran.

Que mediante comunicación de fecha 27 de abril de 2015, radicado número 132015100635 de fecha 30 de abril, el señor Alejandro Posada Gerente de Impala Terminals Colombia S.A.S., solicita y argumenta la necesidad de la creación de una zona de fondeo para espera, amarrar y desamarrar convoyes de barcasas.

Que mediante Oficio número 29201502259 del 3 de junio de 2015, el Director General Marítimo emite respuesta al Derecho de Petición convocando a la realización de una mesa técnica jurídica en DIMAR.

Que mediante oficio número 29201502900 MD-DIMAR-GLEMAR, del 16 de julio de 2015, se solicita información técnica adicional.

Que mediante fecha 4 de agosto de 2015, radicado número 29201504227 del 4 de agosto de 2015, el Señor Alejandro Posada Gerente de Impala Terminals Colombia S.A.S., aporta la información técnica solicitada.

Que mediante Oficio Interno 251003R de agosto de 2015, el Director del Centro de Investigaciones Oceanográfico e Hidrográfico del Caribe emite concepto técnico favorable con recomendaciones.

Que mediante Oficio Interno número 021500R de septiembre de 2015 la Señalización del Río Magdalena emite concepto técnico favorable.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,

RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer un área de fondeo para espera, amarre y desamarre convoyes de barcasas en un sector dentro de los 27 kilómetros del Río Magdalena, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, en las siguientes coordenadas:

Puntos	Latitud	Longitud
A	11° 00'41.04"N	74° 46'53.85"W
B	11° 00'50.44"N	74° 46'47.73"W
C	11° 00'26.80"N	74° 46'24.30"W
D	11°00'19.39"N	74°46'31.62"W

Carta de referencia 253 Río Magdalena.

Parágrafo. El área aquí asignada no es de destinación exclusiva para la Sociedad Impala Terminals Colombia S.A.S.

Artículo 2°. El valor por el uso del área de fondeo será determinado por Cormagdalena de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 161 de 1994, y en el artículo 15 de la Ley 1242 de 2008, “por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones”.

Parágrafo. La Dirección General Marítima, DIMAR, cobrará por el uso de las áreas de fondeo en el río Magdalena, de conformidad con la delegación efectuada en la Resolución número 0000226 de agosto 28 de 2008 de Cormagdalena.

Artículo 3°. La sociedad Impala Terminals Colombia S.A.S., deberá cumplir con las siguientes normas de seguridad para realizar las operaciones amarre y desamarre de buques, remolcadores o barcasas así:

1. Efectuar las operaciones de mantenimiento de los cabos guía, bozas, cables y cabos, siguiendo las prácticas marineras, para garantizar la seguridad en el amarre y desamarre de los convoyos, buques, barcasas.

2. El mantenimiento de uso de los equipos utilizados en las operaciones de amarre y desamarre se realiza de acuerdo a los manuales de mantenimiento de forma que se asegure su rendimiento, los cuales serán objetos de verificación por parte de la Capitanía de Puerto.

3. Las reparaciones y sustituciones de los elementos dañados en los cabos guías, bozas y cables, se efectúa utilizando procedimientos marineros de forma que asegure su operatividad.

4. Ejecutar las operaciones de afirmado y largado de los cabos de amarre siguiendo las instrucciones recibidas, para realizar el atraque y/o desatraque.
5. Las operaciones se deben realizar bajo la coordinación de la Estación de Control de Tráfico Marítimo que dará las recomendaciones de seguridad determinadas a fin de evitar riesgos durante las maniobras.
6. Los accesorios auxiliares bozas, cadenas, grilletes entre otros se seleccionan y se disponen de acuerdo a la maniobra de amarre o desamarre a realizar con el fin de ejecutarla con seguridad y rapidez.
7. Realizar las maniobras de amarre o desamarre aplicando los criterios de seguridad en el trabajo según la normativa de prevención de riesgos laborales en operaciones portuarias y en la zona de Espera- o Fleeting, para evitar daños al personal que las ejecuta.
8. El amarre y desamarre de cabos se efectúa utilizando los medios de protección establecidos para garantizar la seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
9. Los equipos de protección personal establecidos en la legislación vigente se utilizan de acuerdo a los manuales de prevención de riesgos, para minimizar los mismos durante las operaciones de amarre y desamarre.
10. Es responsabilidad del Capitán de la embarcación y el personal de guardia sobre cubierta verificar el estado de las amarras y las condiciones meteorológicas que puedan afectar las barcasas.

Todas las operaciones deben ser comunicadas y coordinadas con la respectiva estación de control de tráfico marítimo.

Artículo 4°. El área asignada mediante el presente acto administrativo será graficada en las Cartas Náuticas de uso oficial, publicadas por la Dirección General Marítima.

Artículo 5°. Para el Sistema de Anclaje del convoy de barcasas se deberán posicionar 3 boyas de Amarre en las siguientes coordenadas:

Boyas	Latitud	Longitud
1	11°00'24.565"N	74°46'29.474"W
2	11°00'30.560"N	74°46'35.489"W
3	11°00'37.117"N	74°46'42.128"W

Artículo 6°. La sociedad Impala Terminals Colombia S.A.S., velará porque las boyas y su sistema de anclaje se ajusten a las recomendaciones técnicas de la Asociación Internacional Permanente de los Congresos de Navegación (PIANC), las recomendaciones de Obras Marítimas y Portuarias (ROM), las Recomendaciones de la Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM – IALA) así como las condiciones de seguridad y demás disposiciones técnicas y legales de la Dirección General Marítima.

Artículo 7°. Además de las obligaciones anteriores, el beneficiario de la presente resolución se compromete a lo siguiente:

1. Aceptar las inspecciones que esta Dirección por medio de la Capitanía de Puerto de Barranquilla o de la Señalización del Río Magdalena, considere necesarias con el fin de verificar que las obras se mantengan de conformidad con el proyecto presentado.
2. La sociedad Impala Terminals Colombia S.A.S., deberá mantener las boyas en servicio y en la posición autorizada. En caso de alguna anomalía deberá ser corregida en un plazo no mayor a 24 horas.
3. La sociedad Impala Terminals Colombia S.A.S., deberá Informar a la Capitanía de Puerto de Barranquilla y a la Señalización Río Magdalena cualquier cambio, novedad y/o falla en la boya instaladas.
4. No se permite realizar maniobras de cargue, descargue, trasiego de combustible, mantenimientos y operaciones diferentes a espera, amarrar y desamarrar convoyes de barcasas.
5. La sociedad Impala Terminals Colombia S.A.S., se hará responsable por toda la seguridad en sus maniobras de amarre y desamarre de del convoy de barcasas.

Artículo 8°. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de las obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo.

Artículo 9°. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que correspondan.

Artículo 10. Notificar, por conducto de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, la presente Resolución al Señor Alejandro Posada en su calidad de Gerente de Impala Terminals Colombia S.A.S., a su apoderado o quien haga sus veces, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la citación, o subsidiariamente por aviso, de conformidad con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 11. Una vez en firme la presente resolución, la Capitanía de Puerto de Barranquilla, deberá remitir copia, al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, a la Señalización del Río Magdalena y a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de esta Dirección General.

Artículo 12. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación en el *Diario Oficial*.

Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2015.

El Vicealmirante,

Pablo Emilio Romero Rojas,
Director General Marítimo (e).
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0618-2015) MD-DIMAR-SUBDEMER-C-ASIMPO DE 2015

(octubre 2)

por la cual se establece el Sistema de Búsqueda y Salvamento Marítimo Nacional y se dictan otras disposiciones.

El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales que le confiere el numeral 5 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 y el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° numeral 5 del Decreto-ley 2324 de 1984 dispone que es función de la Dirección General Marítima “Regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general, la seguridad de la vida humana en el mar, la búsqueda y salvamento marítimo y fijar la dotación de personal para las naves”.

Que el artículo 2° numeral 12 del Decreto 5057 de 2009 dispone como Funciones del Despacho del Director la de “Ejercer como autoridad designada por el Gobierno nacional, las funciones necesarias para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales Marítimos”.

Que el artículo 2° del Decreto 1974 de 1979 establece como funciones del cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional (4) la de efectuar labores de asistencia y rescate en el mar y (12) colaborar con todas aquellas actividades que los organismos del Estado realicen en el mar.

Que la Ley 10 del 15 de enero de 1986 aprobó para Colombia el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, SAR.

Que el Convenio SAR, en su capítulo segundo, “Organización y Coordinación”, insta a que los Estados partes del convenio desarrollen servicios de búsqueda y salvamento con el fin de asegurar la asistencia en la jurisdicción marítima a cualquier persona que lo requiera.

RESUELVE:

Artículo 1°. Créase el Sistema de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SSARM) Nacional, para atender las emergencias que se presenten en las aguas jurisdiccionales colombianas de conformidad con las normas nacionales e internacionales.

Artículo 2°. Se establecen las siguientes funciones básicas para el SSARM:

1. Recibir, acusar recibo y retransmitir notificaciones de emergencia.
2. Coordinar la respuesta de Búsqueda y Salvamento en la jurisdicción marítima nacional.
3. Llevar a cabo operaciones de búsqueda y salvamento marítimo.

Artículo 3°. En virtud de los principios constitucionales de colaboración y coordinación administrativa, la Dirección General Marítima y la Armada Nacional propenderán para la conformación del Sistema de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SSARM), mediante los mecanismos y acuerdos institucionales que apliquen, de la siguiente forma:

1. Entidades de Dirección y Ejecución Operacional:

- La Armada Nacional.
- La Dirección General Marítima.

2. Entidades de Apoyo: Las entidades públicas o privadas (del orden nacional y territorial) que durante la ejecución de la operación SARM, se considere puedan apoyar su adecuado desarrollo. Estos apoyos serán solicitados por las entidades de Dirección y Ejecución Operacional de acuerdo con procedimientos previamente coordinados e implementados.

Parágrafo. Para la elaboración e implementación de los procedimientos correspondientes y la doctrina operacional del SSARM, se tendrán como marco de referencia los manuales internacionales de búsqueda y salvamento marítimo y el documento para la implantación del SSARM nacional.

Artículo 4°. La Dirección General Marítima en coordinación con la Armada Nacional coadyuvarán para el establecimiento de una estructura organizacional tendiente a cumplir con las funciones del SSARM de manera conjunta, permitiendo la atención adecuada de los requerimientos de Búsqueda y Salvamento.

Artículo 5°. Se efectuará la difusión a nivel internacional, tal como lo establece la Organización Marítima Internacional (OMI), de la creación y establecimiento del SSARM colombiano, con su correspondiente documento de implantación que es parte integral de la presente resolución.

Artículo 6°. Para facilitar el intercambio de información y el desarrollo de las operaciones de Búsqueda y Salvamento Marítimo se utilizarán las abreviaturas y acrónimos establecidos por los correspondientes manuales internacionales vigentes aprobados por el Estado colombiano y descritos en el Documento para la Implantación del SSARM.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2015.

El Vicealmirante,

Pablo Emilio Romero Rojas,
Director General Marítimo (e).

Anexo: Documento para la implantación del Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo Nacional.

(C. F.).

VARIOS

Registraduría Nacional del Estado Civil

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 12719 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se modifica la Resolución número 12361 del 19 de octubre de 2015, por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales de las elecciones de Autoridades Locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, en el departamento de **Antioquia**.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 26 numeral 12 del Código Electoral y el artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las resoluciones que fijen los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales;

Que el artículo 42, inciso 2° de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador Nacional del Estado Civil, para fijar los términos de entrega de documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los correspondientes claveros;

Que tales documentos deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del Estado Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se les señale, conforme al inciso 2°, del artículo 144 del Código Electoral;

Que el artículo 5°, numeral 11 del Decreto número 1010 de 2000, establece como función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios;

Que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 163 de 1994, las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre;

Que de acuerdo a lo anterior, es necesario fijar los términos de entrega para los corregimientos e inspecciones de policía y sectores rurales donde se realicen elecciones;

Que de acuerdo con los correos electrónicos del 21 y 22 de octubre de 2015, enviados por la Delegación Departamental de Antioquia, se requiere la ampliación de los términos de entrega de algunos corregimientos;

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la Resolución número 12361, en el sentido de fijar la fecha y hora de los términos de entrega, a los respectivos claveros, de los documentos electorales de los corregimientos que a continuación se relacionan, pertenecientes al departamento de Antioquia, así:

DEPTO.	MUNICIPIO	LUGAR	DÍA DE ENTREGA	HORA	
ANTIOQUIA	ANORÍ	LA MESETA	26/10/2015	12:00	m.
ANTIOQUIA	ANORÍ	LIBERIA	27/10/2015	2:00	p. m.
ANTIOQUIA	ANORÍ	EL ROBLE	26/10/2015	12:00	m.
ANTIOQUIA	ANORÍ	MADRE SECA	27/10/2015	2:00	p. m.
ANTIOQUIA	ANORÍ	EL CARMÍN	27/10/2015	12:00	m.
ANTIOQUIA	ANORÍ	LA CASITA	27/10/2015	12:00	m.
ANTIOQUIA	ANORÍ	SANTO DOMINGO	27/10/2015	2:00	p. m.
ANTIOQUIA	ARGELIA	GUADUALITO	27/10/2015	12:00	m.
ANTIOQUIA	ARGELIA	LA MARGARITA	27/10/2015	12:00	m.
ANTIOQUIA	ARGELIA	MESONES	27/10/2015	12:00	m.
ANTIOQUIA	PEQUE	BARBACOAS	26/10/2015	5:00	p. m.
ANTIOQUIA	PEQUE	EL AGRIO	26/10/2015	6:00	p. m.
ANTIOQUIA	PEQUE	LOMITAS	26/10/2015	5:00	p. m.
ANTIOQUIA	SONSÓN	LA MESA	27/10/2015	9:00	a. m.

Artículo 2°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 12720 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se adiciona la Resolución número 12379 del 19 de octubre de 2015 por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales de las elecciones de Autoridades Locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, en el departamento de **Nariño**.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 26 numeral 12 del Código Electoral y el artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las resoluciones que fijen los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales;

Que el artículo 42, inciso 2° de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador Nacional del Estado Civil, para fijar los términos de entrega de documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los correspondientes claveros;

Que tales documentos deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del Estado Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se les señale, conforme al inciso 2°, del artículo 144 del Código Electoral;

Que el artículo 5°, numeral 11 del Decreto número 1010 de 2000, establece como función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios;

Que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 163 de 1994, las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre;

Que de acuerdo a lo anterior, se expidió la Resolución número 12379 del 19 de octubre de 2015 mediante la cual se fijaron los términos de entrega para los corregimientos e inspecciones de policía y sectores rurales donde se realicen elecciones;

Que de acuerdo con el correo electrónico del 21 de octubre de 2015, enviado por la Delegación Departamental de Nariño, se requiere la adición de los términos de entrega de algunos corregimientos;

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar a la Resolución número 12379, los corregimientos que a continuación se relacionan, pertenecientes al departamento de Nariño, fijando la fecha y hora de los términos de entrega de los documentos electorales a los respectivos claveros, así:

DEPTO.	MUNICIPIO	LUGAR	DÍA DE ENTREGA	HORA	
NARIÑO	BARBACOAS	MINGOYA (RÍO TELPI)	26/10/2015	10:00	a. m.
NARIÑO	BARBACOAS	SAN FRANCISCO (RÍO GUELMAMBI)	26/10/2015	10:00	a. m.
NARIÑO	BARBACOAS	RAPADURA (RÍO GUELMAMBI)	26/10/2015	10:00	a. m.
NARIÑO	BARBACOAS	EL PAILÓN	27/10/2015	10:00	a. m.
NARIÑO	BARBACOAS	LA RESBALOSA	27/10/2015	10:00	a. m.
NARIÑO	SANTA BÁRBARA	SOLEDAD	26/10/2015	10:00	a. m.
NARIÑO	SANTA CRUZ	LA ZABALETA	27/10/2015	10:00	a. m.
NARIÑO	TAMINANGO	EL PÁRAMO	26/10/2015	10:00	a. m.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 12721 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se adiciona la Resolución número 12359 del 19 de octubre de 2015, por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales de las elecciones de Autoridades Locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, en el departamento de **Amazonas**.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 26 numeral 12 del Código Electoral y el artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las resoluciones que fijen los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales;

Que el artículo 42, inciso 2° de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador Nacional del Estado Civil, para fijar los términos de entrega de documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los correspondientes claveros;

Que tales documentos deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del Estado Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se les señale, conforme al inciso 2°, del artículo 144 del Código Electoral;

Que el artículo 5°, numeral 11 del Decreto número 1010 de 2000, establece como función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios;

Que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 163 de 1994, las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre;

Que de acuerdo a lo anterior, es necesario fijar los términos de entrega para los corregimientos e inspecciones de policía y sectores rurales donde se realicen elecciones;

Que de acuerdo con el correo electrónico del 20 de octubre de 2015, enviado por la Delegación Departamental de Amazonas, se deben incluir los Corregimientos Departamentales para la entrega de documentos electorales;

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar a la Resolución número 12359, los corregimientos que a continuación se relacionan, pertenecientes al departamento de Amazonas, fijando la fecha y hora de los términos de entrega de los documentos electorales a los respectivos claveros, así:

CORREGIMIENTO	DÍA DE ENTREGA	HORA	
EL ENCANTO	31/10/2015	6:00	p. m.
LA CHORRERA	31/10/2015	6:00	p. m.
LA PEDRERA	30/10/2015	6:00	p. m.
LA VICTORIA	28/10/2015	6:00	p. m.
MIRITÍ-PARANÁ	30/10/2015	9:00	p. m.
PUERTO SANTANDER	31/10/2015	9:00	p. m.
TARAPACÁ	30/10/2015	6:00	p. m.
PUERTO ALEGRÍA	31/10/2015	6:00	p. m.
PUERTO ARICA	31/10/2015	6:00	p. m.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 12722 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se modifica la Resolución número 12373 del 19 de octubre de 2015, por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales de las elecciones de Autoridades Locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, en el departamento de **Guainía**.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 26 numeral 12 del Código Electoral y el artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las Resoluciones que fijen los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales;

Que el artículo 42, inciso segundo de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador Nacional del Estado Civil, para fijar los términos de entrega de documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los correspondientes claveros;

Que tales documentos deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del Estado Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se les señale, conforme al inciso 2°, del artículo 144 del Código Electoral;

Que el artículo 5°, numeral 11 del Decreto número 1010 de 2000, establece como función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios;

Que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 163 de 1994, las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre;

Que de acuerdo a lo anterior, es necesario fijar los términos de entrega para los corregimientos e inspecciones de policía y sectores rurales donde se realicen elecciones;

Que de acuerdo con el correo electrónico del 22 de octubre de 2015, enviado por la Delegación Departamental de Guainía, se requiere la ampliación de los términos de entrega y la inclusión de algunos corregimientos;

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la Resolución número 12373, en el sentido de fijar la fecha y hora de los términos de entrega, a los respectivos claveros, de los documentos electorales de los corregimientos que a continuación se relacionan, pertenecientes al departamento de Guainía, así:

DEPTO.	MUNICIPIO	LUGAR	DÍA DE ENTREGA	HORA	
GUAINÍA	INÍRIDA	BARRANCO TIGRE (YURI)	26/10/2015	6:00	p. m.
GUAINÍA	INÍRIDA	CHORROBOCÓN	27/10/2015	6:00	p. m.
GUAINÍA	MAPIRIPANA	CORR. DEPARTAMENTAL	30/10/2015	6:00	p. m.
GUAINÍA	MAPIRIPANA	INSP. DE LA UNIÓN	30/10/201 5	6:00	p. m.
GUAINÍA	BARRANCO DE MINAS	CORR. DEPARTAMENTAL	30/10/2015	6:00	p. m.
GUAINÍA	BARRANCO DE MINAS	INSP. DE POL. DE ARRECIFAL	30/10/2015	6:00	p. m.
GUAINÍA	BARRANCO DE MINAS	INSP. DE POL. DE SAPURA	30/10/2015	9:00	a. m.
GUAINÍA	CACAHUAL	CORR. DEPARTAMENTAL	30/10/2015	9:00	a. m.
GUAINÍA	LA GUADALUPE	CORR. DEPARTAMENTAL	30/10/2015	9:00	a. m.
GUAINÍA	MORICHAL (MORICHAL NUEVO)	CORR. DEPARTAMENTAL	30/10/2015	9:00	a. m.
GUAINÍA	PANA PANA (CAMPO ALEGRE)	CORR. DEPARTAMENTAL	30/10/2015	6:00	p. m.
GUAINÍA	PANA PANA (CAMPO ALEGRE)	BOCAS DE YARÍ	30/10/2015	9:00	a. m.
GUAINÍA	PANA PANA (CAMPO ALEGRE)	VENADO ISANA	30/10/2015	9:00	a. m.

DEPTO.	MUNICIPIO	LUGAR	DÍA DE ENTREGA	HORA	
GUAINÍA	PUERTO COLOMBIA	CORR. DEPARTAMENTAL	30/10/2015	10:00	a. m.
GUAINÍA	PUERTO COLOMBIA	INSP. DE CAÑO COLORADO	30/10/2015	9:00	a. m.
GUAINÍA	SAN FELIPE	CORR. DEPARTAMENTAL	30/10/2015	9:00	a. m.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 12723 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se reglamenta la expedición del certificado para sufragar (Formulario E-12), para la elección de autoridades locales del 25 de octubre de 2015.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las facultades que le confiere el artículo 266 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;

Que como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional todo ciudadano tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político;

Que de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2° del artículo 266 de la Constitución Política, establece como función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y organizar los procesos electorales;

Que el artículo 316 de la Constitución Política señala que en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio;

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 77 del Decreto número 2241 de 1986, modificado por la Ley 6ª de 1990, el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al Censo Electoral;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el próximo 25 de octubre de 2015, se celebrará en el territorio nacional las elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Ediles o Miembros de Juntas Administradores Locales;

Que el artículo 117 del Código Electoral, establece: “*El ciudadano cuya cédula de ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, tendrá derecho a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el Registrador del Estado Civil o su Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante certificación que se le expedirá con la sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante la cédula de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en los demás casos de error u omisión una vez que esta y aquel resulten debidamente comprobados*”;

Que para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere el desplazamiento de servidores públicos, tales como funcionarios de la Organización Electoral, Fiscales, Jueces de la República, Agentes del Ministerio Público entre otros, con miras a garantizar el desarrollo transparente de los comicios;

Que así mismo se vinculan servidores públicos en calidad de delegados de puesto a los que se refiere el artículo 55 del Código Electoral, que cumplen funciones en corregimientos e inspecciones;

Que es necesario adoptar las medidas pertinentes que permitan a los funcionarios públicos comisionados, trasladados o con funciones asignadas en razón al proceso electoral, el ejercicio de su derecho al sufragio en el lugar donde deban cumplir sus funciones, si la cédula se encuentra incorporada en el Censo Electoral de la respectiva circunscripción electoral;

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Los Registradores Distritales, Especiales, Municipales y Auxiliares del Estado Civil, expedirán los certificados para sufragar (Formularios E-12), para la votación de las elecciones previstas para el día 25 de octubre del 2015, en los siguientes eventos:

- En los casos establecidos en el artículo 117 del Código Electoral.
- Servidores públicos residentes en la ciudad de Bogotá D. C., que sean asignados con funciones relacionadas con el proceso electoral, en un puesto o localidad diferente a la que tienen inscrita su cédula, podrán ser autorizados a sufragar en la localidad, en la cual desempeñarán su labor.
- Servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido comisionados, trasladados o hayan presentado alguna situación administrativa que ocasione la movilización de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando esté relacionada con el proceso electoral, y la respectiva cédula se encuentre incorporada en el Censo Electoral de la circunscripción electoral del departamento.
- Delegados de puesto de votación del Registrador del Estado Civil, de que trata el artículo 55 del Código Electoral, que en razón al cumplimiento de sus funciones electorales sea designado a un corregimiento, comuna o inspección de policía, siempre y cuando

la respectiva cédula se encuentre inscrita en el Censo Electoral de la circunscripción del departamento.

Parágrafo 1°. Los servidores públicos a los que en virtud del numeral tres (3), se hayan comisionado o trasladado a un municipio diferente al que tienen inscrita su cédula de ciudadanía y ambos municipios pertenezcan a la misma circunscripción departamental se les expedirá certificado para sufragar (Formulario E-12) y podrán ejercer su derecho al voto, solo para las autoridades de nivel departamental (Gobernador y Asamblea).

Cuando la comisión, traslado o situación administrativa implique el desplazamiento del funcionario a una circunscripción departamental diferente a la que tiene su cédula de ciudadanía inscrita no procederá la expedición del Formulario E-12.

Parágrafo 2°. En los casos del numeral dos (2) y tres (3), el Registrador o Delegado de puesto que expida un certificado para sufragar (Formulario E-12), solicitará copia del acto administrativo que confirió la comisión, el traslado o la situación administrativa que ocasionó la movilización del servidor público de su lugar habitual de trabajo con ocasión al proceso electoral.

Dichos funcionarios, podrán sufragar en la mesa de votación que previamente señale el respectivo Registrador Distrital, Especial, Municipal o Auxiliar del Estado Civil o sus delegados.

Artículo 2°. Dentro de los quince (15) días siguientes a la elección, los Registradores del Estado Civil, remitirán a la Dirección de Censo Electoral, copias de los Formularios E-12 y copia de los correspondientes actos administrativos que confirieron la comisión, traslado, la situación administrativa que ocasionó la movilización o cumplimiento de funciones electorales en Comunas, Zonas, Corregimientos o Inspecciones.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

23 de octubre de 2015.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres

El Secretario General,

Carlos Alberto Arias Moncaleano

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 12724 DE 2015

(octubre 23)

por la cual se modifica la Resolución número 12377 del 19 de octubre de 2015, por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales de las elecciones de Autoridades Locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, en el departamento de Magdalena.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 26 numeral 12 del Código Electoral y el artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las resoluciones que fijen los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales;

Que el artículo 42, inciso 2° de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador Nacional del Estado Civil, para fijar los términos de entrega de documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los correspondientes claveros;

Que tales documentos deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del Estado Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se les señale, conforme al inciso 2°, del artículo 144 del Código Electoral;

Que el artículo 5°, numeral 11 del Decreto número 1010 de 2000, establece como función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios;

Que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 163 de 1994, las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre;

Que de acuerdo a lo anterior, es necesario fijar los términos de entrega para los corregimientos e inspecciones de policía y sectores rurales donde se realicen elecciones;

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la Resolución número 12377, en el sentido de fijar la fecha y hora de los términos de entrega, a los respectivos claveros, de los documentos electorales del corregimiento que a continuación se relaciona, perteneciente al departamento de Magdalena, así:

DEPTO.	MUNICIPIO	LUGAR	DÍA DE ENTREGA	HORA
MAGDALENA	PIJIÑO DEL CARMEN	LAS MARÍAS	26/10/2015	2:00 p. m.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres

(C. F.).

Notaría Única de Talaigua Nuevo

EDICTO EMPLAZATORIO

El suscrito Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, doctor Roberto Prins Pérez,

EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación de la Sucesión de las Causantes Alicia Araújo Atencia y Lucía Araújo Atencia, identificadas en vida con las cédulas de ciudadanía números 22352623 y 22924048 expedidas en Magangué, Bolívar, quienes fallecieron en la ciudad de Magangué el día 2 de septiembre de 1999 y el 21 de agosto del 2014 respectivamente, defunciones inscritas en los Indicativos Seriales números 3372619 de fecha 3 de septiembre de 1999 y 08523059 de fecha 23 de agosto de 2014 de la Notaría Única del Círculo de Magangué, Bolívar y cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la cabecera del municipio de Cicuco, Bolívar, municipio anexo a este Círculo Notarial, por solicitud de su heredera Dora Inés Araújo Atencia, identificada con la cédula de ciudadanía número 33195790 expedida en Magangué, Bolívar, mediante Apoderada Especial, doctora Luz Marina Alvarado Acuña, identificada con la cédula de ciudadanía número 33201467 de Magangué, Bolívar y T. P. número 86.157.

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número cero, cero Cuarenta (0040) de fecha octubre veinte (20) de dos mil quince (2015), se ordena la publicación nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose además, su fijación en un lugar público y visible de la Notaría por el término de diez (10) días.

El presente edicto se fija hoy, veinte (20) del mes de octubre del año dos mil quince (2015), siendo las 8:00 horas.

El Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo,

Roberto Prins Pérez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 0750982. 22-X-2015. Valor \$58.600.

Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca

EDICTOS

La Directora de Personal de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca,

CITA Y EMPLAZA:

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y económicas de Julio Eduardo Guevara Velásquez quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 11405568 de Cáqueza, que prestaba sus servicios al departamento de Cundinamarca y que dejó de existir el día 14 de septiembre de 2015.

Se ha presentado a reclamar Luz Marina Baquero Rey, que se identifica con la cédula de ciudadanía número 20546162 de Fosca, en calidad de Esposa del Administrativo fallecido.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2015.

María Teresa Méndez Granados.

Segundo aviso.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21502151. 23-X-2015. Valor \$50.000.

Corporación Educativa Indoamericana

EDICTOS

El Representante Legal de la Corporación Educativa Indoamericana Ltda.,

HACE SABER:

Que el día 25 de septiembre de 2015, falleció el señor Jairo Díaz Castro, quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 19233016 de Bogotá por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Al día de hoy no se ha presentado persona alguna a reclamar la anterior liquidación;

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor derecho de reclamarla, deben manifestarlo mediante escrito radicado en la Calle 39 14-62, en la Ciudad de Bogotá, en horario de 8 a. m. - 5 p. m. jornada continua dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso;

Que este aviso se publica de conformidad con lo establecido en los artículos 212 del Código Sustantivo del Trabajo y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes.

La Representante Legal,

Justo Hernando Murcia Pulido,

Corporación Educativa Indoamericana Ltda.

NIT 800.022.076-6.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1648678. 23-X-2015. Valor \$56.800.

Banco Davivienda

EXTRACTOS PARA AVISO EN PRENSA

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Datos del interesado

Nombre (Solicitante y/o Beneficiario):
Yisell Puentes Cubides C.C/NIT: 1014241649

Motivo de publicación: Hurto (), Extravío ☒ Destrucción (), Deterioro ()
Pretensión: Cancelación y reposición de título valor.

Datos del Título

Tipo de Título: CDT, N° del Título: AB0018303574
Titular o Beneficiario: Sthefany Yisell Puentes Cubides C.C/NIT 1014241649
C.C/NIT _____
C.C/NIT _____
Valor: Un millón de pesos (\$ 1'000.000).
Otorgante: Banco Davivienda S.A.

CDT	CHEQUE
Fecha de expedición: <u>(14)/(04)/(14)</u>	Número de Chequera: _____
Fecha de vencimiento: <u>(02)/(11)/(15)</u>	Número del Cheque: _____
Tasa: <u>4.15 % EA</u>	Fecha de Giro: _____
Plazo: <u>186 días</u>	
Tipo de Manejo: <u>individual</u>	

Datos para notificación – Oficina que emitió o giró el título:

Nombre de la oficina: Normandia
Dirección de la oficina: Cl 53 # 73 - 57
Teléfono de la oficina: 3300000 ext 80376

Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar en un periódico de circulación Nacional
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21502145. 22-10-2015. Valor \$50.000.

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Datos del interesado

Nombre (Solicitante y/o Beneficiario):
Yisell Puentes Cubides C.C/NIT: 1014241649

Motivo de publicación: Hurto (), Extravío ☒ Destrucción (), Deterioro ()
Pretensión: Cancelación y reposición de título valor.

Datos del Título

Tipo de Título: CDT, N° del Título: AB0018303590
Titular o Beneficiario: Sthefany Yisell Puentes Cubides C.C/NIT 1014241649
C.C/NIT _____
C.C/NIT _____
Valor: Un millón de pesos (\$ 1'000.000).
Otorgante: Banco Davivienda S.A.

CDT	CHEQUE
Fecha de expedición: <u>(14)/(04)/(14)</u>	Número de Chequera: _____
Fecha de vencimiento: <u>(02)/(11)/(15)</u>	Número del Cheque: _____
Tasa: <u>4.15 % EA</u>	Fecha de Giro: _____
Plazo: <u>186 días</u>	
Tipo de Manejo: <u>individual</u>	

Datos para notificación – Oficina que emitió o giró el título:

Nombre de la oficina: Normandia
Dirección de la oficina: Cl 53 # 73 - 57
Teléfono de la oficina: 3300000 ext 80376

Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar en un periódico de circulación Nacional
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21502144. 22-10-2015. Valor \$50.000.

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Datos del interesado

Nombre (Solicitante y/o Beneficiario):
Yisell Puentes Cubides C.C/NIT: 1014241649

Motivo de publicación: Hurto (), Extravío ☒ Destrucción (), Deterioro ()
Pretensión: Cancelación y reposición de título valor.

Datos del Título

Tipo de Título: CDT, N° del Título: AB0018303582
Titular o Beneficiario: Sthefany Yisell Puentes Cubides C.C/NIT 1014241649
C.C/NIT _____
C.C/NIT _____
Valor: Un millón de pesos (\$ 1'000.000).
Otorgante: Banco Davivienda S.A.

CDT	CHEQUE
Fecha de expedición: <u>(14)/(04)/(14)</u>	Número de Chequera: _____
Fecha de vencimiento: <u>(02)/(11)/(15)</u>	Número del Cheque: _____
Tasa: <u>4.15 % EA</u>	Fecha de Giro: _____
Plazo: <u>186 días</u>	
Tipo de Manejo: <u>individual</u>	

Datos para notificación – Oficina que emitió o giró el título:

Nombre de la oficina: Normandia
Dirección de la oficina: Cl 53 # 73 - 57
Teléfono de la oficina: 3300000 ext 80376

Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar en un periódico de circulación Nacional
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21502143. 22-10-2015. Valor \$50.000.

AVISOS JUDICIALES

La suscrita Secretaria del Juzgado Promiscuo de Familia de Pacho, Cundinamarca,
AVISA:

Que dentro del Proceso número 2015/00038, jurisdicción voluntaria (interdicción por incapacidad mental absoluta). Demandante: Hilario Guzmán. Interdicto: Carlos Orlando Guzmán Quiroga se dictó sentencia el veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015) que en su parte pertinente dice:

“...

RESUELVE:

Primero. Declarar en estado de interdicción por incapacidad mental absoluta a Carlos Orlando Guzmán Quiroga identificado con la cédula de ciudadanía número 52603262 de Pacho y como consecuencia de ello, prvésele de la administración de sus bienes.

Segundo. Designar como curador principal del interdicto a su padre Hilario Guzmán identificado con la cédula de ciudadanía número 3115277 de Pacho, Cundinamarca, y como curadora sustituta del interdicto a la progenitora María Cecilia Quiroga Caro, identificada con la cédula de ciudadanía número 41465974 de Bogotá, Cundinamarca, quienes deberán posesionarse una vez aprobado el inventario, momento en el que se le discernirá el cargo conforme a la ley.

Tercero. Exonerar a los curadores de otorgar caución por tratarse de los ascendientes del interdicto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 84 de la Ley 1306 de 2009.

Cuarto. Ordenar la confección de inventario y avalúo de los bienes del interdicto, los que deberán ser presentados en el término de sesenta (60) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 659 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 42 de la Ley 1306 de 2009, para lo cual se designa a ... a quien se le comunicará el nombramiento y si acepta se le dará posesión.

Quinto. Ordenar la inscripción de esta sentencia, una vez ejecutoriada, en el registro civil de nacimiento del interdicto. Líbrese el oficio correspondiente.

Sexto. Comunicar la declaratoria de interdicción al público, por aviso que se insertará por una vez por lo menos en el **Diario Oficial** de la Nación y en un periódico de amplia circulación nacional, como “El Tiempo”, “El Nuevo Siglo” o “La República”.

Notifíquese y cúmplase.

Fdo., Luz Angélica Mejía Pérez, Juez”.

Para los fines del artículo 659 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 42 de la Ley 1306 de 2009 se fija el presente aviso en lugar visible de la Secretaría del Juzgado, hoy 2 de octubre de 2015, a las ocho de la mañana (8:00 a. m.) y se expiden copias para su publicación en *Diario Oficial* de la Nación y en un periódico de amplia circulación “*El Tiempo*”, “*El Nuevo Siglo*” o “*La República*”.

La Secretaria,

Elsa María Cañón Santana.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21502146. 22-10-2015. Valor \$50.000.

El Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja, Antioquia,
Proceso: Muerte por desaparecimiento
Radicado: 053763184001-2014-00617
Demandante: Miguel Ángel Torres Giraldo
Desaparecidos: Flor Morelia y Alberto Javier Torres Giraldo

EMPLAZA:

A Flor Morelia y Alberto Javier Torres Giraldo y se previene a quienes tengan noticias de ellos para que las comuniquen a este Juzgado carrera 22 18-39, La Ceja, en el proceso de declaración de muerte por desaparecimiento, Radicado 2014-00617 instaurado por Miguel Ángel Torres Giraldo. Se dice en la demanda que los desaparecidos y el demandante, fueron procreados por Rosa Elisa Giraldo Mazo y Serafín Torres González. Para el año 1996 la familia Torres Giraldo residía en Ungía, Chocó, y su hermano Rodrigo Hernando Torres Giraldo (fallecido) fue a visitarlos porque vivía en La Macarena, Meta, cuando regresó a donde vivía Flor Morelia y Alberto Javier Torres Giraldo, siendo menores de edad, decidieron irse con él y como a los tres meses regresó Rodrigo por la violencia, indicando que sus hermanos regresarían en 15 días porque debían reunir el pasaje, tiempo que transcurrió sin que regresaran y nunca más se volvió a saber nada de ellos. El 12 de agosto de 2014 Miguel Ángel Torres Giraldo, denunció ante la Fiscalía la desaparición de sus hermanos y tiene interés en la declaración de muerte presunta por desaparecimiento por tratarse de sus hermanos pues han transcurrido los plazos y circunstancias exigidas por la ley para tal fin.

La Secretaria,

Ninfa Giraldo Giraldo.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21502142. 22-10-2015. Valor \$50.000.

CONTENIDO

	Págs.
PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA	
Ley 1768 de 2015, por la cual se establece el procedimiento disciplinario que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.	1
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Decreto número 2078 de 2015, por el cual se designa un representante del Presidente de la República en la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en el Consejo Directivo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ..	7
Decreto número 2079 de 2015, por el cual se hace un nombramiento Ordinario.	7
Decreto número 2080 de 2015, por el cual se hace un nombramiento Ordinario.	7
Decreto número 2081 de 2015, por el cual se hace un nombramiento Ordinario.	7
Decreto número 2082 de 2015, por el cual se hace un nombramiento Ordinario.	8
Decreto número 2083 de 2015, por el cual se hace un nombramiento Ordinario.	8
Decreto número 2084 de 2015, por el cual se hace un nombramiento Ordinario.	8
MINISTERIO DEL INTERIOR	
Decreto número 2072 de 2015, por el cual se modifica el Decreto número 2057 del 21 de octubre de 2015.	8
Decreto número 2073 de 2015, por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Calamar-Bolívar.	8
Decreto número 2074 de 2015, por el cual se designa Gobernador ad hoc para el departamento de La Guajira.	9
Decreto número 2075 de 2015, por el cual se designa Gobernador ad hoc para el departamento del Magdalena.	9
Decreto número 2096 de 2015, por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Sahagún-Córdoba.	10
Decreto número 2097 de 2015, por el cual se designa Gobernador ad hoc para el departamento de Córdoba.	10
Decreto número 2098 de 2015, por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Momil-Córdoba.	11
Decreto número 2099 de 2015, por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Moñitos-Córdoba.	11
Decreto número 2100 de 2015, por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de San Pelayo-Córdoba.	12
Decreto número 2101 de 2015, por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Lorica-Córdoba.	12
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	
Decreto número 2086 de 2015, por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.	13
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
Decreto número 2071 de 2015, por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo referente al régimen de protección al consumidor financiero del Sistema General de Pensiones.	13
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	
Resolución ejecutiva número 209 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	14

	Págs.
Resolución ejecutiva número 210 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	16
Resolución ejecutiva número 211 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	17
Resolución ejecutiva número 212 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	19
Resolución ejecutiva número 213 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	20
Resolución ejecutiva número 214 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	21
Resolución ejecutiva número 215 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	22
Resolución ejecutiva número 216 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	23
Resolución ejecutiva número 217 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	25
Resolución ejecutiva número 218 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	26
Resolución ejecutiva número 219 de 2015, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.	27
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
Decreto número 2092 de 2015, por medio del cual se reglamenta la Ley 1699 del 27 de diciembre de 2013 sobre beneficios para los Discapacitados, Viudas, Huérfanos o Padres de los miembros de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones y se modifica el Decreto 1070 de 2015.	29
Resolución número 9536 de 2015, por la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	32
Resolución número 9537 de 2015, por la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	32
Resolución número 9539 de 2015, por la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	32
Resolución número 9541 de 2015, por la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	32
Resolución número 9542 de 2015, por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	33
Resolución número 9544 de 2015, por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	33
Resolución número 9546 de 2015, por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	33
Resolución número 9548 de 2015, por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	33
Resolución número 9550 de 2015, por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	33
Resolución número 9551 de 2015, por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	33
Resolución número 9552 de 2015, por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	34
Resolución número 9566 de 2015, por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.	34
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	
Decreto número 2089 de 2015, por el cual se modifica el Decreto 3045 de 2013.	34
MINISTERIO DEL TRABAJO	
Decreto número 2090 de 2015, por el cual se establecen las reglas para la asunción de la función pensional de las Telesociadas y de Telecom.	35
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	
Decreto número 2076 de 2015, por el cual se hace un nombramiento.	37
Decreto número 2077 de 2015, por el cual se designa un Viceministro de Energía ad hoc.	37
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	
Decreto número 2093 de 2015, por el cual se modifica el Artículo 2.2.2.29.4.5 del Capítulo 29 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.	37
Decreto número 2094 de 2015, por el cual se reglamenta la composición y el procedimiento para la selección de los representantes al Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo y se modifican las secciones 4 y 7 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.	37
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	
Decreto número 2070 de 2015, por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar parcialmente la Ley 1740 de 2014.	38
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	
Decreto número 2095 de 2015, por medio del cual se modifican los artículos 2.1.1.2.7.2.1., 2.1.1.2.7.2.3. y 2.1.1.2.7.2.4 del Capítulo Segundo, Sección 7 Subsección 2 del Decreto número 1077 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	40
MINISTERIO DE TRANSPORTE	
Resolución número 0004303 de 2015, por la cual se reglamenta la Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV).	41

	Págs.
Resolución número 0004304 de 2015, por la cual se deroga el ordinal 2 del literal i) del artículo 6° de la Resolución número 3768 de 2013 modificado por el artículo 8° de la Resolución número 3318 de 2015.....	45
Resolución número 0004305 de 2015, por la cual se emite concepto vinculante previo al establecimiento de dos estaciones de peaje denominadas Fuemia y Mutatá, se establecen las tarifas a cobrar en las estaciones de peaje Fuemia, Mutatá, Cirilo, Chaparral y Río Grande.	45
Resolución número 0004306 de 2015, por la cual se modifica la Resolución número 0000856 de 9 de abril de 2015, mediante la cual se transfiere a título gratuito un predio localizado en la Carrera 15 N° 17N-31, del municipio de Armenia, departamento de Quindío, identificado con la Matrícula Inmobiliaria número 280-78025 y referencia catastral 01-07-077-0025-000, al Instituto Nacional de Vías (“Invías”), identificado con el NIT. 800.215.807-2.....	46
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Resolución número 0895 de 2015, por la cual se hace una delegación.....	48
Resolución número 0902 de 2015, por la cual se hacen unos nombramientos ordinarios. ...	48
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas	
Resolución número 1893 de 2015, por la cual se reglamenta el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones	48
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca	
Resolución número 00001806 de 2015, por medio de la cual se prohíbe la interacción con boyas de datos científicas durante el desarrollo de actividades de pesca, como dispositivo agregador de peces por parte de cualquier tipo de embarcación pesquera.	51
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	
Resolución número 010374 de 2015, por la cual se efectúa la designación de un Auxiliar Jurídico ad honórem.	52
Resolución número 010375 de 2015, por la cual se efectúa la designación de un Auxiliar Jurídico Ad Honórem.....	52
ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS Universidad Surcolombiana	
Resolución número P0150 de 2015, por la cual se concede una comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción y se efectúa un nombramiento ordinario.....	53
Resolución número P0251 de 2015, por la cual se efectúa un Nombramiento Ordinario y se concede una Comisión.....	53
Resolución número P0287 de 2015, por la cual se hace un nombramiento de un Profesor Ocasional.....	54
Resolución número P0380 de 2015, por la cual se hace un nombramiento de un Profesor Ocasional.....	54
Resolución número P0427 de 2015, por la cual se efectúa un Nombramiento Provisional.	54
Resolución número P0428 de 2015, por la cual se efectúa un Nombramiento Provisional.	55
Resolución número P0446 de 2015, por la cual se hace un nombramiento de un Profesor Ocasional.....	55
Resolución número P0447 de 2015, por la cual se hace un nombramiento de un Profesor Ocasional.....	55
Resolución número P0448 de 2015, por la cual se hace un nombramiento de un Profesor Ocasional.....	56
Resolución número P0449 de 2015, por la cual se hace un nombramiento de una Profesora Ocasional.....	56
Acuerdo de consejo superior número 26 de 2015, por medio del cual se hace una adición presupuestal.....	56
Acuerdo de consejo superior número 27 de 2015, , por medio del cual se hace una adición presupuestal.....	57
Acuerdo de consejo superior número 28 de 2015, por medio del cual se hace una adición presupuestal.....	57
Acuerdo de consejo superior número 29 de 2015, por medio del cual se hace una adición presupuestal.....	58
Acuerdo de consejo superior número 30 de 2015, por medio del cual se modifica el Acuerdo 22 de 1991 por el cual se aprueba un programa de formación universitaria.	59
Acuerdo de consejo superior número 31 de 2015, por medio del cual se autoriza el funcionamiento del programa Maestría en Educación Extensión Guajira.....	59
Acuerdo de consejo superior número 33 de 2015, Por medio del cual se aprueba el plan de estudios correspondiente al Programa Maestría en Educación Extensión Guajira.....	59
Acuerdo de consejo superior número 32 de 2015, por medio del cual se autoriza el funcionamiento del Programa Maestría en Educación Extensión San Andrés.....	61
Acuerdo de consejo superior número 34 de 2015, por medio del cual se aprueba el Plan de Estudios correspondiente al Programa Maestría en Educación Extensión San Andrés.	61
Acuerdo de consejo superior número 35 de 2015, por medio del cual se autoriza el funcionamiento del Programa Ingeniería de Manufactura.....	63
Acuerdo de consejo superior número 36 de 2015, por medio del cual se aprueba el Plan de Estudios correspondiente al Programa Ingeniería de Manufactura.....	63
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Grupo Jurídico - Regional Bogotá	
Resolución número 1347 de 2015, por la cual se otorga personería jurídica y se aprueba estatutos de la entidad denominada Asociación Manos Unidas.....	66
Regional Caquetá - Grupo Jurídico	
Resolución número 1572 de 2015, por la cual se reconoce personería jurídica a una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.	67

	Págs.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Junta Directiva	
Acuerdo número 22 de 2015, por el cual se modifica la Planta Global de Personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.....	67
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	
Resolución número 1797 de 2015, por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada Guateque.	69
Resolución número 1798 de 2015, por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada El Salitre.	72
Resolución número 1799 de 2015, por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada El Coyal.	76
Corporación Autónoma Regional de Risaralda	
Acuerdo número 030 de 2015, por medio del cual se acata una medida de suspensión provisional del proceso de elección del Director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), convocado para el 22 de octubre de 2015.	79
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA Dirección General Marítima	
Resolución número 0602-2015 MD-DIMAR-GLEMAR de 2015, por la cual se establece el trámite y procedimiento de las solicitudes para realizar tendidos de cables submarinos de fibra óptica en los espacios marítimos jurisdiccionales colombianos.....	80
Resolución número 0604-2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT de 2015, por la cual se otorga una concesión a la Sociedad Hotel Santorini Ltda., en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.	81
Resolución número 0605-2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT de 2015, por la cual se otorga una concesión a la Sociedad Hotel Santorini Ltda., en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.	82
Resolución número 0606- 2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT de 2015, por la cual se otorga una concesión a la Sociedad Condominio Vacacional Puntepiedra S.A., en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas.	84
Resolución número 0616-2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-GINSEM-ASEM de 2015, por la cual se crea una zona de fondeo para espera, amarrar y desamarrar convoyes de barcasas en un sector dentro de los 27 kilómetros del Río Magdalena jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Barranquilla.....	85
Resolución número (0618-2015) MD-DIMAR-SUBDEMER-ASIMPO de 2015, por la cual se establece el Sistema de Búsqueda y Salvamento Marítimo Nacional y se dictan otras disposiciones.	86
V A R I O S Registraduría Nacional del Estado Civil	
Resolución número 12719 de 2015, por la cual se modifica la Resolución número 12361 del 19 de octubre de 2015, por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales de las elecciones de Autoridades Locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, en el departamento de Antioquia.	87
Resolución número 12720 de 2015, por la cual se adiciona la Resolución número 12379 del 19 de octubre de 2015 por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales de las elecciones de Autoridades Locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, en el departamento de Nariño.....	87
Resolución número 12721 de 2015, por la cual se adiciona la Resolución número 12359 del 19 de octubre de 2015, por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales de las elecciones de Autoridades Locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, en el departamento de Amazonas.....	87
Resolución número 12722 de 2015, por la cual se modifica la Resolución número 12373 del 19 de octubre de 2015, por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales de las elecciones de Autoridades Locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, en el departamento de Guainía.	88
Resolución número 12723 de 2015, por la cual se reglamenta la expedición del certificado para sufragar (Formulario E-12), para la elección de autoridades locales del 25 de octubre de 2015.	88
Resolución número 12724 de 2015, por la cual se modifica la Resolución número 12377 del 19 de octubre de 2015, por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales de las elecciones de Autoridades Locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, en el departamento de Magdalena.....	89
Notaría Única de Talaigua Nuevo	
El suscrito Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, emplaza a todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite notarial de liquidación de la Sucesión de las Causantes Alicia Araújo Atencia y Lucía Araújo Atencia	89
Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca	
La Directora de Personal de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca, cita y emplaza a todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y económicas de Julio Eduardo Guevara Velásquez	89
Corporación Educativa Indoamericana	
El Representante Legal de la Corporación Educativa Indoamericana Ltda., hace saber que falleció Jairo Díaz Castro, por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Al día de hoy no se ha presentado persona alguna a reclamar la anterior liquidación	89
Banco Davivienda	
Cancelación y reposición de título valor.....	90
Avisos judiciales	
La Secretaria del Juzgado Promiscuo de Familia de Pacho, Cundinamarca, avisa que se declaró en estado de interdicción a Carlos Orlando Guzmán Quiroga.....	90
El Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja, Antioquia, emplaza a Flor Morelia y Alberto Javier Torres Giraldo.....	91
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2015	